



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE POSGRADO

Los servicios de inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires y la construcción del “sujeto comunista”
(1955-1962)

María Eugenia Marengo Hecker

Tesis para optar por el grado de Doctora en Ciencias Sociales

Director: Osvaldo Barreneche, Universidad Nacional de La Plata

3 de mayo de 2018

RESUMEN:

En la presente tesis se propuso analizar los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y la construcción del actor político calificado como “comunista”, entre el período 1955-1962, en diálogo con los antecedentes, el crecimiento y la consolidación de la Central de Inteligencia de la policía provincial. A su vez, se estudiaron las prácticas que caracterizaron el funcionamiento de la labor de inteligencia de la policía, indagando en la vinculación entre las distintas instituciones de seguridad, a nivel regional y nacional, constituyentes del periodo histórico señalado.

La construcción de una territorialidad represiva impulsada por la puesta en práctica del Plan Conintes en 1960, llevó a profundizar en el panorama represivo y el impacto de la aplicación del Conintes en el control interno del país. De modo que, la militarización de la información y la institucionalización del espionaje político, fueron una variable constitutiva del período indicado en materia de seguridad de Estado.

La investigación también se focalizó en el trabajo cotidiano de una región de la policía bonaerense, obteniendo una primera aproximación al respecto. Estudiar los mecanismos de construcción y acumulación de conocimiento para el ejercicio de la vigilancia policial se configuró como una dimensión esencial para la comprensión de la historia contemporánea de nuestro país. En la Argentina es complejo y limitado el acceso a los acervos documentales de las fuerzas de seguridad, la apertura del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, inauguró también la necesidad de indagar en aquella trama histórica de la vigilancia policial durante todo el siglo XX.

No obstante, el trabajo de tesis no se limitó en examinar únicamente en este extenso y pormenorizado archivo. Un recorrido exhaustivo por fuera de éste, también permitió el encuentro con nuevos indicios que dieron cuenta de prácticas y rutinas policiales como parte de una cultura institucional que se consolidó a lo largo de décadas.

PALABRAS CLAVE: Servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires - Comunismo - Plan Conintes.

ABSTRACT:

In the present thesis it was proposed to analyze the intelligence services of the police of the Buenos Aires province and the construction of the political actor qualified as "communist", between the period 1956-1962, in dialogue with the background, the growth and the consolidation of the Intelligence Center of the provincial police. At the same time, were studied the practices that guaranteed the functioning of the police intelligence work, investigating the link between the different security institutions, at the regional and national levels, constituents of the historic period indicated.

The construction of a repressive territoriality driven by the implementation of the Plan Conintes in 1960, led to deepen the repressive panorama and the impact of the Conintes application in the internal control of the country. So, the militarization of information and the institutionalization of political espionage, were a constitutive variable of the period indicated in terms of State security.

The investigation also focused on the daily work of a region of the Buenos Aires police, obtaining a first approximation in this regard. Study the mechanisms of construction and accumulation of knowledge for the exercise of police surveillance was configured as an essential dimension for the understanding of the contemporary history of our country. In Argentina, access to documentary collections of security forces is complex and limited, the opening of the Intelligence Buenos Aires Police Directorate file, also inaugurated the need to investigate the historical plot of police surveillance throughout the 20th century.

However, the thesis work did not limit itself to examine only in this extensive and detailed file. An exhaustive travel outside of this one, also allowed the meeting with new signs that reported police practices and routines as part of an institutional culture that was consolidated over decades.

KEY WORDS: Intelligence services of the Buenos Aires police - Communism- Plan Conintes

Índice

Agradecimientos	5
Capítulo I: Introducción	6
I.1. Presentación del tema	6
I.2. Estado de la cuestión y enfoque de la investigación	9
I.2.1. La militarización de la policía	12
I.2.2. Inteligencia de Estado y archivos de la represión	16
I.2.1.3 Algunas referencias conceptuales.....	19
I.4. Problema de investigación y objetivos de la tesis	22
I.4.1. Objetivos de la tesis.....	25
I.5. Metodología.....	25
I.5.1. Notas de archivo	25
I.5.2. Las fuentes	27
I.6. Presentación de los capítulos.....	32
Capítulo II. Una breve historia de la inteligencia de Estado: surgimiento y antecedentes de la DIPPBA	34
II. 1. Los años '30 y las formas de la represión	37
II. 2. Comunistas en la mira policial	44
II. 3. Los marcos “legales” de la represión	52
II. 4. “La policía de los descamisados”	64
II. 5. Conclusiones	76
Capítulo III. “La Libertadora”: hacia una redefinición del enemigo	81
III. 1. La ingeniería de la inteligencia policial	83
III. 2. Del “peligro comunista” y otras derivaciones	97
III. 3. La operatividad de la Central de Inteligencia	120
III. 4. Conclusiones	131
Capítulo IV. La configuración del Estado y la construcción del enemigo político durante el gobierno de Arturo Frondizi	136
IV.1. Frondizi y la fabricación del orden social	138
IV.2. El orden interno: las implicancias del Conintes	151
IV.3. La territorialización de la represión.....	155

IV.4. “Bosquejo sobre lo que es el Terrorismo”	166
IV.5. Conclusiones.....	174
Capítulo V. Bajo la lupa del Conintes	181
V.1. Resistencias, huelgas y la intervención militar	183
V.3. El archivo y sus categorías.....	201
V. 4. En primera persona	206
V. 6. Los encuentros con el “otro”.....	211
V. 7. Conclusiones	215
Capítulo VI. De la orden a la ejecución: los informes de inteligencia en la persecución al sujeto comunista	221
VI. 1. “Comunicar acto controlado”: los registros policiales en los actos del Partido Comunista	223
VI. 2. La Unión de Mujeres Argentinas en la mira policial.....	238
VI.2.1. Las fotografías como método de control	244
VI.2.2.Otras formas del control: los registros del afuera	250
VI.3. Conclusiones.....	256
VII. Consideraciones finales	262
VIII. Fuentes clasificadas por repositorio documental	277
IX. Bibliografía consultada	285

Agradecimientos

A lo largo de estos años de trabajo de investigación, fueron varias las personas que influyeron y se entrecruzan en este proceso de nuevos conocimientos, dudas y aprendizajes. Todas y todos, desde sus diversos lugares, le han otorgado un importante sentido a la presente tesis.

Pero, no quiero dejar de mencionar un especial reconocimiento a mi director, Osvaldo, por su paciente acompañamiento, la dedicación y el compromiso de su trabajo.

Al equipo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IdELa) de la Universidad de Nacional de Costa Rica. El intercambio con cada integrante fue un interesante aporte a la luz de nuevos enfoques críticos sobre la historia social de Latinoamérica. A quienes han compartido conmigo el camino académico, las amistades y la calidez de sus comentarios.

A Sebastián, el coordinador del Taller de Tesis II del Doctorado de Ciencias Sociales, mis compañeros y compañera, quienes en el último tramo me permitieron poner en discusión mis capítulos. Por sus reflexiones y atinadas devoluciones.

Quiero destacar mi agradecimiento a los y las trabajadoras de los archivos donde pasé horas en la búsqueda de documentos: la Comisión Provincial de la Memoria, que gestiona el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA); Archivo de la Biblioteca Nacional; Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación; Archivo y Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI); la Biblioteca del Senado de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Policial de la Provincia de Bs. As.; por la hospitalidad de quienes allí trabajan, su dedicación e importante aporte a la historia y al presente.

Valga una afectuosa mención a Baby Farias, por abrirme las puertas de su casa y compartir su historia con una enorme cordialidad.

A la Universidad Nacional de La Plata, por financiar el último recorrido de esta investigación y darme la oportunidad de concluir el doctorado. A Andrés Bisso, por su lectura minuciosa y constructiva, por su tiempo y predisposición de siempre.

A mi familia, que en forma permanente saben cómo acortar las distancias. Y muy especialmente a Julieta y Bernardo, por su apoyo constante, darme aliento y saber esperarme.

Capítulo I: Introducción

I.1. Presentación del tema

La presente investigación es el resultado de un trabajo que comenzó en el encuentro con aquel gran acervo policial perteneciente al ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en adelante DIPPBA). La primera aproximación al mismo, orientó a preguntarme por los orígenes de aquellos documentos iniciales, su institucionalización y su devenir a lo largo de décadas.

Las prácticas de inteligencia se acumularon en miles de legajos -siempre- bajo la necesidad de la existencia de un enemigo interno que conspirara contra la Nación. El comunismo se transformó así en un genérico, más allá de sus variables, mutaciones, rupturas y reagrupamientos a lo largo de la historia. Pero, en esta investigación interesó detectar también, a modo de rompecabezas, la legislación sancionada para enmarcar al enemigo. La construcción de una territorialidad represiva impulsada por la puesta en práctica del Plan Conintes en 1960, condensó ese deber de Estado en una reconfiguración cartográfica, dibujando un nuevo mapa de la Argentina, que ya no sólo trazaba sus “divisiones políticas” entre países, sino que delimitaba el control interno con una extendida militarización del país.

Se comprende aquí que los años que abarcan al período 1955-1962, correspondieron a una etapa de intensificación en la persecución política. A partir de este recorte temporal que se presenta en la tesis, también se hizo hincapié en las diferencias, rupturas y continuidades entre el primer gobierno provisional, al mando de las Fuerzas Armadas (1955-1958) y el período siguiente bajo la conducción del gobierno constitucional electo - con el peronismo proscripto-, presidido por Arturo Frondizi en la Nación y Oscar Alende como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical Intransigente. La pesquisa finaliza hacia comienzos de la década del ‘60, cuando la dependencia de inteligencia -DIPPBA-, se conformaba como una institución más organizada, jerarquizada y planificada, mientras que los organismos policiales comenzaban a expandirse acompañando el crecimiento estatal de entonces.

Un diálogo indisoluble entre la Nación y la provincia de Buenos Aires recorre toda la tesis. Decisión que compete también al carácter metodológico del trabajo, dado que lo hallado en el acervo provincial se entrecruza con la documentación producida por otros

organismos como el Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría de Guerra, Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), o los mismos informes elaborados para el presidente Frondizi. Las políticas de seguridad implementadas luego de la llamada “Revolución Libertadora”, también tuvieron un impacto directo en la provincia. Aunque no siempre hubo coincidencias con la agenda de medidas desplegadas a nivel nacional, en lo que compete a materia de seguridad, el ejecutivo nacional tuvo un rol importante en las decisiones políticas provinciales. Este dato no es menor, comprendiendo como se fue construyendo una estrategia geopolítica sobre los territorios, articulada también con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, como parte de la política exterior de Estados Unidos. La importancia de pensar lo nacional en esta tesis reside justamente en incorporar esta variable analítica que integra a un discurso desarrollista asociado a la apertura de políticas de seguridad extranjerizadas para el control territorial; además las Fuerzas Armadas tuvieron un rol fundamental para garantizar esa apertura como responsables del disciplinamiento de la sociedad, a través de la represión y la construcción permanente de un enemigo interno.

A lo largo de los capítulos que prosiguen, interesó profundizar en el análisis sobre los y las “comunistas” como sujeto-objeto de la vigilancia policial; cómo se construyó esa mirada y cuáles fueron las políticas y normativas que incidieron en la categorización de este sujeto como “lo peligroso”, que luego sería sustento de argumentaciones futuras para la aplicación de vigilancia desde la Central de Inteligencia en 1956. La centralización de información y la necesidad de la creación de organismos orientados a tal fin, comenzó a ser una prioridad hacia el año 1955. Luego del Golpe de Estado que depuso al presidente Juan Domingo Perón, las Fuerzas Armadas reforzaron en materia de seguridad las políticas tendientes a la creación de dependencias policiales, bajo el mando del poder militar, cuya finalidad exclusiva fue el acopio y la generación de información de carácter político-social.

Asimismo, esta investigación intentó hacer un aporte al aproximarse al trabajo cotidiano de una región de la policía bonaerense. Estudiar los mecanismos de construcción y acumulación de conocimiento en el ejercicio de la vigilancia policial se configuró como una dimensión esencial para la comprensión de la historia contemporánea de nuestro país.

En la Argentina es complejo y limitado el acceso a los acervos documentales de las fuerzas de seguridad, la apertura del archivo de la DIPPBA inauguró también la necesidad

de indagar en aquella trama histórica de la vigilancia policial durante todo el siglo XX. La existencia de documentación proveniente de organismos represivos orientados al control social, evidencian hoy la necesidad de producción de doctrina preventiva y represiva por parte de los gobiernos, como así también la construcción de ese enemigo que legitimara el accionar represivo y el control de la población civil.

Esta tesis no se limitó a examinar únicamente en este extenso y pormenorizado archivo. Un recorrido exhaustivo por fuera de éste, también permitió el encuentro con nuevos indicios que dieron cuenta de prácticas y rutinas policiales como parte de una cultura institucional que se consolidó a lo largo de décadas. Analizar el contexto socio-histórico que habilitó a la institucionalización de la inteligencia policial, implicó también inquirir sobre aquellos vestigios del pasado que en la actualidad pueden constituirse en prácticas arraigadas al Estado y a las fuerzas de seguridad.

Inevitablemente, a lo largo de esta tesis, la persona que la lea se verá por momentos “abrumada” ante la descripción de precisos mecanismos de vigilancia y control. A pesar de la variedad de fuentes consultadas, el enfoque general de la tesis lleva, una y otra vez, a percibir ese recorrido. Sin embargo, si puede establecerse una premisa o clave de lectura de esta tesis, entre tantas posibles, diríamos que tal escenario opresivo no fue ni tan “exitoso” ni constante.

Las complejidades del devenir histórico en la conformación del aparato de inteligencia policial bonaerense marcan recorridos sinuosos, fallas notables, diversidades conceptuales y operativas que muchas veces se contradicen entre sí. Y por supuesto, está también aquí el universo de las y los “vigilados”, (comunistas, peronistas, etc., etc.) Quiénes eran y cómo respondían a esa vigilancia, cómo reaccionaban a los abusos que en nombre de ella se perpetraban, es otro aspecto de esta tesis que, al menos en parte, se procura destacar. Por lo tanto, si los capítulos siguientes, van dando la idea de engranajes que encajan “perfectamente” en la maquinaria de inteligencia policial, otras evidencias presentadas dentro de estos mismos capítulos procuran problematizar tal panorama, identificando espacios, actores y acciones que permiten al menos señalar una creciente complejidad, cuyo entramado, en sus aspectos más profundos, se plantean en estas páginas, pero su último significado arribará en ulteriores pesquisas.

I.2. Estado de la cuestión y enfoque de la investigación

La historiografía de las policías en la Argentina estuvo por mucho tiempo monopolizada por historiadores de las propias instituciones, cuyos trabajos se orientaban a resaltar, de manera cronológica, los logros institucionales.¹ Recién en la década de 1980, a través de los organismos de derechos humanos, comenzó un renovado interés en el tema. Con el objetivo de investigar las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar, los equipos de investigación de estas entidades, editaron algunos trabajos que, desde el punto de vista histórico, se remontaron hacia mediados del siglo XX procurando encontrar algunas causas más remotas del papel represivo que les cupo en el pasado reciente.²

A su vez, una serie de trabajos abordan como desde finales del siglo XIX, puede hallarse una temprana atención por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires ante las ideas anarquistas, comunistas y socialistas de la época. Mercedes García Ferrari expresa cómo hacia 1890 estas ideas aparecían como una preocupación en la Policía de la Capital, que a pesar de no considerarlas aún como un problema grave, se hacía explícita la necesidad de implementar leyes represivas para erradicarlas definitivamente. Este interés policial surge en el marco de un período (1880-1905) donde la policía comienza a desarrollar diversas prácticas identificatorias, como la apertura de “Galerías de Ladrones”, la inauguración de una de las primeras oficinas antropométricas en el mundo, el desarrollo en La Plata del sistema dactiloscópico, la creación del prontuario, la Cédula de Identidad y la expansión de los archivos policiales.³

En este contexto, la mirada sobre lo delictivo se impregnaba desde el discurso médico higienista que concebía la criminalidad como un síntoma que afectaba “la salud social”, como explica Jorge Salessi.⁴ El interés de la policía en detectar al sujeto

¹ Entre algunos de los autores pueden nombrarse a: Rodríguez, Adolfo y Zappietro, Eugenio, *Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio. Génesis y desarrollo desde 1590 hasta la actualidad*, Buenos Aires, Editorial Policial, 1999. Una figura clave en la producción histórica de este tenor fue la de Francisco L. Romy, *Historia de la Policía Federal Argentina, Tomo I a V*, Buenos Aires, Editorial Policial, 1965 a 1972.

² Barreneche Osvaldo y Galeano Diego, *Notas sobre las reformas policiales en la Argentina, siglos XIX y XX*. Buenos Aires: Cuadernos de Seguridad, 2008.

³ García Ferrari, Mercedes, *Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación Policial en Buenos Aires, 1880-1905*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

⁴ Salessi, Jorge, *Médicos, maleantes y maricas*, Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2000, pág. 115.

delincuente bajo este paradigma, comenzaba a pensarse como una problemática que excedía los límites locales, visualizando la necesidad del intercambio de datos entre policías de diversos países. El estudio de Diego Galeano invita a conocer los compromisos adquiridos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires hacia comienzos del siglo XX, cuando firmó junto a otras policías de Argentina y países de la región, acuerdos para intercambiar información y afinar la persecución de anarquistas y comunistas, dando cuenta de una mirada común a nivel regional sobre lo que se concebía como “peligroso”.⁵

En la Argentina de los años treinta, el conservadurismo asociado a la dirigencia militar, acentuó las políticas represivas por sobre los grupos de izquierda. La persecución y el encarcelamiento a militantes opositores al régimen conservador caracterizaron el accionar de la policía en varias provincias. Lila Caimari, por ejemplo, analiza en este contexto el lanzamiento de un proyecto legislativo que incluía la restauración de la pena de muerte, cuyos argumentos planteaban la represión al comunismo y al crimen organizado.⁶ La investigación de Laura Kalmanowiecki, muestra como la policía de investigaciones fortalecía su lugar dentro de las fuerzas de seguridad, siendo el comunismo uno de los principales motivos de persecución ideológica.⁷ En esta línea, como parte del aparato legal represivo, la sanción de diversos decretos en distintas provincias, como el n° 137 del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en 1936, restringieron la acción del Partido Comunista, poniendo en una frágil situación a sus activistas, en el marco de la continuidad de la aplicación de la Ley de Residencia.⁸

Más allá de estos valiosos aportes centrados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, los trabajos recientes sobre historia de las policías nos muestran un panorama más diversificado, en la medida que comienzan a incluirse estudios sobre otras regiones de la Argentina. Así, por ejemplo, en un artículo comparativo sobre la reorganización de las policías bonaerenses y cordobesas entre 1936-1940, se observa esta disparidad. La policía

⁵ Galeano, Diego, “Las conferencias sudamericanas de policías y la problemática de los ‘delincuentes viajeros’, 1905-1920”, en Bohoslavsky, Ernesto, Caimari, Lila y Schettini, Cristiana (org.), *La policía en perspectiva histórica. Argentina y Brasil (del siglo XIX a la actualidad)*, CD-Rom, Buenos Aires, 2009.

⁶ Caimari, Lila (comp.), *La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

⁷ Kalmanowiecki, Laura, “Origins and Applications of Political Policing in Argentina”, en *Latin American Perspectives*, Issue 111, Volume 27, Number 2, 2000.

⁸ Kahan, Emmanuel, *Unos pocos peligrosos sensatos. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías de la ciudad de La Plata*. La Plata: EDULP, 2008.

bonaerense en esos años cumplió un rol fundamental en la aplicación del decreto del gobernador Fresco que implementaba la represión al comunismo, junto a la vigilancia de “picnics” y actividades juveniles, para evitar la propaganda comunista. Mientras tanto, el gobierno radical de Amadeo Sabbatini en la provincia de Córdoba, procuró recortar las atribuciones policiales encarando una labor política destinada a la profesionalización de la policía para así revertir la imagen negativa que la sociedad cordobesa tenía sobre ella. Lejos de la presión persecutoria de los conservadores porteños y bonaerenses, como señala Osvaldo Barreneche,⁹ Córdoba fue incluso un refugio interno para los disidentes políticos. Si bien los abusos policiales no pudieron evitarse, tampoco se alentaron ni se instituyeron como política oficial. A su vez, en el caso patagónico estudiado por Gabriel Rafart,¹⁰ se indica que la preocupación mayor de las autoridades respecto de la policía era la de garantizar el control territorial, instituyendo mecanismos de cooperación con otras fuerzas militares y de seguridad actuantes en la región, para maximizar los recursos humanos. La problemática política, en este territorio, no era una prioridad en la agenda estatal y policial. En definitiva, estos estudios revelan lo indispensable que resulta profundizar el conocimiento acerca del pasado de la policía, escudriñando en su estructura organizacional, en su operatividad y en los mecanismos de obtención de información sobre los cuales basaban su labor.

Retomando el caso de la provincia de Buenos Aires, durante el peronismo se incidió en la gestión policial, ampliando y sumando muchas de las iniciativas gestionadas durante el gobierno conservador. Los hechos de corrupción de la policía durante la década del '30, generaron un reordenamiento de la policía a partir del primer gobierno peronista. Como parte de los esfuerzos por reconvertir a la fuerza policial, buscando su adhesión, se destacaban discursos hacia su interior que expresaban cómo quienes antes eran consideradas personas “peligrosas”, ahora construían la esencia del pueblo peronista, los “descamisados”, a los que la policía debía proteger y no perseguir.

⁹ Barreneche, Osvaldo, “La reorganización de las policías de Córdoba y Buenos Aires, 1935-1940”, en: Beatriz Moreyra y Silvia Mallo (coord.), *Pensar y construir los grupos sociales. Actores, prácticas y representaciones: Córdoba y Buenos Aires, siglos XVI-XX*. Córdoba: Publicación del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos Segreti” y Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

¹⁰ Rafart, Gabriel, *Tiempos de Violencia en la Patagonia. Bandidos, policías y jueces, 1890- 1940*, Buenos Aires: Prometeo, 2008.

Por su parte, la alusión al sujeto comunista continuó asociándose al nuevo enemigo a nivel mundial emergente en los inicios de la Guerra Fría. La educación e instrucción policial se pobló de contenidos relacionados a la forma en que debían detectarse las actividades “subversivas”. Esta labor, junto al accionar político de los dirigentes sindicales pro-justicialistas, curvó negativamente la influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero, hasta que fue finalmente extirpado por el poder peronista emergente.¹¹

En este contexto, la utilización de los edictos contravencionales, también se conformó en una herramienta de la policía para la detención. Estos edictos constituyeron una forma de procedimiento disciplinario, moralizante y represivo sobre las llamadas “clases peligrosas” y para las clases populares en general. En manos de la policía quedaban así atribuciones del orden de lo legislativo, ejecutivo y judicial.¹²

Durante el peronismo las detenciones por el Poder Ejecutivo de la Nación y la aplicación de la Ley de Residencia, continuaron siendo una práctica que ejecutaba la policía, principalmente a quienes eran considerados “perturbadores”, “disolventes”, o vinculados con “elementos comunistas”, como ser afiliado o cercano al Partido Comunista, por difundir y/o realizar una protesta social o una huelga por fuera de la Central General de Trabajadores (CGT), consideraciones válidas para la intervención policial. La continuidad de la aplicación de esta de Ley, son indicios brindados por Mariana Nazar, que indican que la noción de peligrosidad atravesó todo el siglo XX, como categoría vertebral de las rutinas policiales. En la herencia que dejaron las leyes de expulsión de extranjeros en la primera década del siglo XX, la noción de peligrosidad adquirió una centralidad sin precedentes.

I.2.1. La militarización de la policía

A lo largo del siglo XX la policía se consolidó como institución formando parte del aparato del Estado y del sistema de seguridad pública. La vigencia y continuidad de una

¹¹ Camarero, Hernán, *La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

¹² Tiscornia, Sofia (comp.), “Entre el honor y los parientes. Los edictos policiales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El caso de «las Damas de la calle Florida» 1948-1958”, en: *Burocracias y Violencias-estudios de Antropología Jurídica*, Buenos Aires: Antropofagia, 2004.

Los edictos y la facultad policial para dictarlos, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril de 1956, pero en septiembre del mismo año el decreto-ley 17.189/56 transformó los edictos en ley, mientras que la policía retuvo la capacidad de dictarlos y aplicarlos.

policía militarizada y verticalista fue un dato fundamental para la interpretación de su accionar en los distintos momentos históricos planteados.

Independientemente de sus particularidades, con el tiempo, las policías profundizaron su verticalismo y militarización a través de los distintos golpes de Estado acaecidos en nuestro país. En este sentido, tal como analizan Sandra Gayol y Gabriel Kessler, las autoridades de facto intervinieron directamente sobre las policías, ya sea a través del nombramiento de militares en servicio activo al frente de ellas, o bien subordinándolas a estrategias y actividades represivas militares.¹³

En la provincia de Buenos Aires, la composición de los trabajos de inteligencia policial realizados y orientados a tal fin, dio cuenta de una tendencia a mejorarse de manera progresiva en esta tarea. La existencia y articulación de dependencias de inteligencia que fueron hasta 1940, las secciones de “Orden Social” y “Orden público”, dependientes de la División de Investigaciones de la policía, fueron refundadas en un solo organismo, bajo la nominación de “Sección de Orden Social”.¹⁴ En 1945 pasó a ser la “Oficina de Movimientos Políticos”, dependiente de la Secretaría General. En 1946 se creó la División de Orden Público, que pertenecía a la Jefatura de Policía de la Provincia. Las modificaciones en los nombres otorgados a las dependencias policiales para la realización de inteligencia y espionaje, fueron variando acorde a los cambios de jerarquía y poder en su accionar, estando estrechamente articulados con los giros políticos e institucionales del país.

En aquellos estudios que abarcan el período de la llamada “Revolución Libertadora”, se destaca la intervención de las Fuerzas Armadas en la conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde uno de los objetivos fue jerarquizar las tareas de inteligencia orientadas al control, persecución y represión a los movimientos políticos.¹⁵ En 1956, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación de la Dirección de Informaciones Antidemocráticas (D.I.A), con el objetivo de coordinar y reunir la información producida por otros organismos del mismo tipo: la SIDE, el Servicio de

¹³ Gayol Sandra y Kessler Gabriel, *Violencias, justicias y delitos en la Argentina*. Buenos Aires, ediciones Manantial y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002.

¹⁴ Funes, Patricia, “El archivo de inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires: medio siglo de represión”, en *Revista Puentes*, Buenos Aires, año 4, número 11, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, 2004.

¹⁵ Kahan, Emmanuel, *Unos pocos peligrosos sensatos*. Op. Cit.

Informaciones del Ejército (SIE), el Servicios de Informaciones Naval (SIN), el Servicio de Informaciones Aeronáuticas (SIA) y el de las policías provinciales y federal.¹⁶ Constituidos como órganos de *control social*, posteriormente la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, utilizó esos archivos como antecedentes para generar mecanismos de control y represión a través del Estado.

A partir de lo estudiado en la tesis de maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, se puede comprender la creación de la DIPPBA en el marco de un proceso de modernización punitiva del Estado, donde la policía se consolidó como un actor fundamental en el control político. La definición política sobre la creación en 1956 de la Central de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior Archivo y Fichero -conformado en 1957- como método de clasificación de personas y organizaciones, fue una pieza fundamental para implementar una maquinaria de inteligencia y control social. De este modo, la construcción política del enemigo interno en nuestro país, lo considerado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes, antecedentes y en la continuidad operativa de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, jerarquía que tomó durante la última dictadura militar.

La intervención militar en la policía devino a que en 1956, en el momento de la creación de la Central de Inteligencia, las órdenes estuviesen a cargo de las jefaturas militares. Estos datos nos incitan a pensar también en supuestos conflictos, tensiones y resistencias hacia el interior de la propia institución, en un período histórico complejo, donde la intención de “desperonizar” el país, por parte de los comandantes de “la Libertadora”, posiblemente haya tenido sus repercusiones en el interior de las prácticas mismas de control político en la policía. Con respecto a las tensiones internas generadas dentro de la propia institución policial, el trabajo de Barreneche sobre la huelga de policías bonaerenses en el año 1973, es un ejemplo para comenzar a indagar en este tema.¹⁷ A partir del estudio de los archivos policiales encontrados en la DIPPBA sobre dicha huelga, el

¹⁶ Funes, Patricia, “De lo secreto a lo público. El epicentro de la violencia”, en *Revista Puentes, Dossier Documentos*, La Plata, número 19, Comisión Provincial por la Memoria, 2006.

¹⁷ Barreneche, Osvaldo, “Paro de y represión a... policías. Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973)”, en *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol. 51, N° 202-203, Buenos Aires: julio-diciembre, 2011.

autor releva una serie de antecedentes que competen a los reclamos salariales y las formas de protesta de los policías de la provincia de Buenos Aires, desde la caída de Perón en 1955, hasta comienzos de la década de 1970.

A su vez, durante los períodos democráticos los postulados que conformaban a las instituciones policiales no fueron siempre cuestionados, manteniendo la violencia como un medio de disuasión, control y persecución a todo lo que se consideraba delito. Así, la criminalidad comprendía, en principio, todo aquello que no encuadraba con el pensamiento hegemónico, encontrándose siempre un marco legal para incluirlo en algún acto delictivo tipificado por el Código Penal. En este aspecto, el trabajo de Débora D' Antonio y Ariel Eidelman sobre el fuero antsubversivo y los Consejos de Guerra en la década del '70, es un aporte reciente para aquellos estudios sobre la actividad represiva del Estado en términos históricos y la construcción de un orden jurídico particular devenido de éste. Aquí se evidencia como la etapa abierta hacia mediados del siglo XX en la Argentina se caracterizó por una profunda crisis de hegemonía, que llevó a que el Estado nacional, en un proceso de creciente militarización de sus estructuras e instituciones, especializara sus políticas y acciones represivas y de control social, construyendo una legalidad de carácter autoritario.¹⁸

En esta línea de trabajos, Marina Franco aborda la seguridad interior como política de Estado entre los años 1958 y 1976. Su preocupación se orienta en repensar el proceso de aparición e instalación de políticas y lógicas represivas tanto en gobiernos militares como civiles, para evidenciar hasta qué punto estas políticas también integraron a gobiernos democráticos.¹⁹ Por su parte, Damián Pontoriero hace foco en la incidencia de la militarización de la seguridad interna en la Argentina a partir de la implementación del Plan Conintes;²⁰ mientras que la represión política y sindical que se llevó a cabo con la puesta en marcha del Conintes puede verse en el trabajo coordinado por Sebastián Chiarini y Rosa

¹⁸ D' Antonio, Débora Eidelman, Ariel, "El Fuero antsubversivo y los Consejos de Guerra contra civiles en la Argentina de los años 70", *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Tel Aviv, 2016, Vol. 27, N°2, pp.77-98

¹⁹ Franco, Marina, "Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)" (2012). En, *Revista Contemporánea: Historia y problemas del Siglo Veinte*, Montevideo, vol. 3. Pp. 77-96.

²⁰ Pontoriero, Damián Esteban, "Estado de excepción y contrainsurgencia: El Plan Conintes y la militarización de la seguridad interna en la Argentina (1958-1962)", en *Contenciosa*, N°4, primer semestre 2015.

Portugheis, donde se destaca la centralidad de la persecución al movimiento obrero, bajo una legitimidad fundada en la justicia militar.²¹

Estos nuevos aportes dan cuenta de la construcción de una trama represiva que tuvo a la policía, con sus diversas intervenciones militares, como un agente central del control político durante todo el siglo XX, que condujo a la institucionalización de la represión. Tal como advierte Marianela Scocco en su estudio “Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983)”, dicha institucionalización fue implementada gradualmente a lo largo de todo el período, mediante una estricta legislación que no dejaba como letra muerta lo regulado hasta el momento, sino que lo ampliaba y lo complementaba.²²

Como puede verse, la producción de nuevos enfoques para problematizar la compleja trama represiva que caracteriza al siglo XX en Argentina, han abierto otras interpretaciones sobre el pasado reciente del país. Sin embargo, la necesidad de continuar y profundizar en esta línea de estudios que apunte a analizar las articulaciones de las diferentes lógicas y dispositivos represivos que fueron parte de una continuidad entre gobiernos golpistas y constitucionales, cobra relevancia para comprender la represión en sus diferentes escalas territoriales. De modo que, la necesidad histórica de la construcción de un enemigo político como esencia de los Estados modernos, nos posiciona en el enfoque de la investigación que compete a la historicidad de la categoría del sujeto calificado como “comunista” desde las fuerzas de seguridad.

I.2.2. Inteligencia de Estado y archivos de la represión

La presente tesis se enmarca en una serie de trabajos que, gracias a la apertura al público del archivo de la DIPPBA en el año 2003, ofrecen una aproximación a la labor de

²¹ Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria, 2014.

²² Scocco, Marianela, “Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983),” en Águila Gabriela, Garaño Santiago, Scatizza Pablo (coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del Golpe*, Universidad Nacional de La Plata, 2016, pp. 207-237.

inteligencia de la policía bonaerense, sus prácticas, los mecanismos para la obtención de información, la vigilancia y el control político, social y cultural, durante su existencia.

Estudiar los cambios que existieron en dicho organismo policial, no sólo implica comprender los propios mecanismos burocráticos dentro de la policía de inteligencia, sino que, permite visualizar la realidad social y el grado de conflictividad política existente en aquel contexto. En este sentido, es destacable la importancia que el Estado le otorgó a las tareas del control social e ideológico, donde la categoría de “enemigo” fue constitutiva en los cambios de la propia estructura de la inteligencia orientada hacia un mejoramiento progresivo en la labor policial. A su vez, la relevancia temática se inscribe en pensar estas definiciones y prácticas como elementos prefigurativos de las formas que adquiriría el Estado durante la última dictadura cívico-militar acaecida en nuestro país, en 1976. La pesquisa, entonces, pretende comenzar a desandar las prácticas, limitaciones y particularidades de la inteligencia como rutina, comprendiendo la existencia de un Estado de excepción permanente legitimado desde múltiples sectores, que, en términos de Calveiro, habilitaron la ampliación de la violencia estatal, en pos de sostener nuevas hegemonías que preservaran el orden capitalista.²³

Las primeras investigaciones vinculadas con los documentos del ex Archivo de la DIPBBA, inducen a pensar la intencionalidad política por parte de los gobiernos de turno, en mantener un registro y control sobre la vida íntima y social de las personas. En este sentido, la persecución no sólo se dirigió hacia los partidos políticos de izquierda, sino tal como lo indican una serie de investigaciones, los alcances del control también se focalizaron en sectores como la cultura, estudiados por Sergio Pujol,²⁴ organizaciones sindicales y de mujeres, como lo expresa el trabajo de Patricia Flier,²⁵ o el estudio de Federico Lorenz y María Laura Guembe, sobre los ex-combatientes de la Guerra de Malvinas.²⁶ A estas investigaciones se incorpora el reciente libro de Cristian Prieto,

²³ Calveiro, Pilar. La centralidad de la guerra y lo concentracionario en la reorganización global del poder”. En Pinedo...et. al, *Políticas del terror: las formas del terrorismo de Estado en la globalización*, Buenos Aires: Ad-Hoc, CIAJ, pp.45-71, 2007.

²⁴ Pujol, Sergio, *Rock y Dictadura*, Buenos Aires, Emecé, 2005.

²⁵ Flier, Patricia, “El archivo de la DIPBA: un hallazgo clave para una historia de los imaginarios represivos en Argentina”, en IMAGO AMERICA, Revista de estudios del imaginario, Año I, N 1, Centro Extremeño de Estudios y cooperación con Iberoamérica, Universidad de Guadalajara, Universidad de Florencia y Universidad nacional de La Plata, 2006.

²⁶ Lorenz, Federico y Guembe, María Laura, *Cruces. Idas y vueltas de Malvinas*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

“Fichados: Crónicas de amores clandestinos”,²⁷ que da cuenta de la persecución policial hacia gays, lesbianas y trans, indagando en el relato policial e institucional que relaciona la orientación sexual con la moralidad. Estos trabajos dan cuenta de algunas de las áreas sociales y políticas de incumbencia para la vigilancia y la represión policial y comprueban la existencia de una lógica de persecución en correlación con la propia estructura del archivo, cuya clasificación respondía a diversos factores temáticos que fueron acumulando antecedentes durante décadas.

Estos ejemplos, producto de la apertura del archivo, junto a los de Patricia Funes, en lo que hace a la arquitectura general de la DIPPBA, el de Emmanuel Kahan, para el caso de la vigilancia de las instituciones judías, permiten avanzar hacia preguntas que nos remiten a desnudar la práctica de la vigilancia como una rutina del trabajo policíaco en un contexto particular, que le otorgó al agente policial una identidad clandestina, instituyendo “una policía de las apariencias”.²⁸

La fuente principal, conformada por los llamados “archivos de la represión”,²⁹ se constituye en un objeto de estudio en sí mismo, siendo parte de una nueva corriente de investigaciones encuadradas dentro de este tipo de fuentes. Esta categoría comprende a aquellos archivos producidos con el fin de la persecución política y la represión, hallándose directamente vinculados a la definición de “instituciones represivas”, por ser parte de los archivos de seguridad del Estado.³⁰

En esta línea de estudios, se encuentran los trabajos de Elizabeth Jelin y Ludmila da Silva Catela,³¹ quienes plantean la importancia del uso de este tipo de fuentes para la construcción de la memoria histórica y política, contribuyendo a visibilizar la dimensión que adquirieron los distintos regímenes dictatoriales en Latinoamérica. La colección de Inventarios DEOPS, sobre la Policía Política de Brasil, realizada por la Universidad de San Pablo, el Archivo de Estado y la Imprenta Oficial, se inscribe en esta perspectiva de

²⁷ Prieto, Cristian. *Fichados: crónicas de amores clandestinos*, editorial Pixel, La Plata, 2017.

²⁸ L’Heuillet, Hélène, *Baja política, Alta policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

²⁹ Jelin, Elizabeth y da Silva Catela, Ludmila, *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno de Argentina, 2002.

³⁰ Karababikián, Graciela, “Archivos y derechos humanos en la Argentina”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, año LXIX, Vol.XXXIII, Núm.119, 2004, pág. 622.

³¹ Jelin, Elizabeth y da Silva Catela, Ludmila, *Op. Cit.*

análisis, siendo parte del Proyecto Integrado Estado Archivo/Universidad de San Pablo, (Proin), cuya finalidad es utilizar las fuentes policiales del pasado dictatorial del país, con el objetivo de rescatar la memoria nacional y contribuir a la formación de investigadores/as.

Esta investigación también se enmarca en el inicio de una tradición de estudios que considera a este tipo de archivos como escenarios de luchas por memorias individuales y públicas. Territorios conquistados, en términos de da Silva Catela, donde la historia ordenada y clasificada por décadas se abre al espacio público reconociendo en su interior su significado como un vestigio de las políticas represivas y como portadora de memorias que darán origen a usos y sentidos de ese pasado reciente.

De modo que, las políticas represivas del Estado; la construcción de un enemigo; y la creación de un gran archivo para clasificar y perseguir a las disidencias políticas, se presentarán aquí como tres variables que hacen a un mismo enfoque de investigación: la trama del accionar represivo del Estado en la construcción histórica del sujeto comunista.

I.2.1.3 Algunas referencias conceptuales

A continuación se plantean algunas referencias teóricas que resultan pertinentes para abordar el enfoque analítico que articula el problema de investigación.

El término latino “politia” tiene su origen del griego “politeia”, que significa ordenamiento político de la ciudad, significado intrínseco al surgimiento de la policía en Europa, en el marco de la consolidación de los Estados Nación, hacia comienzos del siglo XVII. Dentro de las características que definieron a la policía en sus orígenes, se puede hallar cómo a partir de dicho siglo, se empezó a llamar policía al conjunto de los medios a través de los cuales se pudieron incrementar las fuerzas del Estado, a la vez que mantener el buen orden de éste. En tal sentido, se definió a la policía como parte de la administración del Estado, pero que al mismo tiempo podía contenerlo todo. Así es como en términos de Foucault, la policía “lo engloba todo”, lo vigila “aparentemente todo”.³² Sin embargo, es en este último sentido donde interesa detenerse para aclarar, tal como sugiere Lila Caimari en su análisis sobre Foucault, que muchas veces esta perspectiva puede no habilitar lugar “para las ineficiencias, para los efectos no previstos”. Se presenta así como “... un sistema

³² Foucault, Michel, *Seguridad, territorio, población: Curso en el College de France 1977-1978*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

cerrado en el que todo termina produciendo mayor control, sin espacio para pensar el Estado y sus problemas de funcionamiento”.³³ De modo que, como punto de partida el concepto de policía se presentará aquí con el fin de reflejar la más amplia gama de instituciones mediante las que se ejerce el sistema de control, con sus limitaciones, “ineficiencias” y las “disfunciones del sistema”, donde incluso aquella vigilancia fue parte de una construcción que intentaba demostrar su poder total.

Por otro lado, una concepción materialista de la policía, implica al mismo tiempo una teoría marxista del Estado. Desde esta perspectiva, los estudios sobre la policía planteados por Mark Neocleous demuestran la centralidad de la histórica operación policial por parte del Estado para consolidar el poder social del capital y la forma del salario: “a medida que el orden se fue basando, cada vez en mayor medida, en el modo burgués de producción, la misión de la policía fue la de crear un orden de trabajo asalariado y administrar la clase de la pobreza”.³⁴

En sintonía con esta concepción amplia para pensar el término “policía”, y deslindarlo de la concepción que se asocia a “la baja policía”, se encuentra entonces cómo el rol histórico de la policía no implicó únicamente mantener el orden social, sino crearlo a través del ejercicio del poder del Estado. Aquí, se problematiza el concepto de Estado, que como es sabido tiene una amplia tradición teórica en las ciencias sociales, pero que sin desconocer la complejidad del término, nos circunscribiremos a pensar el Estado Moderno desde la perspectiva, por un lado, de Nicos Poulantzas, quien fundamenta como el Estado es el que proclama la ley y a la vez instituye el terreno de su aplicación y el objeto de la violencia.³⁵ Poulantzas analiza el carácter capitalista en un sentido estructural del Estado, mostrando -como Althusser- su carácter represivo tanto a las instituciones como el ejército, la policía, la justicia, hasta otras instituciones que se pueden encontrar en el ámbito de la sociedad civil como las escuelas, hospitales, iglesias, etc.

Por el otro, Giorgio Agamben, puntualiza en la existencia de un Estado de excepción permanente,³⁶ rompiendo con la dicotomía Estado autoritario vs. Estado de

³³ Caimari, Lila, “Usos de Foucault en la investigación histórica”, Documento de Trabajo N° 18, Serie “Documentos de Trabajo”, Escuela de Educación Universidad de San Andrés, octubre de 2005, pp.13-14.

³⁴ Neocleous, Mark, *La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 17.

³⁵ Poulantzas, Nico. *Estado, poder y socialismo*. Madrid, Siglo XXI: 1980

³⁶ Agamben, Giorgio. *Estado de Excepción*. Valencia Pre-Textos: 2004

derecho que caracterizó al siglo XX. Ambos autores son coincidentes al comprender la arbitrariedad de un Estado que construye una legalidad represiva: al mismo tiempo que proclama la ley, garantiza las condiciones de la represión física. La violencia institucionalizada cumple aquí su rol dentro de un Estado que mantiene sus funciones de control social y represión, como una continuidad histórica y constitutiva del mismo.

En efecto, para la siguiente pesquisa Agamben nos permite explicar cómo a lo largo del siglo XX las lógicas excepcionales y autoritarias se convirtieron en prácticas permanentes de los gobiernos, amparadas -paradójicamente- en el sostenimiento del orden constitucional.

Particularmente encontramos que la función de la policía de inteligencia, en tanto su carácter anticipatorio, surgió, como plantea Helen L'Heuillet, al servicio del Estado y de su política como protector de sí mismo.³⁷ Conformada en un instrumento del aparato policial, intrínseco al saber estatal, la inteligencia funcionó desde la recolección de la información pública hasta la formación específica de un sujeto policial para la espía. Sujeto que, en esa vigilancia permanente, no sólo tiene la posibilidad de vigilar, sino que comienza a construir un saber, como explica Foucault, sobre aquellos a quienes vigila: “Es éste un saber que no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino que ahora trata de verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no, etcétera”.³⁸

La propuesta de esta tesis no radicó en corroborar la veracidad de los informes policiales, sino en expresar los relatos y las construcciones sobre el “delincuente político comunista”. A partir del análisis de los diversos expedientes policiales, interesó indagar en los imaginarios que se pusieron en práctica y los supuestos sobre los que la mirada policial se basó a la hora de detectar al comunista, donde aquella categoría de la *sospecha*, como refiere Lucía Eilbaum, más que fundar o dar origen a la intervención policial, la legitima *a posteriori*.³⁹ La categoría de enemigo, entonces, comprende aquel análisis de Schmitt, donde al pensar el concepto de lo político en términos de amigo vs. enemigo, aparecía una

³⁷ L'Heuillet, Hélène, *Baja política, Alta policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

³⁸ Foucault, Michel, *La verdad y las formas jurídicas*, Barcelona: Gedisa, 1980, pp. 104-105.

³⁹ Eilbaum, Lucía, “La sospecha como fundamento de los procedimientos policiales”, en *Cuadernos de Antropología Social* N° 20, pp. 79-91, 2004.

negación de la forma de existencia propia, por lo que debía ser rechazado o combatido a fin de preservar la propia.⁴⁰ De modo que, podemos encontrar en la permanente preocupación de los diversos gobiernos entre 1956 y 1962, la existencia de un enemigo colectivo que se construyó para forjar la identidad de la Nación como fundamento de la legalización y legitimación de la violencia en manos del Estado, elemento central de la excepcionalidad.

I.4. Problema de investigación y objetivos de la tesis

En el año 2000 la Comisión Provincial por la Memoria, recibió por ley el ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de allí su función fue tanto el aporte a la justicia en los Juicios por la Verdad, como responder a las consultas personales realizadas por las/os interesados o por familiares directos de personas fallecidas o desaparecidas. Pero además, este repositorio documental sirve de fuente de información consultada por investigadores/as de diversas ramas de las Ciencias Sociales. El conocimiento sobre la recopilación de dicho material e información referente a organizaciones de izquierda, generó inquietudes y llevó a plantear un problema general a investigar, a saber, por un lado:

¿Cuáles fueron las concepciones sobre el actor político “comunista” según la mirada del aparato represivo estatal y qué lógicas de razonamiento sustentaron las órdenes, para llevar a cabo la inteligencia policial?

Por el otro,

¿En qué consistieron efectivamente las prácticas de vigilancia y el registro de la información?

Históricamente, la policía accedió a la vigilancia para el control social, de modo que, el acceso al archivo en la actualidad también viabiliza posibles nuevos interrogantes:

¿Quiénes eran los sujetos que ponían esas actividades en práctica? ¿Qué expectativas había sobre el empleo de esa información, más allá de su mera acumulación en legajos? ¿Qué usos efectivos se le dieron? ¿Qué lugar ocupaba la DIPPPBA en la maquinaria del trabajo policial, tanto a nivel provincial como nacional?

⁴⁰ Schmitt, Carl, *El concepto de lo político*, Alianza, Madrid, 1998.

El proceso de construcción de la información, nos conduce a indagar en las diversas técnicas empleadas para acceder a ésta, como en la competencia y la propia experiencia policial. Esto nos habilita a problematizar en la *naturaleza del saber policial*,⁴¹ y en cómo aquellas órdenes que respondían al poder político también pudieron incidir en la propia construcción de un saber policial. Hay un proceso de institucionalización de aquel saber experto, pero que a la vez va tejiendo otro, por debajo, aquel saber que en términos de Lila Caimari alude a la calle, al saber profano.⁴² Es en esta intersección entre las lógicas estatales y sociales que se abre un camino para pensar las formas en que se construyeron aquellas subjetividades policiales que luego definirían los modos de catalogar al otro.

El archivo de la DIPPBA se conforma como un tipo de fuente que induce de manera inevitable a involucrarse con interrogantes que tienen que ver con la propia subjetividad de los agentes de inteligencia, “los dominadores”, que intervinieron en el mundo del control social como activos observadores. Estos interrogantes son válidos, al pensar el vínculo de la práctica de inteligencia -convertida en documento-, con la realidad de los “vigilados/as”, siendo parte también de los propios errores de la labor cotidiana de los agentes policiales, que respondía a una estructura de poder con una línea política direccionada sobre lo considerado “peligroso”, -y por ende “amenaza”-, y con aquella moralidad de los cuerpos y ética de las ideas que debían ser controladas. Por lo tanto, la eficacia de estos archivos también debe ser problematizada, en torno a saber, ¿hasta qué punto las expectativas de la “doctrina” policial se cumplieron?; ¿existieron obstáculos/limitaciones en la práctica en la de vigilancia?; ¿cómo se ejecutaba finalmente la orden?

En relación a la periodización de la investigación (1955-1962), como se mencionó, se distinguen dos etapas: la de la institucionalización de la inteligencia provincial (1955-1958) y la que compete a la profundización en la puesta en práctica de un aparato de inteligencia (1958-1962) que iría consolidando se con el paso de las décadas. En esta última etapa, que abarca al gobierno de Arturo Frondizi y Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires, se destaca la militarización de los conflictos sociales y los fundamentos ideológicos de la aplicación a las medidas represivas, donde el comunismo y el peronismo adquirieron

⁴¹ Monjardet, Dominique, *Lo que hace la policía: sociología de la fuerza pública*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

⁴² Caimari, Lila (comp), *La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.

una centralidad fundamental en los análisis políticos del propio gobierno nacional y de las fuerzas de seguridad.

A partir de este análisis, surgieron las siguientes preguntas: cuáles fueron las lógicas del gobierno que habilitaron a una continuidad en las medidas represivas y en la persecución política. La existencia de una aparente “legalidad represiva” aparece desde los inicios de 1958 como una respuesta a la criminalización política. A saber, ¿la militarización del orden interno del país fue consecuencia de una continuidad en la construcción de la amenaza comunista? Estos supuestos nos llevan a pensar en la hipótesis de cómo estas medidas que tuvieron un cruento impacto en la vida social y política del país, fueron parte de un modelo político hegemónico que continuaría su curso durante décadas, maximizando sus dispositivos represivos durante la última dictadura cívico militar de 1976.

La militarización de la vida misma, alude a pensar el control social en su dimensión emocional del castigo,⁴³ en tanto vigilados/as y controlados/as son sujetos activos que manifestaron resistencias y estrategias para evadir el propio control. Cuáles fueron los vínculos que se generaron entre las y los detenidos ante la implementación del Plan Conintes en la década del '60? Los encuentros entre los y las presas permite preguntarnos por las propias categorizaciones policiales: ¿cuál era el impacto de aquel imaginario criminalizador entre los y las detenidas provenientes de distintas organizaciones políticas?.

Estas líneas interpretativas que guían a la investigación se sitúan en una intersección de lógicas para pensar la categoría del sujeto comunista que compete tanto a lo estatal, en general, y a lo policial en particular. Cabe destacar que, esta exploración por la práctica policial de inteligencia tiene un carácter limitado a las fuentes seleccionadas para su análisis. Si bien se analizaron teniendo en cuenta estas lógicas articuladas para comprender lo que hace a lo específico del corpus de investigación, futuras investigaciones serán necesarias para continuar ampliando y profundizando la relación de la propia práctica de inteligencia bonaerense con las lógicas represivas del Estado a lo largo del siglo XX.

⁴³ Caimari, Lila, *Entre el panóptico y el pantano: avatares de una historia de la prisión argentina*, Buenos Aires: UdeSA, 2009.

I.4.1. Objetivos de la tesis

Como objetivo general se propone analizar la construcción del sujeto calificado como “comunista” según los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 1955-1962.

Los objetivos particulares son los siguientes:

1. Reconstruir el proceso de conformación y consolidación de la policía de inteligencia en la Provincia de Buenos Aires.
2. Estudiar las prácticas que caracterizaron el funcionamiento de la labor de inteligencia e investigaciones de la policía durante el período planteado.
3. Analizar la vinculación informativa y operativa entre las distintas instituciones de inteligencia, a nivel regional y nacional, constituyentes del periodo histórico señalado.
4. Comprender el contexto histórico político en las medidas “legales” tendientes a la persecución de las disidencias políticas.
5. Indagar en el impacto de las medidas tomadas a nivel nacional como parte del Plan de Conmoción Interior del Estado y su correlato en la provincia de Buenos Aires en la persecución al sujeto comunista.

I.5. Metodología

I.5.1. Notas de archivo

La subjetividad que atraviesa la construcción de los expedientes que integran el acervo DIPPBA también incita a pensar el problema que compete a la noción de verdad de estos documentos, hoy transformados en muchos países como pruebas para la justicia. La valoración del documento escrito como prueba irrefutable, se convierte para este tipo de archivos en una dimensión conflictiva, que conlleva a considerar necesariamente las condiciones y el contexto de producción de los mismos. El archivo sólo puede ser

comprendido recuperando el contexto de producción de su contenido, con el fin de acercarse a las diversas dimensiones de los documentos.⁴⁴ La organización del archivo, el desorden, la falta de criterios de archivística y preservación, también son partes de la construcción del corpus de investigación, al constituirse como indicios de las propias lógicas de funcionamiento de la institución que produjo los documentos.⁴⁵

“No se pueden resucitar las vidas hundidas en el archivo. Esa no es una razón para dejarlas morir por segunda vez”.⁴⁶ Así se refiere la historiadora Arlette Farge al adentrarse en la vida del archivo y nos lleva a aquella seducción que desembarca al inicio del proceso de búsqueda documental. Sin embargo, hoy la digitalización de gran parte de los documentos pertenecientes a diversas instituciones estatales también nos ha llevado, como dice Lila Caimari, a una “desmaterialización” de las fuentes escritas, donde aquella “situación de archivo” ha cambiado “al disolver el lazo táctil que lo unía a los sujetos del pasado, la experiencia sensible y vital del trabajo empírico ha cambiado también”.⁴⁷ Este aspecto, que en parte nos conduce a la pérdida con el contexto de origen de los acervos, se convierte en una advertencia metodológica a la hora del trabajo de investigación, cuando las particularidades del archivo son elementos importantes para descifrar algunos significados propios de aquel mundo pasado que hoy puede resultar enigmático.

Aceptar la opacidad del pasado, indica Agustín Nieto al indagar en los archivos policiales, y traslada la importancia de alejarnos de éste y preguntarnos, “por qué actuaban como actuaban y qué pensaban los policías y sus vigiladxs difícilmente pueda responderse con estas fuentes pero seguramente nos sirvan para adentrarnos en aquel universo”.⁴⁸ Es

⁴⁴ Basualdo, Guadalupe y Barbuto, Valeria, “El archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales: una etnografía de los procesos de documentación de las tramas de la violencia estatal”, ponencia presentada en las *Jornadas Memorias y elaboración del pasado reciente en Argentina: localizaciones, actores y perspectivas*, IDES: Buenos Aires, 2008.

⁴⁵ Muzzopappa, M. Eva, “Detrás del orden. Archivos y lógicas institucionales”, ponencia presentada en el *Congreso, La travesía de la libertad ante el bicentenario*, Simposio 4, “Los archivos antropológicos de la nación: escrituras, cuerpos, artefactos y museos”, Mendoza, marzo, 2010.

⁴⁶ Farge, Arlette, *La Atracción del Archivo*, Institutió Vanelciana D’Estudis I Investigació, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1991, pág 95.

⁴⁷ Caimari, Lila, *La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2017, pág. 82.

⁴⁸ Nieto, Agustín “Los archivos policiales y la historia de las clases subalternas. El movimiento sindical marplatense a los ojos de la bonaerense”. *Introducción a los trabajadores del mar. Movimiento obrero en*

por ello, que no hay que perder de vista que la historia resguardada en los archivos en general y los policiales en particular, nos habla de las relaciones que se entretejieron en el pasado, sintomáticas de aquella sociedad que produjo los documentos. El orden social de una época trasladó el poder policial en un archivo que se regía bajo criterios profundamente desiguales, clasificatorios, rutinarios y burocráticos. Toda esa amalgama de sentidos se escabulle en el encuentro con la institución que los produjo, que ante la digitalización de sus contenidos y en algunos casos, su libre circulación, es importante tener en cuenta para comprenderlos en profundidad.

Adentrarse en el archivo condujo a la verificación escrita de aquellos documentos que por años plasmaron a los métodos de identificación policial: la observación, las marcas, la clasificación y la individualización de personas. Mecanismos que consistían en descifrar al otro para nombrarlo y encajarlo en algunas de las variables elaboradas bajo el criterio policiaco, donde a modo de semiólogos, los policías comenzaban con la permanente costumbre de tipificar personas y leer diversos signos en sus cuerpos. Palabras que hilvanaban a los indicios delictivos en los cuerpos, aquellos fundamentos que Mariana Sirimarco define como una epistemología policial sobre el cómo de la identificación y el conocimiento de los otros.⁴⁹

1.5.2. Las fuentes

Dado el problema y los objetivos de esta tesis, se ha optado por un abordaje en la investigación de carácter cualitativo, atravesado por una mirada socio política de los procesos sociales que permita, a su vez, comprender en perspectiva histórica la conformación posterior de la Dirección de Inteligencia de la Policía y su influencia directa en los acontecimientos represivos durante la última dictadura militar.

Como técnicas de recolección de datos se ha apelado, principalmente, a las fuentes escritas y orales provenientes de diversos fondos documentales.

El archivo de la DIPPBA, hoy es parte del “Centro de Archivo y Documentación” de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), funciona en el mismo lugar donde tuvo

Mar del Plata (1957-1996), Comisión Provincial por la Memoria (ex-DIPPBA), La Plata, 2011, (CD-ROM), pág.3.

⁴⁹ Sirimarco, Mariana (comp.), *Estudiar la policía. La mirada de las Ciencias Sociales sobre la institución policial*, Buenos Aires: Teseo, 2010.

su sede dicha agencia de inteligencia policial bonaerense, convertido actualmente en un sitio para la memoria, manteniendo casi toda la arquitectura del espacio lo más parecida a cuando estaba en funcionamiento el archivo. La propuesta de sus trabajadoras fue lograr un equilibrio entre un lugar habitable para el trabajo y un lugar público para la memoria.

En nuestro país no existe una ley específica para la regulación de este tipo de archivos. Se puede considerar para estos casos la Ley Nacional de derecho a la información N° 653 y la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, que refiere, entre otros aspectos, a la documentación que contiene información sensible e incluye datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Sin embargo, las integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria reconocen que esta legislación resulta insuficiente, ya que fue pensada para bases de datos de registros financieros. “Esa ley no piensa en la documentación como potencialmente histórica y establece que cuando el valor primario del documento termina -el valor primario es el motivo por el cual un documento fue producido- ese documento debe ser destruido. Con este criterio no existiría archivo histórico y tendríamos que destruir éste, porque el valor primario de aquí sería la persecución político ideológica”.⁵⁰

La Comisión utilizó esta legislación que no es específica, para garantizar el carácter público y posibilitar la apertura del archivo. Las opciones posibles eran mantener el archivo cerrado al público y solamente aportar pruebas para la justicia, que fue el objetivo inicial que tuvo la Cámara Federal cuando produjo el secuestro de la información; o abrirlo sin ninguna pauta y en ese caso se vulneraba el derecho a la intimidad de las personas. De modo que, como medio de protección de la identidad de quienes aparecen en los registros policiales nombrados, desde la Comisión se definió que sean tachados aquellos nombres que datan hasta los 50 años de antigüedad. Por lo tanto, en el siguiente trabajo muchos nombres aparecerán con cruces para mantener el resguardo y la intimidad de las personas. No obstante, los nombres se revelan cuando éstos hayan figurado públicamente como los que aparecían en volantes, prensa partidaria; los que identificaban a funcionarios públicos; o aquellos nombres personales que pertenecían a corrientes políticas o sindicales. Para el

⁵⁰ Entrevista realizada a Laura Lenci y Magdalena Lanteri integrantes, (al momento de la entrevista), del Centro de Documentación y Archivo, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, 20 de mayo de 2011.

caso que compete al siguiente trabajo, en el período histórico estudiado la mayoría de los nombres no están suplantados por cruces, pero de igual modo se optó por no mostrarlos, evitando exponer aquellos nombres que fueron criminalizados en los expedientes policiales. En fuentes de memoria social, como advierte da Silva Catela, se convierten este tipo de acervos, sujetos a diversas apropiaciones y lógicas de interpretación.

El archivo se constituye en una fuente primaria y privilegiada para la presente investigación. El acercamiento a este reservorio documental se realizó desde el relevamiento etnográfico⁵¹ sobre las propias categorías de la inteligencia en relación al comunismo.

El archivo DIPPBA está organizado a partir de tres áreas: área de Justicia; área de Pedidos de información sobre personas y el área de Pedido de investigadores. Los mecanismos de accesibilidad a la información para esta última área se conforman a partir de la confección de un formulario por parte del investigador/a, que será entregado a los y las trabajadoras del archivo, quienes luego ejecutarán la búsqueda de información, a partir de una especificación temática realizada por el/la interesado/a, donde se describe e identifica el marco temporal, geográfico, tipos documentales, actores políticos, etc., entre otros datos considerados relevantes para la investigación.

El proceso de búsqueda en el archivo consistió en dos momentos. El primero, cuando el acceso no era personalizado, por lo que cuanto más precisos fueran los datos volcados en el formulario de solicitud, mejores serían los resultados obtenidos, ya que la búsqueda se realiza entre las 4.000.000 de fojas que constituyen a este fondo documental. Finalmente, el o la investigadora es notificado si se ha encontrado la información que puede serle útil para su pesquisa. No obstante, como todo trabajo de archivo, se hizo necesario volver a consultar y a requerir más solicitudes de información.

En un segundo momento se tuvo acceso a los contenidos del archivo en forma digital, a partir de un convenio de cooperación entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP con la Comisión Provincial por la Memoria. En esta oportunidad la búsqueda permitió tener un panorama más completo de los contenidos existentes en dicho acervo.

⁵¹ da Silva Catela Ludmila, “Etnografía de los archivos de la represión en Argentina”, en Franco, Marina y Levín, Florencia (comps), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires: Paidós, 2007, pp. 183-220.

En la primera etapa de la presente investigación, se procedió a la reconstrucción de antecedentes de carácter histórico, político, social, legislativo y policial, que se conformaron como elementos identitarios en la creación de la DIPPBA. Para ello, se recurrió a la indagación de los siguientes repositorios documentales:

Leyes y Decretos de la biblioteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Órdenes del Día de la policía provincial y la revista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ambas fuentes ubicadas en el Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.

La revista de Policía y Criminalística de la Policía de la Capital Federal, ubicada en la hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores provincial, la cual contiene artículos y referencias a la provincia de Buenos Aires. Documentos secretos, confidenciales y reservados del archivo Intermedio, pertenecientes al archivo General de la Nación; publicaciones comunistas pertenecientes al archivo del Centro de Documentación e Investigación sobre la Cultura de Izquierda en la Argentina (CEDINCI), y a la Biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Discursos de gobernadores bonaerenses, pertenecientes a la colección digital del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Levene.

Estas diversas fuentes, permitieron indagar en la construcción de una lógica represiva sustentada desde otros actores políticos, que junto con la policía, se conformaron como medios de legitimación en la creación de un imaginario represivo arraigado en nuestro país desde finales del siglo XIX.

En una segunda etapa, la búsqueda se orientó a los años 1955-1958, período inmerso en una intensificación en la persecución política, bajo la intervención militar de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Período, considerado fundacional de la inteligencia provincial, en relación a la importancia jerárquica y a la producción de información que comenzaba a generarse.

Aquí se procedió con la selección de aquellos legajos del archivo de la DIPPBA, pertenecientes a la Mesa C, “comunismo”, que dieron indicios de la vigilancia y el control policial en dicho período. También se recurrió al Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación (AGN), en su sección “Comisión Nacional de Investigaciones”, que contiene expedientes generales y memorias, entre los años 1955-1958.

Se continuó en la siguiente etapa histórica (1958-1962), bajo el gobierno constitucional electo -con el peronismo proscripto-, presidido por Arturo Frondizi y Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires, representantes de la Unión Cívica Radical Intransigente. Aquí, además de los repositorios de la DIPPBA, se indagó en diferentes secciones del Sub-Fondo Presidencia Arturo Frondizi, perteneciente al área de Archivos y Colecciones Particulares, de la Biblioteca Nacional de la República Argentina: Comunismo/Discursos/Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa/Secretaría de Guerra/SIDE/Recortes de prensa/Derrocamiento marzo de 1962.

En ambos repositorios documentales se inició la búsqueda teniendo en cuenta aquellas detenciones a militantes en el marco del Plan Conintes, para lo que se amplió la indagación desde el relevamiento bibliográfico testimonial; entrevistas inéditas y editas del archivo oral de la CPM a personas que fueron detenidas como parte de esta normativa de excepción. El interés por abordar las fuentes orales residió en poder encontrar, como destaca Portelli, aquellos acontecimientos desconocidos o aspectos desconocidos de acontecimientos conocidos.⁵² De este modo, hay una aproximación hacia los relatos en primera persona por fuera de las categorizaciones policiales, pero poniendo en juego también aquellos sentidos policiales que construyeron los expedientes bajo sus categorías de verdad, aquí la narración de la historia se hace parte de la historia que está contando.⁵³

A partir de los informes obtenidos para cada período en particular, interés investigar en los procedimientos y las categorías empleadas por los agentes de inteligencia en el momento de la detección e infiltración en los ámbitos a los que participaba aquel “otro” comunista. Se elaboró un fichaje y se utilizaron técnicas cualitativas que incluyeron el análisis de las fuentes, a partir de las diversas categorizaciones que la policía utilizaba en la descripción de dicho sujeto en el momento de la espía.

La investigación finaliza a comienzos de la década del sesenta. En esta tercera etapa, se recurrió al fichaje y posterior análisis de los registros de inteligencia que corresponden al material de doctrina, organizados en la Carpeta, “decretos, leyes y

⁵² Portelli, Alessandro, “Lo que hace diferente a la historia oral”, en Schwarzstein Dora (comp.), *La historia oral*, Buenos Aires: CEAL, 1991, pág. 42.

⁵³ Portelli, Alessandro, Op. Cit., pág. 50.

disposiciones”, en la Mesa Doctrina, legajo, “Comunismo”, la Mesa “B”, “Factor Gremial” y R, “Referencia” del Archivo y Fichero de la DIPPPA.

La necesidad de la recopilación de fuentes, también fue parte de la búsqueda por reconstruir aquellas órdenes derivadas desde el Poder Ejecutivo provincial y/o nacional en su propio contexto de producción. De este modo, “desarchivar lo archivado” como nombra Funes, consiste en develar la maquinaria instalada y legitimada por gobiernos de factos y constitucionales, como mecanismos de control social que se filtraron hasta en los aspectos más íntimos de las personas, tergiversando también sentidos y prácticas de los “vigilados/a”, según las propias representaciones de los agentes de inteligencia.

I.6. Presentación de los capítulos

La tesis se divide en siete capítulos que buscan ordenar en forma cronológica aquella *narrativa del control social*, que construyó el espíritu político del período, haciendo foco en las concepciones políticas en materia policial sobre los “comunistas”, sus implicancias y significaciones particulares para cada contexto.

Luego de la presente *Introducción*, el relato contempla en el *Capítulo II* la indagación sobre los antecedentes históricos como parte del proceso de consolidación de la policía de inteligencia, sus prácticas y concepciones que definieron la construcción de un enemigo político/ideológico a perseguir. De este modo, en el *Capítulo III* se profundiza en aquel esquema de inteligencia, la militarización de la información y la institucionalización del espionaje político durante los años 1955-1958.

El *Capítulo IV*, reúne un estudio sobre las políticas de seguridad durante el gobierno de Arturo Frondizi; se verá como “la lucha contra el comunismo” fue un vector que definió muchas de las decisiones tomadas en materia de seguridad. El análisis del contexto político general fue central para comprender la articulación de las diferentes medidas entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. Es por ello, que en este capítulo se abordaron principalmente los aspectos de la política nacional en materia de seguridad, para luego analizar sus repercusiones en la provincia y en la propia práctica policial bonaerense que se desarrollará en los siguientes capítulos.

“Bajo la lupa del Conintes”, se titula el *Capítulo V* y nos permite adentrarnos en el panorama represivo y el impacto de la aplicación del Plan Conintes en el control territorial,

enriqueciendo el análisis con algunas entrevistas realizadas a ex presos/as Conintes. Los mecanismos implementados por la policía bajo el control militar, los archivos de inteligencia y los diferentes recursos legales que los/las detenidos presentaron en la justicia, fueron puestos bajo la lupa para comprender desde otra dimensión las complejidades que este tema amerita.

El *Capítulo VI* nos sumerge en las prácticas de la inteligencia policial, en relación a los actos del Partido Comunista (PC) y a la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA). A lo largo de su recorrido se indaga en las nociones de los agentes de inteligencia de la policía bonaerense sobre los y las comunistas, en función del análisis sobre distintos legajos del archivo de la DIPPBA que abarcan los partidos de La Plata, Morón y La Matanza. El capítulo tiene por objetivo continuar desandando las distintas miradas sobre aquella clasificación de “enemigo interno de la Nación”, a partir de las propias prácticas del Partido Comunista Argentino y sus llamadas organizaciones “colaterales”.

El último capítulo compete a las *Consideraciones Finales* que abre paso a futuras indagaciones sobre la temática a la luz de nuevas interpretaciones y preguntas sobre los sentidos de la policía de inteligencia en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires.

Capítulo II. Una breve historia de la inteligencia de Estado: surgimiento y antecedentes de la DIPPBA

La construcción política del enemigo interno en nuestro país, lo considerado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes, antecedentes y en la continuidad operativa de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, jerarquía que tomó durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. La definición política sobre la creación en 1956 de la Central de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior Archivo y Fichero -conformado en 1957- como método de clasificación de personas y organizaciones, fue una pieza primordial para implementar una maquinaria de inteligencia y control social.

La propuesta de este capítulo radica en poder establecer un breve recorrido histórico para dar cuenta de los antecedentes de carácter político, social y policial que se conformaron como elementos identitarios para la creación de la DIPPBA. Así, al rescatar algunos antecedentes como aquellos que competen a la implementación y los avances en las técnicas de identificación para la vigilancia del delito, nos conducen hacia finales del siglo XIX y principios del XX, período en el que estos avances comenzaron a expandirse.

Estas técnicas serían aplicadas de inmediato por la policía de la Capital, no sólo para detectar al delincuente común, sino para el control de la protesta social y el reconocimiento del delincuente político.⁵⁴ El empleo de las huelgas obreras como medidas de lucha, dieron como respuesta durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, una feroz represión sobre los huelguistas en Buenos Aires, en 1919, y en la Patagonia y en Santa Fe, en 1921. Estos hechos, estuvieron connotados de una descalificación ideológica hacia los obreros sublevados, donde los intereses de la oligarquía terrateniente determinaron el accionar político represivo por sobre la clase trabajadora.

El espionaje político se efectivizó durante los gobiernos autoritarios de la década de 1930 para detectar a los opositores del régimen conservador, habiendo sido en principio los Radicales un blanco perfecto de la inteligencia tanto policial como militar en el país. Por su

⁵⁴ García Ferrari, Mercedes, *Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación Policial en Buenos Aires, 1880-1905*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 54.

parte, el panorama internacional incidió de manera directa en las decisiones tomadas por los gobiernos, donde los comunistas pronto se convertirían en sujetos predilectos para el control, la prohibición y la desarticulación de sus imprentas y actividades durante varias décadas. La utilización de los edictos contravencionales comenzó a ser una herramienta de la policía para la detención. Tal como indica Sofía Tiscornia, estos edictos constituyeron una forma de procedimiento disciplinario, moralizante y represivo sobre las llamadas “clases peligrosas” y para las clases populares en general. En manos de la policía quedaban así atribuciones del orden de lo legislativo, ejecutivo y judicial.⁵⁵

Durante el peronismo las detenciones por el Poder Ejecutivo de la Nación y la aplicación de la Ley de Residencia, continuaron siendo una práctica que ejecutaba la policía, principalmente a quienes eran considerados “perturbadores”, “disolventes”, vinculados con “elementos comunistas”, como ser afiliado o cercano al Partido Comunista Argentino (PCA), por difundir y/o realizar una protesta social o una huelga por fuera de la Central General de Trabajadores, (CGT), “actividad que -según la Policía- no podía responder más que al plan de interferir con la obra de Gobierno”.⁵⁶

Como referencia directa a los antecedentes institucionales sobre la DIPPBA, se encuentra el legajo que con motivo de instituir el “Día de la Dirección General de Inteligencia”, el 17 de diciembre de 1979, el Director General de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, Comisario General Dardo Ruben Capparelli,⁵⁷ relevó. El comisario envió esta propuesta al Jefe del Estado Mayor, para lo cual se describieron las dependencias que antecedieron a la DIPPBA, a modo argumentativo ante tan larga trayectoria en el *trabajo* de la inteligencia policial de la provincia. A partir de esta sistematización elaborada por la propia agencia de seguridad, se establecieron los

⁵⁵ Tiscornia, Sofía, “Entre el honor y los parientes. Los edictos policiales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El caso de «las Damas de la calle Florida» 1948-1958”, en: Tiscornia, Sofía (comp.); *Burocracias y Violencias- estudios de Antropología Jurídica*, Buenos Aires: Antropofagia, 2004. Los edictos y la facultad policial para dictarlos, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril de 1956, pero en septiembre del mismo año el Decreto-Ley 17.189/56 transformó los edictos en ley, mientras que la policía retuvo la capacidad de dictarlos y aplicarlos.

⁵⁶ Nazar, Mariana, “Estado de derecho y excepcionalidad. Algunas prácticas de control social sobre trabajadores durante el primer peronismo”, ponencia presentada en *VIII Reunión de Antropología del Mercosur*, 29 de septiembre a 2 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina, pág. 15.

⁵⁷ Estuvo en ese cargo entre el 1 de enero de 1979 hasta el 23 de diciembre de 1979. En la actualidad, organismos de Derechos Humanos exigen su procesamiento como autor intelectual por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar en nuestro país. Puede consultarse, Colectivo Justicia Ya!, www.justiciaya.org.

antecedentes institucionales que tuvieron como objetivo la recolección de información para garantizar la inteligencia policial, en su mayoría, de carácter secreto, confidencial y reservado, a los fines de las distintas políticas de los gobiernos de turno. El acervo de información acumulado con anterioridad a la conformación de la Central de Inteligencia de la provincia, con la jerarquía de Dirección, se sumó a los estantes del posterior Archivo de la DIPPBA, en 1957. “Los antecedentes históricos, de lo que hoy es la Dirección General de Inteligencia, se remontan al año 1930, según la tradición oral de los ex funcionarios, ya que la documental ha sido destruida”.⁵⁸ Este tipo de referencias incitan a pensar en una tensión entre lo que aparentemente se presentaba como un gran *leviatán policial*, capaz de controlarlo y abarcarlo todo, a -por ejemplo-, la mención de meros recuerdos para recuperar la historia de la institución de inteligencia provincial.

En suma, a través de estas prácticas políticas, también sustentadas en materia legislativa, este capítulo se propone comprender los antecedentes que dieron origen a la Dirección de Inteligencia Policial de la Provincia de Buenos Aires, y dar cuenta de aquel contexto que antecedió a dicha institución policial. Finalmente, se hará hincapié en los comunistas como sujeto-objeto de la vigilancia policial, señalando cómo se construyó esa mirada sobre los y las comunistas y cuáles fueron las políticas y normativas que incidieron en la categorización de este sujeto como “lo peligroso”, que luego sería sustento de argumentaciones futuras para la aplicación de vigilancia desde la Central de Inteligencia en 1956. De este modo, interesa destacar una especie de narrativa del control social, como parte del espíritu político de la época que gobernó previamente al golpe de Estado de 1955, haciendo foco en las concepciones políticas en materia policial, y que al mismo tiempo reconstruya las representaciones sobre los comunistas, sus implicancias y significaciones particulares para cada contexto.

En este sentido, cabe destacar cuatro niveles de carácter constitutivo en la genealogía de la DIPPBA. En primer lugar, los intereses y las definiciones políticas de la clase gobernante; en un segundo nivel, su correlato en la ejecución de las leyes y/o decretos nacionales y provinciales; en tercer lugar su aplicación en las distintas agencias de seguridad del Estado, y por último los propios objetivos que se contemplaban hacia el

⁵⁸Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, s/f.

interior de la institución de inteligencia provincial. De modo que, los cambios en las nominaciones y jerarquías de la DIPPPBA se condescendieron con los cambios políticos de cada período, evidenciando el tipo de prácticas que hicieron al trabajo de inteligencia policial durante más de medio siglo.

II. 1. Los años '30 y las formas de la represión

El Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 encabezado por el General José Félix Uriburu, dio por finalizado el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, proscribiendo al partido de la Unión Cívica Radical e inaugurando la vía electoral fraudulenta controlada por el Ejército, dando inicio a una seguidilla de gobiernos conservadores. Reconocido como presidente de facto de la Nación por la Corte Suprema, se dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, siendo un antecedente utilizado para legitimar el ascenso al poder mediante los golpes militares.

La conocida “Década Infame”, se caracterizó por el control de las Fuerzas Armadas y los conservadores en la política, dando como resultado gobiernos fraudulentos. El conservadurismo asociado a la dirigencia militar, profundizó las políticas autoritarias por sobre los grupos de izquierda, generalizando la utilización de métodos represivos para la persecución política. A partir de 1930 el uso del poder coercitivo desde el Estado contra los partidos y movimientos políticos opositores a los gobiernos de turno hacia los supuestos enemigos del régimen, se reforzaría y dejaría una huella a lo largo de todo el siglo XX en la Argentina.

En el lapso del gobierno de Uriburu, las deportaciones a extranjeros, el estado de sitio, la instauración de la ley marcial y la persecución a anarquistas y comunistas se generalizaron, mientras que los miembros de Unión Cívica Radical fueron desplazados de sus lugares en la administración pública. La tortura también fue utilizada contra oficiales radicales del ejército que apoyaban a Yrigoyen, y una red de espionaje y vigilancia se incorporó como parte del control policial a aquello que era etiquetado como una amenaza para la seguridad del Estado: los radicales y los comunistas para quienes se creó la Sección

Especial de la Policía de la Capital.⁵⁹ La cárcel de Ushuaia se convirtió en el lugar de traslado para los presos comunistas y anarquistas, siendo un lugar de tortura en sí mismo por las hostiles condiciones del presidio para poder mantenerse viva allí una persona.

La tortura a presos políticos entre los meses de febrero y marzo de 1931, ante la consideración gubernamental de un posible alzamiento “contrarrevolucionario”, fueron hechos de trascendencia pública, llegando a ser discutidas la veracidad de las denuncias en la Cámara de Senadores de la Nación. En aquel momento se encontraba en el cargo de presidente interino, el Dr. Matías Sánchez Sorondo,⁶⁰ por la ausencia del General Uriburu. En 1932, Sánchez Sorondo, ya como senador nacional por la provincia de Buenos Aires llevó el tema al Senado ante las denuncias públicas de los hechos de torturas. Según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, el debate se realizó entre Sánchez Sorondo y el senador socialista Alfredo Palacios, al haber acusado a éste último por los delitos de soborno y tentativa de extorsión, a los efectos de obtener un falso testimonio. Frente a esta situación, el senador Palacios relevó todo un descargo de documentación probatoria de numerosos testimonios de presos políticos que detallaban que habían sido torturados en la Penitenciaría Nacional.

Más allá de la veracidad de los hechos, lo que se evidencia aquí es la persecución política que existió durante el período, luego del Golpe de Estado de 1930. “¿Pero, quién puede creer lealmente que el General Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores?”⁶¹ Puede resultar irónica, pero con esta pregunta el senador Sánchez Sorondo interpelaba al Congreso con ánimos de otorgarle seriedad al gobierno, dejando a un lado la posibilidad de que semejantes mecanismos extorsivos hubieran existido, privilegiando la teoría del complot político en su lugar.

Estos hechos fueron de trascendencia pública para la época, y en este caso llegó a ser tratado durante las sesiones del Senado de la Nación. No obstante ello, las detenciones a

⁵⁹ Kalmanowiecky, Laura, “Origins and Applications of Political Policing in Argentina”, *Latin American Perspectives*, Issue 111, Volume 27, Number 2, 2000.

⁶⁰ Sobre la trayectoria biográfica y profesional de Sánchez Sorondo, véase la obra de Zuleta, Álvarez, Enrique, *El Nacionalismo Argentino* (tomo I y II), Buenos Aires: La Bastilla, 1975. También, como parte de los estudios sobre nacionalismo en nuestro país, que vinculan la historia de Sánchez Sorondo desde la política y el periodismo durante las presidencias de Aramburu y Frondizi, véase: Beraza, Luis Fernando, *Nacionalistas. La trayectoria de un grupo polémico (1927-1983)*. Buenos Aires: Puerto de Palos, 2005.

⁶¹ Palabras del Senador Matías Sánchez Sorondo, en *DSHCS*, Tomo I, Buenos Aires: Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, 1932, pág. 180.

militares y civiles, entre los que se encontraban socialistas, radicales, militantes universitarios y periodistas, por presuntos complots y movimientos “subversivos”, como el mismo senador Sánchez Sorondo enunció, fueron puestos en práctica de manera rigurosa. Cabe destacar el testimonio de un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, Néstor Jáuregui, quien denunció el procedimiento ilegal de su detención y las torturas sufridas, en el mes de junio de 1931:

“Argentino, 25 años, estudiante de 5º año de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, tuve cierta actuación en el movimiento universitario de esa localidad y en el mes de julio del año pasado, siendo delegado de la Federación Universitaria Argentina, encontrándome en Buenos Aires a efectos propios de mi gestión, concurrí a una comisaría seccional para denunciar un hurto cometido por el encargado de un hotel (...). Bastó mi presentación a la seccional en compañía del señor José María Lunazzi, y Schelotto, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, y delegado de la Argentina, para que fuera detenido y remitido a la Sección Orden Político, de la policía de la Capital...”.⁶²

En esta oportunidad los detenidos quedaron directamente bajo las órdenes del comisario Leopoldo Lugones (hijo), quien estaba a cargo de la Sección Orden Político de la Policía de la Capital. Éste se manifestó preocupado ante las movilizaciones estudiantiles realizadas en la ciudad de La Plata, por lo que la misma condición de delegados que tenían los jóvenes de la Federación Universitaria, era suficiente para que se procediera a la detención de los mismos, a efectos de responder un interrogatorio en relación a intervenciones universitarias en el espacio público. De este modo, ya en su despacho, Lugones se dirigió al joven estudiante:

“Usted está en mi poder. En este momento desde Alvear para abajo tenemos preso a todo el mundo, de modo que usted puede imaginarse que su persona física no tiene para nosotros ninguna significación. Por el contrario, su físico en este instante, es nuestro instrumento para averiguar el origen de los ruidos nocturnos de La Plata. (...) En la Sección Orden Político de la Policía de la Capital, yo los dos empleados y el señor Lugones (...), llegamos por fin a la <<pieza de la silla>>, que no era otra cosa que un archivo, a las 2 de la mañana, pieza donde efectivamente estaba la sogá, la silla y otras cosas más.

⁶² Testimonio citado por el Senador Alfredo Palacios, en *DSHCS*, Tomo I, Buenos Aires: Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, 1932, pág. 190.

La orden del señor Leopoldo Lugones (hijo) fue la siguiente: <<ya saben si dentro de cien minutos no canta procedan como siempre>>, y me dijo amablemente que de ahí, como todos, iba directamente al hospital”.⁶³

En las elecciones de noviembre de 1931, la lista oficialista ganó la presidencia mediante el fraude electoral, siguiendo en el poder Agustín Pedro Justo (1932-1938), quien había sido Ministro de Guerra durante la presidencia de Alvear. Con su mandato, las políticas de seguridad continuaron teniendo a la policía como medio de represión ante los movimientos de izquierda. El aparato represivo estatal seguiría contemplando la tortura como método de interrogación a los detenidos políticos, la vigilancia y el espionaje como mecanismos de control social de manera sistemática, serían con el tiempo cada vez más eficientes. En la persecución política e ideológica del gobierno de Justo, se articularon la policía marítima, la marina y el Ejército, junto con la División de Investigaciones de la Policía de la Capital, en una red de informaciones que intentaba demostrar posibles conspiradores del régimen.⁶⁴

Para este período, en la provincia de Buenos Aires, según el expediente de la propia DIPPPBA, las secciones Orden Social y Orden Político de la División de Investigaciones, fueron las que tenían a cargo el control, principalmente, de las organizaciones anarquistas. Aunque no se hayan registrado de manera exacta las variables que pudo haber tenido, tanto en jerarquías como en nominaciones, el archivo sí cuenta con información de la época, donde se hacía foco fundamentalmente en el sujeto anarquista.

A partir del año 1932, aparecen materiales de carácter político secuestrados por la policía de la provincia, que luego fueron parte del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Entre los materiales de ese año se encuentran el carnet de asociado de la FORA, bonos pro boletín informativo de España, veintiocho folletos de la Federación Obrera en distintos lugares, principalmente Mar del Plata, y localidades como Pergamino, Morón, San Martín y Lomas de Zamora.⁶⁵ A su vez, se encuentran boletines y memorias de la Federación Comunista Anarquista (FACA) de la ciudad de La Plata, y prensa sobre la Guerra Civil Española.

⁶³ Op. Cit., pág. 190.

⁶⁴ Kalmanowiecky, Laura, “Origins and Applications of Political Policing in Argentina”, *Latin American Perspectives*, Issue 111, Volume 27, Number 2, 2000.

⁶⁵ Archivo DIPPPBA, Mesa C, colaterales, Legajos N° 28, N° 20 y folletos, s/f.

A lo largo de esta década y bajo el nombre de estas Secciones pertenecientes a la provincia, se recolectó -principalmente- material con información política sobre anarquistas:

“Si bien los antecedentes orales se remontan al año 1930 y los documentales al año 1940 y tomando como punto de partida este último, es evidente que se trataban de estructuras dependientes de organismos a la vez también en la misma situación, incipientes, elementales y limitados a tareas de información sin la independencia y alcance de la moderna inteligencia”.⁶⁶

Para este período, las disputas y las persecuciones políticas reforzaron un aparato de control que tenía a la policía como un actor central para garantizarlo. En la provincia de Buenos Aires la inestabilidad en política policial, tuvo un giro a partir del gobierno de Manuel Fresco (1936-1940), cuando entre otras cosas, cobró preponderancia la persecución ideológica en los objetivos de la fuerza de seguridad provincial, instando a restringir la autonomía policial en la toma de decisiones, reforzando la autoridad del Jefe de Policía, Pedro Ganduglia, a través de las órdenes del gobernador bonaerense. De esta manera, con menos dependencia en los jefes políticos locales, “el equipo de gobierno se propuso contar con una fuerza armada capacitada para llevar a cabo las tareas de control y represión en el ámbito político y social”.⁶⁷

En 1937 se aprobó el nuevo organigrama policial, proveniente del reformado reglamento de policía. El mismo tenía un fuerte sesgo centralizador, haciendo depender todo de la figura del jefe de policía, a quien respondían directamente las cuatro ramas en las que se dividió la tarea policial: División Judicial, de Investigaciones, Administrativas y de Seguridad. De esta última dependían las nuevas Inspecciones, encargadas de supervisar toda la labor de las comisarías.

A su vez se incluyó la reorganización de los gabinetes especiales de Robos y Hurtos, Seguridad Personal, Orden Político, Orden Social, Dactiloscopia e Informaciones, en la División Investigaciones. Se crearon cuatro brigadas Seccionales de Investigaciones,

⁶⁶ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, s/f.

⁶⁷ Béjar, María Dolores, *El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943*, Buenos Aires: Siglo XXI, pág. 156.

en San Nicolás, Mercedes, Azul, Dolores, que unidas a las existentes en las localidades de Avellaneda y Bahía Blanca conformaron un total de seis, subdividiéndose la provincia en las zonas para la jurisdicción de las mismas. También se creó una nueva estructura de Orden Social, que se desarrolló de manera simultánea con la del Departamento de Trabajo:

“...al que se entrega por intermedio directo del titular del Ministerio, la dirección de la política Social y Obrera del P.E, para que, en consecuencia, este servicio policial sea en lo sucesivo un agente auxiliar en los casos en que se requiera expresamente su intervención”.⁶⁸

La creación de oficinas especiales en la policía de la provincia de Buenos Aires para trabajar en la detección del criminal político, fue una constante a lo largo del siglo XX. Distintas nominaciones fueron recibiendo estas instancias, hasta que el acopio de información sobre el control político de aquello calificado como “indeseable”, “disolvente”, “subversivo”, se transformó en una apuesta política a la institucionalización de la inteligencia policial para ampliar el campo de acción en el conocimiento, control e intervención en el terreno enemigo a las ideas de la nación argentina.

La represión al comunismo fue uno de los primeros objetivos del gobierno de Fresco, convirtiendo esta medida en un decreto de carácter provincial, donde la policía se convertiría en un brazo ejecutor importante en el control de los comunistas, ya que desde el gobierno se advertía sobre la infiltración del Partido Comunista en distintos ámbitos políticos y sociales: “... tengo el honor de informar al país que nuestro gobierno ha sido el primero que ha tenido la decisión de suscribir un decreto reprimiendo las actividades comunistas”.⁶⁹ La persecución ideológica fue una meta donde se articulaban las decisiones del poder provincial, la policía de la provincia, y las autoridades políticas y de seguridad a nivel municipal.

Como parte de estos objetivos, se creó, a partir de un decreto provincial, el Registro Policial de Vecindad, en marzo de 1937 y se abrieron registros de reuniones públicas.⁷⁰

⁶⁸ DSHCS, “Nueva estructuración de la policía”, 11 de mayo de 1937, Tomo I, La Plata Taller de Impresiones Oficiales, 1938, pág.21.

⁶⁹ “Discurso del 9 de septiembre de 1936 en La Plata”, en Balesta, Luis (compilador), *Conversando con el pueblo (Discursos del Dr. Manuel A. Fresco)*, Buenos Aires, Damiano, 1938, pág.89.

⁷⁰ Barreneche, Osvaldo, “De Brava a Dura. La policía de la provincia de Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XX”, *Cuadernos de Antropología Social* N°32, Buenos Aires, 2010, pág. 41.

Estas instancias funcionaron como medios de control y recolección de información que reunían material desde distintos niveles gubernamentales.

Fresco fue dirigente del Partido Demócrata Nacional, se definió asimismo como un político conservador y reaccionario. En uno de sus discursos durante el año 1937, tomó como referencias las experiencias fascistas de Italia y Alemania: “Hitler y Mussolini no son malas palabras, ni hay que tener temor de pronunciarlas, ya que esos estadistas han sido capaces de pacificar sus estados, de lograr la unidad espiritual y la restauración económica, después de las guerras sufridas, constituyendo dos poderosas naciones de Europa que admiramos. (Aplausos)”.⁷¹

Como puede comprenderse, el accionar policial tuvo su faceta en la persecución a militantes opositores al régimen conservador. La Unión Cívica Radical, continuó siendo objeto de “prudencia vigilancia” por no dejar afuera sus ideas “subversivas” de su política.⁷²

Más allá de las alertas de los conservadores por sobre los radicales, la vigilancia fue central en aquellas agrupaciones que en sus campañas proselitistas eran caracterizadas por su prédica contra la ley. Métodos de violencia, como el uso de la picana, abusos, corrupción y el espionaje político, se fueron conformando como parte de las prácticas de las instituciones policiales en nuestro país a partir de la década del '30, organizadas alrededor de una cultura del secreto.⁷³

Según el expediente de la propia Dirección de Inteligencia provincial, hacia 1940 se registró el primer antecedente documental existente. Éste apareció en la Orden del Día N° 15.008, del 15 de mayo de 1940, a partir de la cual se daba cuenta en la resolución del 10 de mayo del mismo año, que las secciones Orden Social y Orden Político de la División de Investigaciones, se refundaban en una sola bajo la denominación de Orden Social. Sin embargo, el proceso de centralización como parte del reordenamiento policial, entre otros cambios, fueron interrumpidos con la intervención federal en la provincia en marzo de 1940.

⁷¹ "Discurso del 18 de febrero de 1937 en La Plata", en Balesta, Luis (compilador), *Conversando con el pueblo (Discursos del Dr. Manuel A. Fresco)*, Buenos Aires, Damiano, 1938, pág. 212.

⁷² “Memoria de la Jefatura de Policía”, correspondiente al año 1935. Realizadas por el Jefe de Policía Interino Francisco Danieri al Ministro del Interior, *Revista de Policía y Criminalística de la Capital Federal de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 56.

⁷³ Seri, Guillermina, “Metáforas policiales, elisiones y calidad de la democracia en Argentina y Uruguay”, en *Revista SAAP*, N°3, agosto, 2009.

Luego de 1940 las dependencias policiales dedicadas a la detección y el control del delincuente político, fueron afectadas por una serie de modificaciones a lo largo de tres décadas. A pesar de los cambios efectuados acordes a los giros políticos del país, tal como interpreta Funes, el objetivo de las dependencias que antecedieron a la DIPPBA, siempre estuvo apuntado a estigmatizar, espiar, perseguir, registrar y analizar.⁷⁴ A lo largo de las décadas se puede ver, a partir de los informes, una tendencia a perfeccionarse a la hora de detectar al “delincuente” en relación a su actividad política y a un mejoramiento en la estructura organizativa de la misma.

II. 2. Comunistas en la mira policial

Hacia la década del '30 el comunismo había cobrado mayor protagonismo dentro del movimiento obrero. Durante el período pre peronista, el Partido Comunista alcanzó un fortalecimiento de su política, en el que miles de activistas se sumaron a sus filas, mientras que desde la dirección del partido se encabezaron muchas luchas gremiales, consolidándose una intensa red de agitación y propaganda. Se crearon instituciones culturales propias del movimiento obrero y el Partido Comunista logró posicionarse como una fuerza política de importancia dentro del proletariado industrial.⁷⁵

El crecimiento y la influencia ideológica de las ideas comunistas en el país, se convirtieron en una de las preocupaciones a contener desde la clase gobernante. Como parte del golpe de Estado en septiembre de 1930 el Partido Comunista fue declarado ilegal. Si bien hacia principios de 1932 el Partido recuperó su legalidad, el estado de prohibición y represión hacia esta corriente política-ideológica, fue una constante a partir de los años '30. Las persecuciones y la proscripción de partidos, tal como se enunció, fueron parte del contexto de la época, situación que conllevó a un fortalecimiento dentro de las fuerzas de seguridad para detectar al “enemigo comunista”, siendo éste uno de los principales motivos de persecución ideológica.

La conformación de la “Comisión Popular argentina contra el Comunismo” (CPacc), en 1932, comenzó a denunciar la existencia de actividades comunistas a través de

⁷⁴ Funes, Patricia, “Desarchivar lo archivado. Hermenéutica y censura sobre las ciencias sociales latinoamericanas”, en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, Flacso- Ecuador, 2008, pp.27-39.

⁷⁵ Veáse, Camarero, Hernán. *La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

los diarios de tendencia nacionalista “Crisol” y “La Fronda”.⁷⁶ En el memorial que dicha organización acercó al Senado de la Nación, junto a un petitorio con firmas contra el comunismo, por intermedio del senador Sánchez Sorondo, se relevaban los orígenes del comunismo en el país y un pormenorizado listado de sus referentes en distintos ámbitos de la sociedad civil. Nombres, apellidos y ocupaciones de dirigentes comunistas en las fábricas, talleres, universidades, escuelas obreras y sindicatos varios aparecían en detalle. De esta manera, dicha Comisión denunciaba las irregularidades de la Policía de la Capital para la identificación delictiva comunista, mientras que hacía inteligencia sobre distintas actividades, como charlas y conferencias que realizaban los comunistas. Su objetivo era claramente impedir e interferir en la expansión de la propaganda comunista, sistematizando información que luego era llevada a los diarios más conservadores de la época. La información de carácter policial era ordenada por los integrantes de la CPacc, detallando quienes ya habían sido prontuariados por la Policía de la Capital durante el gobierno de Uriburu, por pertenecer o simpatizar al Partido Comunista Argentino. Así, los cuestionamientos de esta Comisión, apuntaban a la flexibilidad que tenía el gobierno de Justo frente al peligro comunista y reclamaba la urgente necesidad de un marco legal desde donde se prohibiera al Partido, reforzando así la propia labor policial:

“En esta época, es decir, desde el 17 de julio (cuando se crea la C. Pacc) hasta el presente, los comunistas solo se licitan permiso para realizar 17 conferencias de las cuales 15 fueron disueltas y 7 intentos de conferencia sin permiso de la policía fueron impedidos.” (...) La C.Pacc establece un servicio de vigilancia a la llegada de los vapores de Montevideo y puede comprobar que la propaganda comunista continuaba introduciéndose clandestinamente en el país desde Montevideo y dirigida al Club Internacional de Marineros...”.⁷⁷

No obstante, las críticas de esta agrupación nacionalista, algunos ejemplos que trasladan el accionar represivo hacia las ideas comunistas, pueden encontrarse en la censura a la prensa.

⁷⁶ Para un análisis sobre las particularidades políticas e ideológicas de cada publicación, puede consultarse: Carnagui, Juan Luis, “La ley de Represión de las Actividades Comunistas de 1936: Miradas del discurso sobre un mismo actor”, *Revista Escuela de Historia*, año/vol 1, número 006, Universidad Nacional de Salta, Argentina, 2007.

⁷⁷ DSHCS, “Anexo, Memorial Comunismo-1932, Comisión Popular argentina contra el comunismo”, 28 de diciembre de 1932, Tomo II, Buenos Aires: Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, pág. 796.

“Bandera Roja”, publicación de ideología comunista, fue víctima de múltiples ataques para obstaculizar su distribución. Hacia junio de 1932, destrozos y amenazas a sus trabajadores gráficos se sucedieron durante la madrugada por parte de integrantes de la uriburista Legión Cívica, fuerza de apoyo paramilitar al gobierno. A pesar que este tipo de atentados fuese recurrente, el periódico reapareció con un solo pliego y desde su portada se concedía la responsabilidad por los destrozos al gobierno del General Justo, “La dictadura 4144 es responsable del asalto a Bandera Roja”.⁷⁸

Luego de cambios de nombres y lugares de impresión, el periódico-boletín fue prohibido por el gobierno y se inició una causa judicial contra sus responsables legales. “Bandera Roja” fue reemplazado por “Mundo Obrero. Diario de la mañana”. Desde las tintas de este medio se preguntaban, “¿Saldremos Mañana?”. Este diario también fue clausurado, intervenido con destrozos, allanamiento y detenciones de obreros. “¡Un nuevo proceso monstruoso contra la clase obrera! ¡Ha sido clausurado **Mundo Obrero!**”⁷⁹, se agitaba desde sus páginas. Intentos posteriores, como el lanzamiento de “Frente Único, Diario obrero de la mañana”, llegó a lanzar, antes de su clausura, tres números hacia octubre de 1932.

Estos ejemplos intentan ilustrar la preocupación por parte de la clase dirigente sobre la circulación de las ideas comunistas y las luchas del movimiento obrero. Como parte del descontento político, la incidencia de dirigentes comunistas en las manifestaciones obreras, se evidenció hacia 1935 cuando una masiva huelga de trabajadores de la construcción en Buenos Aires conducidas por referentes comunistas se prolongó durante noventa días. Entre otros resultados, a partir de aquí se constituyó la Federación Obrera Nacional de la Construcción. Por estos años se sucedieron manifestaciones obreras que también reunían la adhesión de otros partidos políticos, radicales, socialistas, demoprogresistas y comunistas. Para este contexto, el comunismo había adoptado las líneas del Comintern, teniendo como objetivo la creación de Frentes Populares en el país, ante lo cual la policía estaba muy atenta a la “infiltración roja” a partir de esta nueva consigna internacional.

⁷⁸ Bandera Roja N° 78, 24 de junio de 1932. Catálogo de microfilms de publicaciones, pertenecientes al Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda en Argentina (CeDInCI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

⁷⁹ Mundo Obrero, boletín s/f. Catálogo de microfilms de publicaciones del Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda en Argentina (CeDInCI), ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este panorama la policía consideraba al Partido Comunista hacia el año 1932 como un “verdadero peligro nacional”, tanto por su notorio crecimiento, como por su vinculación intrínseca con la clase trabajadora del país.⁸⁰ De este modo, desde los años ‘30 todo lo calificado y considerado comunista cobró mayor interés, para el trabajo de identificación y vigilancia policial, siendo la División de Orden Social de la Policía de la Capital, pionera en focalizar la represión al comunismo. Luego del 6 de septiembre de 1930, desde la Subprefectura de Seguridad, el Teniente Coronel Don Carlos H. Rodríguez, sumó a su estructura una nueva rama: la Sección Especial. Desde aquí, se centralizaron sus metas por extirpar la propaganda roja, cuya función, según su propio creador, fue perseguir el “elemento indeseable” reprimiendo sus actividades disolventes y delictuosas:

“Muchos pensaron que la Sección Especial era la antigua Sección que pasó a depender de Orden Social y que se denominaba Orden Público; pero puedo afirmar categóricamente que la Sección Especial fue iniciativa del expresado militar (...). Como los comunistas habían cesado en parte su activa propaganda, se creyó momentáneamente innecesaria la existencia de la Sección Especial, que fue disuelta por el mismo funcionario. El ex Jefe Coronel Luis Jorje García la volvió a poner en funciones, con sus atribuciones anteriores”.⁸¹

Según las memorias de la policía y de la División de Investigaciones, las actividades de la Sección Especial datan desde 1932 a 1945. La confusión sobre los orígenes y la ambigüedad sobre la Sección Orden Político y la Sección Especial de la policía porteña, da cuenta de que la institucionalización de la inteligencia como un área dentro de la policía, aún estaba en curso. Asimismo, muchas veces el carácter reservado de las prácticas policiales, como los cambios de nombres en dichas dependencias, incidía en la falta de precisión al respecto.

En el afán por detectar el elemento comunista, la Sección Especial incrementó notablemente el acopio de información y la creación de expedientes sobre aquellos considerados comunistas; desde estudiantes hasta empleados públicos, la información triplicó su caudal entre 1932 y 1935. La traducción y los comentarios sobre artículos

⁸⁰ Singorelli, Vicente, “Iniciación al comunismo en Argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 39.

⁸¹ Singorelli, Vicente, “Iniciación al comunismo en Argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 56.

específicos catalogados por dicha ideología, también fue una de las prácticas de la Sección Especial.⁸²

Como puede comprenderse, el ejercicio de inteligencia empezó a ponerse en práctica durante toda la década del '30, donde la identificación del “enemigo comunista”, comenzaba a convertirse en uno de sus principales objetivos. Mientras la Policía de la Capital a través de estas oficinas específicas, aceitaba un mecanismo de control estatal, hacía extensivo esta política al trabajo de las policías locales, como sucedió en la provincia de Buenos Aires. En el circuito de información, las distintas dependencias del Ejército colaboraron para alcanzar un mayor control sobre las actividades comunistas en el país.

El sentimiento anticomunista también puede encontrarse en los alcances estatales del control y la vigilancia sobre distintas prácticas de sociabilidad. En esta línea, Andrés Bisso destaca cómo la administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, era comparada con las imágenes clásicas del control totalitario, “... y con sus intenciones de entrometerse en toda práctica de sociabilidad, incluyendo aquellas que, aunque enmarcadas por la determinación política, eran consideradas por sus participantes como absolutamente inocentes y decentes”.⁸³

Esta cita apunta a cómo la celebración de distintos tipos de eventos por militantes del Partido Comunista, pic-nics, fiestas entre amigos, también fueron foco de vigilancia y persecución por parte de una policía que no consideraba estos eventos como prácticas “inocentes y decentes”. Este tipo de intervenciones inesperadas por parte de la Sección Especial de la Policía, sobrevuela en el recuerdo de una histórica militante del Partido Comunista, Fanny Edelman, cuando en la realización de un baile la policía se apareció en el lugar y detuvo a todos los participantes, dejando folletos apócrifos en la casa, para reforzar la argumentación ante la detención policial. “En camiones de la policía provincial nos trasladaron al Departamento de Policía de La Plata, donde ya habían sido convocados los periodistas de todos los medios de difusión para que dieran cuenta de los subversivos comunistas que llevaban dentro”.⁸⁴

⁸² Kalmanowickky, Laura, “Origins and Applications of Political Policing in Argentina”, *Latin American Perspectives*, Issue 111, Volume 27, Number 2, 2000, pág. 46.

⁸³ Bisso, Andrés, *Sociabilidad, política y movilización: cuatro recorridos bonaerenses 1932-1943*. Buenos Aires: Buenos Aires Libros, 2009, pág. 20.

⁸⁴ Edelman Fanny, *Banderas, Pasiones, Camaradas*. Buenos Aires: Dirple, 1996, pág. 29.

El imaginario sobre lo comunista en tanto peligroso se extendía hasta el punto de la infiltración policial en todos los ámbitos que sus militantes pudieran transitar. La identificación del “elemento comunista” como una amenaza al orden social, se constituía como un imperativo y una misión que la policía debía desactivar. Reflexiones y análisis sobre el mencionado enemigo, fueron puestas en escena en diversas revistas de la policía, dando cuenta del interés privilegiado y de la convicción que se tenía desde la fuerza policial con respecto a la necesidad de reprimir todo lo involucrado al Partido Comunista.

Al igual que la revista de criminalística de la policía de la Capital, en la provincia de Buenos Aires se exponía con esmero extensos párrafos sobre las consecuencias del comunismo en el país. Como auxiliar de la División Investigaciones, en 1942, Juan Berchesi,⁸⁵ se dirigía a sus lectores colegas titulando un artículo “Motivos por los cuales el partido comunista es un peligro que debe eliminarse de toda nación civilizada”. La antigua noción de lo civilizado desplazaba rápidamente al indio y colocaba a este nuevo enemigo como la amenaza interna de la Nación.

Para esto, el autor hacía referencia al programa de la Internacional Comunista adoptado en Moscú en 1928, a través del cual se establecía que podía ser miembro del Partido y la Internacional, todo aquel que respondiera a los lineamientos internacionales y que pagase regularmente las cotizaciones. La cuestión “nacional” era el eje argumentativo del policía al comprender que, “quien pertenezca a tal ideología y sea miembro de la referida organización no puede hablar de argentinismo y menos aún poseer en su interior el verdadero sentimiento de lo que es, bien entendido, el nacionalismo puro”.⁸⁶

El comunista se colocaba en el lugar de ese otro, ajeno, extranjero, sin bandera ni patria, siendo por ende, “un peligro viviente”, que se infiltraba entre la clase trabajadora y las personas que la policía consideraba de poca cultura, por lo cual las fuerzas de seguridad debían efectuar procedimientos diarios para “extirpar” este peligro, que de lo contrario

⁸⁵ Según un organigrama que es parte de los legajos de la División de Orden Público de la policía de la provincia de Buenos Aires, hacia la década de '50, se detalló como parte de la “acción agresiva” del Partido Comunista Argentino, un apartado que correspondía a la clasificación de “Terrorismo” y desde allí se desprendía un subítem que aludía a “Atentados personales”, en esta clasificación se incluía un atentado a Juan Berchesi, por aquel entonces, Inspector General de la policía de la provincia de Buenos Aires, adjudicado a miembros del Partido Comunista. Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, “Partido Comunista”, año tentativo 1951.

⁸⁶ Berchesi, Juan F, “Motivos por los cuales el partido comunista es un peligro que debe eliminarse de toda nación civilizada”, *Revista de la Policía de la provincia de Buenos Aires*, año 1, n°9, La Plata, enero de 1942, pág. 53.

fuese aún mayor. Este sentimiento que se traducía en las políticas nacionales de seguridad tenía como resultado la vigilancia e inteligencia de las actividades comunistas en el país. Así lo expresaba el mismo policía al describir las intenciones del Partido Comunista por haberse infiltrado él mismo junto con otro colega, en el Primer Congreso Nacional de la Juventud Argentina, realizado en la ciudad de Córdoba, prohibido en la ciudad de Buenos Aires, en agosto de 1941. En esta oportunidad se detallaron los nombres de todos los que integraron la comisión organizadora del Congreso, “todos ellos prontuariados y clasificados como activos dirigentes comunistas por la Sección Especial de la Policía de la Capital Federal y en la Sección Orden Social Especial de esta provincia”.⁸⁷

Puede comprenderse aquí la fluida comunicación y actividades de la policía de la Capital con la de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Al respecto, queda establecido en el artículo que en la provincia de Buenos Aires el comunismo como problema no tenía ya tanta importancia a raíz de la persecución que había sido objeto por parte de la policía. Los “numerosísimos” allanamientos efectuados por la policía de la provincia, también obtuvieron como resultado el secuestro de gran cantidad de propaganda “netamente comunista”, como así también se efectuó la detención de muchas personas consideradas de ideología comunista:

“... una de las más sensacionales fue la realizada el día 16 de marzo del año actual en el Balneario de Punta Lara (...) que motivó la detención de ciento sesenta y cinco personas, todas ellas de filiación netamente comunista y prontuariadas en la Sección Especial de Capital Federal y Orden Social Especial de esta provincia”.⁸⁸

Todo indica que estas dependencias *especiales*, trabajaban mancomunadamente en la detención y persecución ideológica en la provincia. Esta conexión entre las dependencias policiales de la Capital y la provincia, habían sido denunciadas con anterioridad por el senador socialista Mario Bravo, quien dio cuenta de lo imprevisible del destino de los detenidos y de la posibilidad de aplicar las garantías legales correspondientes:

“Hay un intercambio de presos, la Policía de la Capital detiene a un obrero; después que ha aprovechado esa situación para sus fines, lo

⁸⁷ Op. Cit., pág. 54.

⁸⁸ Berchesi, Juan F, “*Motivos por los cuales el partido...*”, Op. Cit., pág. 55.

‘pone en libertad’, es decir, lo saca de su jurisdicción y lo entrega a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ella ese hombre tiene que recorrer la vía crucis de las comisarías de los 108 partidos. Evidentemente, no en todas, pero en cualquiera de ellas con la variedad obligada por la ubicuidad necesaria para que los jueces no puedan determinar el paradero del presunto reo”.⁸⁹

Los pic-nics, como se mencionaron, eran otro tipo de reuniones privilegiadas por la policía para la detención masiva de personas. En el marco de uno de estos eventos sociales organizado por la agrupación “Pro Unión Juvenil Argentina”, fueron detenidos cientos de militantes en Punta Lara, localidad de Ensenada. La policía consideraba y desentrañaba al pic-nic, como una fachada que encubría la reunión que trataría asuntos organizativos del comunismo. En esta oportunidad, fueron detenidos tanto por la aplicación del decreto provincial N° 137, de represión a las actividades comunistas, como por la aplicación del artículo N° 9 del edicto contravencional de policía de Reuniones Públicas y Desórdenes logrando secuestrar publicaciones y prensa comunista que se encontraba prohibida para el período.⁹⁰

De este modo todo aludía a comprender al comunista como un enemigo que ponía en riesgo el bienestar de la Nación, cuyas intenciones también apuntaban a corromper las pacíficas costumbres y la moral de los buenos ciudadanos del país. Este cuadro conllevaba a una justificación por parte del policía, al procesamiento constante de numerosas personas, que según la fuerza policial, sin ser comunistas caían engañadas por las artimañas de los dirigentes del partido.

⁸⁹ Discurso del Senador Dr. Mario Bravo, en, *La Democracia contra el fascismo. Discursos pronunciados en el Senado con motivo de la ley de represión al comunismo*, Buenos Aires: Federación Gráfica Bonaerense, 1937, pág. 60.

⁹⁰ Sobre la aplicación de este edicto véase: Tiscornia, Sofia, “Entre el honor y los parientes. Los edictos policiales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El caso de ‘las Damas de la calle Florida’ (1948-1957)”, en *Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica*, Buenos Aires, Colección de Antropología Social; Facultad de Filosofía y Letras / Antropofagia, 2004.

II. 3. Los marcos “legales” de la represión

“...y ahí se llega a producirse la clausura, en estos casos perfectamente justa y legal, sin que halla en ello arbitrariedad alguna”.⁹¹

Como parte de las restricciones legales al Partido Comunista, en la provincia de Buenos Aires existía la resolución del Decreto N°137 del Poder Ejecutivo provincial, “Prohibición absoluta de la propaganda Comunista”, del año 1936 y el Decreto N°118.693, del siguiente año, que prohibía, “el curso dentro del territorio nacional, de la correspondencia al descubierto, interna o internacional, que de manera directa o encubierta apoye, sostenga, defienda o propague la doctrina, procedimientos, o hechos favorables a la actividad comunista”.⁹² Estos decretos se constituyeron, no sólo como una política de continuidad de la aplicación de la Ley de Residencia, tal como alude Kahan, sino en una herramienta de control legal que fortalecía las prácticas policiales en la provincia.

Con la utilización del Decreto N°137, la provincia de Buenos Aires aparecía como una adelantada frente al reclamo de distintos sectores de la sociedad sobre la necesidad de la sanción de una ley nacional contra las actividades comunistas. “...el comunismo profesa ideas demoledoras y disolventes del propio régimen político bajo cuyo amparo pretende colocarse, por lo que tolerarlo en nombre de la libertad de pensamiento equivale a conspirar contra la Seguridad del Estado y la Soberanía de la Nación”.⁹³ Este tipo de argumentos se encuentran en las líneas del decreto que prohibía en absoluto la propaganda comunista en el territorio de la provincia de Buenos Aires, como así también desconocía a las agrupaciones o partidos de carácter comunista, tuvieran o no como nombre dicha tendencia ideológica. Este artículo breve y ambiguo, habilitaba a la arbitrariedad a la hora de la sanción y la persecución política por parte de las autoridades policiales, que en todo caso, siguiendo las líneas de la ley, debían de corroborar la vinculación de la agrupación perseguida con la Tercera Internacional.

⁹¹ Berchesi, Juan F, “Referencia del Decreto N° 137 del Poder Ejecutivo y procedimiento a seguir en caso de infracción”, *Revista de la Policía de la provincia de Buenos Aires*, año 1, n°10, La Plata, marzo de 1942, pág. 46. **Error ortográfico del original.**

⁹² Archivo DIPPBA, Mesa C, (Varios),”, Carpeta 6, legajo 121, “Comunismo en la Argentina, s/f, folio 28.

⁹³ Decreto N° 137, “Prohibición absoluta de propaganda comunista”, *DSHCS*, 20 de mayo de 1936, Tomo I, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1940, pág. 414.

Al respecto, cabe destacar nuevamente, como parte del imaginario policial sobre el peligro eminente del comunismo en la Argentina, las reflexiones del auxiliar de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Berchesi. En su artículo titulado, “Referencia del decreto 137 del Poder Ejecutivo y procedimiento a seguir en caso de infracción”, del año 1942, el uniformado daba cuenta de los procedimientos a seguir en los casos de infracción de dicho decreto, considerando de manera preocupante los peligros que significaban el territorio las actividades “anti-argentinas”, “para ellos es imprescindible atacar sus focos de traición, poniendo en tal tarea toda la voluntad y energía, procediendo con toda corrección pero firmemente, para elevar así el nivel ya muy alto del uniforme que vestimos”.⁹⁴

Desde la Revista Policial, se dejaba en claro que el enemigo comunista no era un problema menor, incitando al trabajo mancomunado de la fuerza para lograr su destrucción definitiva. Para esto, partidos, ciudades y pueblos se catalogaban con el espíritu de detectar o no elementos comunistas. En el caso de encontrarse alguna sociedad considerada afín a esta ideología, la policía debía proceder de inmediato a su allanamiento, realizándose en el local que correspondiera a la organización una amplia requisita, para obtener aquellos elementos considerados como prueba de la ideología existente del lugar, como así también debía realizarse la identificación a las personas que allí se encontraban.

El procedimiento de identificación policial terminaba en la comisaría donde pasarían a sumar las listas de los prontuariados como comunistas. A su vez, se aplicaba un acta de contravención por la realización de reuniones públicas sin aviso a la policía:

“Los detenidos y el material secuestrado serán remitidos a la comisaría, en cuya jurisdicción se haya realizado el procedimiento, haciéndose comparecer, a aquéllos a los efectos de prestar una declaración amplia, preguntándoseles, con especialidad, su ideología, y cada uno de ellos se les sacará un juego de fichas dactiloscópicas con el correspondiente suplemento prontuarial, encabezándose las actuaciones con el acta y parte del procedimiento”.⁹⁵

⁹⁴ Berchesi, Juan F, “Referencia del Decreto N° 137 del Poder Ejecutivo y procedimiento a seguir en caso de infracción”, *Revista de la Policía de la provincia de Buenos Aires*, año 1, n°10, La Plata, marzo de 1942, pág. 45.

⁹⁵ Berchesi, Juan F, “Referencia del Decreto 137...”, Op. Cit., pág. 46.

El argumento policial siempre colocaba en un lugar de salvador al agente que identificara y desarticulara estas sociedades o agrupaciones comunistas, en el marco de un deber moral y el interés en la defensa del bienestar general. En los procedimientos policiales de este tipo se aconsejaba, a fin de lograr una mejor efectividad en el desenlace, la necesidad de estar al tanto de la existencia de tales sociedades en una localidad que fuera parte de la provincia de Buenos Aires. Para ello, se recomendaba prestar atención a aquellos grupos que utilizaban para referenciarse denominaciones de carácter patriótico, como Centro Cultural y Recreativo Domingo F. Sarmiento, o Bernardino Rivadavia o Esteban Echeverría o Alberdi. La apropiación de estos nombres, encubría, según el policía, una conjura comunista para destruir la democracia argentina, “...inspirada y sostenida por una fe extraviada en la falsa existencia de una super democracia...”.⁹⁶

De este modo, se incitaba a que los argentinos se comprometieran a “aplastar” y a destruir ese “monstruo” que tenían aprisionado en sus “garras” a los jóvenes de la patria, que a pesar de encontrarse convencidos, en verdad eran “embaucados” por la falsedad propia del discurso comunista. Las descripciones y las clasificaciones a lo considerado comunismo, excedían cualquier referencia al significado tradicional de un partido político, por el contrario los sentidos argumentativos desde la policía estaban dispuestos de manera tal que se sobredimensionaban las connotaciones calificativas para instar claramente a una persecución que criminalizara y estigmatizara al comunismo en todos los sectores de la sociedad. El referente político comprometido era interpretado como aquel que no tenía noción de la realidad o uso de la razón, mientras que al simpatizante se lo colocaba en el lugar de incrédulo, joven e inocente.

En esta línea de conceptualizaciones policiales relacionadas con lo comunista, el senador socialista Mario Bravo, denunciaba las consecuencias sobre el mencionado decreto provincial. La implicancia negativa del mismo era destacada por el senador, más aún cuando quedaba en manos de las autoridades policiales la utilización arbitraria del elemento legal:

“Allí se consideraba comunismo todo acto de organización primaria de los trabajadores: reuniones en bibliotecas para tratar asuntos de interés gremial, de interés cultural. Se ha desencadenado una

⁹⁶ Op. Cit., pág. 46.

persecución sin cuartel contra todos los hombres que tengan alguna figuración en el movimiento que el gobierno de la provincia quiere calificar de comunista”.⁹⁷

La práctica policial se convertía en un control caprichoso, el “delito” de ser comunista era aplicado de manera extendida, condicionando el derecho a reunión, tanto en plazas como en locales privados, como así también a las personas que eran sometidas a la requisa policial por ser calificada como presunta culpable. Esta herramienta legal se conformaba como un dispositivo de control precautorio, constituyéndose como un elemento más de censura y disciplinamiento social.

Por otro lado, la vigencia de la utilización de la Ley de Residencia era antes de la sanción de estos decretos la vía legal que sustentaba las razones del control policial sobre actividades políticas de ideologías no afines a los gobiernos conservadores de la época. Un ejemplo de ello, fueron las opiniones que se expresaron desde la Revista de Policía y Criminalística de la Policía de la Capital Federal, “inspirada en toda causa que contemple un problema de seguridad social”.⁹⁸ En julio de 1935, el subcomisario Cesar Ferrer, relataba en una serie de notas la importancia de esta ley como instrumento para defender al país de los delincuentes y “perturbadores extranjeros indeseables”:

“Entre elementos de neto extranjerismo peligroso, se enrolaron individuos sectarios que captaban fácilmente la opinión de las masas trabajadoras en perjuicio de ellas mismas, y en contra de la autoridad constituida, llegando hasta formar centros de terrorismo que culminaron con la muerte alevosa de uno de los más preclaros jefes de policía, el coronel Falcón”.⁹⁹

La aplicación de la Ley de Residencia siempre estuvo presente, siendo su ejecución una manera rápida de extirpar a los perturbadores. En 1937, el gobierno de Justo no dudó en su

⁹⁷ Discurso del Senador Dr. Mario Bravo, en: La Democracia contra el fascismo. Discursos pronunciados en el Senado con motivo de la ley de represión al comunismo, Buenos Aires: Federación Gráfica Bonaerense, 1937, pág. 59.

⁹⁸ Ferrer César, “Expulsión de Extranjeros”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, nº1, julio, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1935.

⁹⁹ Op. Cit., pág. 26.

ejecución contra los principales dirigentes de los obreros de la construcción, que eran comunistas de origen italiano, y terminaron siendo expulsados hacia la Italia fascista.¹⁰⁰

Para sumar un elemento al complejo imaginario de la época que se despejaba en el escenario de la década del '30, una serie de secuestros extorsivos durante los primeros años de dicha década comenzaron a sucederse desplegando así las respuestas sintomáticas de la prensa que activaron el repertorio de personajes delictivos del período.¹⁰¹ El secuestro y posterior asesinato de un joven de clase alta, Abel Ayerza, en el transcurso del verano de 1932 a 1933, se conformó como el principal detonante.

De inmediato los sospechosos de siempre, anarquistas, extranjeros, fueron el blanco de las hipótesis que condujeron hasta a la propia policía a fallidos allanamientos de vivienda y presuntas detenciones. Ante este panorama comenzaron a reactivar las críticas hacia “las blanduras” del Código Penal, por lo que se impulsó el lanzamiento de un proyecto legislativo que incluía la restauración de la pena de muerte, cuyos argumentos planteaban la represión al comunismo y al crimen organizado. Tal como explica Lila Caimari, el caso Ayerza se conformó como un momento importante de la historia de la relación entre la opinión pública y la justicia:

“Dos meses después del secuestro (y antes de conocer el destino del joven raptado), el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal. Proponía la introducción de la figura de institucionalización predilectual y la expulsión de extranjeros en estado peligroso. A esta lista, la comisión legislativa agregó la restauración de la pena de muerte”.¹⁰²

Finalmente, el proyecto impulsado por el Ministro de Justicia, Manuel Iriondo, apoyado por la mayoría del Senado, quedó sin efecto ante la decisión negativa de la Cámara de Diputados que impidió su sanción. A pesar de comprobar que el crimen fue parte de una organización mafiosa siciliana, este hecho desencadenó debates que tenían como antesala las posturas nacionalistas donde se confundía al crimen organizado, con la revolución

¹⁰⁰ Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2001, pág.81

¹⁰¹ Véase: Caimari, Lila, “Sucesos de cinematográficas aspectos. Secuestro y espectáculo en el Buenos Aires de los años treinta”, en, *La Ley de los Profanos*, Buenos Aires: Siglo XXI, pp.209-250.

¹⁰² Caimari Lila, Op. Cit., 2007, pág. 245.

social y las agitaciones anarquistas y comunistas, como parte de un mismo sujeto criminalizado y categorizado como enemigo de la Nación.

Las representaciones del espíritu anticomunista de la época que encuadraban las discusiones en el Senado, podían encontrar como referentes a las expresiones que sustentaban aquel contexto a través de la prensa gráfica. Desde el ya mencionado diario “La Fronda”, de carácter conservador y nacionalista creado 1919, se alertaba por el peligro comunista y se inducía y auspiciaba la necesidad de la toma de medidas represivas al respecto. Este espíritu era claramente apoyado por la clase gobernante y sectores como la Iglesia Católica. En esta línea, la policía se conformaba como otro actor político que compartía ese imaginario y también se posicionaba a favor de la necesidad y urgencia de la sanción de una ley de represión al comunismo, bajo un argumento que coincidía en su esencia con el pensamiento de los sectores conservadores y nacionalistas de la época.

Puede comprenderse la existencia de un pensamiento policial que iba muchas veces en sintonía con el de la clase gobernante, desde las manifestaciones expresadas a través de los artículos de las diversas publicaciones de la policía. En el año de la discusión por la sanción de una ley nacional que prohibiera a las actividades comunistas, desde la revista de Policía y Criminalística, Vicente Singorelli, autor de la nota y empleado de la División Investigaciones, relataba la historia del comunismo, siendo éste un texto considerado por la dirección de la revista, como un acto que demostraba la acción policial por los valores patrióticos ante la lucha contra el enemigo comunista. En uno de los párrafos se destacaba:

“Para combatir sistemáticamente este funesto enemigo de la Nación y de sus instituciones, debe comenzarse a inculcar a los niños desde la edad temprana y cuando dan sus primeros pasos en las aulas, el amor a la patria y a la sociedad en que viven, prohibiendo a los maestros toda indiferencia en ese sentido y, principalmente, toda manifestación pública de simpatía hacia las ideologías disolventes, como ha ocurrido en otros tiempos”.¹⁰³

La nota finalizaba con un pedido explícito al Congreso de la Nación para la sanción de una ley que contuviera a la actividad comunista en el país. Se destacaba la importancia de la

¹⁰³ Singorelli, Vicente, “Iniciación al comunismo en Argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 40.

existencia de una ley que reprimiera, eliminara y paralizara por completo la “propaganda roja” que se entendía como un medio perturbador de hogares obreros, que a su vez atentaba contra los cimientos de la nacionalidad.

El mismo autor de la nota dibujó un organigrama del Partido Comunista a nivel Internacional para dimensionar la presencia de dicho Partido. De estos “focos” comunistas, se desprendían las organizaciones que se consideraban como base ilegal, por ejemplo la Liga Antiimperialista, sindicatos, bibliotecas y organizaciones obreras, estudiantiles, entre otras. Este estilo ilustrativo para explicar, comprender y detectar al comunismo como un enemigo que se expandía mundialmente y sus organizaciones en la Argentina, fueron reformuladas años más tarde cuando se tomó la decisión de crear la Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Hacia el mes de marzo de 1936, en dicha revista se manifestaba un incremento de la actividad comunista, por lo que se había prestado especial atención desde la labor policial durante todo el año 1935. En la nota “Memoria de la Jefatura de Policía”, se destacaba la importancia que estaba tomando el comunismo en Sudamérica, haciendo alusión a que dicho Partido se había convertido en un objetivo de principal interés para la policía.

Un apartado especial destacaba la acción comunista, donde se relevaba detalladamente las alianzas del Partido Comunista con otros partidos de la oposición, como los radicales, socialistas y los demócratas progresistas. A su vez, se hacía hincapié en la influencia del partido en provincias como Córdoba, Buenos Aires y la región del litoral. La influencia bolchevique era detectada tanto desde el sector de la clase obrera, como desde el sector estudiantil universitario a través de la agrupación Insurrexit, que pertenecía la Federación Universitaria Argentina y su influencia en los secundarios, a partir de la creación de una sección estudiantil como parte de la Federación Juvenil Comunista.

A su vez, la asociación de la condición de judío a la de comunista, solía ser mencionada en la descripción detallada del panorama del comunismo para la época. Ante el contexto internacional, los grupos idiomáticos habían pasado a un segundo plano, a excepción del judaico, considerado como uno de los grupos que se fortalecía ante la lucha antisemitista y antifascista.¹⁰⁴ Desde la mirada policial, este eje era considerado como una

¹⁰⁴ Para una profundización en las particularidades del tema, véase, Kahan, Emmanuel, *Unos pocos peligrosos sensatos. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías de la ciudad de La Plata*, La Plata: EDULP, 2008.

máscara que cubría las verdaderas intenciones del comunismo. Sin embargo, estas interpretaciones, tal como alude Kahan, ubicaban preferentemente al judío acorde al “prototipo de las acusaciones: comerciantes y especuladores, marxistas y comunistas, ajenos a la argentinidad y partícipes de distintas corrientes políticas.”¹⁰⁵

Los análisis de inteligencia dieron cuenta del sujeto comunista, en un sentido amplio, desentrañando este sujeto en plural a partir de las clasificaciones y categorías que la policía consideró como colaterales al Partido Comunista. La conformación de las células sindicales como directiva del Comité Central del Partido, eran destacadas por el estudio policial, siendo un objetivo de particular atención para la fuerza de seguridad. Tal como se expresa a continuación, la temática era destacada en un tono alarmante por el Jefe de Policía Interino de la Capital:

“He querido abundar señor Ministro en estos antecedentes para señalar el peligro que importa esa prédica disolvente en un país cosmopolita como el nuestro abierto a esas tentaciones. La propaganda ponzoñosa y sus libelos circulan subversivos, circulan libremente por el país burlando con facilidad disposiciones de la aduana si son de origen extranjero”.¹⁰⁶

De este modo, la insistencia en la necesidad de un marco legal para la represión de las actividades comunistas era claramente manifestada desde sectores como la policía. Teniendo como antecedente el decreto provincial que ya estaba en vigencia, se pensaba insuficiente esta medida para poder contener la propaganda *criminal comunista* a una escala mayor, “La represión de esta tendencia requiere medidas de carácter legal que ya son necesarias y que ejercitadas en todo el territorio del país, puedan ponerlo en cubierto de los peligros a los que está expuesto”.¹⁰⁷

El análisis que se presentaba desde la mencionada revista resaltaba las intenciones del Partido Comunista en Argentina, en su pretensión por conformar los Frentes Populares, bajo los lineamientos directos de Moscú. Hacia el primer trimestre de 1936, se interpelaba

¹⁰⁵ Kahan, Emmanuel, “De la conspiración al deicidio. Los judíos en los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”, E.I.A.L.; Tel Aviv; 2011 vol. 21 p.41.

¹⁰⁶ Danierie, Francisco, “Memoria de la Jefatura de la Policía correspondiente al año 1935”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, n° 6, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1935, pág. 56.

¹⁰⁷ Singorelli, Vicente, “Iniciación al comunismo en Argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936.

por la sorprendente evolución del Partido Comunista, a lo que consideraban producto de su infiltración en las filas de los partidos de la oposición, como táctica para la creación del partido único del proletariado. Una vez más se refutaba, a modo de ofensiva, la intolerancia hacia el comunismo, por lo que se aclaraba que “... los que aman la patria de verdad no le han de tolerar esa usurpación.”¹⁰⁸

Estas expresiones se comprendían como la antesala de la discusión de la ley de represión al comunismo en el Congreso Nacional. En junio de 1936, el senador de la provincia de Buenos Aires, representante por la Concordancia, Matías Sánchez Sorondo, presentó el proyecto de ley de represión al comunismo en la Cámara de Senadores de la Nación. Sin embargo, a esta propuesta, le antecedía otro proyecto presentado él mismo en el año 1932. Éste, inspirado en la legislación de Estados Unidos, resaltaba la existencia en el país de una ofensiva comunista, y otorgaba en calidad de prueba, la existencia de las publicaciones “La Protesta” y “Bandera Roja”, calificadas como las preconizadoras del “oro moscovita subvencionándola, y rubricándola con la sangre de sus víctimas”.¹⁰⁹ Referencias que continuaban con las apreciaciones “monstruo moral”, “fiera lanzada como un flagelo sobre la sociedad”, de las que se valía el senador para inducir sus convicciones a un acuerdo generalizado en el parlamento. La balanza del bien y el mal colocaba al enemigo comunista como un “alienado” que merecía su erradicación, a modo preventivo ante un presunto alzamiento colectivo o el asesinato en masa, siendo así el comunismo un factor desenfrenado de la criminalidad, que no se condescendía con los postulados de la República:

“Yo creo que un hombre que predica a sangre fría el asesinato en masa para cambiar el estado político de un país, no puede vivir ni pertenecer a una comunidad organizada bajo los dictados de nuestra civilización. (...) la existencia pública, pacífica, protegida, de las organizaciones comunistas que reclutan sus prosélitos en el hampa tenebrosa, los disciplinan, en sus agrupaciones y los estimulan con su impunidad (Aplausos)”.¹¹⁰

¹⁰⁸ “Los Frentes Populares de Europa obedecen a maniobras del Partido Comunista”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, N° 6, abril-mayo-junio, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 63.

¹⁰⁹ Sánchez Sorondo, Matías, Proyecto de Ley “Represión a las actividades Comunistas”, *DSHCS*, 1° de septiembre de 1932, Tomo II, Buenos Aires: Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, 1933 pág. 40.

¹¹⁰ Op. Cit., pág. 41

De esta manera, se retomó y se reprodujo con fuerza este proyecto presentado cuatro años después, a lo que se sumaba al actual contexto los decretos de prohibición del comunismo ya sancionados en algunas provincias del país. El senador introdujo el mismo proyecto en junio de 1936 con un tono apocalíptico, donde ubicaba su insistencia pasada en la sanción de una ley que contuviera, entre otras cosas, la propaganda considerada subversiva, como premonitora de la envergadura política alcanzada por el comunismo a nivel internacional y nacional. “No es un misterio para nadie que la situación social, en estos últimos tiempos, tiende a agravarse en todo el mundo, y que buena parte de la acción que la perturba corresponde al comunismo”.¹¹¹ Finalmente este proyecto pasó a las comisiones de Códigos y de Legislación, hasta que fue nuevamente discutido hacia el mes de noviembre del mismo año. En esta oportunidad, durante el debate desarrollado en el Congreso de la Nación, los defensores del proyecto de ley marcaron una línea política de pensamiento que se encuadraría posteriormente al momento de caracterizar y localizar al “elemento comunista” en la provincia de Buenos Aires, por parte de los agentes de inteligencia policial. En las discusiones parlamentarias se utilizaban antecedentes sobre la existencia un movimiento obrero violento, calificado como el “terrorismo de las masas obreras”, al mencionar la lucha de los trabajadores durante la Semana Trágica y los sucesos de la Patagonia. El imaginario argumentativo de la existencia de una clase obrera violenta y apátrida, era delineado en aquel presente con la influencia del comunismo en su seno, influencia que debía ser erradicada de raíz.

En su extensa exposición que se transcribió en los diarios de sesión del Senado de la Nación, Sánchez Sorondo daba cuenta, además de su anticomunismo, su postura a favor de las ideas fascistas.¹¹² En un recorrido por la historia del comunismo, el senador relevó distintas clasificaciones que permitían encontrar “elementos comunistas” en distintos

¹¹¹ Sánchez Sorondo, Matías, “Represión del Comunismo y sindicación gremial y patronal”, *DSHCS*, 4 de junio de 1936, Tomo II, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación del Congreso Nacional, 1936, pág. 260.

¹¹² En el anexo de antecedentes, inserción solicitada al proyecto de Ley por el senador Sánchez Sorondo, se toma como paradigma de seguridad a la organización de la policía alemana, “Para valer por el cumplimiento de sus decisiones y para asegurar su autoridad, todo Estado tiene necesidad de una policía fuerte y fiel. Pero la fuerza pública de la Alemania moderna no sólo debe estar continuamente preparada para intervenir en la ejecución de las órdenes del gobierno; debe ante todo, y en la medida de lo posible, mantenerse en estrecho contacto con la parte sana de la población...”. Sánchez Sorondo, Matías, “Proyecto de ley, informe y antecedentes”, *DSHCS* 26 de noviembre de 1936, Tomo III, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación del Congreso Nacional, 1936, pág. 558.

niveles. Nuevamente la utilización de una especie de mapeo de organizaciones, también tendría las mismas características y utilizaría las mismas categorías que veinte años después la Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, consideraría en su lucha para la represión y persecución del comunismo.

De modo que, en las organizaciones consideradas por el senador como ‘colaterales’ al Partido Comunista, se incluían a: “Comité Pro Ayuda a España, la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE), La Asociación Femenina Antiguerra (AFA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Argentina de Estudiantes Secundarias y Especiales (FAESE), la Junta de Defensa de la Producción, Escuelas Obreras, la Organización Popular Contra el Antisemitismo y Procor, una agrupación judía”.¹¹³

Sin embargo, a lo largo de las discusiones parlamentarias, la oposición al proyecto encabezado por los senadores del Partido Socialista y del Partido Demócrata Progresista fue argumentando y desentrañando el objetivo a largo alcance de la ley. Se observaron los antecedentes negativos que tenían la vigencia de los decretos contra el comunismo, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en Salta y Mendoza, donde el derecho individual y colectivo a expresarse o reunirse estaba limitado y la persecución por la concepción pre establecida del presunto culpable, eran parte del manejo policial. De modo que, la represión a las actividades consideradas comunistas, también servía de etiqueta para extender este tipo de prácticas represivas hacia la clase trabajadora en su totalidad. Finalmente este proyecto obtuvo su sanción en el Senado de la Nación, pero fue obstaculizado por la Cámara de diputados.¹¹⁴

Durante el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, el movimiento obrero continuó siendo un foco de represión. Un ejemplo de la persecución desatada hacia luchadores

¹¹³ Carnagui, Juan Luis, “La ley de Represión de las Actividades Comunistas de 1936: Miradas del discurso sobre un mismo actor”, *Revista Escuela de Historia*, año/vol 1, número 006, Universidad Nacional de Salta, Argentina, 2007, pág. 27.

El Procor se fundó en el año 1924, como “Organización de ayuda a la productivización de las masas judías desclasificadas de la URSS”, al respecto véase, Ubertalli, Jorge Luis, *El enemigo rojo. La represión al comunismo en la Argentina*, Avellaneda, Acercándonos Editorial, 2010, pág.71.

¹¹⁴ Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.

sociales y políticos, y comunistas en particular, fue la detención de éstos y su traslado a la Unidad Penal N° 9 de Neuquén, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.¹¹⁵

A su vez, en este período la solidaridad con la Unión Soviética en el marco de una lucha solidaria e internacional, llevó a una permanente visibilización del Partido Comunista Argentino, a través de diversas campañas y manifestaciones contra la guerra y el fascismo. En este marco, una decena de miles de personas fueron llevadas a prisión, siendo la mayoría de ellas comunistas:

“...cientos de mujeres colmamos las celdas del Departamento de Policía de La Plata, del Asilo San Miguel en la Capital y en otras cárceles del país, mientras que los hombres fueron alojados en el campo de concentración de Martín García, en las cárceles de Neuquén, la Sección Especial y otras”.¹¹⁶

Ya hacia 1945, previo a las elecciones convocadas para 1946, fue restablecido el funcionamiento de los partidos, se levantaron clausuras a diarios y los presos políticos fueron puestos en libertad. Sin embargo, aunque en 1945 el decreto que reprimía las actividades comunistas en la provincia de Buenos Aires, fue derogado, existió todo un marco legal, que si bien en su letra su significado era amplio para la determinación de un sujeto a perseguir, fueron instrumentos cuya especificidad era obligadamente definida en la propia práctica policial.

En este sentido, la Ley Nacional 13.985 del año 1950, incorporada al Código Penal, que penaba a aquellas personas cuyos actos fueran entendidos como traición a la patria, espionaje y/ o sabotaje, también se conformó como un marco legal para el control, donde la figura delictiva se contemplaba como enemiga de la Nación.¹¹⁷ Esta ley fue considerada, posteriormente, por personal de la propia dependencia de inteligencia provincial, como un “apoyo en cuanto al agente comunista incursione esos campos”.¹¹⁸

En esta línea, la Ley Nacional 14.400, “Actos o reuniones públicas” de 1954, es otro ejemplo donde se habilitaba la posibilidad de impedir o reprimir aquellos actos o

¹¹⁵ En relación a la historia de los presos políticos trasladados a la cárcel de Neuquén, véase: López, Horacio, *Los presos de Neuquén, 1943-1945*, Buenos Aires: Cuadernos Marxistas, 2008.

¹¹⁶ Edelman, Fanny, *Banderas. Pasiones. Camaradas...* Op. Cit., pág. 88.

¹¹⁷ Ley N° 13.985, “Reprime los delitos contra la seguridad de la Nación”, en: *Anales de la Legislación Argentina*, Tomo X-A, La Ley: Bs. As, 1950.

¹¹⁸ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, Carpeta 6, Legajo 121, “Comunismo en la Argentina”, pág.29

propaganda política, que tendieran a la alteración del orden y la tranquilidad pública.¹¹⁹ Estas medidas, involucraban decisiones arbitrarias en el momento de su aplicación, donde todo hecho considerado contrario a los intereses del pueblo, también debía ser disuadido por la policía.

Sumado a esto, como se mencionó la continuidad de la Ley de Residencia, el decreto Nacional de Delitos contra la seguridad del Estado, aplicado por ejemplo, para ilegalizar huelgas obreras, y la puesta en vigencia de los edictos policiales, se convirtieron en estrategias de represión, siendo consecuentes instrumentos del poder policial.

II. 4. “La policía de los descamisados”

*“... puede afirmarse que en la provincia de Buenos Aires la policía está al servicio del pueblo como lo quiso la revolución justicialista”.*¹²⁰

Desde el Golpe de Estado de 1943 comenzaron cambios importantes en la estructura y las formas de concebir a la policía. En materia de seguridad provincial, se encuentra para este período como antecedente que el 14 de agosto de 1943 se suprimió el puesto de 2º Jefe de la División de Investigaciones. Esta División estuvo integrada por dos Subdivisiones, Delitos y Orden Público, Técnica y Administrativa, cada una de ellas a cargo de un Comisario Inspector y una Secretaría de Brigadas al mando de un comisario.¹²¹ A partir de la llegada del peronismo al poder, comenzó a concretarse el proceso de modernización de las fuerzas policiales, donde se incidió en la gestión policial ampliando y sumando muchas de las iniciativas gestionadas durante el gobierno conservador.

Bajo la gobernación de Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires y el Jefe de Policía de la provincia Adolfo Marsillach, se llevó adelante una reforma policial, como parte de los cambios en la vida política del país y de las intenciones del gobierno de Perón por profesionalizar y disciplinar las fuerzas de seguridad. Durante este período, en

¹¹⁹ Ley Nacional 14.400, “Actos o reuniones públicas”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XIV-A, La Ley: Bs.As, 1954, pp. 267-269.

¹²⁰ Pérez, Sebastián, “Una Policía Revolucionaria”, *Revista de Policía de la Secretaría Técnico Social*, La Plata, 1951, pág. 34.

¹²¹ Orden del Día N° 15.949 del 14 de agosto de 1943. Archivo DIPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, s/f.

los objetivos de la política en seguridad marcados por un fuerte sesgo basado en el orden y en la doctrina militar, se encontraba la voluntad política por “reorganizar la policía para que respondiese exclusivamente a los lineamientos de la máxima autoridad provincial y se identificase con los postulados del peronismo”.¹²²

A partir del Decreto N° 14.490 de Intervención Federal del 6 de septiembre de 1945, se suprimió la Sección Orden Social, y se creó la Oficina de Movimiento Político dependiente de la Secretaría General. Al año siguiente, se publicó una resolución mediante la cual se consideró finalizada la misión de la Oficina de Movimiento Político y se reintegró el personal a su destino, “disponiendo que los permisos para realizar las reuniones gremiales o políticas sean diligenciadas por la Secretaría General”.¹²³ De esta manera, en junio de 1946 se definió crear la División de Orden Público dependiente de la Jefatura de Policía.¹²⁴ Ésta tenía como función todas las cuestiones relacionadas con las actividades sociales y políticas de la provincia y debía coordinar su acción con organismos similares pertenecientes a otras jurisdicciones:

“La Sección Orden Político de la División de Investigaciones y la Oficina Movimiento Político de la Secretaría General pasaron a depender de la nueva división creada con antecedentes, archivo, muebles, útiles y dotación de empleados”.¹²⁵

Desde esta División, con la finalidad de agilizar el registro y el acopio de información sobre actividades públicas y políticas, se crearon los ficheros regionales y se logró sistematizar a los gremios obreros existentes, donde se detallaban los antecedentes de cada conflicto y los nombres de sus dirigentes. A eso se le agregaba, la pertenencia al gremio y si se hallaba adherido a una central o era un sindicato autónomo.¹²⁶ En este contexto de restructuración policial iniciada por el peronismo, se crearon en 1946 siete Unidades Regionales; cada una

¹²² Barreneche, Osvaldo, Galeano, Diego, “Notas sobre las reformas policiales en la Argentina, en los siglos XIX y XX”, en: *Cuadernos de Seguridad*, Buenos Aires: Consejo de Seguridad Interior, 2008, pág. 88.

¹²³ Orden del Día n° 16.687 del 15 de marzo de 1946, Archivo DIPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A. Su creación”, s/f.

¹²⁴ Orden del Día n° 16.786 del 28 de junio de 1946. Archivo DIPPBA... Op. Cit.

¹²⁵ Orden del Día n° 16.786 del 28 de junio de 1946. Archivo DIPPBA... Op. Cit.

¹²⁶ Expediente 24612, “Huelgas o paros de obreros”; (...) señalando normas para cuando se produzcan conflictos de esa naturaleza”. Orden del Día N° 17055, lunes 7 de julio de 1947. En Barreneche, Osvaldo, “De Brava a Dura. La policía de la provincia de Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XX”, *Cuadernos de Antropología Social* N°32, Buenos Aires, 2010, pág. 46.

de ellas tenía designado a su cargo un Jefe de Policía, que con el tiempo fue cobrando importancia y poder en las jurisdicciones que les correspondía a cada uno.

Asimismo, en este mismo año, desde el Poder Ejecutivo nacional, se promulgó el Decreto 337/46, a partir del cual se creaba el primer organismo estatal, dependiente de la presidencia de la Nación, cuya finalidad era la recolección, centralización y coordinación de la información necesaria para el ejercicio de la “conducción de los asuntos del Estado.”¹²⁷ De esta manera, se originaba la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación que no implicaba, según la normativa, la producción de información relacionada con los temas de seguridad interna o externa, ya que esto les competía al ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, sino que el objetivo de esta dependencia radicaba en alcanzar una centralización y un conocimiento integral sobre “las actividades que desarrollan los diversos organismos que componen el Estado”.¹²⁸

Durante el peronismo, también se aprobó un Código de Justicia Policial utilizando como base los argumentos del fuero Militar, creando una justicia paralela para la policía bonaerense integrada por policías retirados o en actividad.¹²⁹ Los hechos de corrupción en la institución durante la década del '30, generaron un reordenamiento de la policía a partir del primer gobierno peronista. Como parte de los esfuerzos por reconvertir a la fuerza policial, buscando su adhesión, se destacaban discursos hacia su interior que expresaban cómo quienes antes eran consideradas personas peligrosas, ahora construían la esencia del pueblo peronista, los descamisados, a los que la policía ya no debía perseguir, sino respetar, siendo su deber protegerlos.

En sintonía con este cambio de paradigma en la forma de concebir al sujeto, presunto culpable o delincuente, una nota titulada en la Revista de Policía, de la provincia de Buenos Aires en 1951, “Una Policía Revolucionaria”, decía al respecto:

¹²⁷ Sain, Marcelo Fabián, “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, en *Seminario sobre Control Democrático de los organismos de Seguridad Interior en la República Argentina, Documentos de Trabajo*, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1997, pág. 142.

¹²⁸ Op. Cit., pág. 142.

¹²⁹ Barreneche, Osvaldo, “Por mano propia. La justicia policial de la provincia de Buenos Aires en el primer peronismo”, en *Sociohistórica*, Cuadernos del Centro de Investigaciones Socio Históricas, N° 25, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata: EDULP, 2009, pp. 123-152.

“Ella había sido el instrumento ciego y obsecuente con que contaron las clases oligárquicas para imponer sus privilegios y para ahogar sin contemplaciones cuanto significase reaccionar contra ellos en ejercicio y defensa de los sagrados intereses del pueblo trabajador, el que comprobó con pena que los organismos del Estado no eran respaldo de los derechos que consagraba y reconocía la legislación en vigencia, sino instrumentos al servicio de la oligarquía”.¹³⁰

Era destacable la similitud de la mirada policial con el discurso y la impronta peronista que se le quería imprimir al país; se ponía interés en trabajar el sentido de la policía al servicio de la sociedad, asociada a la idea de una “peronización de la fuerza policial”.¹³¹ A contracara de estas apreciaciones, la policía mantuvo el control sobre el movimiento político, y principalmente en esta etapa sobre las organizaciones sindicales fuera de la órbita de la Confederación General del Trabajo (CGT). La creación de dependencias específicas de policía, permitió agilizar y controlar la información acerca de la agitación obrera y gremial en el país.

Un especial interés recayó en materia de instrucción policial. Bajo la conducción de Marsillach, se llevó a cabo una reforma educativa en la formación policial. Tal como explica Barreneche, la intención política de imprimir la doctrina peronista iba de la mano de la influencia en la formación militar, donde entre otras cosas, se creaba el escalafón oficial. La Escuela Superior de Policía fue una institución creada en 1949, para la capacitación de los oficiales en actividad. “Policía comparada y actividades antisociales”, era una de las asignaturas a cargo del inspector mayor Enrique Gracia, también autor del plan de estudios, quien se desempeñaba como Jefe de la División Orden Público, desde 1946. Tanto desde la asignatura mencionada, como en sus cursos y conferencias, Gracia manifestaba sus conocimientos sobre el comunismo y alertaba sobre su peligro internacional y local, rescatando la doctrina peronista y militar. De manera que, estimulaba a sus alumnos y oyentes a ser detectores de la influencia subversiva, poniendo como ejemplo la infiltración comunista entre los obreros ferroviarios. La influencia de la Guerra Fría fue parte del plan de estudios para comprender la lógica del comunismo a nivel

¹³⁰ Pérez, Sebastián, “Una Policía Revolucionaria”, *Revista de Policía de la Secretaría Técnico Social*, La Plata, 1951, pág. 33.

¹³¹ Barreneche, Osvaldo, “La reforma policial del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951”, en *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol.47, Buenos Aires: IDES, 2007, pp. 225-247.

internacional. “Este adoctrinamiento -tal como lo definía- fue extendido a toda la policía durante el último año de gobierno peronista y su ejecución continuó posteriormente durante sucesivos gobiernos”.¹³²

Por otra parte, la continuidad en la aplicación de Ley de Residencia se convirtió en un medio de expulsión, principalmente para aquellos obreros que no correspondían a las filas peronistas, siendo los comunistas los principales afectados por la misma. La tipificación policial para estas detenciones continuaba siendo la de “subversivo” o “elemento disolvente”, identificados como promotores de disturbios en el marco de alguna huelga o protesta gremial, siendo perturbadores, o causantes de confusión en el movimiento obrero, como así también, relacionados con el hecho de estar involucrado con la prensa extranjera, que a partir de 1948, “...la policía considerara agraviantes para el gobierno”.¹³³

Si bien, durante el período 1945-1955 el Partido Comunista fue legal, habiendo sido anulada la restricción de prohibición establecida por el gobierno de facto de 1943, ser integrante o formar parte de asociaciones de comunidades de inmigrantes de países socialistas vinculados al PC, bastaba para considerarse como indicios de actitudes “anti argentinas”. Estas eran razones para sospechar posibles conspiraciones que alertaban al personal policial para poner en práctica los elementos precautorios: Ley de Residencia, detenciones por el Poder Ejecutivo Nacional, el edicto sobre reuniones públicas. Frente a la posibilidad de una alteración en el orden social, siendo una amenaza latente para la Nación, también regía el Decreto N° 536/45 sobre “Delitos contra la seguridad interna del Estado”. A partir de este decreto del Ejecutivo Nacional, se imponían penas entre seis meses y cinco años a quienes propagasen doctrinas opuestas a la Constitución mediante la violencia, como así también quien organizara una asociación con esa finalidad o, “... el que de cualquier modo instigare a la desobediencia colectiva, a las leyes o reglamentos dictados por autoridad competente”.¹³⁴

Por su parte, en los archivos del Ministerio del Interior, calificados como “Documentos secretos, confidenciales y reservados”, funcionó un apartado titulado:

¹³² Op. Cit., pág. 242.

¹³³ Nazar, Mariana, “Estado de derecho y excepcionalidad. Algunas prácticas de control social sobre trabajadores durante el primer peronismo”, ponencia presentada en *VIII Reunión de Antropología del Mercosur*, 29 de septiembre a 2 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina, pág.12.

¹³⁴ “Decreto N° 536/45, del Poder Ejecutivo de la Nación, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo V, Buenos Aires: La Ley, 1945, pág.129

“Detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y expulsión en virtud de la ley 4144”.¹³⁵ En esta serie se incluía la solicitud de detención por parte de la Policía Federal, donde se adjuntaba una síntesis de antecedentes del sujeto y si se consideraba necesario se debían incluir las razones por las cuales se efectuaba su detención. De este modo se puede corroborar, según los motivos señalados por la propia policía, la aplicación de dicha ley por razones calificadas como “actividades comunistas”, “subversivas”, o por la creación de “un clima de intranquilidad”. También, en este contexto mundial de guerra, eran detenidos por considerar personas o actividades pro eje, pro aliadas, por realizar expresiones contrarias al gobierno o alarmistas y temerarias.¹³⁶ Tal como enuncia Nazar, si bien fueron expulsados los más visibles partidarios del régimen nazi en el país, el trato fue diferencial hacia quienes simpatizaban o estaban directamente vinculados con las ideas comunistas. Eran perseguidos y expulsados sin importar la cantidad de años que estuvieran en la Argentina, mientras que el poder político y las relaciones económicas permitieron que muchos de los expulsados nazis reingresaran al país.¹³⁷

En la provincia de Buenos Aires, mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, las actividades y reuniones políticas debían ser autorizadas y supervisadas por la policía bonaerense. De este modo, se habilitaba a la policía, además de intervenir en el espacio público, el derecho para acceder a locales cerrados donde se realizarían actos o encuentros sociales y políticos.¹³⁸ Entre idas y venidas, en 1949 se definió que la División de Orden Público de la provincia quedase sin efecto, dependiendo nuevamente de la División de Investigaciones con la Jerarquía de Sección Orden Público.¹³⁹ Sin embargo, al año siguiente, en julio de 1950 se volvió a crear la División Orden Público dependiendo de

¹³⁵ Ministerio del Interior, Documentos secretos, confidenciales y reservados, fechas extremas (1932-1983). Archivo Intermedio. Archivo General de la Nación.

¹³⁶ Véase, Nazar, Mariana, “La accesibilidad documental y sus limitaciones legales: los documentos secretos en la Argentina”, ponencia presentada en el *IV Congreso de Archivología del Mercosur*, Huerta Grande, Córdoba, 2003.

¹³⁷ Nazar, Mariana, “Los indeseables. Un acercamiento al perfil ideológico de los trabajadores detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional durante el primer peronismo”, ponencia presentada en las *XI° Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*, Tucumán, 19 al 22 de septiembre, 2007.

¹³⁸ Expediente 10276. “Decreto número 31.485 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires del 10 de julio de 1947 (...) reglamento el otorgamiento de permisos a Partidos Políticos, Asociaciones o Personas, para celebrar reuniones”. Orden del Día Número 17063. Viernes 18 de julio de 1947. En, Barreneche, Osvaldo, “De Brava a Dura, La policía de la provincia de Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XX”, *Cuadernos de Antropología Social* N°32, Buenos Aires, 2010, pág. 46.

¹³⁹ Orden del Día N°17.593, 6 de junio de 1949. Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”.

la Secretaría General, compuesta íntegramente “por los efectivos, antecedentes, archivos, muebles y útiles de la Sección Orden Público hasta ese momento dependiente de la División de Investigaciones”.¹⁴⁰

La División de Orden Público funcionó como órgano exclusivo de enlace con la Coordinación de Informaciones de Estado. Según consta en el legajo, identificado como secreto y reservado, del archivo de la DIPPBA, a partir de esta División se relevaron las bases necesarias para orientar las actividades informativas “con el fin de difundir los principios doctrinarios sobre informaciones de Estado”.¹⁴¹ Tal como expresa Sain, luego del Decreto N° 337/46 se dio origen a la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el gobierno promulgó otros de carácter secreto, por medio de los cuales “recayó en el ministerio de Guerra la dirección de la Coordinación de Informaciones, o a través de los que se fijó la organización y funcionamiento de dicho organismo”.¹⁴² Para el caso de las provincias, desde la misma División de Orden Público se hacía hincapié en la necesidad de los Servicios de Informaciones, homologando el rol de la Coordinación de Informaciones de Estado, cuyo fin implicaba garantizar la gobernabilidad del ejecutivo nacional, al desenvolvimiento de la Oficina de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires.

A través de este documento explicativo, se exponían distintas apreciaciones sobre lo considerado “información” e “inteligencia”, como así también se describieron los tipos de fuentes y sus distintas ramas, que comprendían información clasificada como Política Interna, Económica, Sociológica, Científica, Topográfica y Biográfica.

En la información tipificada como “Política Interna” se estudiaba, entre otros aspectos, a los “Partidos Políticos”, sus cartas orgánicas, tendencias ideológicas, el apoyo popular, sus dirigentes y el prestigio de los mismos, sus relaciones políticas, su capacidad de lucha, etc. También se incluía a las “Asociaciones o Agrupaciones Ideológicas”, desde las cuales se debía tener en cuenta su intervención en la vida política nacional, programas, tendencias, su relación con el gobierno y con los partidos políticos del país o extranjeros. Además eran objeto de análisis y observación los llamados “Movimientos Subversivos”, de

¹⁴⁰ Orden del Día N° 17.593, 14 julio 1950. Archivo DIPPBA... Op. Cit.

¹⁴¹ Archivo DIPPBA, División Orden Público, Oficina de Coordinación de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires, Carpeta 2, Legajo N° 110, “Bases necesarias para orientar las actividades informáticas”, 1951.

¹⁴² Sain, Marcelo Fabián, “*Condiciones institucionales...*”, Op. Cit., pág. 142.

los que se debía informar acerca de sus causas, aspiraciones, quienes los alentaban y provocaban, sus líderes y la importancia de sus fuerzas.

A partir de este legajo, se evidencia el proceso que fue tomando la organización de una estructura que garantice la información, para que luego deviniera en inteligencia. En este sentido, la distinción radicaba en que:

“<<Información>> constituirá esa serie de conocimientos que paulatinamente llegarán a nosotros sobre un hecho determinado e <<Inteligencia>>, será la resultante del estudio de esa serie documental. Se hace <<Información>> cuando se busca y obtienen noticias relacionadas con algún asunto, e <<Inteligencia>> cuando esas noticias seleccionadas, comparadas, analizadas, valorizadas, etc., nos proporcionan el cuadro informativo completo del cual podemos sacar conclusiones que sirvan de base para la acción”.¹⁴³

La coordinación y la integración de la información comenzaron a ser no sólo un objetivo claro desde la dependencia policial, sino a conformarse en una estructura que poco a poco iría siendo cada vez más organizada. A partir de lo explicado desde la Oficina de Coordinación de Información provincial, desde 1951 los agentes policiales ya debían incorporar determinados parámetros para definir el tipo información que conseguían en las que se incluían bastas ramas temáticas, pero que a su vez, mantenían su especificidad. Así, desde la División de Orden Público se concluía que para cumplir su cometido de coordinación informativa, “el organismo informativo recurre indistintamente a las fuentes internas como a las externas y trabajan intensamente con el material ya archivado y clasificado”.¹⁴⁴ La elaboración de este documento, da cuenta de la importancia de la “información” y luego “inteligencia”, como un aspecto fundamental para el desenvolvimiento pleno de la Nación, según los parámetros ideológicos de quienes detentaban el poder.

Siguiendo con los cambios nominales y jerárquicos de la dependencia policial, hacia 1953 la “Sección Movimiento Político Social y Gremial”, que funcionaba en las Unidades Regionales (UURR), pasó a depender directamente de la División Orden Público. De

¹⁴³ Archivo DIPPBA, *Bases necesarias para orientar las actividades informáticas*, Op. Cit.

¹⁴⁴ Archivo DIPPBA, *Bases necesarias para orientar las actividades informáticas*, Op. Cit.

manera que el jefe de UURR era quien adoptaba las medidas necesarias para que los encargados de las comisarias informaran directamente a la Sección lo vinculado al Orden Público.¹⁴⁵

Modelo de Legajo de Referencia Especial de la Mesa "C" comunismo, perteneciente a la División de Orden Pública de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del año 1954¹⁴⁶

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Gobierno
POLICIA
DIVISION ORDEN PUBLICO

Formulario C. 1.

CUESTIONARIO

Información O. P. (M. S.)
"COMUNISTA"

PRONTUARIO o LEGAJO No. _____

Apellido y nombre _____
Nombre del padre _____
Apellido y nombre de la madre _____
Lugar de nacimiento Rojas. Provincia de Bs. As.
Fecha de nacimiento _____ de _____ de _____
Dia Mes Año
Estado civil Soltero. Si es casado _____
Nombre y apellido de la esposa _____
Edad _____ Nombre de los hijos _____
Edad _____
Domicilio: calle _____ No. _____
Localidad Rojas. Pcia. Bs/as. M. C. Urq.
Libreta de enrolamiento: _____ D. M. _____
Cédula de Identidad No. _____ Expedida _____
Lugar donde trabaja _____ Calle Lavalle.
Nombre del establecimiento _____
No. 328 Localidad Rojas.
Fecha de ingreso _____ de Noviembre de 1953 Puesto que ocupa Mucama
Dia Mes Año
Sueldo o salario \$ 60.00.M/N. por mes.
Concepto que goza regular. Conducta que observa regular
Religión que profesa Catolica.
Amigos que frecuenta No tiene.

¹⁴⁵ Orden del Día N° 18.807, 20 de abril de 1953. Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, "S.I.P.B.A. Su creación".

¹⁴⁶ Archivo DIPPBA, Mesa "C", Referencia Especial, Legajo N°5184, año 1954.

Si actúa en Sindicato o Asociación ----- Nombre -----
 Cargo que ocupa ----- Orientación política -----
 Si actúa en Comité ----- Cargo -----
 Nombre del Comité -----
 Valor partidario y gravitación de su personalidad en el lugar. Ninguna.-
 Moralidad ambiental de su hogar REGULAR.-
 Antecedentes judiciales y policiales -----

OBSERVACIONES:

La causante, fué detenida, conjuntamente con sus progenitos, en el Ctel 2do de este partido, el día 21/2/54, en una reunión de simpatizante al Partido "COMUNISTA", de donde fueron secuestrado gran cantidad de propaganda "COMUNISTA", panfletos, "revista, Diarios, Fotografías, etc, Dicha reunión carecía del correspondiente permiso Policial. -La causante, milita en la fila Comunista, pese a su escasa edad, en unión de su progenitor Bernardo Suarez.-No desarrolla actividades de ninguna naturaleza.-

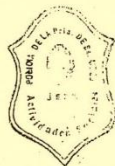
NOTA: En observaciones debe concretarse su verdadera ideología actual si despliega actividad o se halla en la actualidad a pesar de encontrarse sindicado como "comunista", inactivo. Todo otro dato que se considere de interés.

LOCALIDAD: Día 22 Mes febrero Año 1954.-



[Firma manuscrita]
 TOMAS TAMBO
 COMISARIO

Nota: Ver antecedentes relacionados con el procedimiento del 21-2-54 - Carpeta del actuaciones nº Legajo nº 1178.-



SEGUNDO PIERELLA
 OFICIAL SUB-INSPECTOR

En enero de 1954, a partir del Decreto N°40 del Poder Ejecutivo de la provincia se aprobó el Nuevo Reglamento Orgánico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con este reglamento se creó, entre otros organismos, la Dirección de Orden Público que pasó a

depender directamente de la Jefatura de la Policía, y reemplazó a la División Orden Público que dependía de la Secretaría General.¹⁴⁷

Desde esta Dirección, en septiembre de 1954 se preparó un programa de formación para oficiales de las oficinas de “Movimiento Social, Político y Gremial” de comisarías, sobre “información”, coordinado de manera conjunta con la Dirección de Seguridad y con la Dirección de Cuerpos e Instituciones, la habilitación en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” para su alojamiento y asistencia al curso.¹⁴⁸ A lo largo de estos años, el interés por el perfeccionamiento en las tareas de “informar”, fue enfocando en la policía la necesidad de mejorar la organización y la coordinación entre dependencias para realizar estas tareas. Tal como se puede comprender, ya para 1954 era parte de los objetivos de la Dirección de Orden Público, la formación en estas tareas policiales haciendo extensivo el perfeccionamiento en las comisarías, dando cuenta de la importancia en el mejoramiento territorial de la vigilancia y el control, teniendo las comisarías la responsabilidad de informar todo lo concerniente al factor político a dicha Dirección, conformándose de a poco como engranajes de lo que sería en los años '70 una verdadera “comunidad informativa”.¹⁴⁹

De manera que, la alusión al sujeto comunista continuó asociándose al nuevo enemigo a nivel mundial emergente en los inicios de la Guerra Fría. La educación e instrucción policial se pobló de contenidos relacionados a la forma en que debían detectarse las actividades “subversivas”. Esta labor, junto al accionar político de los dirigentes sindicales pro-justicialistas, curvó negativamente la influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero, hasta que fue finalmente extirpado por el poder peronista emergente.¹⁵⁰

Es así como la agencia de inteligencia provincial fue con el tiempo tendiendo a una modernización en su labor, donde tal como se enuncia en el propio legajo de la DIPPBA, el momento más significativo como “trabajo de inteligencia” fue a partir del 29 de diciembre de 1955, cuando se disolvieron las secciones de División de Orden Público y se creó el Servicio de Informaciones con la jerarquía de Dirección, debiendo ésta coordinar su

¹⁴⁷ Orden del Día N° 18.807, 19 de enero de 1954, transcripción del Decreto N° 40 del 5 de enero de 1954 del Poder Ejecutivo. Archivo DIPPBA Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A. Su creación”.

¹⁴⁸ Orden del Día N° 18.964, 7 de septiembre de 1954. Archivo DIPPBA, Op. Cit.

¹⁴⁹ Funes, Patricia, Jaschek, Ingrid, “De lo Secreto a lo Público: La creación de la DIPBA”, en Revista Puentes, Dossier Documentos, número 16, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, 2005.

¹⁵⁰ Camarero, Hernán, *La experiencia comunista en el mundo de los trabajadores*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

funcionamiento con servicios equivalentes de las FFAA, en el marco del decreto N° 3603 de Intervención Nacional en la provincia de Buenos Aires. A partir de aquí, la institución comenzó a tomar una dimensión más amplia, “que la llevará a la moderna inteligencia en etapas sucesivas pero que aún sigue con la base informativa”.¹⁵¹

El 8 de agosto de 1956 se publicó una resolución con fecha del 3 de agosto del 1956, mediante la cual se disolvió la División de Informaciones y se creó la Central de Inteligencia, con dependencia directa de Jefatura de Policía, con jerarquía de Dirección.¹⁵² El contexto histórico político enmarcaba esta definición en la caída del gobierno de Perón, ocurrida el año anterior, con el Golpe de Estado autodenominado por las Fuerzas Armadas como la “Revolución Libertadora”. El país, al mando de autoridades militares tuvo como timón un objetivo claramente *desperonizador* como anticomunista, “...la creación de la DIPBA se explica en el escenario de la proscripción del peronismo y la redefinición de las fuerzas de seguridad en el contexto de la Guerra Fría”.¹⁵³

La experiencia, las prácticas y antecedentes que se describieron, confluyen en la fecha 3 de agosto considerada por la propia institución como el “Día de la Dirección General de Inteligencia Policial”, ya que se concebía que a partir de allí se comenzó, “... a ejercer una verdadera actividad de inteligencia acorde con la época y que en su posterior desarrollo llegaría a ser el actual organismo donde se prevé una adecuada funcionalidad de su actividad”.¹⁵⁴

Fue entonces, a partir de 1956 cuando se produjeron las reformas más significativas y estructurales, tal como la misma Dirección lo consideró en 1979. Desde entonces, las tareas propias de la inteligencia tuvieron allí sus cambios orgánicos más importantes, modificando desde esa fecha todo el *trabajo* que les correspondía, siendo “punto de partida de la concepción que redimensionó las tareas específicas”.¹⁵⁵

¹⁵¹ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, s/f.

¹⁵² Orden del Día N° 19.434, 8 de agosto 1956. Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones.

¹⁵³ Funes, Patricia, Jaschek Ingrid. “La creación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en *Revista Puentes*, Año V, No.16, 2005.

¹⁵⁴ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones.

¹⁵⁵ Archivo DIPPBA, Op. Cit.

De modo que, hacia las décadas del '40 y del '50, la policía tuvo un papel activo en cuanto al control y la persecución de personas y organizaciones consideradas fuera de la órbita del gobierno peronista. A partir de la División Orden Público de la policía de la provincia, la conformación de ficheros con legajos que contenían información de carácter sindical, junto a los antecedentes de cada conflicto obrero, fueron indicios de una implementación más sistematizada sobre el control social y político. Todo lo concerniente al “factor comunista”, comenzó a ser recopilado por las distintas Secciones de este período, constituyéndose luego en el acervo documental de la Central de Inteligencia provincial. Junto al crecimiento de dichas dependencias específicas de acopio de información, la represión policial hacia aquellas organizaciones y personas consideradas antiperonistas, ya se sostenía también en un sistema de registro criminal en el orden de lo político, de manera más organizada.

II. 5. Conclusiones

La amenaza al “orden social” constituida durante este medio siglo por el factor bolchevique y el crecimiento del poder soviético en la URSS desplegaba un marco legal represivo en la Argentina cimentado, desde el concepto histórico de “enemigo interno” asociado a la condición de extranjero, anarquista, comunista, desde finales del siglo XIX. Estos elementos fueron parte de la identidad del Estado Nación, que pronto privilegiaría la incorporación de las policías secretas o políticas tanto durante gobiernos democráticos como autoritarios. La mirada, en el sentido de vigilancia, comenzaba a inscribirse en la disciplina policial para la indagación, inspección e identificación permanente del criminal político.

A lo largo de los distintos gobiernos tanto a nivel nacional, como provincial bonaerense, la concepción del “delincuente político”, tuvo sus condescendencias con la mirada policial. Sin embargo, tal como se expuso, también estaba claro que la policía fue un actor fuerte y convencido en la necesidad de la sanción de leyes represivas que contuvieran a los “elementos subversivos disolventes”. Como también se privilegió la mirada en el actor comunista desde la década del '30 por parte de la policía, al comprenderlo como un eslabón más de la potencia soviética, infiltrado en el país.

Luego del Golpe de Estado de 1930 se incrementó la cantidad de detenciones a militantes sociales y políticos, situación que dinamizó una lógica organizativa hacia el interior del Partido Comunista, donde las prácticas solidarias se convirtieron en la cotidianeidad de muchas mujeres militantes del PC en el Socorro Rojo¹⁵⁶, quienes visitaban y llevaban comida a los presos en las cárceles y comisarías, como así también a los torturados en la Sección Especial contra el comunismo.¹⁵⁷

No obstante, el trabajo de inteligencia tuvo su base en dicho imaginario concebido por la clase gobernante, la iglesia y los sectores nacionalistas, siendo las fuerzas de seguridad un factor más cuya genealogía identitaria, en tanto protectora de lo político y proveniente de la existencia de un saber del Estado,¹⁵⁸ buscó la conformación de sujetos ciudadanos adecuados a los valores patrios que eran el sentir de la Nación. Para ello, fue preciso el carácter represivo del Estado, expresado a través de las fuerzas de seguridad y de la conformación de una policía militarizada, vertical y disciplinada, constituida como un elemento institucional de control, coerción y ordenamiento de la sociedad.

Fue así como se apostó a una modernización de la policía, desde la creación de la Policía de Investigaciones, entendiendo la necesidad de crear una rama específica que dependiera directamente de la fuerza de seguridad, pero que se dedicara a todo aquello que competía exclusivamente con la prevención y represión del delito. Esta división entre una baja policía, dedicada a cuestiones sanitarias, defensa civil, administrativas, municipales, asistencia social, etc. y una alta policía, vinculada con cuestiones delictivas y políticas, reforzaba así la idea de que “la policía debía controlar la población y combatir el delito para contrarrestar la lentitud de la justicia penal y sus consecuencias”.¹⁵⁹

A su vez, tal como destaca L’ Heuillet, la policía no se conformó en una fuerza bruta ni un instrumento desprovisto de voluntad. Se la puede entender aquí como una

¹⁵⁶ “El Socorro Rojo Internacional (SRI), creado en 1921 por la Internacional Comunista como servicio social internacional y defensor de los prisioneros políticos, fue disuelto en Argentina en 1937 y suplantado por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre (LADH)”, Ubertalli, Jorge Luis, *El enemigo Rojo. La represión al Comunismo en la Argentina*, Avellaneda: Acercándonos Editorial, 2010, pág. 53.

¹⁵⁷ Edelman, Fanny, *Banderas, Pasiones, Camaradas*. Buenos Aires: Dirple, 1996.

¹⁵⁸ Hélène L’ Heuillet, *Baja Política, alta Policía, un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 19.

¹⁵⁹ Dr. L. Gámbara, “La represión”, *Revista Policial de la Provincia de Buenos Aires*, La Plata, octubre de 1938, pp.65-69.

“...forma de saber y de inteligencia de la política (...). La alta policía designa en efecto en primer lugar la policía de inteligencia”.¹⁶⁰

Esta concepción se encontró materializada en la creación de distintas “secciones” tanto a nivel nacional, como provincial, dependencias de seguridad que estaban estrechamente vinculadas y que desde la especificidad institucional que las creó comenzaron a relevar informes sobre actividades catalogadas como comunistas, subversivas, sindicales, dando cuenta de la preeminencia en el control del movimiento obrero en general, siendo en muchos casos documentación de carácter reservado, secreto y confidencial. Tal es así el caso de los expedientes sobre informes del sector “Orden Social y Político” de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, entre los años 1939 y 1959, que se encuentran hoy en el Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación, donde se detectó que la documentación está catalogada según una normativa militar. En este sentido, “se puede estar hablando de una lógica de funcionamiento estatal que, más allá de gobiernos de facto o democráticamente elegidos, no logra nunca despegarse de un sesgo fuertemente autoritario, arbitrario y elitista”.¹⁶¹

Como se mencionó, la reforma policial hacia fines de la década del ‘40, llevada a cabo por el Jefe de la policía de la provincia, Adolfo Marsillach, dejó como legado un claro sesgo verticalista, disciplinar y militar en la fuerza de seguridad. La identificación del enemigo en el sujeto comunista fue tomada con fuerza por el Jefe de la División Orden Público, y docente de la Escuela Superior de Oficiales, Enrique Gracia, quien imprimiría en generaciones de policías un anticomunismo acérrimo sustentando, en este caso, desde la escolaridad policial. La noción de “enemigo interno”, también fue objeto de conferencias desde finales de la década del ‘40, como parte de la influencia en el país de las

¹⁶⁰ Hélène L’ Heuillet, *Baja Política, alta Policía, un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 19.

¹⁶¹ Nazar, Mariana, “La accesibilidad documental y sus limitaciones legales: los documentos secretos en la Argentina”, ponencia presentada en el *IV Congreso de Archivología del Mercosur*, Huerta Grande, Córdoba, 2003, pág. 6.

¹⁶¹ Al respecto, Gabriela Costazo explica cómo, “El diario de sesiones es la transcripción del debate parlamentario, y al mismo tiempo, constituye una transposición genérica (del género conversacional al texto)”. Costazo Gabriela, “Lo inadmisibles hechos historia. La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910”, en, *Revista Alambre. Comunicación, cultura e información*, N° 4, noviembre de 2010. <http://www.revistaalambre.com/>.

interpretaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, sobre el Partido Comunista.¹⁶²

La tarea de informar fue concebida desde el peronismo como un aspecto fundamental para el desenvolvimiento del gobierno, a través de la Oficina de Informaciones de Estado. A partir de la División de Orden Público de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Oficina de Informaciones de la misma, apuntó a centralizar e integrar información clasificada, que competía a los intereses del Estado provincial y su enlace con el Nacional. De esta manera, la existencia de organismos que garantizaban la coordinación informativa, comenzaba a ser una política de seguridad del Estado.

El espíritu anticomunista no fue homogéneo entre los legisladores, pero pudo evidenciarse en las discusiones asentadas en los diarios de Sesiones del Senado de la Nación, a través de las transcripciones de los debates parlamentarios, los fervorosos intercambios en torno al comunismo. Estas fuentes permitieron referenciar y complejizar las propias representaciones de la clase gobernante que precedían o no a la sanción de una ley. Éstas se conformaron como parte de *la cocina* ideológica desde la cual se sustentaron, en este caso, los argumentos a favor y en contra del comunismo.

La historia institucional de la DIPPBA se inscribe en las reflexiones, discusiones y definiciones políticas a lo largo de un siglo XX caracterizado por una secuencia de gobiernos de facto articulados con la ejecución de legislación represiva. De la mano de esto, las reformas en la estructura policial apuntaron a mejorar la labor en el control y disuasión de aquellas actividades, organizaciones y personas, consideradas históricamente como subversivas, perturbadoras, extremas, disolventes, etc. Estos factores de carácter social, político y policial fueron contribuyendo a la puesta en escena de un imaginario criminalizador que demandaba por control, legislación, represión y prohibición de las actividades y propaganda anti- argentina, ubicando en esta grilla a partir de los años '30, principalmente a los comunistas. En este sentido, “la relación entre Golpes de Estado de las Fuerzas Armadas, legislación represiva y modificaciones en la estructura policial, se verifica en cada época profundizándose a partir de los años sesenta”.¹⁶³ A su vez, las

¹⁶² Véase, Robin Marie- Monique, *Escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, Bs. As: Sudamericana, 2005.

¹⁶³ Funes, Patricia, “‘Secretos, confidenciales y reservados’. Los registros de las dictaduras en la Argentina. El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en, Quiroga, Hugo y

distintas jerarquías y nominaciones que recibieron las dependencias policiales creadas para la recolección de información, el control y la inteligencia, tuvieron una relación directa con los vaivenes políticos e institucionales de la Argentina. La priorización de la función y el mejoramiento, en tanto organización de la inteligencia policial, estuvo estrechamente vinculada con una mirada ideológica de país, donde el sospechado, y por lo tanto peligroso y vigilado, fue variando también, como pudo encontrarse en los diversos registros y antecedentes de la DIPPBA:

“El pasaje de «orden» al de «información» y éste al de «inteligencia» que, a manera de hipótesis inicial, acompañó el tránsito en la denominación del sujeto de la espía: del «delincuente político», el «delincuente social» o el «comunista» genérico, al «delincuente subversivo» y más tarde al «delincuente terrorista»...”.¹⁶⁴

De manera que, con el paso de las décadas los mecanismos de inteligencia se fueron perfeccionando y poniendo a disposición para comprender la génesis y la lógica del comunismo en el país. Es decir, hacia 1956 a la detección y represión del “delincuente comunista”, le antecedió un dispositivo normativo, político y policial que había comenzado su derrotero desde principios de siglo.

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, como veremos a continuación, toda una ingeniería aplicada a la estructuración de la inteligencia, de la mano del crecimiento organizativo policial en la provincia, fue puesta en marcha a partir de la creación de la Central de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tcach, César (comps.), *Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*, Homo Sapiens Ediciones: 2006, pág. 205.

¹⁶⁴ Op. Cit., pág. 204.

Capítulo III. “La Libertadora”: hacia una redefinición del enemigo

La centralización de información y la necesidad de la creación de organismos orientados a tal fin, comenzó a intensificarse hacia el año 1955. Luego del Golpe de Estado que depuso al presidente Juan Domingo Perón, las Fuerzas Armadas reforzaron en materia de seguridad las políticas tendientes a la creación de dependencias policiales, conducidas por el poder militar, cuya finalidad exclusiva fue el acopio y la generación de información de carácter político-social.

Frente a un contexto internacional de Guerra Fría, el país, al mando de las Fuerzas Armadas, ubicó la mira en los sectores comunistas junto con el objetivo de *desperonizar* la Argentina. La puesta en escena de un esquema represivo apuntaba hacia todo lo considerado “subversivo”, donde la “amenaza comunista” se reforzó bajo la influencia del paradigma internacional-occidental, conocido como la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), ineludible para las apreciaciones de las fuerzas militares y policiales de nuestro país. Este momento de consolidación internacional de la construcción de un enemigo comunista, se convirtió no sólo en un mecanismo de control y represión, sino más importante aún como un mecanismo de control social preventivo a través de la prefiguración y la construcción misma de la identidad comunista desde la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estos factores fueron apuntando en el esquema interpretativo de las fuerzas de seguridad a una “redefinición del enemigo” que incorporaba la situación política nacional e internacional.

A su vez, la llamada “Escuela Francesa”, fue el medio de adoctrinamiento de militares argentinos y latinoamericanos durante la década del '50. Las nuevas técnicas y teorías que comenzaban a instalar la llamada “guerra moderna”, se inscribían en un contexto, donde hacia 1954 sobre veinte Estados de Latinoamérica, trece estaban gobernados por militares.¹⁶⁵

En este marco, las definiciones del aparato de inteligencia y control político sobre las organizaciones comunistas, estuvieron atravesadas por un fuerte contexto internacional que implementó una serie de políticas represivas, aplicadas por los distintos gobiernos de América Latina. El andamiaje jurídico represivo, junto con las definiciones de profundizar

¹⁶⁵ Rouquié, Alain, *El Estado militar en América Latina*, Bs. As: Emecé, 1984.

en materia de política interna de seguridad, tuvieron como resultado la creación de una serie de instituciones, como la Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), entre otros organismos de información e inteligencia, que se convirtieron en instrumentos de “policiamiento interno”.¹⁶⁶ La militarización de estas instituciones fue luego un aspecto esencial para alcanzar el más eficaz y operativo esquema represivo.¹⁶⁷

Por su parte, el Partido Comunista en la Argentina supo adaptarse y generar estructuras en función de la misma clandestinidad que conllevaba el estado de represión vigente. Un ejemplo de ello lo demuestra la impresión y distribución semanal durante varios años, de cincuenta o sesenta mil ejemplares del periódico comunista “Nuestra Palabra”. A pesar de que el gobierno formó una comisión especial para frenar su circulación en la década de 1950, el PCA pudo ingeniárselas para garantizar su distribución. Inclusive algunos de estos periódicos se imprimieron en un taller gráfico de la localidad de Avellaneda, donde hasta la misma Policía Federal hacía allí su revista.¹⁶⁸

El objeto del capítulo se centra en el análisis de la construcción del enemigo político y la configuración de un aparato institucional de control. Se establece un recorrido por aquellos factores políticos e históricos que fueron construyendo un esquema de inteligencia cada vez más planificado y que condujeron, finalmente, a la militarización del manejo de la información y a la conformación del espionaje político como un aspecto fundamental para la consolidación de un aparato represivo. La propuesta abarca el período 1955-1958, durante el cual se estudia el gobierno al mando de las Fuerzas Armadas en este aspecto.

A partir de este panorama nacional, se hará foco en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta las políticas de seguridad implementadas desde mediados de la década de 1950 en adelante. Las distintas normativas implementadas que habilitaron una red de comunicaciones en materia de seguridad y que apuntaron fuertemente a combatir el comunismo serán parte del análisis, como el lugar que ocupó el ejecutivo provincial y la

¹⁶⁶ Sain, Marcelo Fabián, “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, en *Seminario sobre Control Democrático de los organismos de Seguridad Interior en la República Argentina*, Documentos de Trabajo, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1997.

¹⁶⁷ Con respecto a esta temática y sobre un análisis de las Fuerzas Armadas en la actualidad, véase: Sain, Marcelo Fabian, *Los votos y las botas. Estudios sobre la defensa nacional y las relaciones civil-militares en la democracia argentina*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

¹⁶⁸ Sicilia, Luis, “Prólogo”, en: Domínguez, Pablo, Codovilla, Victorio, *La ortodoxia comunista*, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2006.

creación de la Central de Inteligencia de la policía de la provincia en 1956. A su vez, se relevarán las normas y disposiciones que para este contexto se hicieron imprescindibles, en el afán por lograr una eficaz operatividad en el funcionamiento y en el esquema de inteligencia policial.

III. 1. La ingeniería de la inteligencia policial

“El saldo positivo de este período debe buscarse, no solamente en la posición y en las medidas anticomunistas del Gobierno, sino, principalmente, en el reingreso de la Nación en el mundo Occidental Cristiano y Democrático” (Archivo DIPPBA, Mesa C).¹⁶⁹

La conspiración político-militar contra el gobierno peronista llegó a su desenlace con la denominada “Revolución Libertadora”, que se inició el 16 de septiembre de 1955, a lo que sumaba como antecedente los ataques en junio de ese año, donde cientos de civiles murieron como consecuencia de la violencia militar anti-peronista.¹⁷⁰ En aquel primer intento golpista, el propio Perón acusó a los comunistas por la quema de iglesias durante la violenta jornada de junio.¹⁷¹ Finalmente, el 23 de septiembre se produjo en nuestro país el golpe de Estado bajo la conducción de las Fuerzas Armadas, al mando del general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac F. Rojas, que depuso al entonces presidente Juan D. Perón. El General Lonardi, estuvo cincuenta días en el cargo de presidente y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien por un lado se propuso profundizar la *desperonización* del país, y por el otro, “ensayó un sistema de alianzas con

¹⁶⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, folio 31, se estima el año 1961, por los indicios históricos relevados en el propio legajo, folio 34.

¹⁷⁰ Previo al Golpe de 1955, hacia el final del primer gobierno peronista, en el año 1951 parte del Ejército liderado por el General Benjamín Menéndez, se sublevó en un intento de golpe de Estado. En relación a las circunstancias que llevaron al golpe de Estado de 1955, véase: Spinelli, María Estela, *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la ‘revolución libertadora’*, Bs. As: Biblos, 2005.

¹⁷¹ Al respecto se pueden consultar las declaraciones del PCA realizando un descargo de estas acusaciones en “Nuestra Palabra”, 21 de Junio de 1955. Citado en, Barbero, Héctor, Godoy, Guadalupe, “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino. Décadas de 1950 – 1960”, en *Cuadernos de Trabajo* N° 55, Departamento de Derechos Humanos, Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junio 2003.

los partidos filiados en la tradición liberal-democrática que bregaron por ésta y abrió el debate sobre la reforma del orden político”.¹⁷²

A partir del Golpe de 1955, de la mano de la intensificación en materia represiva, se buscó terminar con la identidad peronista. Con la sanción del decreto nacional N° 3855, quedó efectiva la disolución del partido peronista masculino y femenino, al considerar que, “la finalidad sustancial de la Revolución Libertadora, ha sido reintegrar al país a la vigencia plena y actual del derecho”.¹⁷³ Bajo la convicción en la necesidad de restaurar la tradición “occidental y cristiana” al país, se identificó al gobierno depuesto como un sistema totalitario, siendo el partido su instrumento de acción y organización estatal. La Constitución Nacional reformada en 1949 se derogó mientras que el peronismo, su propaganda, símbolos e iconografía, quedaron proscriptos. La intervención de la CGT y los fusilamientos en 1956 a civiles peronistas en el basural de José León Suárez y de Lanús, se sumaron a las medidas implementadas para desterrar al peronismo de las clases populares.¹⁷⁴

Como parte de los objetivos del gobierno de la llamada Revolución Libertadora (1955-1958), la visión de la seguridad fue vinculada a las cuestiones políticas internas del Estado, donde se comenzó a dar “un proceso de militarización de los organismos de seguridad y de información e inteligencia del Estado”.¹⁷⁵ La intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema político, que priorizó la proscripción del peronismo para su funcionamiento, también se instauró sobre la base y la influencia de la Escuela Superior de Guerra de Francia y luego desde la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuyos objetivos apuntaron a identificar y desterrar al enemigo de carácter internacional, el Partido Comunista y sus afinidades.¹⁷⁶ La concepción anticomunista sostenida durante el

¹⁷² Spinelli, María Estela, *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la ‘revolución libertadora’*, Bs. As: Biblos, 2005, pág. 16.

¹⁷³ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 3855, “Disolución de los partidos peronistas, masculino y femenino”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, 24 de noviembre de 1955, Tomo XV-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 602.

¹⁷⁴ Véase, Walsh, Rodolfo, *Operación Masacre*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1972.

¹⁷⁵ Sain, Marcelo Fabián, “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, en, *Seminario sobre Control Democrático de los organismos de Seguridad Interior en la República Argentina, Documentos de Trabajo*, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1997, pág. 142.

¹⁷⁶ Como parte de la impronta anticomunista liderada por Estados Unidos, existió la American Liberation of Labor (AFL/CIO), cuyo objetivo era formar líderes sindicales latinoamericanos anticomunistas, y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo libre (IADSL), que entre otras cosas, financió programas

gobierno peronista cobraría así nuevos matices, donde, como se verá, a partir de las disposiciones impuestas bajo los militares de “la Libertadora”, la identificación peronismo-comunismo, estaría entre sus valoraciones.

Las órdenes impartidas desde Estados Unidos en el plano militar para los ejércitos americanos, incluía la definición de los “nuevos enemigos” de la región, siendo para esta época el “enemigo ideológico”, direccionado desde la URSS a quien había que combatir. En 1951 el Congreso de Estados Unidos dictó la Ley N°165 de Seguridad Mutua. A partir de aquí se establecía, entre otras cosas, el intercambio de material bélico entre naciones americanas, mientras que el ejército norteamericano podía ir a los países del continente que establecieran este intercambio en términos de “misión militar” y “asesoramiento”, en el combate contra la “subversión interna”.¹⁷⁷ En 1960 se realizó un encuentro entre comandantes latinoamericanos, desde allí se definió que las reuniones tendrían una sistematicidad mayor entre las naciones para definir una articulación militar a nivel regional.¹⁷⁸

De esta forma, el estigma del enemigo interno en nuestro país concentró la preocupación de los militares al mando de la inteligencia nacional y provincial, situación que derivó en conferencias, material de estudio, mapas y análisis históricos sobre el comunismo en el país y en el mundo. La mirada sobre el sujeto comunista en los mandos militares estuvo atravesada en primer lugar por la conocida “doctrina francesa”.

Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos, como representante del capitalismo mundial, y la Unión Soviética, de bandera comunista.¹⁷⁹ El enfrentamiento entre ambas y las características que éste fue tomando, conformó a la denominada Guerra Fría. En este contexto, la atención mundial estuvo pendiente ante la amenaza latente de una tercera

sindicales anticomunistas. Para profundizar en las estrategias anticomunistas en el sindicalismo de América Latina, véase, Bossa, Juan Alberto, “Trabajo silencioso. Agencias anticomunistas en el sindicalismo latinoamericano durante la Guerra Fría”, *Revista Conflicto Social*, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA, Año 2, N°2, diciembre 2009, pp. 45-75.

¹⁷⁷ Winer, Sonia, Carroli Mariana, López Lucía, Martínez Florencia, “Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina”, *Cuadernos de Trabajo*, N°66, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junio de 2006, pág.13.

¹⁷⁸ Estas reuniones cobran vigencia hasta la actualidad, donde Estados Unidos se posiciona estratégicamente para imponer una agenda en materia de Seguridad y Defensa, hoy dominada por la lucha por el denominado “narco terrorismo”. Winer, Sonia, et.al, Op. Cit., pág.14.

¹⁷⁹ Véase, Hobsbawm, Eric, *Historia del Siglo XX*, Buenos Aires: Crítica, 2011.

guerra de carácter nuclear. Sin embargo, la competencia por la hegemonía pudo resolverse, en principio, entre ambas potencias con acuerdos que tácitamente mantenían “la paz”, delimitando las zonas de influencia soviética, por un lado, y la zona de influencia norteamericana, por el otro.

El nuevo escenario internacional comenzaba a presentar otro tipo de guerra y otras formas de llevarla a cabo. En esta línea se inscribieron las interpretaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, en lo que denominó “guerra moderna”. Las estrategias elaboradas por el ejército francés como consecuencia de las guerras de independencia de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962), fueron luego parte del asesoramiento a las dictaduras militares en distintos países, entre ellos Argentina.¹⁸⁰ Las poblaciones, los civiles, se convirtieron en los blancos sospechados, ante la posibilidad latente de ayudar a las guerrillas. De modo que la noción de enemigo evidenció un cambio en el paradigma tradicional militar; éste ya no era identificable, no era posible reconocerlo como un soldado con uniforme y fusil; no existía un frente de batalla, era una guerra de superficie donde el enemigo era interno y toda la población se volvía sospechada. Estas características de enfrentamiento demandaron a los militares franceses pensar en diversas estrategias de control territorial.¹⁸¹ En este sentido, la inteligencia se volvió esencial, habilitando diversas prácticas de interrogatorio donde se incluía la tortura y la desaparición de personas para la obtención de información.

Desde 1951, militares de distintos países viajaron a formarse en la Escuela de Guerra francesa, entre ellos argentinos, en un contexto que tuvo su apogeo hacia 1956. “Como quiere ser una respuesta concreta a las amenazas universales que engendra la Guerra Fría, ‘la doctrina francesa’, adquiere desde sus comienzos una dimensión transnacional...”.¹⁸² Las tácticas y estrategias militares de control y represión del enemigo interno, se enmarcaron en una concepción política ideológica que involucró a nuestro país en un modelo dictatorial de poder.

¹⁸⁰ Al respecto, puede consultarse, Mazzei, Daniel “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, en *Revista de Ciencias Sociales*, N°13, Universidad Nacional de Quilmes, 2000. También, Ranalletti, Mario y Esteban Pontoriero, “La normalización en materia de defensa y seguridad y la criminalización de las disidencias (1955-1976)”, en *V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*, Buenos Aires, UNGS, 2010.

¹⁸¹ Robin, Marie Monique, *Escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, Bs. As: Sudamericana, 2005, pág. 57.

¹⁸² Op. Cit, pág. 226.

Los militares argentinos, en principio, se formaron ante la certeza del desenlace de una tercera guerra mundial, ya que este tipo de “enemigos”, organizados en lo que también se denominó “guerra revolucionaria”, aún no eran reconocidos por los militares en nuestro país. De esta forma, el general argentino Alcides López Aufrac, quien participó en la Escuela Superior de Guerra de París, entre los años 1957 y 1959, se refirió a la situación de nuestra región para ese período:

“En América Latina, nosotros no conocíamos ese género de problemas. Había luchas políticas, a veces violentas, pero no del tipo subversivo, porque el Partido Comunista todavía no había comenzado su infiltración. No conocíamos la importancia de la población en este género de guerra”.¹⁸³

Esta caracterización aludía al carácter preventivo que adquiría la formación policial y militar para esta época, donde se analizaba la posibilidad cercana de una Tercera Guerra Mundial, por lo que la Argentina era proclive a convertirse en un territorio fértil para posibles ataques del Partido Comunista, sostenidos por el bloque soviético. A partir de aquí, la población comenzó pensarse como un potencial enemigo, y para contrarrestar confrontaciones o complicidades civiles, para las fuerzas de seguridad inspiradas en la doctrina francesa, la inteligencia fue un aspecto privilegiado en el combate de lo que luego sería llamado, “guerra subversiva”.

En este sentido, otro de los aspectos que contempló el proceso de *desperonización* iniciada por “la Libertadora”, incluyó el cambio de la doctrina de defensa, que durante el peronismo había sido establecida como “Doctrina de Defensa Nacional”. El acercamiento militar a Estados Unidos se había iniciado durante el gobierno de Perón, que caracterizaban a este país como una Nación defensora de los valores occidentales. Con “la Libertadora”, se consolidó este proceso de afianzamiento geoestratégico, mientras que la “incorporación a la OEA, la firma de tratados de cooperación militar y asistencia técnica marcaron la entrada

¹⁸³ Op. Cit, pág. 224.

del ejército argentino en la Guerra Fría a partir de 1956, a favor del mundo occidental y cristiano”.¹⁸⁴

Del mismo modo, para este contexto, la Doctrina de Seguridad Nacional ideada por los Estados Unidos, fue parte de los intereses de esta Nación por mantener el control mundial, siendo el comunismo el enemigo declarado universalmente. Aquí la consolidación internacional de la construcción del enemigo internacional “comunista”, no solo se establecía como un mecanismo de control y represión, sino más importante aún como un mecanismo de control social preventivo a través de la pre figuración y la construcción misma de la identidad comunista desde la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Esta doctrina apuntaba a la formación de los ejércitos latinoamericanos para combatir la amenaza subversiva, en la llamada Escuela de las Américas en Panamá, que tomó oficialmente ese nombre, United States Army School of the Americas (USARSA), en 1963. Desde aquí se preparaban para la “guerra interna” de acuerdo a las concepciones del Pentágono, dedicando un tiempo desmesurado, como describe Rouquié, al anticomunismo y al adoctrinamiento pro norteamericano: “no sólo los cursos de ‘guerra contrarrevolucionaria’ insisten en la denuncia del enemigo, sino que incluso los cursos técnicos (intendencia, radio, etc.), enfatizan la amenaza comunista”.¹⁸⁵ Las prácticas de interrogatorios, la tortura, la inteligencia, la infiltración, la desaparición de personas, fueron los legados de estas doctrinas, que devinieron en la formación de ejércitos preparados para la represión política e ideológica en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Hacia 1956, en nuestro país se efectivizaron diversos acuerdos y compromisos a nivel internacional en la lucha contra el comunismo. Los contactos de colaboración se efectuaron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el envío de un delegado argentino hacia Estados Unidos y la realización, para aquel año, de dos cursos de especialización en materia de inteligencia y política de seguridad anticomunista.¹⁸⁶ La formación y preparación militar incidió en el modelo político de país al mando de las

¹⁸⁴ Barbero, Héctor, Godoy, Guadalupe, “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino. Décadas de 1950-1960”, en *Cuadernos de Trabajo* N° 55, Departamento de Derechos Humanos, Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junio 2003, pág.28.

¹⁸⁵ Rouquié, Alain, *El Estado militar en América Latina*, Bs. As: Emecé, 1984, pág.155.

¹⁸⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, folio 31, se estima el año 1961, por los indicios históricos relevados en el propio legajo.

Fuerzas Armadas. La necesidad del adoctrinamiento se vio reflejada también, a partir de la sanción de leyes y decretos que apuntaron, por un lado a la construcción de una infraestructura de inteligencia reservada principalmente al control del factor político, y por el otro, a la continuidad de leyes prohibitivas que afectaban directamente a partidos como el comunista.

En esta línea, la fundación de la Secretaría de Informaciones de Estado, mediante un decreto nacional el 20 enero de 1956, se inscribió como una medida política cuya prioridad residió en garantizar la información considerada necesaria para el gobierno Nacional, donde la dimensión de lo secreto continuó siendo el medio que habilitaba la obtención de documentación y registro político. Según este decreto, todas las dependencias de información política y/o personales cesaban en sus funciones, debiendo entregar todo el material de archivo y documentación en general en un plazo de setenta días, a la Secretaría de Informaciones de Estado.¹⁸⁷ A partir de este organismo, todas las demás dependencias nacionales y provinciales de seguridad debían enviar la información a la Secretaría, siendo esta dependencia el enlace directo con la Presidencia de la Nación.

El secreto, en tanto requisito para la existencia de los Estados dictatoriales, puede convertirse en “una práctica social destructiva que se traga a aquellos que se oponen y a aquellos que resisten, a aquellos que adhieren y a los que son indiferentes”.¹⁸⁸ Es así como la dimensión de lo secreto cobraba aquí el sentido de la generalización del oponente, instalando el concepto del “enemigo potencial”, por el cual toda la población se volvía sospechada.

Los propósitos de este organismo estaban orientados a centralizar y coordinar la actividad informativa integral. Su misión radicaba en clasificar, seleccionar, analizar y distribuir información entre los organismos competentes, “que produzcan los diversos servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas, los Ministerios civiles, las gobernaciones de provincia y aquellas que obtenga por medios propios”.¹⁸⁹ En el caso de los Ministerios Civiles, podían disponer de un propio organismo de información, de carácter público, debiendo mantener el vínculo permanente con dicha Secretaría.

¹⁸⁷ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 776, “Fundación de la Secretaría de Informaciones”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, 20 de enero de 1956, Bs. As: La Ley, pág. 126.

¹⁸⁸ Giraud, Claude, *Acerca del Secreto. Contribución a una sociología de la autoridad y del compromiso*, Buenos Aires: Biblos, 2006, pág. 81.

¹⁸⁹ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 776, Op. Cit., pág. 125.

Otro aspecto dentro de la restructuración en materia de seguridad interna del gobierno de “la Libertadora”, fue el Decreto Nacional N° 2447, sobre la coordinación de servicios policiales. Este decreto incidía en la necesidad de la colaboración entre las distintas fuerzas y por ende apuntaba al alcance de un mecanismo más fluido en materia de comunicación e intercambio de datos. De modo que, “la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional Marítima y la Policía Federal debían prestarse recíproca colaboración y asistencia en las funciones policiales y de seguridad”.¹⁹⁰ A partir de la sanción de este decreto, quedaba instalada la División de coordinación policial dependiente del Ministerio del Interior. A su vez, a esta dependencia pasaron toda la documentación existente en los disueltos Consejo Federal de Seguridad y la Dirección Nacional de Seguridad, creados durante el gobierno peronista, que fueron derogados el mismo día, mediante el Decreto Ley N° 2444.¹⁹¹

Como parte de la creación de este tipo de organismos a nivel nacional, el 13 de abril de 1956 se fundó la Dirección de Informaciones Antidemocráticas (D.I.A), dependiente de la Secretaría de Informaciones de Estado (S.I.D.E). Dicha Dirección surgió como una rama específica en la búsqueda de material y control político, cuyos fines fueron orientados particularmente a la lucha anticomunista.¹⁹² Asimismo, se creó en el mes de octubre mediante el Decreto Nacional N° 18.787, la Junta en Defensa de la Democracia, cuya finalidad se centró en determinar personas y/o entidades consideradas de ideología antidemocrática.¹⁹³ Para esto, la Junta debía reunir el material de prueba que constatare la resolución de calificar a determinada entidad como antidemocrática. Lo “antidemocrático” apuntaba claramente hacia aquellas acciones vinculadas con el peronismo, como así también con el comunismo, líneas políticas que para los militares de esta época no diferían mucho entre sí, sino por el contrario, se sostendría luego que el “régimen peronista, (...)”

¹⁹⁰ Decreto Ley Nacional N° 2447, “Coordinación de servicios policiales”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, 9 de febrero de 1956, Bs. As: La Ley, pág. 154.

¹⁹¹ Decreto Ley Nacional N° 2444, “Supresión del Consejo federal de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Seguridad”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, 9 de febrero de 1956, Bs. As: La Ley, pág. 154.

¹⁹² Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961, folio 31.

¹⁹³ Decreto Ley Nacional N° 18787, “Junta en Defensa de la democracia”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, 10 de octubre de 1956, Bs. As: La Ley, pp. 1038-1040.

servía muy bien a la instauración del marxismo en el país”.¹⁹⁴ De modo que, como medida complementaria a esta Junta, se definió prohibir los actos públicos del Partido Comunista Argentino (PCA). Sin embargo, esta Junta fue disuelta, decreto mediante, en 1958, ya que al considerarse limitados sus resultados se resolvió no mantener su funcionamiento.¹⁹⁵

Los “limitados” resultados de la Junta de Defensa, pueden considerarse como una demostración sobre cómo este tipo de definiciones políticas para “combatir” al “enemigo”, no siempre fueron efectivas. La construcción de una puesta en escena en materia de seguridad bajo los lineamientos militares, muchas veces tambaleaba dejando entre ver las porosidades del sistema del control.

No obstante, la búsqueda de eficiencia y rapidez para garantizar el funcionamiento de este “leviatán anticomunista”, siempre estaba entre los objetivos de la seguridad interna. En efecto, durante este período la implementación de medidas que apuntaron a garantizar una estructura de información se fue complementando con otras que directamente restringieron las acciones del Partido Comunista. Desde un aspecto diplomático, hubo medidas que se posicionaban en declaraciones formales en rechazo hacia determinadas figuras del escenario político estatal, pertenecientes a la Unión Soviética. Un ejemplo de ello, corresponde a la declaración de persona no grata al Agregado Naval de la Embajada de la URSS, Alexandre Morosov, en abril de 1956, al considerar que desarrollaba actividades “para lograr información calificada sobre defensa nacional...”.¹⁹⁶

En septiembre de 1956 fueron realizados en simultáneo varios procedimientos policiales. La finalidad de estas acciones se centraba en recaudar información que pudiera incriminar la participación de organizaciones allegadas al comunismo. Así, las personas que se encontraban en los diversos locales “colaterales” al PCA fueron detenidas por un breve período. La clasificación de “colaterales”, correspondía a una construcción categórica de la propia inteligencia policial para definir a aquellos sujetos, grupos o entidades que no eran orgánicos al Partido, pero se consideraban cercanas o vinculadas en algún punto al mismo.

¹⁹⁴ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961, folio 31.

¹⁹⁵ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 32.

¹⁹⁶ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 32.

En los operativos se secuestraba, principalmente, la documentación existente que luego sería clasificada, analizada exhaustivamente y guardada en las dependencias policiales de inteligencia tanto provincial como nacional. La intervención a locales fue una constante en 1956. Hacia el mes de noviembre de ese año, a raíz de la realización de huelgas convocadas por el “Movimiento Pro-Democratización e Independencia de los Sindicatos”, se llevaron a cabo operativos policiales en algunos comités del Partido Comunista a los fines de secuestrar información y “a efectos de reunir elementos probatorios”.¹⁹⁷

Al allanamiento y clausura de locales, la detención de dirigentes y el secuestro de documentación, se sumó la censura a la prensa, a partir de la implementación de condiciones para el diario comunista, “La Hora”. Como parte de las medidas restrictivas para controlar su circulación se dispuso que, “con el fin de coartar la libertad de acción del citado periódico, se adoptaran medidas encubiertas para restringirle la concesión de la cuota de papel”.¹⁹⁸

La necesidad de secuestrar información del comunismo respondía a la obtención de material de prueba que pudiera criminalizarlo, aunque el Partido Comunista Argentino no estaba prohibido. Según consta en los legajos de la DIPPBA, se reconoce que en distintas oportunidades se propusieron decretos para declarar la ilegalidad del PCA y controlar al comunismo, pero no se llegó a un acuerdo unánime entre los ministros. Esto recién sucedió en 1959 bajo el gobierno constitucional de Arturo Frondizi.

Durante este periodo, en los meses posteriores al derrocamiento de Perón en 1955, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires estuvo fugazmente a cargo del Coronel Arturo Ossorio Arana, completado por el escribano Juan María Mathet, mientras que el Coronel Emilio Bonaccarrere asumió el mando provincial a partir de noviembre de 1955. Bajo el Decreto de Intervención Nacional de la Provincia, en la conducción a cargo de Ossorio Arana, se pusieron en práctica los postulados de “la Libertadora”, siendo deber de la provincia apuntar a “desarmar la estructura del llamado Estado Justicialista y su correspondiente doctrina nacional”.¹⁹⁹ En relación a las instituciones policiales y de

¹⁹⁷ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 33.

¹⁹⁸ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 33.

¹⁹⁹ Barba Fernando, Demaría Massey, María Elena, *La provincia de Buenos Aires 1910-1987*, La Plata: Gobierno de Buenos Aires, Archivo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Levene, 1987, pp.93-94.

seguridad, se suspendieron los estatutos y fueron declarados en comisión los jefes superiores, jefes y oficiales de la Policía de la Provincia y de la Dirección General de Establecimientos Penales.²⁰⁰ A su vez, la reforma policial de la provincia efectuada durante el peronismo, si bien se había orientado a una identificación con el “descamisado”, trasladando la impronta peronista en la policía, también había incorporado una dimensión disciplinaria y jerárquica que, paradójicamente, fue funcional a la persecución de los militantes del gobierno depuesto a partir de 1955. Así, tal como expresa Barreneche, muchos de aquellos jefes y oficiales que se formaron durante el período de Adolfo Marsillach como Jefe de Policía, pronto dejaron aquella formación basada en el ideario peronista, para alinearse a los objetivos impuestos en la etapa de la Libertadora.²⁰¹

Como parte de las medidas que procuraron *desperonizar* también a las fuerzas de seguridad en la provincia, se dejó cesante a muchos miembros del personal policial. De los 19.092 policías de la provincia existentes, según los registros de 1952, quedaron 17.405 efectivos hacia 1955,²⁰² siendo a su vez derogado el Código de Justicia Policial, creado durante el peronismo.²⁰³

²⁰⁰ Barba Fernando, Demaría Massey, María Elena, Op. Cit., pág. 94.

²⁰¹ Barreneche, Osvaldo, “La reforma policial del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951”, en *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol.47, Buenos Aires: IDES, 2007, pág. 246.

²⁰² “Evolución histórica de la fuerza efectiva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1933-2005”, en: Departamento Estadística. Dirección Provincial de Personal de la Provincia de Buenos Aires.

²⁰³ Barreneche, Osvaldo, “Por mano propia. La justicia policial de la provincia de Buenos Aires en el primer peronismo”, en *Sociohistórica, Cuadernos del Centro de Investigaciones Socio Históricas*, N° 25, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata: EDULP, 2009, pp. 123-152.



Fuente: Revista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata septiembre de 1956.

En esta línea podemos ver como en la imagen se ilustra una de las primeras medidas implementadas por el nuevo Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Teniente Coronel Desiderio Fernández Suárez,²⁰⁴ quien decretó la demolición de los calabozos que se encontraban en el sótano de la Central de Policía de La Plata. Como se expresa en la imagen, la destrucción de estos calabozos de la “tiranía”, fue un acto político que separaba las aguas ideológicas con el peronismo, mostrando a modo de evidencia cómo era el lugar donde se detenían y torturaban a “ciudadanos dignos que luchaban por la libertad y la

²⁰⁴ Desiderio participó del Golpe de Estado que destituyó al presidente Hipólito Yrigoyen en 1930; tres meses después egresó del Colegio Militar. En 1956, como Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dio la orden para fusilar durante la madrugada del 10 de junio de 1956, en el basural de la localidad bonaerense de José León Suárez, a los militantes peronistas que se habían alzado contra el gobierno de facto, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez, antes de que el gobierno estableciera la “ley marcial”. Véase, Walsh, Rodolfo, *Operación Masacre*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1972.

democracia”. Lo antidemocrático aparecía en este período como un punto de conjunción e indiferenciación para la categorización de ese enemigo interno, que ahora reunía a comunistas con peronistas.²⁰⁵

La intervención también dispuso constituir una Comisión Investigadora en la provincia para estudiar la conducta de ex magistrados, legisladores, funcionarios, etc. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, también tenía amplias atribuciones, entre ellas el allanamiento de domicilios, disponer detenciones, solicitar el auxilio de la fuerza pública, incautar e intervenir libros y contabilidades y todo lo que fuera requerido para la investigación. En 1952, durante el segundo gobierno de Perón, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires había sido intervenido al no acatar sus magistrados los principios de la “doctrina justicialista”. Con la toma del poder del gobierno de “la Libertadora”, fueron nuevamente removidos los cargos de las cúpulas de la justicia tanto a nivel nacional, como provincial, siendo parte del plan de gobierno que apuntaba a *desperonizar* todas las instituciones estatales.²⁰⁶

De este modo, en diciembre de 1955 por medio del decreto de Intervención Nacional N° 3603, la División de Orden Público, dependencia policial que durante el peronismo tenía la función de recopilar toda la información tendiente al “factor político”, quedó disuelta. A partir de aquí, un funcionario de las Fuerzas Armadas fue quien intervino el organismo, cuyo objetivo se centró en “...reestructurar, seleccionar personal, etc., manteniendo el personal de las UURR (Unidades Regionales), con dependencia del

²⁰⁵ Esta comparación entre la “tiranía” peronista y el modelo comunista, se halla en el pensamiento del político conservador Reynaldo Pastor, miembro del Partido Demócrata Progresista, donde compara, entre otras cosas, la brutalidad de la policía peronista con la de cualquier régimen totalitario, donde incluye al comunismo. Durante la “Libertadora”, fue parte de la Junta Consultiva creada por el militar y presidente de facto, Eduardo Lonardi.

Al respecto, véase: Bisso, Andrés, “El uso del concepto ‘totalitarismo’ en la ensayística antiperonista. El caso de *Frente al totalitarismo peronista*, de Reynaldo Pastor”, *Revista Quinto Sol*, Vol. 21, N°1, enero-abril, 2017, pp. 1-21.

²⁰⁶ Sobre el proceso de *peronización* y *desperonización* de la justicia en la provincia de Buenos Aires, véase: Stagnaro, Andrés, “La justicia peronista sin Perón. Peronización y desperonización del Poder Judicial bonaerense. Jornadas de Investigación, “Leyes, Justicia, e Instituciones de Seguridad en la Argentina”, 6 y 7 de diciembre 2011, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. Ponencia no publicada, pp. 1-25. Con respecto, al período del primer peronismo y la relación con la justicia, véase: Marcilese, José, “El poder judicial bonaerense en el primer peronismo: de la autonomía a la dependencia”, en *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin, Escuela de Historia. Instituto de Historia y Cultura de América Latina, volumen 18, 2007-2008, pp.1-31.<http://www.tau.ac.il/eial/>.

funcionario interventor”.²⁰⁷ En el reemplazo de la División de Orden Público, se creó el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con jerarquía de Dirección, debiendo coordinar su funcionamiento con otros servicios equivalentes de las Fuerzas Armadas, las Unidades Regionales de la policía, entre otras dependencias que debían estar a disposición de la entrega de información que fuera requerida por dicho organismo. El 8 de agosto de 1956, según la Orden del Día N° 19.434, se publicó una resolución del día 3 de agosto, mediante la cual se resolvió crear la Central de Inteligencia, con jerarquía de Dirección, en reemplazo del anterior organismo, con dependencia directa de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.²⁰⁸

Desde entonces, la Central de Inteligencia comenzó a desarrollar una estructura cada vez más consolidada hacia los fines de la persecución, manteniendo siempre las facultades de criminalización y espionaje político, elementos innatos que fueron parte de su nacimiento en la década de 1930. La importancia de la “información”, e “inteligencia” comenzaba a convertirse en el objetivo preeminente para el gobierno de “la Libertadora”, que intervenía para “recomponer” el orden político, la democracia, occidental y cristiana, y para combatir el desenfreno de la oleada comunista en el mundo y el país. Fue hacia este período cuando el proceso del trabajo en inteligencia fue reconocido por la propia institución, como el momento en que se comenzó “a ejercer una verdadera actividad de inteligencia acorde con la época...”.²⁰⁹

Luego de la aprobación de la estructura sobre el funcionamiento orgánico de la Central de Inteligencia por la Jefatura de Policía, se definió la confección de 200 folletos explicativos sobre su organización y objetivos, como parte de la relevancia y complejidad que se consideraba que dicha dependencia debía adquirir. La confección de folletos fue de carácter secreto, y debían ser enviados a los Jefes de las Unidades Regionales, Comisarías y a los delegados y subdelegados de la Central de Inteligencia.²¹⁰

²⁰⁷ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”. Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, s/f.

²⁰⁸ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”. Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, s/f.

²⁰⁹ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”. Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, s/f.

²¹⁰ Orden del Día N° 19.546, 18 enero de 1957, “Central de Inteligencia, apruébese la estructuración sobre su funcionamiento. Impresión de folletos secretos”, Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata: Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, pág.10.

Desde la *Revista de Policía* bonaerense se destacaba la creación de la Central de Inteligencia en el marco de agilizar los organismos que conformaban la policía provincial. Entre sus fundamentos se describía como prioridad la necesidad de estar informado de la situación general de la Provincia y la Nación. Se hacía hincapié en la conveniencia de la existencia de un organismo técnico el cual debía estar capacitado para, "... el estudio de la inteligencia que requiera la Policía, como organismo de ejecución en la obtención de informaciones que faciliten la conducción policial y proveer, a la vez, al P.E provincial de todos aquellos datos de utilidad para la confección y ejecución de su plan de gobierno".²¹¹

De manera que, se reconocía la necesidad de un organismo capaz de disponer la información de manera ágil, veraz y responsable, que enmarcado en la "ideología democrática", superara visiones pasadas sobre las actividades políticas, culturales, religiosas y sociales. Era destacable, como se privilegiaba desde lo discursivo la creación de la Central de Inteligencia, en el marco de un paradigma democrático donde la "información" y la "inteligencia", eran aspectos sustanciales para el buen desenvolvimiento de los gobiernos. Esta interpretación contraía la idea de que para gobernar era preciso conocer, definición que conllevaba de inmediato al carácter preventivo del gobierno, acción inherente a las fuerzas de seguridad. En este sentido, tal como interpreta Hélene L' Heuillet, si el informe político de inteligencia era un instrumento para gobernar, implicaba que gobernar era, ante todo, prever.²¹²

III. 2. Del "peligro comunista" y otras derivaciones

*"Indiferencia, de un sin número de personas que no alcanzan a comprender los peligros que se ciernen sobre la Humanidad y en consecuencia, no se dedican a estrechar filas frente el enemigo común. De la reacción de esas personas, dependen, en gran parte, el futuro de la humanidad" (Archivo DIPPBA, Mesa C).*²¹³

²¹¹ "Creose la Central de Inteligencia", en *Revista de Policía, Provincia de Buenos Aires*, La Plata: septiembre de 1956, pág. 14.

²¹² Hélene L' Heuillet, *Baja Política, alta Policía, un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág.29.

²¹³ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, "Comunismo en la República Argentina", Carpeta 6, legajo 121, s/f, folio 27.

Hacia el final del peronismo, la prensa oficialista instaló al Partido Comunista en el “bando enemigo”. Su propaganda “clandestina” fue difundida y se lo vinculó con grupos terroristas universitarios que la policía había detenido en varias manifestaciones, intensificadas luego del ataque en junio de 1955 al gobierno peronista.²¹⁴ Desde el PCA, se repudiaban los actos de censura y represión que sufrían sus militantes, aunque, tal como interpreta Spinelli, el ataque de la oposición al gobierno orquestado en junio, fue criticado por el comunismo, al considerarlo como un enfrentamiento contra el pueblo en manos de la oligarquía y el imperialismo, a lo que se respondió con un llamado al diálogo para la “convivencia democrática”.²¹⁵

Luego del golpe de Estado, el Partido Comunista continuó sus relaciones de solidaridad con la Unión Soviética. Su prédica se instaló en una fuerte denuncia sobre el carácter antipopular del gobierno militar y sobre la expansión del imperialismo norteamericano, como amenaza para la paz mundial. Paradójicamente, desde las filas del ejército y las fuerzas de seguridad en general, el “enemigo rojo” se convertía en la amenaza declarada oficialmente desde el poder bajo la conducción de las Fuerzas Armadas en la Argentina. En esta línea, los comunistas fueron acusados por tejer alianzas con el peronismo proscripto y hasta de participar en el levantamiento de junio de 1956 contra el régimen golpista. Estas acusaciones incrementaron las persecuciones hacia el partido, mientras se fomentaba un clima anticomunista que fortalecía sus alianzas a nivel internacional.

De este modo, el comunismo aparecía en la escena nacional como un elemento que atentaba a la Nación, en tanto era considerado como parte de un proceso de destrucción de los elementos básicos de la civilización occidental, cristiana y de su forma de vida.²¹⁶

Las apreciaciones sobre el comunismo cobraban hacia este período histórico un grado de mayor interés político en las Fuerzas Armadas que detentaban provisoriamente el poder. A diferencia con las décadas del '30 y del '40, en que se alertaba sobre una amenaza aún “latente”, hacia mediados de la década del '50 se hacía extensiva la preocupación sobre

²¹⁴ Spinelli, María Estela, *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la “revolución libertadora”*, Bs.As: Biblos, 2005, pp. 244-245.

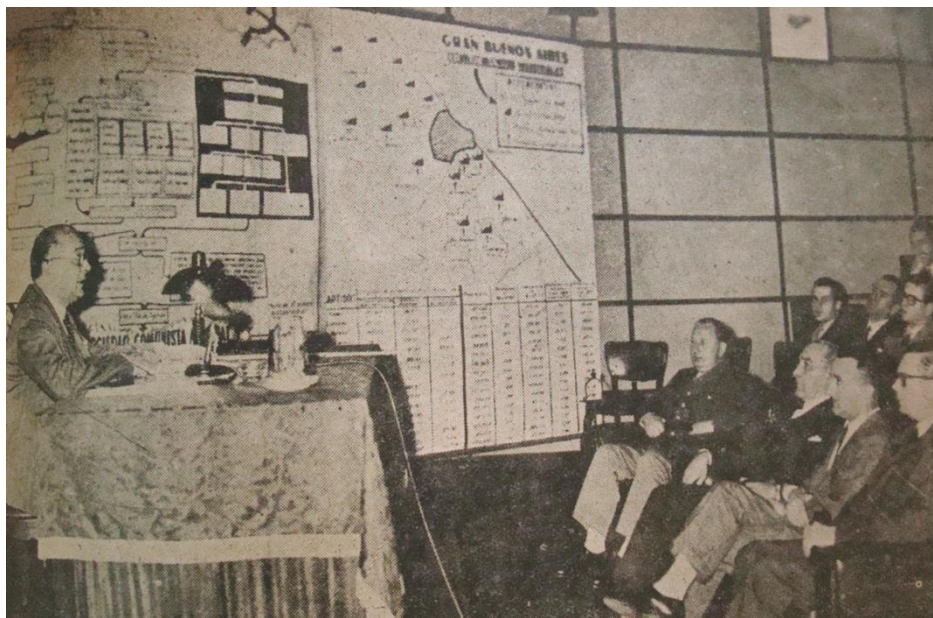
²¹⁵ Op. Cit, pág. 245.

²¹⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, s/f, folio 30.

el poder real en el que se esgrimía el Partido Comunista en la Argentina, siendo la Unión Soviética una potencia mundial.

Como parte de una transición de esta mirada que competía a los alcances “reales” del comunismo como un peligro global, fue convocada una conferencia en la Escuela Superior de Policía de la Provincia de Buenos Aires, en diciembre de 1956. “El Comunismo en la Provincia”, se titulaba la disertación a cargo del Director de Investigaciones, Inspector General, Antonio Rascio. Puede encontrarse aquí una continuidad en la utilización de la Escuela Superior de Policía bonaerense, desde su creación en 1949, como una *tribuna de adoctrinamiento* destinada a la conducción policial, durante y después del peronismo.

***Disertación sobre el comunismo, a cargo del Director de Investigaciones de la provincia de Bs. As., Inspector General Antonio Rascio, en la Escuela Superior de Policía.
(Diciembre de 1956).***



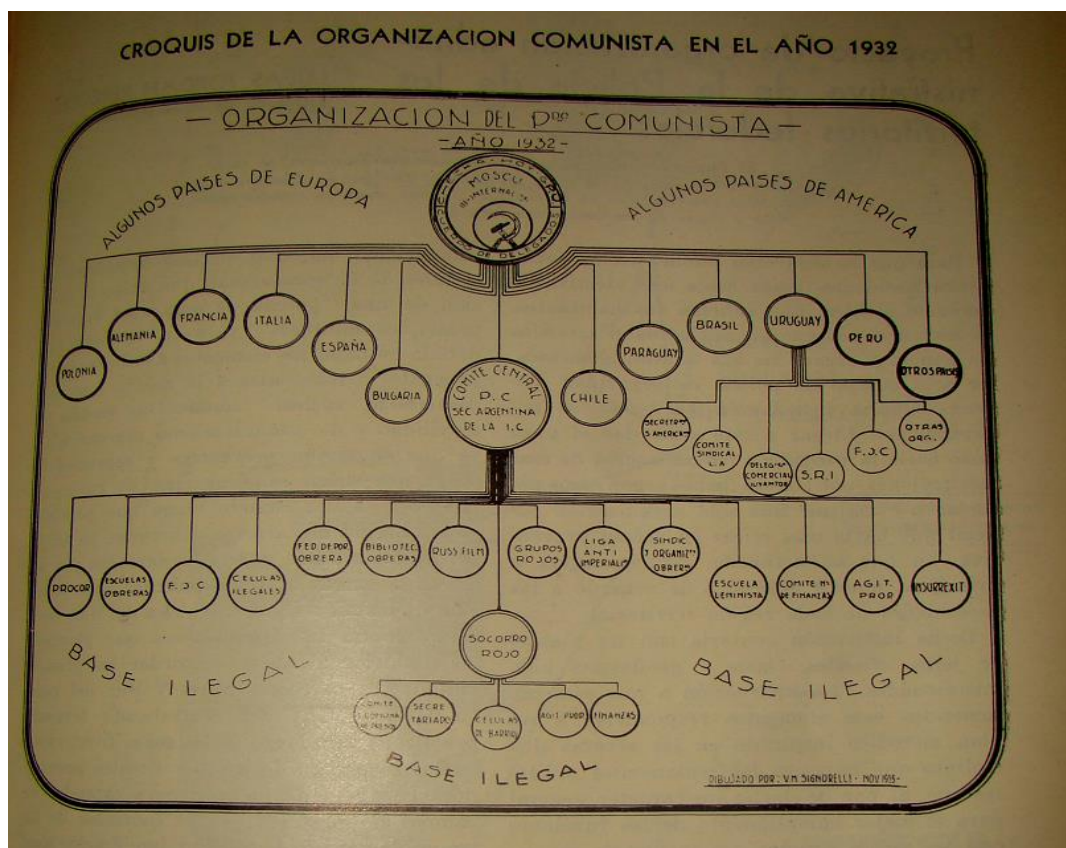
Fuente: Revista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, diciembre de 1956.

En esta presentación se señalaron los ejes relacionados con el desarrollo del comunismo; su sistema de trabajo; el porvenir de esta ideología en la provincia y supuestas soluciones ante esta “problemática”. La preocupación manifiesta por la policía en aquel entonces, situaba al comunismo como un tema que preocupaba a los pueblos del mundo y

así se situaba una vez más al “peligro rojo” en sintonía con la más grave amenaza que existía para el continente americano.

A lo largo de la exposición, el Jefe de Investigaciones de la Policía, disertaba con un mapa que reflejaba el organigrama político del comunismo a nivel internacional, nacional y provincial. Esta herramienta de análisis inducía luego a derivaciones de índole delictivas que vinculaba determinadas organizaciones “colaterales” al Partido Comunista con los distintos niveles de peligrosidad según su identidad. Este tipo de exposiciones se encuentran de manera similar en un mapa de organizaciones comunistas del año 1932, publicado en la revista de “Policía y Criminalística”, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esto indica que la tipificación sobre el “delincuente político”, relacionando al genérico comunista, precedía a la conformación de la Central de Inteligencia provincial, como se ha desarrollado en el capítulo anterior. En el “croquis de la organización comunista”, se detallaban los distintos países de Europa y América, en los que existían organizaciones del Partido. En el centro, el PCA desde el cual se desprendían todas las ramas que le pertenecían, como las bibliotecas obreras; la Liga Antiimperialista; escuelas obreras; “grupos rojos”, etc., sostenidas sobre una “base ilegal”.

Gráfico 1: “Croquis de la organización comunista en 1932”



Fuente: Singorelli, Vicente, Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires, Policía de la Capital, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936, pág. 41

A partir de 1956, la clasificación sobre lo comunista amplió el mapa de consideraciones, incluyendo una vasta cantidad de agrupaciones o entidades consideradas afines, atravesadas por un contexto internacional que inducía al posicionamiento político de los países afines al bloque soviético o al bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos. La mirada sobre el “peligro comunista”, potenciaba todo tipo de interpretaciones al respecto, advirtiendo desde la cúpula policial las permanentes infiltraciones de la “amenaza roja” en el país.

De modo que, en dicha disertación se advertía sobre los erróneos conceptos que personas de la propia institución policial tenían en relación a la magnitud del problema comunista internacional:

“Son los que creen en que el comunismo no pasa de ser un simple conglomerado de hombres y mujeres extraviados, que marchan tras la quimera de un mundo utópico e irreal y desprovisto de toda posibilidad de éxito, en el objetivo que se han fijado. Pero, desgraciadamente, ocurre todo lo contrario; no hay gente más consciente de la finalidad que persigue, ni más activa, ni mejor capacitada para su función, que los comunistas”.²¹⁷

De esta manera, el Director de Investigaciones se introducía en la historia de esta tendencia política, donde aludía en primer lugar a la conocida obra “El Capital” de Carlos Marx, como un texto inaccesible para el lector desprevenido, quien no sólo no lo comprendería, sino que terminaría por caer en una especie de trampa sin salida, “... en las redes de una dialéctica tan irreal como convincente, que ha hecho millares de víctimas entre la juventud de principios de siglo”.²¹⁸

La juventud era reiteradamente observada, desde su doble condición de inocente y peligrosa, fue una variable de análisis en la mirada de las fuerzas de seguridad, nacional y provincial, con respecto al comunismo. La retórica policial inscribía los orígenes del comunismo siguiendo la misma lógica con la que, a principios del siglo XX, bajo una matriz médica higienista, se definía al anarquismo y a los otros “males sociales”. Del mismo modo, a mediados de los años cincuenta, la caracterización que se relevaba sobre los/as simpatizantes del comunismo, negaba la proyección de sus afiliados como sujetos políticos, mientras se concedía al Partido el rol de un gran monstruo que ejecutaba sus acciones a través del engaño, sustentadas sobre una base distorsionada de la realidad:

“Las primeras corrientes inmigratorias que nos llegaron de Europa, trajeron consigo el virus que habría de infectar, a la postre, la noble y pacífica idiosincrasia del obrero criollo; es que junto a los ferrocarriles y a las maquinarias que habíamos importado, también habíamos introducido a los primeros agitadores que habrían de inculcar a nuestro proletariado, sus ansias más vengativas que redentoras”.²¹⁹

²¹⁷ Rascio, Antonio, “El Comunismo en la Provincia. Su desarrollo, sistema de trabajo. El porvenir de esta ideología. Soluciones”, en, *Anexo de la revista de Policía, Provincia de Buenos Aires*, La Plata: diciembre de 1956, pág. 1.

²¹⁸ Rascio, Antonio, Op. Cit. Pág. 9

²¹⁹ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 2.

La extensión comunista hacia América era interpretada como un blanco al que se apuntaba desde la “dictadura roja”, para debilitar las “democracias” de la región. Haciendo foco en la Argentina, la provincia de Buenos Aires era vista como la zona donde se concentraban las principales fuerzas del comunismo argentino:

“Por eso es que asume una gran responsabilidad la Policía de la Provincia, porque el Partido Comunista tiene sus más importantes organismos en el Gran Buenos Aires. Le resultan mucho más atractivos los grandes centros industriales de la Provincia, que los rascacielos de la Capital Federal”.²²⁰

En el afán por desentrañar los objetivos del comunismo en el país, eran establecidas las principales ciudades de la provincia, donde el PCA concentraba mayoritariamente sus intereses y militancias. La policía distinguía estas zonas de influencia en función de la densidad de población existente y el carácter preeminentemente obrero de dichos lugares. Se destacaban ciudades como Berisso, cuyos frigoríficos eran considerados como un lugar de masiva concentración y agitación política; Mar del Plata, por su industria pesquera, Zárate, Campana, San Nicolás, por ser zonas industriales, Junín por la importancia de los talleres ferroviarios y Bahía Blanca por su influencia cultural, el puerto y su paso estratégico hacia la Patagonia. Estas delimitaciones geográficas del comunismo influyeron en las miras de la Central de Inteligencia policial de la provincia, siendo éstas las localidades donde se estuvo alerta ante las actividades de dicho Partido.

Para alcanzar un mejor trabajo, se hizo hincapié en una explicación detallada sobre cuáles eran las formas en que actuaba el comunismo en la provincia, insistiendo en que sus métodos eran idénticos a los de todos los partidos comunistas del mundo. Enlaces y agentes secretos desde Moscú, se destacaban como los medios por los cuales se infiltraban en los países. Los mecanismos consistían en la formación previa de sus “agitadores”, el contacto con un referente del país y la formación de cuadros inferiores en células y centros de activistas en los barrios, fábricas y sindicatos. Este panorama aducía una vez más a la desmitificación de aquellos militantes que se enrolaban en las filas del Partido Comunista, al advertir, en boca del Jefe de Policía, su lugar de “simples esclavos y mansos servidores

²²⁰ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 5.

de la voluntad omnipotente de los amos del comunismo”,²²¹ siendo subestimados en su potencial militante y en su lucha política.²²²

La valoración sobre el espionaje, residía en que Rusia era considerada como el país con el más perfecto, numeroso, eficaz y barato sistema de espionaje. Esta condición ubicaba en desventaja al resto del mundo, por lo que se ponía énfasis en la necesidad de mejorar los sistemas de información e inteligencia locales. La alerta situaba al comunismo como un fanatismo peligroso que anulaba el natural sentimiento patriótico de los pueblos. Los espías, aclaraban, eran los únicos conocedores del “tremendo secreto”, interpretando una vez más, cómo los “cuadros inferiores trabajaban activa y febrilmente en la acción política, sin atreverse a averiguar qué es lo que se trama a sus espaldas”.²²³

La construcción sobre el comunismo enfatizaba una y otra vez, en el sentido todo poderoso que ubicaba a sus dirigentes como los perpetradores del mal y el terror mundial. El sujeto comunista era definido por un lado, como aquel que no le temía a nada y para quien nada era imposible; esta caracterización se desprendía en relación a la rápida infiltración de éstos en distintos sectores de la sociedad, desde el ateneo cultural, el club barrial, la sala de primeros auxilios, la escuela, la comisión de Fomento, hasta la penetración en el Partido Radical y/o Socialista, con tal de usar esas estructuras como ámbitos de denuncias. Por el otro, existía quien sólo era una víctima de la gran maquinaria roja y sus ejecutores, siendo “incrédulos útiles” a las directivas de Moscú. Las mujeres también eran consideradas como parte de ese sujeto comunista, “convenientemente instruida”, que penetraba en vastos ámbitos sociales, considerados del rubro femenino para la moral occidental y cristiana:

“En el mercado o la despensa; en el corrillo vecinal o en la peluquería, no desperdiciará ocasión para hacer notar a su vecina ‘que las cosas cada día están peor’; ‘que ya no se sabe cómo

²²¹ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 6.

²²² La mirada sesgada por parte de la policía, nos lleva a pensar en el concepto de agencia histórica de los sujetos, en términos de Alex Callinicos. Bajo la mirada policial quedaba anulada la posible capacidad estructural de los individuos en un momento determinado, cuya acción, como ejercicio del poder, dependía y era determinada en parte por la estructura social. Este ejercicio del poder requería de la construcción de colectividades a través de las cuales los agentes coordinaban sus acciones sobre las bases del reconocimiento de una identidad en común. Véase, Callinicos Alex, *Making History. Agency, Structure, and change in Social Theory*, Brill, Leiden-Boston, 2004.

²²³ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 8.

hacer para enviar los chicos a la escuela'; y así fue que durante la guerra en Corea, en los Estados Unidos, simulando su 'profunda preocupación' de que sus 'hijos' tuvieran que ir a luchar en tan apartados lugares, hicieron numerosas víctimas, entre mujeres desaprensivas, lograron el mayor éxito en su tarea de formar 'comisiones para la paz' que, a la postre, terminaron siendo simples organismos colaterales del Partido Comunista".²²⁴

El análisis se orientaba a desentrañar en qué situaciones cotidianas y coyunturales, los comunistas, hacían su uso de manera oportuna para sumar simpatizantes al Partido. La penetración de "elementos comunistas" en órganos privados y públicos, era vista con asombro, hasta el punto de considerar a la propia institución policial como una víctima más de la infiltración, "...en los últimos tiempos se han acrecentado los esfuerzos de los comunistas en procura de afiliar algunos servidores policiales".²²⁵

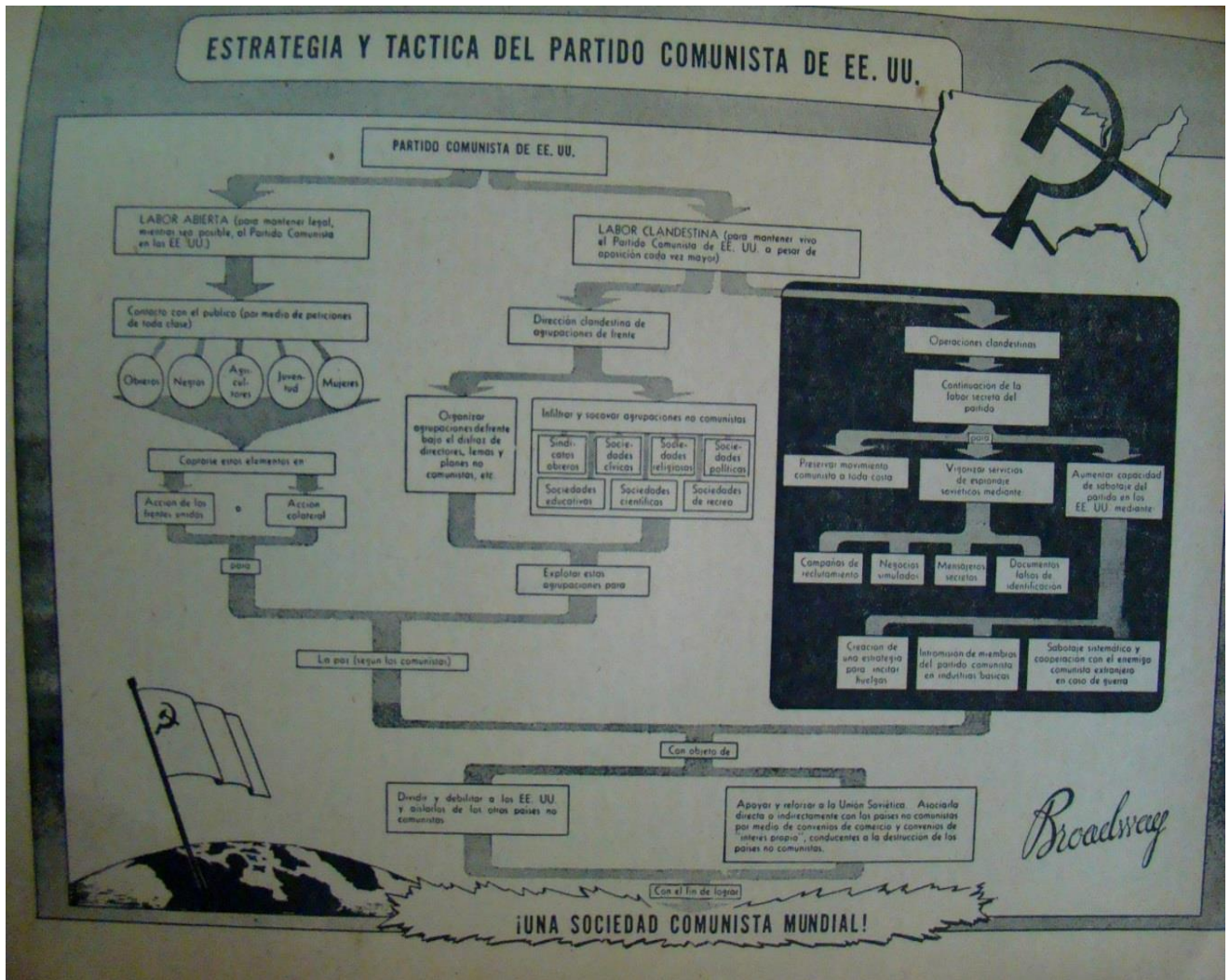
En la búsqueda por definir el arquetipo del individuo proclive a convertirse en comunista, se aludía a que cualquier persona, hombre o mujer, podría ser "material humano utilizable",²²⁶ para transformarlo con el tiempo bajo los criterios de esta corriente política.

²²⁴ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 8.

²²⁵ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág.10.

²²⁶ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 10

Gráfico 2: Organigrama del Partido Comunista en Estados Unidos



Fuente: Revista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, diciembre de 1956.

Como puede verse en la ilustración que antecede, el imperativo que conducía a las interpretaciones policiales encasillaba a esta ideología en lo supremo por sus objetivos planetarios, cobrándose víctimas a escala mundial. Quienes se sumaban al Partido eran sujetos que no podrían despojarse de la doctrina marxista y los dirigentes llegarían hasta la extorsión o la amenaza con tal de evitar la deserción de sus filas. A su vez, en el proceso de formación política se destacaba que sólo un grupo de escogidos viajaba a la Unión Soviética, “paraíso del comunismo”, para capacitarse en estudios marxistas en las ciudades de Leningrado, San Petersburgo o Moscú, considerando que una vez egresadas, estas personas se constituían en la más seria amenaza para la democracia y la libertad.

El futuro de la humanidad como se exponía al principio, estaba en peligro. Los objetivos planetarios del comunismo agredían a la humanidad, las fronteras nacionales se desdibujaban y relativizaban. Se declaraba la guerra a un enemigo común, para poder instaurar desde el Estado Moderno una forma de ordenamiento de la vida social-política a nivel global. La bandera comunista puesta en el planeta tierra que se ve en el ángulo izquierdo de la anterior imagen, sintetizaba la necesidad de declarar una guerra a ese enemigo que se construía también desde su globalidad. Entonces, la ecuación se constituía por oposición, donde -en términos de Schmitt- cuando un Estado combate a su enemigo en nombre de la humanidad, recurre a la apropiación de un concepto universal con el fin de instrumentalizarlo a su favor, consiguiendo que el adversario o enemigo no se encuentre dentro de una humanidad.²²⁷ El concepto de lo político se definía en términos de amigo vs. enemigo, habiendo una negación de la forma de existencia propia, por lo que debía ser rechazado o combatido a fin de preservar la propia.

Entonces, la preocupación de la policía provincial se situaba en las formas de actuación del comunismo y los planes y estrategias que idearían para el futuro, para poder enfrentar a “sus enemigos” en una lucha, que iría tomando diversas formas de enfrentamiento. En esta etapa, el estudio de ese enemigo se conformaba en el principal objetivo. A sabiendas que el número de “elementos comunistas” en la provincia de Buenos Aires era el más alto del país, desde la dependencia policial se ponía atención en escudriñar minuciosamente quiénes componían las filas de este Partido y cuáles eran sus métodos de trabajo, para idear el accionar represivo. Sin embargo, en su alocución el Jefe de Investigaciones y docente de la Escuela Superior de Policía, marcaba con optimismo la eminente derrota a la que se avecinaba el “monstruo comunista” que comenzaba a devorar a sus propios hijos:

“Como no todo está perdido en el país; si bien es cierto que los comunistas han obtenido éxito en su campaña de catequización de los delincuentes desalojados del poder, han fracasado rotundamente en su intento de engañar a los obreros auténticos, de profundas convicciones patrióticas, que no han demostrado el menor entusiasmo en hundir sus pies en la fétida charca del comunismo traicionero y sangriento”.²²⁸

²²⁷ Schmitt, Carl, *El concepto de lo político*. Alianza, Madrid, 1998.

²²⁸ Rascio, Antonio, Op. Cit, pág. 13.

Esta última apreciación, que refiere al fracaso comunista en adoctrinar a los “obreros auténticos”, demostraba en cierta medida que aquella idea de peronismo-comunismo como homologables, también tenía sus tensiones y diferencias entre los propios policías. Mientras que, la neutralización del “enemigo rojo” era presentada como un deber de toda la sociedad, estableciendo como soluciones posibles el incremento de leyes represivas para el comunismo, cuya referencia directa ubicaba como modelo ejemplar en la defensa de la libertad y la democracia, a las resoluciones tomadas en Estados Unidos.

En dicho país, durante los últimos años de la década de 1950, se habían incrementado las penas a quienes eran condenados en el marco de la Ley de represión a las actividades subversivas. La adopción de instrumentos jurídicos para luchar contra el avance de esta corriente ideológica y política, era puesta en escena como un medio exitoso que reforzaría los procedimientos policiales. Se veía la necesidad de complementar estas medidas con campañas para crear una “conciencia informativa en el pueblo”, que fuera capaz de reaccionar y ponerse en movimiento ante cualquier leve intento de actividad subversiva detectada. El objetivo central era despertar la sensibilidad anticomunista del país, en un claro adoctrinamiento que delinearía, desde los medios oficiales de comunicación, el sustento social legitimador. De este modo, se procedía con caracterizaciones y consejos que aludían al combate y a la destrucción de la minoría que pretendía esclavizar al resto de la humanidad que no estaba como se calificaba, bajo el “látigo del comunismo”.

El legado de la libertad encomendada por “Dios para la Humanidad”, era el mandato por el cual se encuadraba la necesidad de formación y acción de la policía en defensa del bien máspreciado. La Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, prosiguió con conferencias y material de estudio, para detectar al enemigo comunista, que en particular desde 1955, iba más allá de la propia militancia del PCA, ya que la amenaza se reconocía en todo aquello considerado “colateral” al Partido, donde se estipulaban sectores como el estudiantil, el agro, entidades barriales, culturales, sindicatos, la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA), derechos humanos y sectores intelectuales.

De esta manera, a partir del relevamiento del legajo N° 167, correspondiente a la “Mesa Doctrina” de la sección Archivo y Fichero de la DIPPPBA, se puede encontrar un estudio pormenorizado del “Comunismo”, siendo éste el “Tema” de la carátula del legajo

elaborado en el año 1956. Este informe perteneció a la Secretaría de Información del Estado (SIDE), y a la Dirección de Información Antidemocrática (DIA). El mismo, es una versión taquigráfica de una conferencia dictada por el director de la DIA, Coronel Héctor Cabanillas ²²⁹ y el Teniente Coronel Fernández Suárez, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ante la presencia del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.

Este expediente expresa las caracterizaciones relevadas en la época en función de los intereses de la inteligencia militar y policial para comprender, detectar y reprimir a toda actividad, grupo y/o partido, considerado comunista. El recorrido de la exposición, en sintonía con la conferencia en la Escuela Superior de Policía de la Provincia, involucraba un análisis del Comunismo Internacional, sus objetivos, evolución e ideología, para luego anclar en la incidencia del PC en la Argentina.²³⁰

El índice que antecede a la versión taquigráfica de la exposición, permite comprender un marco general representativo sobre la mirada militar/policial en relación al comunismo. El objetivo de este informe se centraba en comprender la esencia de esta “doctrina”, considerada como la “amenaza que la misma entraña para el mundo en el cual se desenvuelve nuestro país”,²³¹ por lo que se describía aquel “elemento peligroso”, a fin de elaborar un concepto sobre el mismo que permitiera establecer cuál era su influencia en la vida del país.

En la caracterización sobre el Comunismo Internacional, puede observarse como dato de contexto, el XX Congreso del Partido Comunista realizado en Moscú durante el mes de febrero de 1956. Desde la perspectiva de análisis de las FFAA, se desprendía una determinación donde el “viraje en la política de Moscú”, implicaba en los hechos una radicalización y reordenamiento de la política de la Unión Soviética, al plantar su conocida “táctica de envolverse en el misterio y desorientar a sus adversarios, con inesperados cambios de blancos y directivas”.²³² La importancia de estudiar los mecanismos del comunismo en perspectiva histórica, se basó en la recurrente búsqueda de antecedentes que

²²⁹ En tres entrevistas realizadas por el periodista Tomás Eloy Martínez en el año 1989, Cabanillas hizo un relato sobre el secuestro del cadáver de Eva Perón en 1957 y cómo logró sacarlo del país. Entre otras cosas, reconoció su frustración por no haber podido matar a Perón, “la otra ambición que se me escapó de las manos fue matar a Juan Perón. Tres veces estuve a punto de conseguirlo. Si hubiera tenido suerte, habría salvado a la Argentina de sus desgracias. Todavía lamento ese fracaso”. Entrevista publicada en el Diario “La Nación”, 6/08/2002.

²³⁰ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, “Tema Comunismo”, Legajo N°167, Archivo y Fichero, 1956, folio 1.

²³¹ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 2.

²³² Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 2.

atravesó todo el informe con la finalidad de comprender cómo se establecía el comunismo en cada país. La caracterización de este potencial enemigo, se diagramaba a partir de considerarlo como un atentando a los valores de la patria, la familia, la religión y las Fuerzas Armadas, que se configuraban en los cimientos de la moral de la Nación.

Como “obediencia ciega”, se calificaba a la aceptación de las órdenes que se impartían desde Moscú hacia el resto del mundo. Sin dejar de matizar el discurso en un tono de alerta, se expresaba cómo la ideología comunista perseguía subvertir el régimen representativo e institucional del Estado. Resulta paradigmático del pensamiento de una época, donde las convicciones sobre el accionar de las fuerzas militares, y la inteligencia como aparato represivo del Estado bajo las directivas militares que comandaban el país, no se cuestionaban, sino que se enaltecía desde el lugar del respeto a las instituciones, esgrimiendo a las FFAA, como el faro que llevaría al país hacia la senda de lo “correcto”, mediante el cual se perseguía mantener la instancia de lo “representativo e institucional del Estado”. La familia, las tradiciones, las creencias, se establecían recurrentemente como el pilar de la estabilidad y el equilibrio de la Nación. Mientras, que casi en clave marxista se describía al objetivo del comunismo como la intención de atacar a los cimientos de esa estructura: la religión, sus Fuerzas Armadas y su economía.

A partir del análisis de antecedentes del comunismo, la dependencia de inteligencia planteaba en la parte central de su informe, la incidencia del comunismo en la Argentina, su clasificación según personas y organizaciones y describía la propia “terminología a emplear”, en función de la identidad que se les otorgaba a los distintos actores políticos enmarcados en el comunismo. Al respecto, dicha institución autodefinida como el organismo que tenía a su cargo las medidas para contrarrestar las actividades anticomunistas, se expuso un pormenorizado clasificador, “a efectos de un encuadre armónico de personas u organizaciones que tengan un antecedente comunista; en tal sentido se reconocen a las personas del frente comunista en tres categorías”.²³³ Estas categorías fueron definidas en función del potencial de peligrosidad, a razón de las actividades específicas consideradas comunistas por la inteligencia, que competían a cada grupo y/o persona:

²³³ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 9.

Terminología	Sujeto	Lugar de la acción	Nivel de Peligrosidad
Comunista	Militante del Partido/Afiliado/Agitadores	En lo legal y lo ilegal	Alto
Filocomunista	Simpatizantes/no son activos	Difícil de identificar	Alto
Criptocomunista	Comunista clandestino/propagadores/agentes de perversión	Todas partes	Muy Alto: captan incautos e ignorantes

En líneas generales, podemos ver en este cuadro cuáles fueron las principales categorías que el agente de inteligencia debía tener en cuenta para la detección del sujeto comunista, un otro no homogéneo y que según el análisis de la propia doctrina las especificidades que hacían a su certera detección, también eran ambiguas.

En primer lugar, los agentes de la inteligencia policial debían estar atentos a todos los “militantes activos y agitadores” que actuaban en el Partido legal y en la ilegalidad.²³⁴ Los considerados “filocomunistas”, eran aquellos simpatizantes del comunismo, pero a quienes no les era posible detectar su identidad, al no conocer su filiación, “no son militantes activos, son propagadores que justamente no se les puede identificar exactamente como comunistas”.²³⁵ Por último, los “criptocomunista”, los más peligrosos, ya que, ocultaban su verdadera ideología tras otra aparente. En este sentido, el calificativo apuntaba a su potencial de peligrosidad por su posibilidad de penetración en diversos sectores de la sociedad: políticos, culturales, científicos, sociales, deportivos, etc. Considerados como verdaderos agentes de propagación, éstos representaban para la inteligencia policial ser una especie de farsantes que tras un propósito engañoso, llevaban adelante su auténtica tendencia comunista.

De este modo, la jerarquía militar estipulaba esta terminología a emplear para los agentes de la inteligencia policial en su labor de persecución del “enemigo comunista”. Esta última denominación “criptocomunista”, que incluía a “los más peligrosos”, resultaba ser una categoría que también daba cuenta de lo que se encontraba inhabilitado para la policía. Aquí el grado de peligrosidad se establecía esencialmente por estar los agentes de

²³⁴ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 9.

²³⁵ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 9.

inteligencia limitados para establecer de inmediato la filiación política de un determinado sujeto. Esta razón implicaba convertirlos de inmediato en una amenaza latente y permanente, en el marco de cualquier tipo de actividad u ocasión, ya que, según la policía siempre existirían los sujetos “criptocomunistas” al acecho de algún “incauto o ignorante”, que se acercaba o compartía espacios de sociabilidad con posibles comunistas. Entonces, bajo las órdenes y los lineamientos de la formación política anticomunista que manejaban las fuerzas de seguridad, todos eran posibles y potenciales ideólogos comunistas en búsqueda de sus “víctimas”. En el espacio y el tiempo de lo posible, se trazaban las líneas que contenían el argumento del informe del Coronel Cabanillas. Un tiempo verbal apocalíptico acompañaba a la definición de las organizaciones clasificadas de la misma manera que las personas:

“Los comunistas actúan abiertamente a favor del comunismo, son prácticamente las organizaciones reconocidas como comunistas, el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista; los criptocomunistas, con el mismo concepto de las personas, tras finalidades políticas, sociales, humanitarias, gremiales, culturales o deportivas, ocultan la verdadera finalidad: propagar el comunismo- servir a la política de la U.R.S.S. Las denominadas con infiltración comunistas, son aquellas organizaciones que están dirigidas, orientadas o asesoradas por comunistas filocomunistas y criptocomunistas”.²³⁶

Un aspecto destacado merecía el factor juvenil, caracterizado desde la Federación Juvenil Comunista, cuya finalidad era formar los cuadros del Partido, homologando este sentido a una frase de Lenin, “quien es el dueño de la juventud, es el dueño del mundo”. A partir de esta consideración, se hacía hincapié en cómo los integrantes de la Federación, “accionan desde la niñez, para poder tener cuadros sólidamente formados alrededor de la ideología comunista”.²³⁷ La Federación Juvenil y el Partido Comunista eran considerados los pilares que integraban a la clasificación “comunista” en el sentido más ortodoxo, ya que sus acciones dependían directamente de la Unión Soviética.

²³⁶ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 9.

²³⁷ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 10.

Las organizaciones consideradas como “criptocomunistas”, eran vinculadas a las “Organizaciones de Masa” o “Frentes Internacionales”. Las entidades que se englobaban bajo este rótulo en nuestro país, reunían dos condiciones, la “finalidad aparente” y la “finalidad real”. A partir de esta consideración, se estudió y se determinó cuáles eran dichas entidades; al respecto se mencionaba en primer lugar a la Unión de Mujeres Argentinas (UMA), organización que se ponía en duda de colocarla bajo la asignación de “criptocomunista”, al ya ser abiertamente reconocida su participación y relación con el Partido Comunista de la Unión Soviética. La “finalidad aparente” de la UMA, ubicaba a la lucha por la defensa de la mujer, el hogar y el niño, salarios igualitarios por el mismo trabajo; la libertad por los presos políticos y gremiales; y la defensa por la paz. Mientras que se aseguraba que su “finalidad real” era, “fomentar la disconformidad y resistencia al gobierno por parte de las obreras, criticando las medidas económicas y gremiales; una intensa acción psicológica atacando el Plan Prebish, productividad, etc.”.²³⁸ Estas apreciaciones se vinculaban con las críticas ante los cambios en materia económica que el gobierno de “la Libertadora”, había efectuado a partir de las medidas implementadas según los consejos de un equipo de las Naciones Unidas, encabezado por el economista argentino Raúl Prebish, cuyos resultados afectaron directamente los ingresos de la clase trabajadora. Como parte de las medidas tomadas por el gobierno, en el marco del denominado Plan Prebish, “... se devaluó el peso, desnacionalizó los depósitos bancarios y puso fin a los controles cuantitativos del comercio, esperando que así estimularía las exportaciones...”.²³⁹

Del mismo modo, en el frente sindical se ubicaba al Movimiento Pro-Democratización e Independencia de los Sindicatos, donde la “finalidad aparente” involucraba a consignas reivindicativas como la defensa de las conquistas obreras, salario vital y móvil, libertad sindical, etc. Mientras que, la “finalidad real” era argumentada en la desmitificación de dichas demandas, al comprender que los objetivos eran “producir intranquilidad y agitar a los gremios; fomentar paros y huelgas; copar la dirección de los sindicatos y de la C.G.T...”.²⁴⁰ Las políticas de gobierno buscaban en primer lugar el desmantelamiento del aparato político peronista, por lo que los gremios y la clase

²³⁸ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 10.

²³⁹ Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina (II). 1945-1962, de Perón a Frondizi*, Buenos Aires: Hyspamerica, 1985, pág. 311.

²⁴⁰ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 11.

trabajadora en general y opositora, eran un fuerte a desterrar no sólo desde la represión directa, sino desde los planes económicos empleados.

La información sobre el comunismo se exponía de manera precisa y detallada. Situación que mereció por parte del mismo militar que informaba, aclarar la veracidad y confiabilidad de sus fuentes, “por cierto, todo esto sobre la base de información que merecen fe”.²⁴¹ El Coronel Cabanillas, despejaba la intencionalidad valorativa personal, y legitimaba sus enunciados al sostener que toda la información expuesta, provenía de documentación del propio Partido Comunista, como su plan político y el acceso a determinadas organizaciones de las cuales habían podido analizar cuáles eran sus finalidades.

Continuando con el momento de caracterizaciones crípticas de la exposición, se ubicaba al Super Frente del Consejo Mundial por la Paz, que actuaba en el país a través del Consejo Argentino por la Paz, entidad desde donde se emitían denuncias contra las políticas imperialistas reconocidas en las potencias económicas de Occidente, lideradas por Estados Unidos. De modo que, la clasificación binaria para el aparato represivo residía en que la “finalidad real”, era la intervención en los ambientes intelectuales, “...utilizándoles como pantalla y vínculo infiltrativo; adoctrinar a elementos políticos diversos y apolíticos, en dirección a los objetivos comunistas...”,²⁴² acciones que eran consideradas como medios para atacar a las instituciones del Estado.

En la misma línea de análisis, se proseguía con la organización de Derechos de la Juventud, la Comisión Argentina Pro-Fomento del Intercambio y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada a la Unión Internacional de Abogados Democráticos. Todas estas organizaciones, caracterizadas como “criptocomunistas”, reunían por un lado la condición de un vínculo dependiente a una entidad internacional que las aglutinaba, y por el otro la lógica de la doble finalidad, “aparente” y “real”, donde todo el discurso y el contenido humanista, igualitario y democrático, aparecía en la superficie estigmatizado por su carácter figurado, ya que el trasfondo político siempre era la infiltración, la cooptación de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, en definitiva, “ingenuos de buena fe”, para el acatamiento final de las órdenes del Partido Comunista.

²⁴¹ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 10.

²⁴² Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 11.

En la práctica de indagar sobre las organizaciones para poder dimensionar las finalidades propuestas, se puede destacar un ejemplo que involucraba a la Liga por los Derechos del Hombre, entidad de la que se pedía asesoramiento al hacer un pedido de autorización a la policía para organizar un baile. Tiempo atrás, la misma organización había solicitado autorización para realizar un acto homenaje en la localidad de Rosario a un militante, asesinado por la tortura bajo el gobierno peronista, “comunista identificado y con un voluminoso prontuario”.²⁴³ De esta manera, se analizaba como la “finalidad real” se podía encontrar en estos dos pedidos,

“... uno, homenaje a xxxxx, que es el aparato jurídico que dispone el comunismo internacional para salir a la luchar y bregar por su finalidad aparente; y el otro, es organizar un baile. No puedo ver cuál puede ser el vínculo que pueda existir entre esas dos cuestiones, sino un solo objetivo, que es el de la propaganda y el de la penetración comunista”.²⁴⁴

Por su parte, las organizaciones “filocomunistas”, o con infiltración comunista, eran un aspecto aún en estudio, para el cual prosiguió en la alocución el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Teniente Coronel Fernández Suárez. Aquí correspondían aquellas entidades cuyas comisiones directivas o personal representativo, podían ser considerados como “criptocomunistas”, “filocomunistas” o “comunistas”, de las cuales destacaban al movimiento de las Fuerzas Pacíficas de la Soberanía Nacional, que dependían del Consejo Argentino por la Paz, también se involucraba, en este estudio preliminar a la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En un primer informe de inteligencia realizado por el Jefe policial, se dilucidaba que las Fuerzas Pacíficas de la Soberanía Nacional de la provincia de Buenos Aires, respondían a las directivas del PCA, por lo que se sugería a las autoridades educacionales que antes de brindar espacios para la realización de actos de esta entidad, se informaran con los organismos como la policía. En la caracterización de este tipo de organizaciones infiltradas, se afirmaba que aún no se podía ser categórico porque estaban en proceso de estudios, sin embargo ya eran incluidos bajo esta tipificación sectores universitarios y culturales, como

²⁴³ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 11.

²⁴⁴ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 12.

los teatros vocacionales y también la prensa no comunista, con “elementos” de dicha ideología, que se encontraba en proceso de investigación.

Luego de un estudio y análisis pormenorizado sobre el tema comunismo, se llegaba a conclusiones generales para delimitar las futuras acciones desde el accionar policial. Este informe y sus anexos de organigramas, serían uno de los principales documentos de doctrina que tuviera la Central de Inteligencia provincial, luego del golpe de Estado de 1955, sobre una exhaustiva caracterización del Partido Comunista argentino, sus organizaciones, planes políticos y sus métodos de infiltración. Las fuentes que sirvieron de análisis para la jerarquía militar y policial, fueron parte del secuestro de información y espionaje político, prácticas que comenzarían a intensificarse en adelante sobre la base de estas consideraciones. Las caracterizaciones apuntaban a obtener un clasificador de personas y entidades para agilizar el trabajo policial en la detección del “enemigo comunista”. Sin embargo, la propia fuerza militar reconocía en sus ejemplos ambigüedades y consideraciones extremadamente abarcativas para la propia persecución política. El informe contaba con anexos, desde donde se detallaban a modo de “organigramas del comunismo”, los frentes internacionales, la evolución del comunismo, las personas y organizaciones según los niveles de peligrosidad descriptos, la estructura de la Federación Juvenil Comunista; las principales organizaciones infiltradas por el comunismo; sus tácticas y estrategias de infiltración.

Los métodos de infiltración tenían dos aspectos, desde abajo y desde arriba. El procedimiento de cooptación desde abajo de una organización era descripto utilizando la expresión “C”, para aludir al mismo comunismo, donde se advertía que luego de “tocar” y “trabajar” a los socios o adherentes de la organización para dicha ideología, intentaban coparla, “de la manera ya conocida por todos, llaman a la asamblea y esperan el momento oportuno en que la gente por cansancio o aburrimiento, se retira, quedando ellos, presentan sus mociones y copan la asamblea y así copan las organizaciones”.²⁴⁵

A partir de este análisis se aludía que dichas organizaciones “copadas” eran empleadas como “punto de avanzada” para continuar con los métodos de infiltración en otras agrupaciones, para lograr el objetivo de máxima que respondía a la conformación de un solo frente sindical, “inicialmente influenciadas para transformarlas en organizaciones

²⁴⁵ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 15.

comunistas”.²⁴⁶ Mientras que en la infiltración desde arriba, se ubicaba a aquellas personas “filocomunistas” o “criptocomunistas”, con vínculos en las esferas gubernamentales que actuaban de manera favorable para la penetración de dicha corriente política-ideológica, cuyos vehículos de “captación” eran la prensa, las reuniones culturales, el cine, la radio y la televisión, elementos considerados propicios para la construcción de una opinión pública favorable. Estas interpretaciones, estaban atravesadas siempre por la consideración del engaño y la base ficticia con la que el comunismo utilizaba un sin número de herramientas políticas como señuelo para la atracción de personas y organizaciones hacia las filas de su partido.

Las declaraciones presentadas, condujeron de manera conclusiva a determinar que el objetivo que perseguía el comunismo era “el dominio del mundo”. Objetivo para el que no eran estipulados medios, sino que éstos se acondicionaban acorde a las posibilidades y perspectivas que se presentaban en cada país para su avance, “... siempre en función de su objetivo supremo, que es la instauración del mundo socialista, bajo el directo control de la U.R.S.S, de acuerdo con la línea política ortodoxa ya señalada con caracteres firmes por Marx y Lenin”.²⁴⁷

Ante este escenario, se inducía que correspondía al país la gran responsabilidad de impedir la realización de dicho propósito, teniendo en cuenta, “... la clase y naturaleza del enemigo que debe enfrentarse, que como ya hemos visto, no se caracteriza por la franqueza y pureza de su procedimiento”.²⁴⁸ La naturaleza del enemigo, devenía en la necesidad de profundizar no sólo métodos represivos para contener el avance comunista en el país, sino en la importancia de mejorar los sistemas de información estatales, siendo la inteligencia provincial una de sus columnas, cuyo trabajo debía abocarse a la detección y persecución eficaz del adversario.

Otro aspecto interesante, surgía del análisis que se relevaba en función de la lectura del Plan Político del PCA donde, además de enunciar el carácter antiyanqui, antioligárquico y aparentemente nacional, se deducía que según los lineamientos políticos trazados en el Comité Central del Partido Comunista, se habilitaba a la atracción “de la masa peronista

²⁴⁶ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 15.

²⁴⁷ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 22.

²⁴⁸ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 22.

actualmente escéptica e indecisa”.²⁴⁹ Esta última conclusión redoblabla la apuesta en las fuerzas de seguridad enfocadas hacia la extirpación de toda resistencia, símbolo o propaganda que se vinculara con el gobierno depuesto.

En esta línea, en un informe posterior de inicios de la década de 1960, la Dirección de inteligencia provincial, visualizaba cómo durante los gobiernos peronistas el Partido Comunista había actuado en la legalidad sin que se hubiese adoptado ninguna medida al respecto, profundizando la infiltración de esta ideología en el país. Esa crítica valía para entreverar en el análisis la vinculación del peronismo con el comunismo: “La marxistización de la Nación por el peronismo, (...) debe tenerse en cuenta para establecer por qué las medidas que puedan haberse adoptado en este período no ponen de manifiesto la real situación. (...) tras la permanente represión a las células comunistas ‘ortodoxas’, las medidas favorecieron siempre el desarrollo del ‘pensamiento marxista’”.²⁵⁰

Hacia 1956 el PCA estaba legalizado, ya que se establecía acorde a los parámetros fijados según el estatuto de los partidos políticos, condición que le permitió participar en 1957 de las elecciones para convencionales constituyentes, y lograr dos representantes en la Asamblea Nacional Constituyente.²⁵¹ Sin embargo, la situación de legalidad era analizada por la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, de manera conveniente, ya que, a partir de lo expuesto, la “base ilegal” del partido era aún más poderosa, por lo que la prohibición sólo significaría una anulación momentánea que restringiría el mecanismo público del PCA. Si bien la prohibición implicaría una serie de ventajas, como el afianzamiento de relaciones diplomáticas con aquellos países que mantenían en la ilegalidad al comunismo como Perú, Chile y Brasil, o la relaciones con sectores conservadores como la iglesia católica, “desvirtuando las imputaciones que califican al gobierno de izquierdista y liberal”,²⁵² se interpretaba que para aquella coyuntura resultaban ser más las desventajas al tomar medidas restrictivas. En este sentido, la ilegalidad podía dificultar las tareas de los servicios de información al potenciarse las actividades comunistas en el plano de la clandestinidad, del cual se reconocía que si bien era un

²⁴⁹ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 17.

²⁵⁰ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, s/f, folio 30.

²⁵¹ Spinelli, María Estela, *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la ‘revolución libertadora’*, Bs. As: Biblos, 2005, pág. 248.

²⁵² Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 24.

ensamble con las actividades públicas, no se había podido tener acceso a algún tipo de documentación secreta que constatará el análisis sobre aspectos referido a lo “criptocomunista”; el conocimiento sobre lo clandestino eran apreciaciones del personal de la propia DIA. Por lo tanto, declarado el Partido Comunista en la ilegalidad, en su momento, se planteaba el requerimiento de un servicio de informaciones antidemocráticas apto para poder controlar y reprimir las actividades comunistas. No obstante, a modo de ejemplo, el militar utilizó un documento secreto del PC peruano, prohibido en su país, del que sólo se habían impreso cien ejemplares, para demostrar cuáles eran los códigos empleados en la clandestinidad, y compararlos con los métodos y formas de su accionar político con el argentino que se encontraba legalizado. El documento estaba vinculado a las nuevas directivas surgidas en el XX Congreso realizado en Moscú bajo la conducción del mandatario Nikita Krushev y en particular, sobre el documento secreto, conseguido por los servicios de inteligencia norteamericanos que se obtuvo como resultado de una reunión también de carácter reservado, donde se impartieron resoluciones para los países de América Latina y la necesidad del aparato clandestino como recurso para el funcionamiento del partido en los países donde se encontraba prohibida su actividad.

Para aquel entonces, desde dicho organismo se planteaba la sanción de un decreto-ley que habilitara la vigilancia y la producción de información sobre las actividades y organizaciones comunistas, donde también deberían cumplir con una serie de requisitos, tales como presentar lista de autoridades, dar nombres de sus afiliados, mostrar balances anuales y utilizar en todos los actos y propaganda la denominación de comunistas. De modo que, la intencionalidad de la dependencia policial apuntaba a reforzar la figura pública del PCA, aduciendo por un lado, que los “incrédulos de buena fe” podían estar al tanto de los alcances de esta corriente ideológica y política, y por el otro, que la serie de requisitos permitiría a los organismos de inteligencia una detección mucho más eficaz evitando, según reconocían, la posibilidad de infiltración comunista en distintas organizaciones. Las resoluciones fueron abaladas por el presidente de facto, General Pedro Eugenio Aramburu, considerándolo un asunto de trascendencia para el Estado, habiéndose caracterizado al PCA como un partido de choque y perturbación contra el gobierno vigente, coincidiendo en que la posible sanción del decreto-ley mencionado, permitiría el control de

todas las organizaciones, “que si bien, aparentemente no son comunistas, en el fondo lo son”.²⁵³

III. 3. La operatividad de la Central de Inteligencia

“Una huelga innecesaria o políticamente coordinada, abortada en los momentos de su planeamiento por su oportuna comunicación y las resoluciones que en base a ese conocimiento puedan adoptar las autoridades pertinentes, habrá justificado la existencia de este servicio” (Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Comunismo).²⁵⁴

Las interpretaciones desarrolladas sobre lo considerado comunista o extremista, fueron parte no sólo del contenido sobre el cual se debían ejecutar los informes de inteligencia del Estado, sino que surgían como un imperativo necesario para la organización de una estructura disciplinaria, en el afán por alcanzar un máximo rendimiento en su labor. De modo que, el 3 de septiembre de 1956 se envió desde la Dirección de Informaciones Antidemocráticas de la Nación, bajo la dirección del Coronel Cabanillas, al delegado interventor de la DIA en la provincia de Buenos Aires, un documento donde se sugería adoptar determinada terminología para la clasificación de personas y organizaciones consideradas como propagadoras o simpatizantes con la ideología de “extrema izquierda”. Fue desde este “nomenclador” de personas y organizaciones, en que se basó la exposición sobre comunismo, siendo, a partir de este momento, esas las categorías que debían ser utilizadas a la hora de la detección del “criminal político”.

Desde aquí quedaban establecidas las siguientes tipificaciones para personas:

- “a) Comunistas: Afiliado al Partido Comunista, Partido Obrero Comunista, o cualquier otro partido político que responda al Movimiento Internacional Comunista, o aquel que si bien se desconoce su afiliación, su activa militancia en el comunismo, permite calificarlo como tal.
- b) Filocomunista: simpatizante del comunismo, que no se conoce su afiliación ni es militante activo.

²⁵³ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 28.

²⁵⁴ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Central de Inteligencia, “Informaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento”, Carpeta Varios 25, 1957, folio 7.

- c) Criptocomunista: aquel filocomunista que actúa en círculos políticos, económicos, sociales, culturales, gremiales o deportivos, ocultando su verdadera ideología comunista, aparentando o demostrando otra.
- d) Trotzquista: simpatizante del trotsquismo (o Cuarta Internacional, o afiliado a partidos políticos calificados como trotsquistas. Admite también la calificación de cripto.
- e) Anarquistas: simpatizante o partidario del anarquismo internacional, o que profese ideas disolventes, que propician el desorden, la desjerarquización, la libertad absoluta sin ningún control, o que pertenece a organización anarquista.
- f) Marxista: sostenedor o simpatizante de la doctrina marxista, ya sea moderado o extremista. Dentro de este grupo pueden encuadrarse los socialistas de izquierda, que algunas veces se constituyen en “compañeros de ruta de los comunistas”.²⁵⁵

Esta nómina de clasificaciones inducía a los servicios de inteligencia estatal a realizar el espionaje político ajustado a estas claves de información. Asimismo, se dejaba un margen en el caso de no poder involucrar a la persona vigilada bajo ninguna de estas categorías. En estos casos, el agente policial debía colocar un paréntesis en el informe donde se detallaran las referencias de “dudoso” o “probable”. Del mismo modo, se procedió con un clasificador de “organizaciones”, entendiendo como tal a:

“Todo partido, agrupación o movimiento político, asociación, federación, entidad, organización, corporación, compañía, sociedad, ‘trust’, fundación, sindicato, grupo, instituto, unión, liga, legión, acción, comisión, consejo, comité, centro, movimiento, que incluye a un conjunto de personas, ya sean incorporadas permanentemente, o temporalmente reunidas para una acción conjunta, respecto a algún propósito o tema político, social, gremial, sindical, económico, humanitario, cultural, religioso, deportivo científico o mutualista”.²⁵⁶

A través de cinco caracterizaciones se involucraba a todas las organizaciones consideradas extremistas. A su vez, esta clasificación se extendía a las secciones, ramas, fracciones o células de cualquier organización. Desde entonces, quedaron delineadas las categorías de:

²⁵⁵ Archivo DIPPBA, Carpeta Decreto, Leyes y Disposiciones, “Normas sobre clasificación de organismos y personas”, Secretaría de Informaciones y Difusión, Provincia de Buenos Aires, Gobernación, Boletín de Informaciones, Carpeta 2, legajo N° 95, La Plata, 3 de septiembre de 1956, folios 1-2.

²⁵⁶ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 2.

“organización comunista”; “criptocomunista”; “con infiltración comunista”; “trotzquista” y “anarquista”. Bajo estos conceptos fueron agrupadas todas las entidades de las que se tenía hasta el momento referencias. La intencionalidad de estas directivas comprendía un carácter absoluto en la extensión de la terminología a emplear. Incluso, se aclaraba que esta versión no era rígida, sino que podía variar acorde a la evolución de las mismas agrupaciones y según la información que fuera obtenida. “Las nuevas organizaciones que se constituyan o actúen en el ámbito nacional, serán calificadas por este organismo, ni bien se disponga de la información suficiente. En caso de dudas, podrán oportunamente efectuarse las consultas pertinentes”. Este documento fue enviado a todos los organismos de información del Estado, incluyendo Policía Federal, Ministerio del Interior, delegaciones de la DIA, etc.; y se imprimieron un total de cuarenta y seis ejemplares de cuatro fojas cada uno. Estos datos demuestran que la operatividad de la Central de Inteligencia debía ir en sintonía con las otras dependencias, centralizadas finalmente en la Secretaría de Informaciones de Estado.

La estructura de la Central de Inteligencia provincial fue claramente un eslabón fundamental en esta búsqueda de operatividad a nivel nacional. Desde dicho organismo se comprendía la necesidad de una reorganización periódica de la dependencia, acordes a los cambios en la coyuntura nacional e internacional. La actualización del servicio de informaciones, sus medios y recursos debía ser una tarea imprescindible para adecuarse a los acontecimientos que se iban sucediendo en el terreno político.

Se planteaba la necesidad de un reajuste en la tarea de obtener, valorizar, investigar y poner al conocimiento de la jefatura de policía la información necesaria para prevenir hechos que puedan alterar el orden público. Estos hechos estaban atravesados por los factores gremiales, culturales, políticos y económicos, siendo la Central el organismo competente para adelantarse a la consumación de aquellos sucesos que, “pudieran haberse solucionado si las autoridades pertinentes hubieran tenido conocimiento con la debida antelación de los pormenores que los motivaron, mediante el suministro oportuno de las informaciones correspondientes”.²⁵⁷

Desde la Central se hacía hincapié en las condiciones de retraso que presentaba muchas veces esta dependencia, por lo que la policía se debía informar mediante otros

²⁵⁷ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, “Central de Inteligencia. Organización”, en Informaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento, Varios 25, 1957, folio 1.

medios. A partir de aquí, se exigía garantizar una mayor rapidez en el desarrollo de la acción informativa, como una condición fundamental para lograr un eficaz rendimiento en el servicio. A su vez, se expresaba que el análisis y el estudio de la información obtenida no podía ser motivo de retraso para el conocimiento de los organismos que la requerían, a lo que se aludía la importancia de lograr una síntesis de la información que incluyera una conclusión, “que permita a aquellos, utilizarla tomando o modificando las propias resoluciones”.²⁵⁸

Los métodos de obtención de información eran estipulados a partir de los “medios habituales”, es decir, la “Rama Búsqueda”; las “Delegaciones” y “Subdelegaciones” policiales. Sin embargo, según consta en el legajo del Departamento “C”, de la Central de Inteligencia, que refiere a su organización, se caracterizaba de manera insuficiente a dichas instancias para la obtención de información. En cuanto a la “Rama Búsqueda”, se analizaba que desde aquí no se cumplía con su misión específica que era, “...salir en busca de información al lugar donde pueda producirse u obtenerse: (infiltración en establecimientos fabriles, sindicatos, entidades de bien público, etc.)”.²⁵⁹ Estas apreciaciones, no sólo reafirmaban cuáles eran los métodos de control político, sino que se planteaba que esta “Rama” había sido equipada “por la urgencia de su funcionamiento”, dando cuenta de las definiciones del gobierno provisional por reforzar las medidas de “seguridad interna”. En cuanto a las “Delegaciones”, se visualizaban las mismas condiciones de ineficiencia que en la anterior “Rama”, agravadas por la falta de personal y medios. Por último, en las “Subdelegaciones”, la situación era considerada aún peor, siendo sólo un empleado designado por el comisario el que se desempeñaba como subdelegado y tenía otras tareas a su cargo, mientras que la labor de “informaciones”, era un tema secundario, “... en su mayoría, los que ocupan estos puestos suelen ser suboficiales y a veces, simplemente agentes”.²⁶⁰

En función de este análisis, se demandaba la existencia de personal calificado y formado para que la Central de Inteligencia cumpliera su misión con eficacia. En este sentido, la “Rama Búsqueda”, las “Delegaciones” y “Subdelegaciones”, debían tomar una jerarquía superior, ya que le competían las tareas de reunir la información y sus integrantes

²⁵⁸ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 2.

²⁵⁹ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 2.

²⁶⁰ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 3.

tenían el deber de estar atentos a los cambios más imperceptibles que se sucedieran en sus áreas de vigilancia. Para lograr un personal especializado y competente, se propuso la realización de un “Curso de informaciones”, en la Escuela Superior de Policía, al que debía recurrir todo el personal con asiento en La Plata y en las Unidades Regionales cercanas, “sugiriéndose igualmente y a efectos de cubrir necesidades del servicio, la conveniencia de invitar, por esta única vez, (...), a todo el personal que se sienta con vocación para esta clase de tareas”.²⁶¹ Bajo este espíritu, el 3 de julio de 1957 se dispuso designar una Comisión integrada por los Directores de “Cuerpos e Instituciones”; “Investigaciones”; “Asuntos Legales”, la Escuela “Juan Vucetich”, y el Jefe de la Central de Inteligencia, para organizar la creación de un curso paralelo al que se dictaba en la Escuela Juan Vucetich para aspirantes a Oficiales en la especialidad Investigaciones.²⁶²

El programa de estudios propuesto se dividía en ocho temas, que recorrían desde el concepto de informaciones y la historia de los servicios de inteligencia hasta las distintas clases de confidentes para la obtención de información. A partir de este programa se podían trazar las líneas que definirían al sujeto para llevar a cabo las tareas de inteligencia; era la instancia de formación del “agente de informaciones”, teniendo en cuenta que los alumnos asistentes al curso, deberían ser los más destacados de la Escuela de policías. Estas normas dan cuenta de un comienzo en la búsqueda de excelencia en el aparato de inteligencia y sus integrantes. Entre uno de los puntos del temario aparecían los mecanismos de información que se debían contemplar para responder a la orden de búsqueda. En el proceso de registro se destacaba el aprendizaje de informar sobre:

“... la ubicación de todos los sindicatos de una localidad. Informar sobre la cantidad de obreros de una fábrica. Población de una unidad militar. Registro de partidos políticos y la ubicación de sus comités. Registro de entidades de bien público y bibliotecas; su ubicación e importancia. Averiguación de identidad de la totalidad de inquilinos de una casa de departamentos”.²⁶³

²⁶¹ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 3.

²⁶² Orden del Día N° 19.657, 3 de julio de 1957, “Investigación de una comisión para estudio de un curso en dicha materia”, Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Constantino Vesiroglos”, pág. 65.

²⁶³ Archivo DIPPBA, “Curso de Informaciones. Programa”, Departamento “C”, “Central de Inteligencia. Organización”, en Informaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento, Varios 25, 1957.

Estas particularidades que el agente debía aprender a detectar estaban atravesadas por el enmascaramiento de la misión, el tiempo que se empleaba para el registro y la veracidad de lo que se obtenía. A las distintas formas de vigilancia y seguimiento, se proseguía con el aprendizaje de la confección de los distintos tipos de informes y “panoramas”. El temario del curso era un indicio sobre la existencia de un aparato de inteligencia aún no preparado para los objetivos políticos que se proponía. Si bien la normativa de excepción y la persecución del *criminal político*, se sostenían sobre la base de una estructura que antecedió a la Central, sería a partir de 1956 cuando los requerimientos para su funcionamiento se pondrían a la altura de un organismo jerarquizado, con una incidencia relevante en el plano de lo político y lo policial.

Es así que se procedió en la descripción de los mecanismos del trabajo hacia el interior de la Central de Inteligencia. Se estableció que la correspondencia que llegaba a dicha dependencia, cualquiera fuera su temática, debía pasar en primer lugar por el Departamento denominado, “Valorización de la información y distribución”, a cargo del Jefe de Coordinación y Enlace. La documentación era luego remitida a Mesa de Entradas, con la indicación correspondiente al departamento que debía ser enviada, para finalmente regresar a la oficina de “Valorización”, que le otorgaba el siguiente destino. A su vez, desde esta oficina se estaría al tanto de los decretos y disposiciones vinculados en particular con la Central, y su personal tenía por obligación, “dictar academias quincenales al respecto, a los demás empleados”.²⁶⁴

A partir de la disposición de cuatro “Mesas” con diferentes responsabilidades, se buscaba perfeccionar la tarea de investigaciones y lograr una mayor eficiencia en la misma. Desde la “Mesa de Informativos”, que eran los boletines diarios, se requería un equipo especializado y estable para el análisis de la información; desde la “Mesa Técnica”, se agruparía a dibujantes, fotógrafos e impresores; mientras que la “Mesa de Recortes Periodísticos”, tendría a su cargo la valorización y distribución de información a los departamentos que correspondieran.

Sumado a esta reestructuración se pedía en carácter de urgencia un medio de transporte idóneo para incidir en las tareas de funcionamiento de la Central, que no fuere identificado con características policiales. La función de los vehículos se requería para la

²⁶⁴ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 4.

realización reconocimientos previos, “en los lugares que posteriormente visitarán tanto los integrantes del Poder Ejecutivo, como así también, autoridades nacionales y extranjeras...”.²⁶⁵

En materia de comunicaciones, se hacía necesario un radio transmisor para el contacto directo y permanente con las diversas delegaciones policiales, teniendo en cuenta que la información transmitida era de carácter reservado. Lo mismo para lograr la comunicación diaria y/o urgente con la SIDE y otros organismos de inteligencia, para lo cual se requería la instalación de un “teletipo”, aparato de transmisiones usado por la misma Secretaría de Estado, y otras dependencias de información para el intercambio de datos. Como así también, la instalación de más teléfonos en la Central que en ese momento contaba con dos aparatos para todo el personal.

Las cámaras de fotos eran solicitadas a fin de relevar los reconocimientos previos de los lugares a ser visitados por autoridades de gobierno, como villas, escuelas y hospitales y así también para “disfrazar la verdadera misión de dichos empleados”. Se advertía la necesidad de tener un mimeógrafo para la confección de informes y boletines diarios, con el fin de acelerar el flujo de la información.

Como parte de los proyectos para mejorar las funciones de inteligencia se dejaban establecidas las necesidades futuras, como la creación de subdelegaciones en cada cabecera de distrito con personal seleccionado por la propia Central de Inteligencia de la provincia y la incorporación de la materia “Informaciones” a los cursos que se dictaban en la Escuela de Policías de la Provincia de Buenos Aires, en el afán por lograr un óptimo rendimiento y por jerarquizar la función de la dependencia de inteligencia policial. Todas estas apreciaciones se enmarcaban en el interés por alcanzar la consolidación y articulación con los demás servicios de inteligencia y organismos preventivos o represivos (Seguridad, Investigaciones, etc.), y así obtener un conocimiento recíproco sobre “las necesidades y posibilidades de cada una de ellas”.²⁶⁶ La importancia de que “nada se escape”, era expresada como el mandato regulador para que todas las dependencias otorgaran con el mismo ímpetu y responsabilidad, las tareas de búsqueda, registro, valorización y transmisión de las noticias. Quedaban en claro las condiciones del personal a cargo, quienes

²⁶⁵ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 5.

²⁶⁶ Archivo DIPPBA, Departamento “C”, Op. Cit., folio 7.

debían tomar estas tareas con la convicción necesaria para que resultaran utilizables en el marco de un proyecto de país. La detección a tiempo de aquello considerado “fuera del orden establecido”, la rapidez de la información y el análisis acertado, comenzaban a ser eslabones imprescindibles para la represión social y política.

En cuanto a las normas requeridas específicamente para “el normal desenvolvimiento” del Departamento “C” se estipulaban referencias que tenían que ver con el grado de valorización que se le otorgaba a la información obtenida, para agregar a la confección de los “panoramas” semanales y mensuales. Las tipificaciones de la información variaban entre, “merece fe”; “dudosa” e “información incierta”, a lo que se recomendaba ejercer un control más estricto sobre las actividades comunistas vinculadas principalmente a sectores como el agro, en los medios intelectuales y artísticos, en particular los teatros independientes.

El procedimiento para la identificación del sujeto comunista se hacía más visible al considerar que en aquellas circunstancias “gozaban de libertad”, al no estar prohibido el Partido, por lo que se adjudicaban propicias las condiciones para “catalogar” a quienes aunque no estaban afiliados al PC, evidenciaban su simpatía en la concurrencia a actos, locales, pic-nics, o comités comunistas. De esta manera, se hacía hincapié en la vigilancia hacia estos sujetos para incluirlos en la nómina de “simpatizantes”. Esta nómina se debía integrar en la confección de un cuestionario donde se indicaran cuáles eran las condiciones habilitantes para que determinada persona fuera incorporada al listado de “simpatizantes”, en este caso se debían agregar datos como la participación a las actividades mencionadas, o el ejercer propaganda a favor del Partido, elementos válidos de sospecha y concretos para proceder a su posterior identificación, que a priori los criminalizaba.

Desde la Central de Inteligencia se evaluaba el crecimiento de la infiltración comunista en vastos sectores de la sociedad, como en las consideradas “Entidades de Bien Público”, que englobaba a los clubes, sociedades de fomento, entidades culturales. Ante esto, se exigía ejercer un estricto control y prestar atención a las personas que eran parte de las comisiones directivas, remitiendo toda la información necesaria sobre éstas en caso de constatar o sospechar su tendencia ideológica hacia el comunismo. A su vez, en el marco de las futuras elecciones nacionales en el mes de febrero de 1958, se ponía en marcha la búsqueda de las listas de los candidatos que fueran a integrar las fórmulas del PCA, como

también toda la información sobre las reuniones, actos y actividades pre-electorales, que fuesen juzgadas de interés para la obtención de datos.

Se presentaba una especial referencia hacia los considerados “sectores intelectuales” y su amplia difusión e infiltración en las universidades, colegios secundarios, entre otros establecimientos educativos, evaluados como los lugares preferidos por el comunismo para trabajar con el alumnado, profesores/as y el personal administrativo. Ante este panorama se destacaba que era, “imprescindible someter a estos lugares educacionales a una severa aunque discreta vigilancia”.²⁶⁷ A este contexto territorial educativo se le agregaba la publicación de posibles periódicos, circunstancia que demandaba el secuestro de algún ejemplar, para el posterior análisis y determinación de su origen ideológico en la Central de Inteligencia provincial.

Por último, se destacaba la intensa acción comunista en los gremios. La observación permanente de los conflictos gremiales debía incluir un detallado informe sobre sus principales “agitadores”, aún si ya eran públicamente conocidos por su “ideario comunista”, cuyos objetivos consideraban, que apuntaban a la generalización de los conflictos, trascendiendo el mero interés gremial.

De esta manera, se evidenciaba la necesidad de fortalecer todas las instancias que conformaban a la “inteligencia”, y se instruía particularmente para la vigilancia sobre lo considerado comunista. El esquema de espionaje también comenzaba a comprender una arquitectura del lugar de trabajo que contemplaba ciertas características del orden de lo clandestino, aparente y secreto. La definición política sobre la creación en 1956 de la Central de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior departamento “Archivo y Fichero” fue una instancia indispensable para la aplicación del control social. La función de este departamento fue la de confeccionar legajos, hacer fichas de identificación por personas, temas, localidades, etc. Mientras que por intermedio del departamento de Coordinación y Enlace, “debía solicitar antecedentes a organismos similares, atender y mantener actualizado el fichero general de personas y el fichero Asuntos, consignar la entrada y la salida de los legajos solicitados por otras dependencias y

²⁶⁷ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio, 2.

difundir informes o antecedentes solicitados por otros organismos informativos o policiales”.²⁶⁸

En 1957 se conformó el departamento “Archivo y Fichero”, - como método de clasificación de personas y organizaciones-, a cargo del 2° Jefe de la Central de Inteligencia. La función de este departamento fue la de confeccionar legajos y fichas de identificación por personas, temas, localidades, etc. La organización interna estaba constituida por: -Fichero General - Fichero de Asuntos - Compaginación y Fichaje - Archivo General- Mesa de Redacción e informes - Estadística.²⁶⁹

En el legajo de la reglamentación del Archivo y Fichero se incorporaban como anexos los distintos modelos que se debían tener en cuenta para el relevamiento de información diaria, semanal y mensual. Se debía detallar el carácter de lo relevado en función de lo gremial; la política estudiantil; el comunismo y el sabotaje. Y se orientaba al agente de inteligencia sobre lo que debía escribir. Por ejemplo, para el sector gremial si había que informar sobre una huelga se debía indicar qué paso; dónde; cuándo; por qué; qué establecimiento fue afectado; a cuántos afectaba la huelga; si otros gremios adherían; etc. Si se vinculaba con lo estudiantil o un acto partidario se debía indicar la cantidad de oradores y asistentes al acto, y otros conceptos que el informante considerara. Para los informes semanales y mensuales se exigía incorporar apreciaciones y conclusiones sobre cada asunto.

Finalmente se anexaba un modelo con las normas generales para la conformación de informes especiales que debían tener carátulas, títulos, subtítulos, las formas gramaticales de escritura, como las distintas partes que lo debían conformar: descriptiva; informativa y una apreciación final; quién recibiría el informe, etc. Se sugería que no se nombraran las fuentes, con excepción de aquellas que fueran de carácter público como un diario, pero no debía aparecer el nombre de un agente, su actividad o su ubicación.

Este tipo de informes correspondían a trabajos largos donde se profundizaba sobre temas que desde la Central de Inteligencia se consideraban prioritarios, como la situación del comunismo o el movimiento estudiantil, por ejemplo, donde se hacía un análisis

²⁶⁸ <http://www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/>

²⁶⁹ Archivo DIPPBA, Material Doctrina, Reglamentaciones, Legajo N°11, “Central de Inteligencia Reglamentación, 1957”.

exhaustivo e histórico sobre cada asunto, teniendo en cuenta las indicaciones dadas para su confección.

Por último, se incorporaba un Anexo de “Instrucciones complementarias para la organización de Delegaciones y Subdelegaciones de la Central de Inteligencia en las Unidades Regionales y Comisarías”.²⁷⁰ Aquí, entre otras cosas se explicaba cómo debía ser el procedimiento para elevar los registros de las personas que las comisarías consideraran “disolventes de carácter extremista”, como los comunistas:

“(…)En lo que atañe a la fotografía, elemento éste indispensable, puede obtenerse de los Clubs o Asociaciones en que actúe, disimulando el objetivo real que sería el investigar, mediante un pedido general; sacándola de los periódicos, aprovechando para fotografiarlo en un buen plano, en una reunión general, marcándolo con un círculo, etc.

Todas las Comisarías deberán llevar este registro completo, con su correspondiente índice, conteniendo todos los elementos comunistas que actúan en su jurisdicción, consignando todos los datos especificados, incluso la fotografía”.²⁷¹

Luego de la elaboración de los registros, las Comisarías debían elevar los datos a la Central de Inteligencia, quedándose con una copia. Se requería que la elaboración de estos informes fuese a cargo de personal de confianza, dado lo imprescindible del carácter “secreto y reservado”, de los mismos.

En el marco del estudio del “enemigo”, vemos como la operatividad y el funcionamiento de la inteligencia policial se constituyeron como elementos claves, centrados en la preocupación por la eficacia preventiva del dispositivo, es decir, una eficacia anticipatoria de la policía política. La formación de una especialidad y un cuerpo específico de inteligencia en la labor de informaciones se materializó en la elaboración del archivo y fichero, junto con el aprendizaje correcto de los métodos de obtención y clasificación de la información: OBTENCIÓN-VALORIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN-ACTUACIÓN/REPRESIÓN.

²⁷⁰ Archivo DIPPBA, Op. Cit, *Material Doctrina, Reglamentaciones...*

²⁷¹ Archivo DIPPBA, Op. Cit, *Material Doctrina, Reglamentaciones...* pág. 44.

Con el tiempo el Archivo y Fichero fue incorporando más divisiones para la búsqueda rápida de antecedentes y así garantizar el orden eficaz de la producción de nuevos legajos. Su estructura fue diseñada en función de las representaciones y categorías construídas históricamente, atravesadas por la sanción permanente de normativa de excepción, diagramada en lo político bajo un claro direccionamiento desde la jerarquía militar. De este modo, el archivo contaba con diversos legajos organizados a partir de las categorías: Factores y Mesas. En el año 1975, su nombre adquirió el rango de “División Registro de Inteligencia”, hacia 1983, se la conoció como “División Central documentación, registro y archivo”.

Este despliegue organizativo que buscaba una mayor efectividad a la hora de poner en práctica la inteligencia y el acopio de información, se verá en el terreno concreto a partir de los próximos capítulos, en particular en el V y el VI, donde se pretende analizar aquellas valoraciones que consideraban los agentes de inteligencia, que luego derivarían en las distintas clasificaciones que correspondían al archivo.

III. 4. Conclusiones

“Se necesita un vivir cristiano, integral para oponerse al materialismo dialéctico”
(Archivo DIPPBA, Mesa C).²⁷²

A partir de 1955, la necesidad de fortalecer una estructura de inteligencia fue parte de los objetivos políticos de “la Libertadora”, cuya bandera “democratizadora” intentó desactivar todo lo vinculado al gobierno depuesto, como así también al comunismo. Es decir, durante este primer período se acentuó la lucha “anticomunista”, claramente a partir de los acontecimientos a nivel internacional, donde en el marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos intervinieron cualquier país que intentaba virar hacia una supuesta tendencia comunista. Se puede interpretar que las medidas tomadas en la Argentina y los análisis de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron parte de una estrategia geopolítica alineada a Norteamérica, que no se quedó en un discurso, sino que buscó la perfección y profesionalización en esta “lucha”, en sintonía con las doctrinas militares

²⁷² Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961, folio 38.

instaladas en la Escuela Francesa y en la Escuela de las Américas, como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional, liderada por los Estados Unidos.

Según se reconoce en los propios legajos de la DIPPBA, durante el gobierno de facto de “la Libertadora”, las medidas tendieron a restablecer el “equilibrio democrático roto con el gobierno totalitario de Perón”,²⁷³ pero existió una tendencia a “extremos liberales”, que según se creía, fue capitalizada por la infiltración comunista, considerando también a este período como válido para el crecimiento del PC en la Argentina. El sector intelectual, las universidades y los sindicatos fueron caratulados como espacios de evidente infiltración marxista. En este marco, el análisis de la Central de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, llegó a vincular al peronismo con el comunismo, en especial a partir de la derogación del decreto de prohibición a las actividades comunistas en diciembre de 1945. Por lo pronto, el reconocimiento del PCA en la Justicia electoral, fue considerado desde la Central de Inteligencia como un elemento de complicidad con el propio gobierno peronista, y se homologaba a ambas tendencias en un “totalitarismo”.

La vinculación peronismo-comunismo-marxismo, fue una caracterización expresada desde la dependencia de inteligencia provincial, que en función de comprender al avance del comunismo en el país, se analizaba la existencia de una “marxistización peronista”.²⁷⁴ Esta interpretación resulta ser una simplificación política, que a contramano de lo que evidencian los antecedentes de la DIPPBA durante el peronismo se convierte en un oxímoron, impensable durante los años anteriores a “la Libertadora”. No obstante, se constituye como premonidora de la confluencia que ya hacia principios de la década del ’60, algunas figuras emblemáticas de origen peronista, como John William Cooke, perfilaban con un acercamiento a la izquierda, lo que inducía a pensar, desde cuadros del PC, como Victorio Codovilla, en una confluencia con el peronismo.²⁷⁵ De este modo, en las elecciones provinciales del año 1962, el Partido Comunista argentino llamó a votar por los candidatos peronistas, lo cual fue tomado como una confirmación del análisis de inteligencia realizado previamente.

²⁷³ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 32.

²⁷⁴ Archivo DIPPBA, Comunismo en la República Argentina, Carpeta 6, legajo 121, folio 39, s/f

²⁷⁵ En relación al período, las disputas y articulaciones ideológicas en la escena política, puede consultarse: Altamirano, Carlos, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires: Ariel, 2001.

En la balanza anticomunista desde la propia inteligencia provincial, se destacaba el interés durante este primer período por “democratizar el país”. Si bien no fueron numerosas en estos primeros años las medidas “legales” que apuntaron a restringir el comunismo en general, se enfatizaba que a pesar de no hallarse un cuadro estadístico de las detenciones y allanamientos efectuados, ni sobre los locales clausurados, se reconocía que los mismos, más que acción de gobierno, evidenciaban la eficiencia de la fuerza policial y de seguridad de los servicios de inteligencia y organismos de Estado responsables de adoptar medidas ejecutivas.²⁷⁶ De esta manera, se podría comprender cómo durante los años de “la Libertadora”, las acciones de gobierno en particular hacia el comunismo fueron más flexibles que a partir de 1958, donde la prohibición hacia el PCA ya se sustentaba con el peso de la ley a nivel nacional.

Aun así, durante el primer período se dispusieron las medidas necesarias para la conformación de la Central de Inteligencia provincial y la coordinación con los demás servicios de informaciones nacionales, confluyendo todos en un enlace directo con la Secretaría de Informaciones de Estado. Es decir, luego del golpe de Estado de 1955 la intervención de las Fuerzas Armadas en el plano de seguridad comenzó a construir una red de comunicaciones entre las distintas dependencias tanto policiales como militares, donde la Central provincial tuvo un papel destacado en la detección comunista. Nos encontramos así con el adoctrinamiento de las fuerzas militares y policiales, que conllevó al disciplinamiento interno de las mismas instituciones para adaptarlas a las necesidades del nuevo aparato de inteligencia y control político, y como resultado la creciente militarización de las mismas, para garantizar un eficaz ejercicio represivo.

La no sanción de un decreto que prohibiera la existencia del Partido Comunista Argentino, también fue analizada por la inteligencia de la provincia como una medida conveniente para el momento, al comprender que mientras el Partido estuviera en la legalidad, esta condición habilitaría a una más rápida detección sobre sus acciones.

La estructura de la DIPPBA fue claramente un aspecto fundamental en la búsqueda de operatividad a nivel nacional. Desde la Central se planteó la necesidad de una reorganización periódica de la dependencia en función de los cambios políticos y sociales. La actualización del servicio de informaciones, sus medios y recursos se convirtieron en

²⁷⁶ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 34.

una tarea imprescindible para adecuarse a los acontecimientos que se iban sucediendo en el terreno de lo político. A partir de este momento, las tareas de obtener, valorizar y analizar información fueron indispensables para el adoctrinamiento de una organización preventiva y represiva sobre aquellos elementos que pudieran alterar el orden público. La conformación del espionaje político como una herramienta para la consolidación de un aparato represivo, se arraigó en una estructura de la que luego se montarían los distintos gobiernos para “garantizar el orden”, llevada al límite durante la última dictadura militar.

La decisión de utilizar una terminología específica para definir a determinadas organizaciones y/o personas a ser vigiladas, puede entenderse como parte de una complejización en las tareas de inteligencia. La categoría de “criptocomunista”, incita a pensar, en la generación de una demanda interna por poder descifrar cuáles eran aquellas organizaciones que se mantenían en la clandestinidad, o con una supuesta identidad aparente y las limitaciones que surgían en las propias fuerzas de seguridad provincial para poder detectar con precisión aquello considerado “comunista”. También, evidenciaba el crecimiento organizativo del comunismo en el país, pero que, a la luz de las propias fuentes policiales, se imprimía en una dimensión analítica que lo solapaba en sus definiciones como aquello *inalcanzable*, en tanto el nivel de gravedad y peligrosidad para el país. Muchas veces, estas apreciaciones que se encadenaban como refuerzo de las propias categorizaciones que brindaba la policía internamente, resaltaban un acento temerario en sus conclusiones que por momentos rozaban lo ilusorio como parte de la construcción de un imaginario propio que otorgaba las reglas para definir lo criminal en tanto subversivo.

El sujeto comunista se definía ahora bajo el perfil de un enemigo global, que a su vez definía a las fuerzas de seguridad en una transición policiva militar nacionalista a una fuerza que enfatizaba más su sentido ideológico y contrainsurgente, que, como instrumento del Estado, se ponía a disposición para la eliminación del enemigo. El poder de constituir enemigos aplicaba para garantizar la efectividad, la preservación y reproducción de un sistema de dominación.

Por otra parte, cabe preguntarse cuáles fueron los resultados de tales materiales de doctrina anticomunista a la hora de la confección del informe de inteligencia. Un análisis de algunos de estos informes se verán en los próximos capítulos, donde por un lado, se pondrá la lupa bajo las detenciones del Plan Conintes -medida que se trabajará en el próximo

capítulo que abarca el período del gobierno de Arturo Frondizi, 1958 y 1962. Y por el otro, se intentará dar cuenta de los procedimientos y las categorías empleadas por los agentes de inteligencia nacional y bonaerense en el momento de la detección e infiltración en los ámbitos a los que participaba aquel “otro” comunista.

Capítulo IV. La configuración del Estado y la construcción del enemigo político durante el gobierno de Arturo Frondizi

El rol de la policía en la creación del orden social, nos conduce a interrogantes complejos durante el período presidencial de Arturo Frondizi (1958-1962), al visualizar las relaciones de poder que como parte del entramado institucional habilitaron la conformación de un orden social con rasgos autoritarios. Indagar en la connotación ideológica del Estado, implica para este período una gama de elementos que nos llevan desde el Estado autoritario, con el Golpe liderado por las Fuerzas Armadas en 1955, a una transición que desemboca en una apertura electoral restringida, que dio como resultado la asunción en la presidencia de Arturo Frondizi, representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Pero, ¿cómo definimos al período frondicista?, ¿se podría decir que la gestión frondicista vino a profundizar las políticas represivas inauguradas por “la Libertadora”?

Estas preguntas son válidas habiendo sido Arturo Frondizi el representante por el radicalismo opositor al gobierno de la Libertadora, identificándose con el yirigoyenismo, a contra mano de la posición de Ricardo Balbín, quien fue candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), y se definió -en caso de ganar la presidencia-, como un continuador de los valores de “la Libertadora”.

Sin embargo, las medidas implementadas por la UCRI -en gran parte- tendieron a profundizar un Estado de control policial y militar. La persecución al “enemigo comunista”, será considerada en el análisis para contextualizar la sanción de medidas represivas durante la gestión, que fueron determinantes de las diversas formas institucionales que tomó la represión, siendo el Plan de Conmoción Interior del Estado (Plan Conintes) su máxima expresión durante el período indicado.

Este capítulo reúne un estudio sobre las políticas de seguridad durante el gobierno de Frondizi, a partir del relevamiento de documentación producida y recibida por la Presidencia de la Nación y sus organismos dependientes en el período mencionado. Asimismo, se consideró el material relevado de la sección “Comunismo” del Sub-Fondo Presidencia Arturo Frondizi, perteneciente al área de Archivos y Colecciones Particulares, de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Los diversos documentos producidos desde distintos organismos estatales, fueron reunidos bajo el común denominador de

“Comunismo”; “Terrorismo” y “Peronismo”. Sumergido en un contexto internacional bipolar, los conceptos de “Defensa Nacional” o “Seguridad Nacional” para la época aparecen en estos materiales como ejes fundamentales de los debates y las decisiones políticas en relación a la “lucha contra el comunismo”, siendo la creación de la Secretaría de Seguridad Nacional, una de las respuestas a estos debates.

El contexto nacional en el que asume la presidencia Arturo Frondizi, se vio caracterizado por la puesta en práctica de elecciones democráticas restringidas, ya que el peronismo se encontraba proscripto. Como se verá, su política estuvo determinada por un esfuerzo permanente en mantener un equilibrio hacia el interior de las Fuerzas Armadas; puede entenderse como resultado de esta actitud sus decretos en materia de seguridad. La aplicación del Plan Conintes, el esquema de división territorial en zonas, sub zonas y áreas de defensa bajo autoridad militar; la subordinación operativa de la policía a las FFAA, entre otras medidas, dieron cuenta de una creciente militarización de la política, que finalmente, llevarían al final la gestión de Frondizi. La biopolítica,²⁷⁷ entendida como la gestión política de la vida, en términos de Foucault, nos revela aquí una dinámica de poder que comenzaba a articular lo represivo entre lo legal y lo ilegal desde la propia gestión del Estado.

Sumado a esto, el incremento de las manifestaciones sociales, a raíz de la implementación de una política económica liberal con fuertes ajustes, fue generando una gran conflictividad gremial que tuvo su correlato en la declaración de zonas militarizadas en los grandes centros fabriles, lugar de permanentes protestas obreras.

Como podrá verse, la construcción del enemigo atravesada por la concepción del enemigo interno, convirtió a las Fuerzas Armadas en vigilantes de la población, para quienes el enemigo ideológico “comunista”, libraba una batalla en todos los órdenes: social, cultural, económico, político y religioso.

Las diferentes medidas adoptadas en materia represiva durante la gestión del gobierno de Frondizi marcaron un significativo antecedente en la instalación de lógicas y mecanismos represivos que se fueron trazando en la historia de nuestro país a lo largo del resto del siglo XX. En este sentido, el análisis que prosigue se corre de las interpretaciones que ubican de manera dicotómica, dictadura-democracia, para pensar -tal como sugiere

²⁷⁷ Véase, Foucault Michel, *Nacimiento de la biopolítica*: Curso en el College de France: 1978-1979, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.

Marina Franco- como los gobiernos democráticos también “fueron protagonistas y responsables” de la instalación de importantes políticas represivas.²⁷⁸ Gobiernos desde donde se fueron prefigurando modos represivos que marcaron la excepcionalidad como una característica constituyente del Estado Moderno.

Se considera de importancia el análisis del contexto político general para luego comprender la articulación de las diferentes medidas entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Un entrecruzamiento inevitable entre la Nación y la Provincia arriba a un escenario bonaerense que delimitó sus políticas represivas desde las órdenes del ejecutivo nacional. Es por ello, que en este capítulo se abordarán principalmente los aspectos de la política nacional en materia de seguridad, para luego ver sus repercusiones en la provincia y en la propia práctica policial bonaerense que se desarrollará en los siguientes capítulos.

De esta manera, nos encontraremos con los distintos mecanismos desde donde se ejerció el sistema de control, entendiendo desde aquí el concepto de policía, en una perspectiva amplia, que considera a todas las instituciones que ejecutan el control social. Se concibe, tomando los términos de Neocleous, que el sistema de la policía no fue sólo central para la represión de la clase trabajadora y la reproducción del orden, sino para la propia *fabricación del orden*.²⁷⁹

IV.1. Frondizi y la fabricación del orden social

“El sectarismo rojo se alimenta de la violencia, pone cerrojo a todo lo que sea atisbo de libertad y de todas las libertades...”.²⁸⁰ (Frondizi, 26 de noviembre de 1960)

Luego del golpe de Estado de 1955, hacia el interior del Partido Radical, las distintas posturas frente a los sucesos acontecidos condujeron a una fractura definitiva del

²⁷⁸ Franco, Marina, “Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)”. En, *Revista Contemporánea: Historia y problemas del Siglo Veinte*, Montevideo, 2012 vol. 3. Pp. 77-96

²⁷⁹ Neocleous, Mark, *La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.

²⁸⁰ Fondo del Centro de Estudios Nacionales (en adelante CEN), Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.1 Mensajes y discursos presidenciales, 26 de noviembre de 1960, s/página.

partido en 1956, dando origen a dos tendencias políticamente opuestas. Se encontraban aquellos que apoyaron al gobierno de “la Libertadora”, identificados con la figura de Ricardo Balbín, mientras que a la vez surgió una línea liderada por Arturo Frondizi, que buscó encontrarse con los valores populares del radicalismo yrigoyenista, con una prédica antiimperialista, en un intento de acercamiento al peronismo.

De este modo, hacia las elecciones de 1958 las expresiones del radicalismo se bifurcarían en la UCR del Pueblo y la UCR Intransigente convirtiendo, desde esta última tendencia, a Frondizi como presidente electo. Su figura opositora a las medidas que representaron al gobierno militar, acercó el apoyo de un amplio espectro electoral que involucró nacionalistas, católicos, ex peronistas y hasta miembros del Partido Comunista.²⁸¹ El acuerdo que éste mantuvo con el propio Perón desde el exilio, a cambio de levantar las proscripciones, incidió en la sumatoria de votos que lo definieron como ganador en las elecciones del 23 de febrero de 1958, con el peronismo proscripto; acuerdo que no auspiciaba buenos augurios con las Fuerzas Armadas. En los antecedentes biográficos de Frondizi, su figura se veía involucrada como un político e intelectual antifascista, en cuya labor militante se destacaba su colaboración en el Socorro Rojo, entidad de carácter comunista, en la defensa de los presos políticos. También participó en la AIAPE (Alianza de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores), afin al Partido Comunista Argentino, e hizo campaña a favor de la España Republicana; características que no tendrían un correlato en la política de su gobierno.²⁸² En este sentido, una de las preocupaciones de los círculos militares sobre el gobierno de Frondizi fue la posibilidad de que personas consideradas comunistas o peronistas, ocuparan cargos en el gobierno. “El propio general Aramburu, durante una de sus primeras reuniones con Frondizi después de la elección, le expresó esa preocupación, advirtiéndole que las Fuerzas Armadas permanecerían alertas ante la posibilidad de tales nombramientos”.²⁸³ Este mensaje de Aramburu, daba cuenta de una forma de actuar de las Fuerzas Armadas que evidenciaba el permanente control bajo el que sería subordinado el gobierno.

²⁸¹ Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina (II). 1945-1962, de Perón a Frondizi*, Buenos Aires: Hyspamerica, 1985, pág. 353.

²⁸² Chama, Mauricio, “Activismo social y político, represión estatal y defensa de “presos Conintes”: la experiencia de Cofade (1960-1963)”, *V Jornadas de historia política, “Las provincias en perspectiva comparada”*, Universidad Nacional de Mar del Plata, 29 de septiembre al 1 de Octubre de 2010, pág.6.

²⁸³ Potash, Robert, *El Ejército y la Política en la Argentina (II). 1945-1962. De Perón a Frondizi*, Buenos Aires: Hyspamerica, 1985, pág.369.

En uno de los documentos agrupados dentro de la sección del Ministerio de Defensa Nacional, del Archivo de la Presidencia de Frondizi, se mencionaban algunas posiciones y conspiraciones dentro de las FFAA. Por ejemplo, se aludía que el Estado Mayor General del Ejército, con la colaboración de su organismo especializado, el Servicio de Informaciones del Ejército (S.I.E), tenía preparada una campaña de descrédito al gobierno nacional, con el pretexto de la infiltración comunista en sus esferas. La mencionada campaña había comenzado otorgando a “cierto sector del periodismo, la publicación de una lista numerosa de comunistas, sin éxito”.²⁸⁴

Algunas de las medidas que se efectivizaron de inmediato fueron el aumento salarial del 60%, la amnistía a los presos políticos y el levantamiento restringido de proscripciones, de las que quedaron afuera el propio Perón y el Partido.²⁸⁵ A su vez, sus políticas apuntaron a un “desarrollismo económico” vinculado al fomento de la industria y las inversiones extranjeras, habilitando a través de un marco legislativo la implementación de capitales foráneos.²⁸⁶ Estas medidas y las políticas de estabilización ante la crisis económica, que se comenzaron a sentir hacia fines de 1958, dieron un giro en el carácter inicial del gobierno, aplicando políticas de ajustes con préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), congelamiento salarial y devaluación. Junto a estas disposiciones, se extendieron las huelgas y las medidas represivas se intensificaron. Los sindicatos se manifestaron con planes de lucha y la represión a cargo del Ejército recrudeció. En este contexto, el 14 de noviembre de 1958, bajo el Decreto de carácter secreto N° 9.880, se aplicó el llamado Plan de Conmoción Interna del Estado, (Plan Conintes), que prohibía las huelgas y permitía la intervención de las Fuerzas Armadas, quedando quienes fueran detenidos por manifestarse bajo la competencia de tribunales militares, acusados por el delito de “terrorismo”.

Como parte también de las tensiones hacia adentro del mismo Ejército, donde una facción acusaba al presidente de supuestas infiltraciones comunistas en el gobierno, hubo intentos conspirativos para derrocar a Frondizi. En ese contexto, en el mes de junio de 1959

²⁸⁴ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.2.1. Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional, mayo 1960 s/página.

²⁸⁵ Véase, Amaral, Samuel, “Perón en el exilio: la legitimidad perdida” en Amaral, S. y Plotkin M. (comp.), en *Perón, del exilio al poder*, Buenos Aires: Cántaros Editores, 1993.

²⁸⁶ Véase, Horacio García Bossio, *¿Qué nos hace más Nación? Desafíos del desarrollismo frondicista-frigerista*, Buenos Aires: EdUNLa cooperativa, 2014.

fue nombrado el teniente General Montero como Comandante en Jefe del Ejército. Montero pasó a retiro a casi la totalidad de los generales, e inició una profunda reestructuración del Ejército. En estos cambios fue ascendido a general de brigada Juan Carlos Onganía.²⁸⁷ Su meta principal se centró en preparar al Ejército para enfrentar al comunismo, considerando “... necesario poner al día las planificaciones tradicionales militares, desarrollando una capacidad de operación basada en la hipótesis de una guerra revolucionaria”.²⁸⁸

La represión ejercida durante “la Libertadora”, y la continuidad de una política proscriptiva y represiva, fue parte de un contexto social que comenzaba a reunir diversas fuerzas del campo popular y la izquierda en oposición al gobierno. La conflictividad social, también devino en la sanción de una serie de disposiciones que apuntaron al control del comunismo, a pesar de su moderado apoyo manifestado en el principio de la gestión.

Sin embargo, este panorama político opositor en aumento incidía en medidas de seguridad que excedían al Partido Comunista. En este período, los emergentes grupos revolucionarios de izquierda comenzaban a ser una incógnita para la inteligencia policial-militar. Si bien se seguiría poniendo foco en el comunismo, la vigilancia y la normativa de excepción iban a incorporar, inevitablemente, nuevos actores políticos en el espionaje policíaco. No obstante, las definiciones anticomunistas continuaron siendo una de las prioridades en materia de seguridad nacional, como fue la sanción del Decreto N°4965/59, donde se conformó una comisión dependiente de la presidencia de la Nación encargada de “planificar, dirigir y supervisar las acciones del Estado en materia de comunismo y otros extremismos”.²⁸⁹ El peso ideológico del anticomunismo, puede comprenderse como la incorporación del país a una cruzada anticomunista a nivel internacional. La propia Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), reconocía que el derrocamiento del

²⁸⁷ El 2 de septiembre de 1959 Toranzo Montero fue destituido, pero un grupo de generales le declaró solidaridad. Comenzó un conflicto interno dentro las Fuerzas Armadas, que Frondizi logró mediar, a cambio de ceder ante los reclamos de Toranzo Montero. Estas situaciones iban demostrando el debilitamiento desde la Presidencia para establecer su política ante las Fuerzas Armadas. Véase: Damin, Nicolás, *Plan Conintes y Resistencia Peronista. 1955-1963*, Instituto Nacional Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, 2010, pág. 86.

²⁸⁸ Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina... Op. Cit.*, pág.429

²⁸⁹ Sain, Marcelo Fabián, “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, en, *Seminario sobre Control Democrático de los organismos de Seguridad Interior en la República Argentina, Documentos de Trabajo*, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1997, pág. 142. Una mirada actual sobre las profesiones armadas, puede encontrarse en la segunda parte del libro que compilan, Sabina Frederic, Osvaldo Graciano y Germán Soprano, *El Estado argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas*, Rosario: Prohistoria, 2010.

comunismo, era una batalla de las ideas que incluso demandaba hasta el uso de “mentiras necesarias”.²⁹⁰

En 1959, ante el triunfo de la Revolución Cubana y sus vínculos con la Unión Soviética, el alineamiento anticomunista liderado por la potencia del norte, indujo de inmediato a la alianza de los militares argentinos, quienes presionaron al gobierno de Frondizi para proclamarse al respecto. La necesidad de Estados Unidos por implementar la Doctrina de Seguridad Nacional, también se vio influenciada ante nuevas oleadas de revoluciones por la descolonización sucedidas hacia finales de la década de 1950, que comprendieron a las regiones de Iberoamérica, Oriente Medio y África. En este contexto internacional, la “Alianza para el Progreso”, política llevada a cabo por el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, fue parte de un programa que respondería con campañas contrainsurgentes por toda Latinoamérica.²⁹¹

Los virajes políticos optimizaron un recrudecimiento en la represión a los conflictos sociales, cuyo enemigo, ideologizadamente comunista, fue sobre quien cayó todo el peso de la ley. Asimismo, la lucha contra el comunismo heredó las legislaciones previas que lo combatían y continuó siéndolo desde las nuevas propuestas que se debatían para pensar y planificar estrategias que lo erradicaran. Por ejemplo, los conceptos de “Defensa Nacional” y “Seguridad Nacional”, fueron centrales en las discusiones que se presentaron desde la esfera gubernamental, como parte de los debates doctrinarios de la coyuntura internacional de la época. Mediante decretos presidenciales, se crearon dos comisiones asesoras para llevar adelante un plan de acción en la lucha contra el comunismo.

Por un lado, una comisión asesora para la aplicación del Decreto N°4965/59, que prohibía “en todo el territorio de la República las actividades comunistas; las del Partido Comunista; y las de los grupos, entidades o asociaciones directa o indirectamente

²⁹⁰ Bossa, Juan Alberto, “Un emisario sospechoso. Contradicciones del comunismo en América Latina en la década de 1950”, en *Revista Oficios Terrestres*, N° 27, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, febrero 2012, p 4. Para profundizar y dialogar con este artículo en relación al Congreso por la Libertad de la Cultura, aquí abordado como una estrategia cultural e intelectual contra las ideas comunistas, -financiada por la CIA- también como consecuencia de la toma de conciencia de muchos/as intelectuales que se manifestaban contra el “totalitarismo stalinista”; puede consultarse: Jannello, Karina. El Congreso por la Libertad de la Cultura en la Argentina: entre el Grupo Sur y el Partido Socialista. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata, 2010.

²⁹¹ Véase, Halliday, Fred, *Génesis de la Segunda Guerra Fría*, México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

vinculados a dicho partido o que colaboran en su acción”. Los antecedentes analizados que dieron origen a dicho decreto definían al país bajo un “estado de conmoción interna”, y establecían que “tal situación fue originada en lo esencial por actividades insurreccionales de carácter principalmente político y gremial, que debieron ser reprimidas en salvaguardia del orden público y de la economía nacional”.²⁹² Mientras que bajo la ley 14.774, había sido prorrogada la vigencia, sin término, del estado de sitio.

En un documento de carácter reservado,²⁹³ entregado el 1 de diciembre de 1959, al presidente de la Nación por el General de Brigada Ángel Peluffo, quien encabezaba la SIDE junto con el General Juan Alberto Lagalaye, se detallaban las acciones que competían a cada organismo y área de la Nación a los fines de erradicar el comunismo. Este documento fue elaborado para la Secretaría de Marina, con copia a la Secretaría de Aeronáutica.

En relación al Decreto N°4965/59, el documento dejaba en claro que el Ministerio del Interior debía estar informado sobre el funcionamiento de las empresas editoriales que publicaran material comunista o que favorecieran al desarrollo de dicha ideología, como sobre la circulación y venta de publicaciones afines, de origen nacional y extranjero, especialmente en el interior del país. Se exigía la calificación de entidades y/o organizaciones ya sometidas a la justicia, “como así también se sometan a las mismas aquellas otras aún no consideradas, a fin de que la ciudadanía no se llame a engaño sobre los verdaderos propósitos de estas organizaciones”.²⁹⁴ De esta manera, quedaron prohibidas en todo el país las actividades comunistas que se vinculaban directamente con el Partido, como la de todas aquellas entidades “colaterales” o afines al mismo.

Estas expresiones referenciaban al comunismo como el principal responsable del “plan subversivo” ejecutado en el campo gremial, tendiente a instalar un “estado de anarquía social”. Bajo la balanza de la ley, se entendían a estas actividades como ilícitas al fomentar un clima de intranquilidad en momentos inestables de la Nación. La prédica anticomunista buscaba los argumentos locales y se afianzaba con un posicionamiento

²⁹² Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 4965, “Prohibición de actividades comunistas y del Partido Comunista”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, 27 de abril de 1959, Tomo XIX-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 316.

²⁹³ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4 Comunismo, folio 25.

²⁹⁴ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4 Comunismo, folio 25, pág. 2

político a nivel internacional. La actividad “insurreccional” del comunismo era denominada como actos “terroristas” que atentaban contra las instituciones y los ideales del “pueblo argentino”.

Las medidas aplicadas a los diplomáticos de países comunistas, llegaron a restringir el desplazamiento de los funcionarios. En uno de los expedientes sobre “Comunismo” del archivo de la DIPPBA, se expresa al respecto:

“Por primera vez en el país, y de acuerdo con normas usuales de reciprocidad en el trato, a partir del día 30 de julio de 1959, se limitó a 40 kilómetros, a partir del kilómetro cero (Plaza del Congreso)- el radio de libertad de movimiento para los diplomáticos de la U.R.S.S y de la República Popular Rumana”.²⁹⁵

Disposiciones de este tipo, cuyo contenido rozaba el límite con el absurdo, tenían un marcado contraste con la persecución sistemática y minuciosa a cada órgano de prensa y local que refería al comunismo. Lo mismo sucedió con huelgas, intervenciones en sindicatos y escuelas, como la clausura de “Aurora”, considerada como un establecimiento educativo de adoctrinamiento comunista y formación de cuadros. La persecución fue eficaz y la dimensión diplomática, más allá del absurdo, no resultó un tema menor. La importancia de este control estricto en la “libertad de desplazamiento”, tenía sus antecedentes meses antes cuando fueron detectadas conexiones entre diplomáticos de la U.R.S.S y el movimiento obrero regional. Al respecto, en el mismo legajo se mencionaba:

“A raíz de sus conexiones con la subversión en el ambiente gremial, fueron declaradas personas no gratas, el 7 de abril de 1959, 4 funcionarios de la Embajada de la U.R.S.S y uno de la legación de la República Popular de Rumania. A uno de ellos (BELOUS) se le concedió 48hs. de permanencia. El resto se ausentó del país el 24 de abril”.²⁹⁶

El horizonte persecutorio se enfocaba en las embajadas soviéticas. A estos sucesos se le sumaron la localización de una emisora clandestina en el edificio de la Legación de la

²⁹⁵ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, folio 35.

²⁹⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, folio 35.

República Popular de Bulgaria. Bajo el marco de la ley, los allanamientos fueron moneda corriente, y en esta oportunidad se declaró persona no grata al titular de la institución. Ante estas situaciones, junto con la medida de restricción de movilidad, se redujo la cantidad de miembros del personal diplomático perteneciente a países comunistas.

En la Administración Pública se prohibieron ocupar cargos públicos a “elementos con antecedentes comunistas”, mientras que se demandaba completar la legislación vigente, mediante la inserción de cláusulas que en particular restrinjan la inserción comunista.

A su vez, en el sector de migraciones se impedía el ingreso al país de “agentes individualizados al servicio del comunismo internacional”, por lo que se manifestaba la necesidad de impartir directivas concretas y determinantes a las comisiones de inmigración, “a efectos de eliminar los candidatos de ideología comunista”.²⁹⁷

En los aspectos que concernían a la cultura y la comunicación, se exigía un mayor control de aquellos organismos nacionales de cultura que no dependían de las universidades. De este modo, se ordenaban ampliar las facultades del Instituto de Cinematografía, perteneciente al Ministerio de Educación, para la difusión de películas comunistas o de aquellas que, directa o indirectamente, constituyeran un medio de propaganda. Mientras que, se debía incorporar a la Ley de Radiodifusión las cláusulas que permitieran el control de la difusión de la ideología comunista a través de este medio, como así también se debían ampliar las facultades de la Comisión Administradora de Radio y Televisión para que no se difundan programas comunistas.

En el plano educativo se preveía controlar los antecedentes ideológicos de las personas que pretendieran ingresar a la docencia. “A fin de eliminar aquellos que se detecten como comunistas”.²⁹⁸ Se agregaba a esta directiva, la revisión y el ajuste de la materia “Educación Democrática”, considerando que la misma podía ser utilizada como vehículo de propagación ideológica del comunismo. En este aspecto se destacaba que el sentido de argentinidad debía ser reafirmado en los planes de estudios.

Desde una mirada integral se reforzaba la orden de coordinar las medidas de lucha anticomunista a llevarse adelante en todo el territorio nacional, desde los ministerios,

²⁹⁷ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Comunismo, Caja 0.3.4.8.4, folio 25, pág.3

²⁹⁸ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Comunismo Caja 03.4.8.4, folio 25, pág. 5

gobiernaciones y otras dependencias. En ese sentido, las fuerzas de seguridad y organismos de informaciones -nacionales y provinciales- debían mantener núcleos estables de personal especializado, para que en un trabajo conjunto se constituyeran como un sistema de permanente control.

Como ejemplo de algunas medidas adoptadas para el cumplimiento del Decreto N° 4965/59, se encuentra en los archivos que hasta el día 24 de octubre de 1960 se habían clausurado 217 locales del Partido Comunista y ‘colaterales’; 36 editoriales y periódicos de la Capital Federal.²⁹⁹ En estas intervenciones policiales se secuestraron libros, diarios y material de propaganda.

Se realizaron 195 detenciones de militantes comunistas o vinculados al mismo, pero de este total 143 personas recuperaron su libertad, ya que para la policía federal pudieron demostrar que no estaban vinculadas al comunismo, o actividades subversivas, u otras que fuesen consideradas como causantes de ‘alteración del orden y la paz interior’.

El 22 de septiembre de 1959 el Poder Ejecutivo dictó el decreto N° 11.751, dando intervención a los procuradores fiscales para que gestionen en todo el país, la disolución y cancelación de la personería electoral del Partido Comunista. Si bien esta medida, se contraponía con el decreto N° 19.044, del 17 de octubre de 1956 donde el Partido Comunista fue aprobado como tal, se avanzó con nuevos decretos, cuyo resultado quedaba supeditado a resoluciones judiciales.

Así, el 27 de enero de 1960 se dictó el decreto N° 987, que daba instrucciones a los Procuradores Fiscales para que se opusieran a los jueces federales a la oficialización de listas de candidatos del Partido Comunista para las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960. Los argumentos jurídicos que se expusieron para sostener que el PC no podía concurrir a elecciones, se centraba en tres razones. La primera consideraba que mediante la Ley de Estado de Sitio, el Poder Ejecutivo había dictado el Decreto 4965, que prohibía todas las actividades de dicho partido; la segunda tomaba las disposiciones del estatuto de los partidos políticos, donde se establecía que los candidatos debían ser elegidos en elecciones internas, y que éstas no pudieron ser realizadas por la prohibición que caía sobre el partido y de haberse realizado, serían ilegítimas. Por último, en el marco de la Ley

²⁹⁹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Comunismo Caja 0.3.4.8.4 s/folio.

Electoral, también se establecía que los candidatos debían ser proclamados públicamente, criterio que tampoco podrían haber cumplido.

Finalmente, se logró que en los 23 distritos electorales, el Partido Comunista no presentara lista. En algunas provincias como Córdoba, Misiones, Formosa, se dieron situaciones parciales. Por ejemplo, en Córdoba el juez y la junta electoral resolvieron oficializar la lista, pero la Cámara Federal dictó luego sentencia a favor del Estado, ordenando la disolución y cancelación de la personería de dicho partido. En otros casos como Mendoza, San Luis, Neuquén, tanto el juez como la junta electoral procedieron a oficializar las listas, pero el Partido no presentó boletas.³⁰⁰ De todos modos, luego de estas medidas el Comité Central del PCA decidió votar en blanco.

Los decretos fueron efectivos a los intereses del gobierno, por la celeridad en los resultados, donde incluso, en aquellos distritos en que las resoluciones de las juntas fueron adversas al Estado, los recursos extraordinarios interpuestos por los fiscales llegaron con rapidez a la Corte Suprema para dictar la resolución final.

Además de las medidas mencionadas para la situación electoral, desde el gobierno se consideraba que el accionar represivo debía seguir direccionado hacia determinadas conductas -que no se especificaban-, que tenían un “objetivo determinado”.³⁰¹ Por lo que, la persecución a personas involucradas de manera directa o indirectamente con dicha ideología, allanamientos, secuestro de información, entre otros procedimientos que se describieron anteriormente, continuaron de manera sistemática.

La vinculación peronismo-comunismo, como se advirtió durante el gobierno de “la Libertadora”, también fue denunciada por las esferas del Ejército para este período. A pesar de las particularidades de la asunción de Frondizi, este tipo de asociaciones evidenciaban el gobierno condicionado que tenía el líder de la UCR Intransigente, ante los permanentes “planteos militares”. Tal como se expresa en uno de los legajos del archivo de la DIPPBA, se destacaban las relaciones del peronismo con el Partido Comunista, dadas a conocer por el Ministerio del Interior. En la breve reseña del documento con fecha del 2 de julio de

³⁰⁰ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Comunismo Caja 03.4.8.4, “Informe sobre los resultados obtenidos con las medidas adoptadas contra el Partido Comunista, de acuerdo con el plan de acción oportunamente elaborado”. Folio 30, pp.2, 3, 25 de marzo de 1960.

³⁰¹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.4, Comunismo, s/folio.

1959, se informaba la existencia de conexiones entre el Partido Comunista y el Movimiento Peronista, a partir de documentación secuestrada, pero que no se dio a conocer en el mismo informe.³⁰²

Los métodos inicuos para la obtención de información y justificación de declaraciones y/o disposiciones legales, no eran nuevos. Una vez más, para el cumplimiento de la ley se cometían un sinnúmero de ilegalidades, alineados en la terminología policial como: “acción de represión contra elementos perturbadores comunistas”. En este contexto, se consideraba que eran las acciones cometidas del PCA las que hacían necesaria su represión para conservar el orden y la paz en el país.

Como se mencionó además de la comisión asesora creada para la aplicación del Decreto N°4965/59, que prohibía las actividades comunistas, hubo otra creada el 18 de octubre de 1960, luego de la sanción del Decreto 12.681/60 para la investigación de actividades comunistas, presidida por el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado José Rafael Cáceres Monié, integrada por:

“...un representante del Ministerio del Interior, y por igual número de las Secretarías de Guerra, de Marina y de Aeronáutica, de la Secretaría de Informaciones de Estado y de la Policía Federal, que tendrá a su cargo la investigación y estudio de todo lo relacionado con la actividad comunista que se realiza en el país”.³⁰³

Desde aquí se debía proyectar la estructura policial -administrativa, judicial-, con la finalidad de que actuaran de manera coordinada frente a los actos realizados por el “comunismo y otros extremismos”. También competía al Consejo la tarea de elaborar permanentemente los proyectos de leyes, decretos, resoluciones, o recomendaciones, que permitieran la adecuación de la tarea a la realidad nacional o mundial, en relación al desarrollo del comunismo.

Esta medida reforzaba el desenvolvimiento de las distintas dependencias de seguridad centralizadas en la SIDE. Esta otra comisión se constituyó como una instancia

³⁰² Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, folio 36.

³⁰³ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 12681, “Comisión para la investigación y estudio de la actividad comunista en el país”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, 18 de octubre de 1960, Tomo XX-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 832.

más de asesoramiento al ejecutivo nacional para la implementación de políticas anticomunistas en la Argentina. Sin embargo, al año siguiente, el 13 de abril de 1961, mediante un decreto del ejecutivo nacional, se le atribuyó específicamente a la Secretaría de Informaciones de Estado la responsabilidad de asesorar al gobierno, siendo el organismo nacional de seguridad en la lucha contra el comunismo y “otros extremismos”. Se analizaba el carácter prioritario y la necesidad de sistematizar las acciones del Estado contra las actividades “disolventes” ocasionadas por dicha corriente política ideológica, por lo cual se establecía según el Decreto N° 2985/61:

“Que la dispersión de esfuerzos que se advierte en esta materia y la necesidad de elevar los índices de seguridad hacen indispensables adecuar las estructuras existentes a las exigencias de la nueva situación, mediante la adopción de un sistema que permita el desenvolvimiento de la acción frente a la agresión totalitaria en sus fases de planificación, dirección y supervisión en forma coordinada”.³⁰⁴

Esta definición se enmarcaba en una búsqueda de protección para el Estado ante la infiltración comunista, en el afán por mantener las vías constitucionales, la implementación de estas definiciones apuntaban a poner en funcionamiento todo el dispositivo legal estatal y ubicaba a la SIDE como el único órgano preparado para enfrentar “el problema mundial” del comunismo. Se orientaba a reforzar desde el orden de lo legal las medidas de seguridad internas que enmascaraban al aparato represivo que tenía a su cargo la persecución de los considerados “extremismos”. De este modo, se mencionaba que dicho decreto no descartaba el proyecto de ley que desde el ejecutivo se planeaba enviar al Congreso de la Nación a los fines de asegurar, “mediante un más suficiente instrumento legal, la defensa efectiva de nuestro sistema constitucional...”.³⁰⁵ Las misiones que le conferían a la Secretaría incluían además del asesoramiento al Poder Ejecutivo nacional, la incidencia a partir de antecedentes y documentación investigada, en las políticas públicas a definir en materia de “seguridad”; preparar instructivos y planes de acción para los ministerios y secretarías de Estado, como así también intervenir en todo asunto relacionado con el

³⁰⁴ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 2985/61, “Planificación, dirección y supervisión de la acción del Estado en material de comunismo y otros extremismos por la Secretaría de Informaciones de Estado”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, 13 de abril de 1961, Tomo XXI-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 489.

³⁰⁵ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 2985/61... Op. Cit., pág. 489.

comunismo u otros “extremismos” originados en cualquier ministerio, secretaría u organismo, tanto oficial como autárquico.

A partir de este decreto la SIDE se convirtió como la “central del sistema informativo”, donde además de las funciones de inteligencia que le antecedian, quedó como el principal organismo de Estado encargado de coordinar las actividades específicas de los servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), el Servicio de Informaciones Naval (SIN), el Servicio de Informaciones Aeronáutico (SIA), Coordinación Federal, y las que pudieran realizarse en otros organismos públicos afines, “... para centralizar el estudio de inteligencia superior del Estado y formular las recomendaciones que correspondan”.³⁰⁶ Así se constituía como la asesora del Consejo de Defensa Nacional, y como órgano superior de inteligencia en el plano nacional, siendo la encargada de proporcionar las bases informativas requeridas.

El permanente control, que se iba implementando daba cuenta de la importancia por no dejar nada por fuera de la mirada del Estado. Pensar la vigilancia, el control, la persecución y la propia censura y detención de personas, se convertía en una de las políticas de Estado que buscaba tener su máxima efectividad a la hora de ponerla en práctica. Tal es así, que el aspecto psico-social en las y los pobladores era concebido como un eje primordial en este trabajo, donde “la acción psicológica anticomunista”, debía intensificarse para activar una “conciencia democrática” en la población, sintiéndose ésta misma parte de la lucha contra el enemigo político comunista.

La construcción de un mundo exterior como un afuera amenazante y peligroso formó parte de la modalidad de poder que se ejerció, no sólo desde los gobiernos de hechos, sino, tal como se demuestra, desde gobiernos civiles como es el caso de la gestión política de Frondizi, allanando un camino fértil para la represión posterior. La construcción de esa amenaza contó con el rol policial como un factor constituyente en la creación de ese orden social cada vez más represivo, logrado a partir del ejercicio del poder del Estado.

³⁰⁶ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 2985/61... Op. Cit., pág. 490.

IV.2. El orden interno: las implicancias del Conintes

Como normativa de excepción, el Plan de Conmoción Interior del Estado (Plan Conintes) facultaba la militarización de la sociedad declarando zonas de injerencia militar, principalmente a las ciudades industriales, limitando los derechos y garantías constitucionales de las personas. La misma normativa sobre la que se fundamentaba el Conintes para la detención de numerosos militantes, los de la resistencia peronista -entre ellos- tomaba como base la Ley Nacional N°13.234, titulada: “Normas para organizar la Nación para tiempo de guerra las que será adoptadas desde tiempo de paz”,³⁰⁷ sancionada durante el primer gobierno peronista en 1948, que permitía la intervención de las Fuerzas Armadas en temas que eran de competencia civil.

El decreto de carácter secreto N° 9.880 entró en vigencia a partir de las 12 horas del día 14 de noviembre de 1958, aplicándose el Plan Conintes en todo el territorio nacional. Desde el Poder Ejecutivo se fundamentaba la sanción del mismo considerando un estado de perturbación social que afectaba y ponía en peligro las instituciones del país y el ‘orden público’, ante el cual ya se había declarado el estado de sitio, dando lugar a las Fuerzas Armadas a proceder con rapidez y autoridad para restablecer el orden. Mediante esta medida, el Poder Ejecutivo se atribuía el derecho de poder de policía en todo el país, habilitando la intervención militar, de manera desmedida:

“Art. 3° — Por el Ministerio de Defensa Nacional y Secretarías de Guerra, Marina y Aeronáutica se adoptarán las medidas necesarias para poner en ejecución de inmediato, el Plan de Conmoción Interior del Estado (Plan “Conintes”).

Art. 4° — El Ejército, la Armada Nacional y la Aeronáutica Militar actuarán con toda rapidez y máxima energía en el cumplimiento de las misiones que les sean asignadas”.³⁰⁸

³⁰⁷ *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo VIII, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1948.

³⁰⁸ Decreto (S) 9880/58, 5 de marzo de 2013, Boletín Oficial de la República Argentina: <http://www.eldial.com.ar/nuevo/boletin/2013/BO130305.pdf>. Este Decreto, junto con otros de carácter secreto y reservado, fueron publicados en el Boletín Oficial del mes de marzo de 2013, acorde a lo establecido por el Decreto 2103/2012, donde se indicó la desclasificación de los mismos.

De este modo, según estos artículos quedaba en claro la intervención militar para resolver situaciones que fuesen consideradas como perturbadoras al orden público, subsumiendo el rol de la policía a las Fuerzas Armadas. En los antecedentes de esta normativa, tal como se mencionó, se encuentra la sanción de la Ley N°13.234 que competía a la organización de la Nación en tiempos de guerra. El sentido de esta ley, en primer lugar, residía en una reorganización militar del país, sobre la que luego se montaría el Plan Conintes, incluso con la delimitación de las zonas de injerencia militar, denominadas “Zonas de Operaciones Terrestres”, “Zonas de Operaciones Navales” y “Zona del Interior”. En cada una de estas delimitaciones se designaba un Comando Superior que ejercería la autoridad total del gobierno, tanto en lo militar como en lo administrativo y lo civil, pudiendo delegar dicha autoridad a los Comandantes del Ejército, Escuadras, Fuerzas Aéreas o Comandantes de unidades independientes, respecto a la zonas en que éstos actuaban. Quién ejercía la autoridad, también tenía la facultad para imponer la ley marcial dentro de las zonas de operaciones.

Desde el Consejo de Defensa Nacional se debía orientar y preparar a todos los organismos del Estado ante la necesidad de la movilización de las Fuerzas Armadas, la organización de la defensa civil, la seguridad interior, el funcionamiento normal de la administración y los servicios públicos, y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el comercio y la industria.³⁰⁹

Para este nuevo contexto en el que se ejecutaba el Conintes, hubo un importante cambio en cuanto al concepto de seguridad. Como se ve, la ley de 1948 fue creada, principalmente, para ser implementada en caso de guerra, en su sentido más convencional. Las discusiones desde las esferas militares y gubernamentales planteaban ahora que el paradigma de “Defensa Nacional”, había quedado obsoleto, ya que presuponía un concepto de lucha clásica de aplicación preferentemente militar.

Este concepto puede encontrarse en un estudio de carácter confidencial y secreto, que elaboró la Secretaría de Guerra sobre el comunismo en 1961, donde -como se pudo ver en períodos anteriores- se actualizaba el análisis sobre la situación de Argentina y América

³⁰⁹ *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo VIII, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1948, pág. 72. Sobre esta organización se montará la puesta en práctica del Plan Conintes, que incluso, como refiere la Ley N° 13234, también se ejecutaba a los fines de acudir ante catástrofes naturales, pero sólo se encuentran antecedentes de su utilización como método de persecución y represión política.

Latina, en relación a esta ideología. Lo interesante de este documento es el valor que desde la Secretaría de Guerra se confería al mismo a los fines de la seguridad del Estado. En la introducción se pedía al presidente una lectura exhaustiva, que debía incluir anotaciones en los márgenes, tomando esto como un ejemplo de “la forma y fondo de los trabajos que debe encarar la Secretaría de Seguridad Nacional (...), cuya finalidad es centralizar y dirigir la lucha contra el comunismo”.³¹⁰

Aquí se instalaba la idea de una concepción moderna de “Seguridad Nacional”, en tanto ésta superaba las fronteras territoriales, ya que no estaba de manera exclusiva en sus fronteras, sino fundamentalmente en sus ciudadanos y ciudadanas, aisladamente y en conjunto. La responsabilidad de la seguridad no competía directamente a las Fuerzas Armadas, ya que el enemigo era interno, surgía desde cualquier espacio: en el taller, en la fábrica, en la oficina, en el aula, en el hogar frente a la radio, al televisor, en el mercado, en el transporte, etc. A partir de aquí, las medidas adoptadas por el Estado libraban una lucha ideológica: “el comunismo ha atacado a una filosofía no a un pedazo de suelo, el Estado debe asegurar todas las formas de aplicación de la concepción filosófica que profesa”.³¹¹

Desde aquí se podrían entender los argumentos que construyeron la legitimidad de un Estado que poco a poco se fue convirtiendo en un terror de Estado; siendo la forma que adoptó el poder para salvaguardar un orden, donde la configuración de enemigos contenía legitimidad en y por la ley, y cuya diferenciación con un “otro” era lo que le otorgaba validez y existencia.

Mientras tanto en la Secretaría de Guerra se marcaban los nuevos direccionamientos de las políticas de seguridad del Estado que implicaban, entre otras cosas que: “Por ser las FF.AA únicas responsables de la seguridad o soberanía, por vicios de origen, se transforman en Senado armado cuando estiman que las actitudes del gobierno amenazan la seguridad de la Nación”.³¹²

³¹⁰ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.4, Comunismo “Estudio sobre el comunismo. Medidas en que afecta a Argentina y América Latina”, s/folio, pp 1-2, 21 de marzo de 1961.

³¹¹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.4, Comunismo, Folio 2, pág. 5, 21 de marzo de 1961.

³¹² CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.4, Comunismo, folio 2, pág. 4, 21 de marzo de 1961.

Si bien este informe se elaboró con posterioridad a las medidas que surgieron a partir del Conintes, de alguna manera logra sistematizar las discusiones y contenidos que los decretos presidenciales definían en materia de seguridad. Éstos, también fueron inspirados en las doctrinas internacionales, como la Doctrina Francesa y la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo las que se formaban los militares de nuestro país, que no sólo proyectaban el accionar institucional de las Fuerzas Armadas, sino que incidían en los lineamientos de las políticas de seguridad del Estado. En este aspecto, las actividades de inteligencia, orientadas hacia el conjunto de la población, fueron obteniendo cada vez más importancia.

La centralidad que ocupaba la lucha anticomunista en el gobierno fue construyendo gradualmente una serie de medidas que reforzaban y enfocaban las decisiones políticas hacia un recrudecimiento de las medidas represivas, como las modificaciones que se propusieron para el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional.

Estos giros e incorporaciones en la legislación represiva vigente eran parte de una reorganización en las políticas de seguridad del Estado, que conducía sus objetivos a una militarización de la sociedad. Desde el gobierno, se definió la situación del país bajo la existencia de un “Estado Conintes”, es decir de “conmoción interna”, dada la agitación social y política permanente en la que se vivía.

El Estado Conintes constituía “...una de las formas, como el estado de sitio o de guerra interna, en las cuales el Estado declaraba la excepcionalidad de una situación sociopolítica y habilitaba el empleo de medidas excepcionales”.³¹³ Mientras que, el “Plan Conintes”, consistía en la serie de medidas que harían posible su aplicación.

Los informes de coyuntura, nacional-internacional, que provenían desde la SIDE, Ministerio de Defensa, Policía Federal, Secretaría de Guerra y Marina, fueron una práctica recurrente, que demostraba la preocupación de las Fuerzas Armadas ante el comunismo internacional, y el binomio peronismo-comunismo, hacia el interior de nuestro país. Los informes fueron los fundamentos de muchos decretos presidenciales que apuntaron a un reordenamiento de la seguridad, otorgando libertad de acción a las autoridades militares. El plan Conintes fue producto de este contexto, pero como resultado de las políticas represivas

³¹³ Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria, 2014. Pág. 22.

anteriores. Existió la elaboración de planes de operaciones Conintes en el año 1952, donde se relevó una estructura organizativa para casos Conintes, que fue ejecutada en los días posteriores al Golpe de Estado de septiembre de 1955.³¹⁴

Fue a partir de la sanción del Decreto N° 9.880 de 1958, cuando dicho plan tomó las formas ‘legales’ para su puesta en práctica de manera permanente. Se aplicaron métodos militares en la persecución y el control de la población civil y de todo lo que fuera considerado como un potencial peligro para el orden público. Así, como parte del cambio de paradigma de la seguridad las Fuerzas Armadas ya no estaban encargadas solamente de las fronteras, sino del control territorial hacia adentro, quedando subordinadas todas las fuerzas de seguridad policial a éstas. Progresivamente se fue creando un doble poder, donde la población civil estaba subsumida a la constante penetración militar en lo cotidiano, y muchas de las atribuciones que competían al Poder Judicial, o al Ejecutivo, quedaron en manos de la arbitrariedad del poder de las Fuerzas Armadas. Se fue construyendo así una estructura paralela a la estructura formal y visible del Estado, es decir, la duplicación militar del Estado.

IV.3. La territorialización de la represión

La subordinación de la policía a las autoridades militares, la creación posterior de los Consejos de Guerra especiales para los y las detenidas bajo la normativa del Conintes, la zonificación de la vigilancia, fue construyendo una territorialización de la represión, que garantizaba un control político-militar de la población constante. La vida y el espacio comenzaban a convertirse en una dupla biopolítica y geopolítica,³¹⁵ donde el control del espacio requería, a su vez, de una política sobre la vida para controlarla.

La división en zonas militares del país, tiene su antecedente en el Decreto N° 15.385 del año 1944, por el cual se crearon en todo el territorio de la Nación las “zonas de seguridad”, destinadas a fortalecer la defensa nacional que comprendían una faja a lo largo de la frontera terrestre-marítima y una cintura alrededor de aquellos establecimientos

³¹⁴ Véase, Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Op. Cit, pp.30, 31 y 32.

³¹⁵ González, Hernández, Bryan, “La construcción bio/geopolítica de las Doctrinas de Seguridad Nacional”, en *Cuadernos DO CIM*, Universidad Federal de Pelotas, Brasil, Año 1, Vol. 1, n°1, enero 2017.

militares o civiles del interior existentes especialmente para la defensa del país.³¹⁶ En Argentina, no existía todavía ninguna ley que contemplara la seguridad de las zonas fronterizas, consideración que tuvo la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional y quedó efectivizada en dicho decreto.

Hacia el año 1960, la provincia de Córdoba se convirtió en un epicentro de conflictos intensos, que derivaron en la intervención de la provincia. El momento de mayor conflictividad se produjo el 16 de febrero con la explosión de los tanques de combustible de la empresa Shell-Mex. Este atentado sucedió en el marco de la visita a la capital cordobesa del Ministro de Economía Alsogaray y el Secretario de Guerra, general Rodolfo Larchner. Desde algunos sectores de las Fuerzas Armadas se acusaba al gobernador frondicista, Arturo Zanichelli, de ser el responsable de la infiltración comunista en el gobierno de la provincia de Córdoba.

El gobernador finalmente fue destituido de su cargo y el atentado se definió como un acto de terrorismo, dando paso a la intervención federal de la provincia. Se procedió con la creación de un Consejo de Guerra Especial presidido por el Coronel Juan Carlos Sánchez y el personal militar detuvo a dirigentes sindicales y del peronismo cordobés. Este clima de confusión, también fue parte de las diversas maniobras de las Fuerzas Armadas para debilitar al gobierno.

El contexto de crisis dentro de las FFAA y el incremento de la agitación social, tenía su correlato en un debilitamiento e inestabilidad en la conducción política del país. La serie de atentados cobraban mayor gravedad para la situación política como lo ocurrido en Córdoba y luego el atentado del día 12 de marzo de 1960 en la casa del militar David René Cabrera donde muere su hija de 3 años, condujo a las Fuerzas Armadas a presionar aún más al gobierno para que tomara medidas urgentes. La situación llevó a que el 13 de marzo de 1960, mediante el decreto N°2628, se pusiera en ejecución pública en todo el país el Estado de Conmoción Interior del Estado, que se había declarado por decreto en 1958. A partir de las 0 horas del día 14 de marzo regía la normativa donde los secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas dispondrían que las autoridades de ejecución del Plan Conintes, Comandante en Jefe del Ejército Conintes y Comandantes equivalentes en Marina y

³¹⁶ Decreto N° 15385, 13-jun-1944, art. 1; InfoLeg: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31918/norma.htm.

Aeronáutica, hicieran efectiva la subordinación de las policías provinciales, “en la medida indispensable a las necesidades concretas de cada zona o subzona de defensa”.³¹⁷

Fue a partir de este momento cuando el conflicto político social, considerado desde el gobierno, se militarizó. Es decir, la situación nacional se vio expuesta a una intervención no sólo militar, desde lo práctico, sino a un análisis atravesado desde una perspectiva político-militar. Se partía de una hipótesis de conflicto castrense, que como tal, establecía una zonificación del territorio en función de ésta, y se reorganizaba un esquema de movilización de las Fuerzas Armadas para cada zona y subzona de defensa, en términos de guerra, para enfrentar a un “enemigo ideológico”. La institucionalización de las prácticas represivas fue creciendo de manera progresiva y los términos de la legalidad comenzaban a sentarse sobre la base de un orden caracterizado por sus claros elementos autoritarios.

A los dos días de dictado el anterior decreto, se declaró al país en “situación de emergencia grave y la jurisdicción militar sobre delitos de intimidación pública y terrorismo”. Mediante el Decreto N°2639, se consideró que los actos de terrorismo desatados en el país revelaban la existencia del desarrollo de un plan de perturbación que intentaba destruir el orden constitucional e incidir en el funcionamiento de las instituciones del país. En algunos fragmentos de dicho decreto se dejaba en claro el carácter de excepción e intervención militar que se sancionaba una vez más sobre la vida de las personas,

“Que el gobierno de la Nación frente a reiterados desmanes de esa índole, se ha visto precisado a declarar y mantener el estado de sitio y adoptar importantes medidas de carácter militar, en el deseo de preservar el orden público y la seguridad de la población;

(...)

Que la Constitución Nacional acuerda al Congreso y al Presidente de la Nación los denominados “poderes de guerra” reglados en el Código de Justicia Militar y en otras Correlativas.

(...)

Que se hace indispensable, asimismo, establecer un régimen sumario de procedimiento para asegurar la celeridad en la

³¹⁷ Decreto N° 2628 (B.O 16-III/60), Anales de la Legislatura Argentina, La Ley: Buenos Aires 1961, pág. 367.

sanción rigurosa y ejemplar de manifestaciones antisociales de ese tipo”.³¹⁸

La ejemplaridad a modo de disciplinamiento de la sociedad, fue otra de las características que iban prefigurando la constitución de un Estado de Terror, o Estado Criminal, en términos de Calveiro,³¹⁹ a partir de la sistematicidad de las prácticas de excepción. Poco a poco, las Fuerzas Armadas cumplían funciones policiales y las instituciones policiales incorporaban a su disciplinamiento una militarización interna para garantizar el ejercicio represivo sobre el control total de la población.

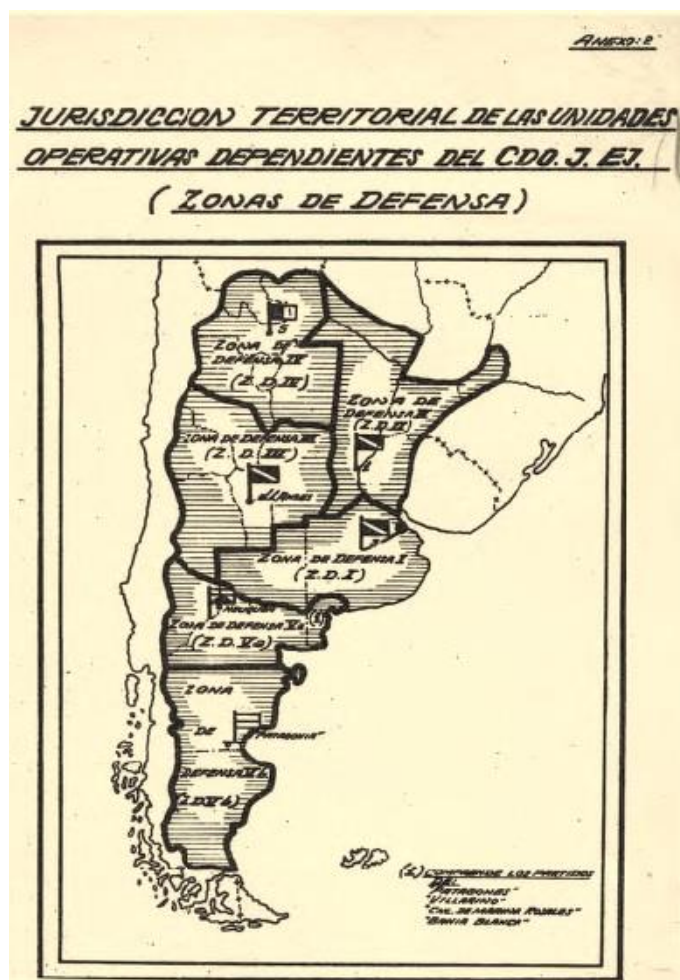
A partir del día 16 de marzo del corriente año, quedaron sometidas a jurisdicción militar las personas que incurrieran en delitos como: participación criminal, instigación; apología del crimen; encubrimiento, etc. El amplio margen conceptual sobre la definición del delito que englobaba la idea misma de “terrorismo”, sumado al sinnúmero de artículos a los que quedaban sometidas, daba cuenta una vez más de la arbitrariedad de la normativa, que en este caso, no era considerada como “preventiva”, sino que se ejecutaba sobre el estado de conmoción interna que vivía el país. Cada persona detenida quedaría bajo el Comandante de zona de defensa en jurisdicción del Ejército y los comandantes de áreas en jurisdicción de Marina y Aeronáutica. En cada caso, ordenarían la constitución de los Consejos de Guerra establecidos en el Código de Justicia Militar, que habilitaban la pena de muerte. Dicho código se creó en julio del año 1951, a partir de la Ley 14.029 y fue teniendo diversas reformas, hasta que finalmente se derogó en el año 2008.³²⁰

³¹⁸ Decreto N° 2639 (B.O 16-III/60), Anales de la Legislatura Argentina La Ley: Buenos Aires 1961, pp. 367-368.

³¹⁹ Calveiro, Pilar, “La centralidad de la guerra y lo concentracionario en la reorganización global del poder”, en Pinedo...et.al, *Políticas del terror: las formas del terrorismo de Estado en la globalización*, Buenos Aires: Ad-Hoc, CIAJ, 2007.

³²⁰ “Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983) Marianela Scocco” (pp. 207-237), en Águila Gabriela, Garaño Santiago, Scatizza Pablo (coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del Golpe*, Universidad Nacional de La Plata, 2016, pág. 209.

Mapa 1: División territorial de Argentina en cinco zonas militares, 1960.



Fuente: Anexo B, Boletín Confidencial de la Secretaría de Guerra N° 268, Archivo General del Ejército, Buenos Aires, 5 de febrero de 1960.³²¹

El 11 de mayo de 1960, hubo una reunión en el despacho del presidente Frondizi, junto con representantes de las distintas Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa, con la finalidad de analizar los resultados hasta el momento de la aplicación del Plan Conintes.³²²

³²¹ Anexo B, Boletín Confidencial de la Secretaría de Guerra N° 268, Archivo General del Ejército, Buenos Aires, 5 de febrero de 1960. En, Chiarini Sebastián, Rosa E. Portugheis, coord. *Plan Conintes, represión política y sindical*, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria, 2014.

³²² A la reunión convocada por el presidente participaron el Ministro de Defensa Nacional, Dr. Justo Policarpo Villar, los Secretarios de Guerra: General de División, Rodolfo Larcher, de Marina Contraalmirante Gastón Clement, de Aeronáutica Brigadier Ramón Abrahán; los sub secretarios de Guerra General de Brigada Víctor

En los informes presentados, se destacaban los sucesos en Córdoba, donde luego de la explosión del depósitos de combustibles de la empresa Shell-Mex, fueron detenidas 70 personas, y según lo relevado por la Marina, en el marco de su jurisdicción, de los 21 implicados 14 fueron condenados por terrorismo con penas de hasta 18 años. Mientras que la provincia de Buenos Aires, era la segunda en el orden de detenciones. Se destacaba la intervención de los distintos servicios del Ejército y la policía subordinada a éstos, en la zona de la ciudad de La Plata.

Luego de estas exposiciones, el presidente Frondizi subrayó la justificación de la aplicación de los decretos, tanto desde lo jurídico, como lo histórico y la defensa del Patrimonio Nacional y dejó en claro la continuidad del Conintes:

“Respecto a la legalidad del mismo, ahora o posteriormente se podrá determinar. Pienso que es constitucional (...) y que el Poder Ejecutivo ha mantenido el orden legal para dictarlo. Si se estudia el caso, haciendo abstracción de la situación que se vivía en el momento en que se dictó, podría decirse que no, pero el Gobierno defenderá ante el Poder Judicial o Legislativo con los fundamentos expresados”.³²³

A pesar de estas apreciaciones, en los meses siguientes desde las propias Fuerzas Armadas, se consideraría necesario poner fin a la aplicación del Plan Conintes, con una serie de sugerencias para el gobierno, dado que su ejecución estaba profundizando malestares hacia adentro de las Fuerzas y en particular en el Ejército. El planteo de disconformidad ante la situación establecida por el decreto Conintes esgrimía la ilegalidad del mismo, pero con la intención de presionar para tomar medidas más severas y rápidas como la aplicación de la Ley Marcial. Se recomendaba que antes de darle fin al Plan, el Congreso Nacional debía

Hosking, de Marina Contraalmirante Eladio Vázquez, de Aeronáutica Brigadier Horacio Rivara; Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Carlos Toranzo Montero; Comandante de Operaciones Navales Almirante Alberto Vago, Comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Manuel Aleman; Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Octavio Zenarruza, el Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación Brigadier Baldomero Llerena y los Coroneles Héctor Velez, Manrique Mom y Manuel Laprida. CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.2.1, Fuerzas Armadas-Ministerio de Defensa Nacional, enero-mayo 1960, pág. 1.

³²³ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.2.1, Fuerzas Armadas-Ministerio de Defensa Nacional, enero-mayo 1960, pág. 4.

sancionar una Ley de Seguridad Social; se intervinieran las Universidades; y se iniciara o concretara una lucha cabal contra el comunismo. Se consideraba que si el presidente llevaba adelante estas medidas, se terminaría definitivamente con el descontento vigente en las FFAA.

“Se recuerda que el decreto que puso en vigencia el Plan Conintes, ‘carece de legalidad’, por haber sido firmado solamente por el Señor Presidente y el Secretario de Guerra, faltando las firmas de los otros respectivos ministros. Además, antecedente sugestivo, ese decreto lleva ‘extrañamente’ la firma del general Toranzo Montero. Estas circunstancias, (...) invalida aquel decreto”.³²⁴

Ese umbral indeterminado entre democracia y absolutismo, como definió Giorgio Agamben³²⁵ al Estado de excepción, se materializa en esta clara apreciación por parte de las Fuerzas Armadas del país. La invalidez de un decreto que si bien era parte del orden jurídico vigente, suspendía a su vez el Estado de Derecho, junto a la posición de un sector que históricamente se dedicó a intervenir de facto en el poder político, y se vestía de legalidad para desplazar y anular las decisiones presidenciales.

La puesta en práctica del Conintes fue la contrapartida de las manifestaciones obreras y los conflictos sociales que estallaban en diversos focos de lucha a la largo del territorio Nacional. El comunismo se utilizaba como el marco internacional que cobraba una versión local expresada también en el peronismo.

El abogado laboralista Norberto Centeno,³²⁶ detenido bajo el plan Conintes en la cárcel de Rawson, expresó en un texto redactado durante su detención, la situación de excepcionalidad que se estaba viviendo en el país:

“La Justicia Conintes no es justicia, sino acto de poder, poder irresistible que supera la eficacia de las protestas reducidas hasta

³²⁴ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.4.8.2.1, Fuerzas Armadas-Ministerio de Defensa Nacional, junio-septiembre de 1960, pág.2.

³²⁵ Agamben, Giorgio, *Estado de Excepción*, Valencia, Pre-Textos, 2004.

³²⁶ Norberto Centeno fue desaparecido el 6 de julio de 1977, durante la llamada “Noche de las Corbatas”, Plata, donde fueron secuestrados once abogados y sus familiares en la ciudad de Mar del Plata, por integrantes del Ejército Argentino.

el momento -salvo la palabra pendiente de la Corte Nacional- a la importancia que caracteriza a las abstracciones. La libertad en la República ha perdido realidad, por ello, cuando superado este proceso de circunstancial distorsión de las instituciones, vuelvan los magistrados a ocupar los estrados ahora desiertos, habremos de meditar quienes tengamos vocación para el derecho, que los cargos de jueces son dignidades que las otorga el pueblo a través de la constitución y la ley, que son dignidades que no las confieren ni ejercen los soldados”.³²⁷

Centeno destacaba cómo por medio de un solo decreto -2639/60-, se había logrado instrumentar todo un sistema de represión. Así, invocando “un estado de emergencia nacional”, discrecionalmente se habían entregado facultades al Ejército por encima del Congreso de la Nación, suspendiendo cualquier garantía constitucional a las y los ciudadanos. Los antecedentes represivos se iban escribiendo, dejando huella en cada zona, sub zona y área de defensa establecida bajo la autoridad militar; en cada consejo de guerra instalado; en cada detención. Las Fuerzas Armadas eran grandes vigías de la población y junto con ésta última, el gobierno civil de Frondizi era custodiado y condicionado, para que su política se moviera dentro de los parámetros militares impuestos desde el Golpe de Estado de 1955, ejecutado por la llamada Revolución Libertadora.³²⁸

Por su parte, el citado abanico de normativas y disposiciones del Plan Conintes tuvo una incidencia directa en las políticas provinciales. Oscar Alende, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires por la U.C.R.I, uno de los principales colaboradores de Frondizi, quien supo reconocer las condiciones de fragilidad democrática en las que había asumido el gobierno. En su discurso dado el 2 de mayo de 1958 en la Cámara de Senadores de la provincia, se refirió a la ciudadanía y a las limitaciones en el ejercicio pleno de sus derechos cívicos.³²⁹ En materia de seguridad, como se mencionó, hacia 1960 aún regía el

³²⁷ Centeno, Norberto, “Justicia CONINTES y Estado de Derecho, 1961”, en Damin, Nicolás, *Plan CONINTES y Resistencia Peronista, 1955-1973*, Instituto Nacional Juan Domingo Perón, 2010, p. 102.

³²⁸ El plan Conintes se dio por finalizado el 1 de agosto de 1961. Con la sanción del Decreto 6495 quedaron derogados los anteriores decretos que lo habilitaban. Esta decisión política no significó el fin de la persecución, ni mucho menos de la represión, ya que existía otra normativa que habilitaba las mismas prácticas persecutorias, como la Ley de Represión a las Actividades Terroristas, que había sido sancionada en julio de 1960, y que establecía severas penas en un marco amplio de ambigüedad en la definición del “terrorista”.

³²⁹ Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 2 de mayo de 1958, pág.26, en: *Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires: Oscar Eduardo Alende, 1958 – 1962*, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Levene.

estado de sitio y el plan Conintes en todo el país. En este contexto y a partir de la sanción del Decreto Nacional 2628/60, la policía de la provincia quedó subordinada a las autoridades militares, en función de lo estipulado por dicho plan para la represión del “terrorismo”. Esta situación fue ratificada por el gobernador Alende, quien a pesar de sostener en cada sesión anual un discurso constitucionalista, debió continuar justificando el orden vigente de “emergencia”, que suspendía los derechos básicos civiles, al convalidar la represión para “impedir el desborde terrorista”, como “una necesidad impostergable que exige como primer deber la seguridad del Estado”.³³⁰

Desde el gobierno de la provincia se dejaba explícito que los objetivos para la policía eran “...sustraer la política partidaria de la función policial, deslindarla de la actividad judicial y hacerla preponderantemente preventiva”.³³¹ Este último rasgo fue concluyente a la hora de las decisiones en la inteligencia policial. La dimensión de lo preventivo hacia 1961 recobró vigencia en las definiciones aplicadas en la dependencia de inteligencia provincial, el carácter de la información se constituyó como un elemento esencial de las políticas preventivas en el orden de la seguridad interna. No obstante estas intenciones, el propio gobernador admitió que priorizar la tarea preventiva por sobre la represiva, era una meta aún condicionada principalmente por la capacitación técnica y espiritual que impartían en las escuelas, el incremento de la dotación de personal y el reequipamiento material de la repartición.³³²

Los cambios aplicados para este año, aparecen en la Orden del Día n° 20.551, donde se anunció la resolución del día 26 de julio de 1961, mediante la cual se suprimió la Dirección Central de Inteligencia, y se creó sobre la misma base el “Servicio de Informaciones Policiales” (S.I.P), dependiente de la Jefatura de Policía. El 23 de agosto del mismo año se publicó la resolución por la que se determinaba que dicho organismo pasaba a registrarse como S.I.P.B.A.,³³³ especificando de esta manera la pertenencia a la provincia

Colección dirigida por Claudio Panella, La Plata: Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2007 (Serie: Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires).

³³⁰ Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, 2 de mayo de 1960, en: *Mensajes de los gobernadores...* Op. Cit., pág.6.

³³¹ Barba Fernando, Demaría Massey, María Elena, *La provincia de Buenos Aires 1910-1987*, La Plata: Gobierno de Buenos Aires, Archivo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Levene, 1987, pág.112.

³³² Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 2 de mayo de 1960, en: *Mensajes de los gobernadores...* Op. Cit., pág.6.

³³³ Orden del Día N° 20.573, Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”. Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, 30 de agosto de 1961.

de Buenos Aires. En un informe elaborado por este organismo se detallaba el procedimiento práctico para su funcionamiento, desde donde se comprendía a todos los integrantes de la policía, sin distinción ni jerarquía, como agentes de información:

“El Servicio de Informaciones Policiales, en su carácter de asesor directo del señor Jefe de Policía, procederá a analizar en última instancia la información recibida, lo que dará lugar a que se redacten las cartas de situación de cada uno de los factores clásicos; gremial, político, subversivo, estudiantil, social, y, en forma particular, COMUNISMO”.³³⁴

El carácter de la “información” comenzaba a cobrar importancia, siendo una obligación en cada seccional que sus comisarios se convirtieran en Jefes del Servicio Informativo local, cuyo personal automáticamente pasaba a conformarse en agente informante del organismo. La información producida en cada seccional se centralizaba en la Jefatura de la Unidad Regional, los jefes de dichas Unidades Regionales tenían a su disposición oficiales asesores que habían realizado el curso de informaciones o que acreditaban más de tres años en la especialidad de informaciones, quienes luego enviarían la información depurada al Jefe del Servicio de Informaciones Policiales. Finalmente, el material regresaría a las Unidades Regionales de manera elaborada según los parámetros de análisis a los que fuere sometido en dicha entidad.

Para la realización de las tareas de búsqueda, la SIP contaba con “Brigadas Secretas”, vehículos y personal de civil, de la misma manera que las Unidades Regionales, deberían tener su propio personal secreto, que era el que en el momento oficiaba de infiltrado en determinados acontecimientos sociales y políticos, “con lo que queda establecido que el órgano informativo también operará en forma encubierta para la obtención de información ‘cerrada’ ”.³³⁵ Por lo contrario, se consideraban fuentes de información abiertas a aquellas noticias que se pudieran obtener mediante el Registro Civil, Jefe de estación, entre otras instituciones de carácter público.

Este organismo era considerado como un potencial en materia informativa, al que se apostaba transformar en el más importante del país, cuya finalidad establecía, a partir de

³³⁴Archivo DIPPBA, “Procedimiento práctico para el funcionamiento informativo en esta organización policial”, Carpeta Decretos, leyes y disposiciones, legajo N° 95, 1961. (Mayúsculas del original).

³³⁵Archivo DIPPBA, “*Procedimiento práctico para el funcionamiento...*”, Op. Cit.

estas disposiciones, la misma cantidad de agentes informantes como el personal total que tuviera la Repartición Policial. Las formas del secreto se iban incorporando como una condición inherente a cada organismo de seguridad, dimensión que conllevaba a una noción del control social cada vez más abarcadora.

A pesar de estos cambios en las jerarquías y funciones de la dependencia provincial, en las conclusiones expresadas en un legajo perteneciente a dicha dependencia, se aducía que la posición ante el problema comunista durante el período de Frondizi, había mantenido las mismas condiciones que en los tiempos de “la Libertadora”. Es decir, existía una mirada crítica ante el accionar endeble de las fuerzas de seguridad frente a un peligro considerado de trascendencia mundial. Pero las críticas dejaban traslucir una valoración de incompatibilidad entre un “sistema democrático” y la necesidad de ejecutar medidas efectivas que controlen las actividades “subversivas” y “terroristas”, que atacaran el fondo del problema. Esta era la mirada militar, en plena vigencia de la intervención de las Fuerzas Armadas en la policía, mientras que el debilitamiento del gobierno constitucional ante la presión permanente de los militares, se podía comprender con la siguiente caracterización:

“Durante un gobierno constitucional, el estado de derecho, obliga a adoptar numerosas medidas legales. Por ejemplo, para cada actividad ejecutiva, derivada de la aplicación del Decreto 4695, es necesario promulgar un decreto (cada clausura del local; cada prohibición de películas, etc., merece un decreto particular). Esto aumenta considerablemente el número de las medidas legales, que harían aparecer en un estadística fría, una desproporción con el período anterior”.³³⁶

Las apreciaciones esbozadas inducían a la poca capacidad de acción que podía tener un gobierno constitucional frente a estos temas. Es interesante observar el subrayado, “estado de derecho”, donde en el fondo se estaba reconociendo que se podía hacer lo mismo acortando tiempos. Las engañosas formas de la legalidad habilitaban la sanción sistemática de decretos que bajo el sintagma “fuerza de ley”,³³⁷ el poder ejecutivo estaba autorizado a emanar aplicando el mismo contenido, pero por distintas vías, eran definiciones que englobaban particularmente al Estado de excepción.

³³⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961 folio 38. (Subrayado del original).

³³⁷ Agamben, Giorgio, Op. Cit., pp. 79-80.

La legislación represiva fue una constante de la que hicieron uso distintos gobiernos constitucionales, sin haber sido alterada en gobiernos de hechos, sino por el contrario habiendo allanado el camino para su continuidad y profundización. El planteo de la acción oficial frente al comunismo destacaba la importancia de crear una mística nacional anticomunista, es decir, pensar en la sociedad en su conjunto como un “anticuerpo”, por el cual bajo un gobierno democrático la acción oficial debía garantizar una legislación adecuada, el orden y la defensa para atentar contra el comunismo. Se insistía en que esta sería “la base para poder actuar”, de lo contrario los valores de la civilización y de la organización democrática se pondrían en peligro. Por lo pronto, la síntesis superadora al considerado problema comunista, se encontraba en las formas de la civilización occidental-cristiana y democrática, el verdadero desarrollo de estos conceptos resolvería los problemas de la Nación:

“Actuemos y ubiquemos al país en los verdaderos conceptos significativos del slogan de moda: civilización occidental-cristiana y democracia. Que no sean palabras huecas. Esas tres palabras tienen un significado tan profundo y complejo, que si pudiéramos desarrollarlos y aplicarlos, resolveríamos los problemas de la Nación.”³³⁸

IV.4. “Bosquejo sobre lo que es el Terrorismo”

En 1958 quedó derogada la histórica Ley de Residencia N° 4.144. Esta medida fue considerada por la dependencia policial de inteligencia como una definición que dejó indefenso al Estado contra los extranjeros, ya que establecía un marco legal para el control de los comunistas forasteros. Sin embargo, puede considerarse que la aprobación de la ley de represión a las actividades terroristas sancionada dos años después a dicha derogación, fue el instrumento legal que habilitó y reforzó las medidas precautorias y persecutorias hacia el amplio abanico de posibilidades que incorporaba el concepto de “terrorismo”.

La Ley de Represión de las Actividades Terroristas N° 15.293, publicada en el boletín oficial el 12 de agosto de 1960, fue considerada una ley de emergencia, cuyos

³³⁸ Archivo DIPPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961, folio 41.

objetivos eran la represión de las actividades terroristas en todo el territorio de la República, “...en cuanto atentan contra la seguridad de los bienes o de las instituciones de la Nación”.³³⁹ A partir de aquí quedaban establecidas distintas penas a prisión en función de las características del “atentado”.

La definición sobre aquello que se comprendía como “terrorista”, fue descripta por un documento de inteligencia policial en un bosquejo que aducía a su historia y a su reconocimiento en diversos estallidos sociales de gran trascendencia como las huelgas del gremio de las y los bancarios en 1959. En este marco, el planteo de la Central de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, destacaba la urgencia de un reordenamiento legal para que el accionar de las fuerzas del orden no terminara convirtiéndose en prácticas “arbitrarias” y “sin sentido”. Estas apreciaciones se reforzaban con referencias históricas que argumentaban la sanción de leyes represivas en el año 1894 y 1895, ante el llamado “Terrorismo Rojo” desatado en España. El aparato represivo de la policía zarista en Rusia, era el modelo más acabado para el combate contra el terrorismo, “...tenía prácticamente controlado el inmenso territorio. Desorganizó sus mismas centrales y células terroristas, aplicó castigos severos, esporádicamente primero, y en forma continua después...”.³⁴⁰

El contexto de producción de este “bosquejo sobre el terrorismo”, remite a la huelga de los trabajadores y trabajadoras bancarias en el año 1959. Estos hechos de conflictos gremiales contra el gobierno de Frondizi fueron utilizados como ejemplos del accionar “terrorista” y “subversivo”, cuyas dos causas principales eran adjudicadas al factor político y gremial:

“Se puede afirmar que en todos los casos, la finalidad última perseguida por el terrorismo organizado como el que actualmente se lleva a cabo en nuestro país, es la de implantar UN ESTADO GENERAL TAL, QUE HAGA FACTIBLE EL COPAMIENTO DEL PODER. Etapa precedida generalmente por un aglutinamiento de tácticas de INFILTRACIÓN y golpes de carácter revolucionario-subversivo”.³⁴¹

³³⁹ Ley Nacional N° 15.293, “Represión de las actividades terroristas”, en: *Anales de la Legislatura Argentina*, 12 de agosto de 1960, Tomo XX-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 45.

³⁴⁰ Archivo DIPPBA, “Bosquejo sobre lo que es el terrorismo”, Carpeta, decretos, leyes y disposiciones, legajo n° 95, 1959, folio 4.

³⁴¹ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 3.

El incrementado nivel de protesta gremial era definido como parte del mecanismo de infiltración subversiva que creaba un “estado psicológico especial”, dando por resultado una sucesión de hechos “terroristas” de alta peligrosidad. Sin embargo, el proceso de movilización bancaria había comenzado en los primeros meses de 1958, cuyo resultado exitoso duró hasta diciembre del mismo año, cuando bajo el gobierno de Frondizi se implementó el “Plan de Estabilización”, definido por el crédito otorgado del Fondo Monetario Internacional. Según establecía el Plan, “los aumentos salariales debían ser regidos por el aumento de la productividad. Cuando la inflación fue avanzando sobre el tope pactado con los bancarios, el conflicto fue inevitable”.³⁴²

En dicho documento se afirmaba que era difícil comprobar la relación entre terrorismo-comunismo, aunque paradójicamente se alertaba que cualquiera fuere el origen de los hechos, siempre eran instrumentalizados por los “bolcheviques”. Esta aseveración se sustentaba con el ejemplo del conflicto bancario asimilando el interés de los cuadros comunistas a las bases peronistas radicadas en el movimiento obrero. “De este modo, aunque a veces puede ocurrir que por motivos de resentimiento se tenga un ejecutor no comunista, será necesario establecer en qué medida eso sirve al comunismo”.³⁴³ En esta línea se inscribía la suposición sobre los mecanismos del aparato clandestino del comunismo, que tenía al terrorismo como vehículo, se reconocía en éste y su infiltración, la clave de la infusión terrorista. Desde diarios conservadores como “La Nación”, también se analizaba a los actores que desataban el caos social, ubicando a peronistas y comunistas en la primera fila.³⁴⁴

Por su parte, en los archivos conservados en el sub-fondo de la presidencia de Arturo Frondizi, existe un informe que da cuenta del conflicto bancario y su vinculación con el comunismo internacional, “Se tiene conocimiento, que el Secretario de la Federación Mundial de Uniones de Trabajadores de Praga, remite a RUBEN ISCARO, la cantidad de

³⁴² Acha, Omar, "La huelga bancaria de 1959 y los problemas de un movimiento obrero dividido", en *Revista del Centro de Cultura y Cooperación*, n° 2, enero/ abril de 2008. www.centrocultural.coop/revista/articulo/31/, pág. 1.

³⁴³ Archivo DIPPBA, Op. Cit., folio 3.

³⁴⁴ Acha, Omar, "La huelga bancaria de 1959... ", Op. Cit.

u\$s 4.110, esta suma deberá ser destinada a la ayuda económica de los compañeros bancarios”.³⁴⁵

El accionar del aparato represivo no bastaba para la erradicación del terrorismo, considerado como una profunda alteración social y una ruptura de la función de la comunidad, la labor de la Central de Inteligencia no debía limitarse al “acto negativo” de la represión, sino que debían concentrarse en la información e interpretación adecuada. “La policía y esta Central en particular deben ser el instrumento de una recta y cabal información”. La creación de un clima de hostilidad social, era analizada también como una de las bases sobre las que sostenía el terrorismo. Por lo cual debían suprimirse los cimientos que sustentaban el desorden y la violencia, considerado la difusión de un espíritu de rebelión, que cobraba signos de legitimidad en las masivas adhesiones expresadas en las manifestaciones obreras. Se hacía hincapié en la distinción entre el “terrorismo organizado” y el “terrorismo” como estallido de la violencia. Todos estos aspectos eran la base que debía ser suprimida, ya que eran analizados como los instrumentos que el “aparato clandestino bolchevique”, capitalizaría para su partido.

La vigilancia aparecía, en este contexto, como la definición misma de la Central, pero que a su vez resultaba ineficiente ante el panorama descripto. La exigencia de un marco legislativo riguroso era el “respaldo” que garantizaría la efectividad en las medidas tomadas. Se traslucía un espíritu por incrementar acciones represivas, pero se avizoraba la necesidad de un orden legal que las amparara, para evitar que el “resentimiento” social se canalizara contra la misma policía. La dimensión de lo legal se interpretaba como un salvoconducto para ampliar las atribuciones que hacían a la propia labor de vigilancia. Este amparo legislativo se concebía como la píldora constitucional que legitimaría el accionar policial, para también lograr la confiabilidad institucional en la comunidad. Así, la normalidad y la excepcionalidad se estructuraban mutuamente, sin distinguirse la una de la otra, apareciendo la excepcionalidad en esa zona de indiferenciación, ni externa ni interna al orden jurídico.

Sin embargo, el declarado estado de sitio fue el contexto de muchas huelgas y del conflicto en particular mencionado. Esta medida liberó la represión policial permanente,

³⁴⁵ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4, Comunismo folio 9, julio de 1959.

siendo declaradas “ilegales” por decreto las huelgas desatadas entre los meses de marzo y junio por el sector bancario. Los enfrentamientos se intensificaron, hubo muchos detenidos y heridos a lo largo de los meses de lucha. Estos sucesos llevaron a que algunos bancarios analizaran que la intencionalidad del gobierno era tensar el conflicto gremial al extremo, para lograr destruir al gremio y expulsar personal. La escalada represiva se respaldaba con los argumentos del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, David Blejer, quien denunció la huelga “como una maniobra de provocación comunista”, o declaraciones al estilo, “no cederemos a la subversión”, de una connotación ideológica que se emparentaban con lo analizado por la policía de la provincia.³⁴⁶ Bajo un discurso bélico y desde conceptualizaciones amplias como la de “terrorismo”, se enmascaraba la dimensión humana de las manifestaciones y los reclamos, como la negación de la existencia de un proyecto político alternativo al vigente.

De todos modos, las acusaciones sobre la infiltración comunista en el gobierno fueron una constante. Desde los archivos de la presidencia de Frondizi, en su carpeta referente a “Comunismo”, pueden encontrarse en los primeros folios un detalle sobre diversos aspectos que concernían a los problemas gremiales, el peronismo y el comunismo. Si bien en el informe no está detallada su procedencia, se encuentra en uno de los apartados titulado, “Gobierno y Comunismo: Ataque al gobierno con el pretexto de tener la ideología comunista”, indicando “el comunismo del presidente y de muchos funcionarios”.³⁴⁷ Proseguía un subtítulo con que se remitía a los gobernadores y gobiernos provinciales considerados comunistas, filo y/o criptocomunistas, y una aclaración que afirmaba como las resoluciones y métodos aplicados por el presidente en la crisis de la FFAA, revelaban su deseo de disolución de las mismas. No obstante, la preocupación de esta supuesta infiltración roja en el gobierno tuvo su correlato desde la propia presidencia en un pedido de informes. La Secretaría de Estado de Marina, relevó una nómina de personas con antecedentes comunistas que ocupaban diversos cargos, a nivel nacional y provincial. Este informe, pedido por el presidente Frondizi, fue entregado el día 31 de marzo de 1959.³⁴⁸ En

³⁴⁶ Acha, Omar, Op. Cit., pág. 7

³⁴⁷ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4 Comunismo, folio1, pág.2. s/f.

³⁴⁸ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4, Comunismo, s/folio, 31 de marzo de 1959.

el mismo se detallaban los antecedentes de 68 personas que habían desempeñado o estaban en funciones públicas, desde la asunción del gobierno provisional hasta el momento.

A los antecedentes, se sumaba un pormenorizado informe de la Agencia Informativa Católica (AICA), donde se caracterizaba al asesor político del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Héctor Espeche Lavié, como “activísimo militante del PC”. Lavié, había sido expulsado del partido en 1946 a raíz de sus disidencias en el IX Congreso del Partido, pero se involucraba a su esposa y hermano, como afines a la ideología comunistas, por su participación en la Liga de los Derechos del Hombre de la Argentina.³⁴⁹

Este tipo de acusaciones, también tenían su argumentación en las publicaciones de la prensa comunista, durante los primeros meses de la gestión frondicista. En el periódico comunista *La Hora*, se destacaba el rol del gobierno, luego de que una delegación del PC tuviera una entrevista con Frondizi y el Ministro del Interior Dr. Vitolo. La delegación estuvo conformada por, Victorio Codevilla, Jerónimo Arnedo, Rodolfo Ghioldi y Víctor Larralde:

“El camarada Rodolfo Ghioldi declaró en *La Razón* de ayer, refiriéndose al discurso que las palabras del ministro son irrefutables. Efectivamente desde el 1 de mayo el país vive una nueva condición, sin juntas de inquisición, sin ley de residencia, sin dictador discriminatorio: todo autoriza a creer que el Congreso aprobará los proyectos sometidos a su consideración, y dirigidos a garantizar los derechos: ante ello puedo citar por su importancia, el que arma a cada ciudadano con la acción de amparo”.³⁵⁰

Las declaraciones de la prensa oficial comunista, si bien podían ser guiños políticos para la nueva gestión, no tardaron en cambiar el enfoque de la cuestión. Los primeros gestos del gobierno pronto fueron arrasados por una permanente crítica al rumbo político que iba tomando el gobierno, incluyendo la serie de medidas represivas que se fueron sancionando durante los siguientes años de la gestión. Los artículos de la prensa comunista, como *La*

³⁴⁹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4, Comunismo, “Informaciones sobre el comunismo argentino y organizaciones vinculadas al mismo”, AICA, Boletín Informativo N°179, 13 de diciembre de 1959, pág. 53.

³⁵⁰ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4, Comunismo, “Entrevistó a Frondizi una delegación del Partido Comunista”. Subtítulo: “Ha causa gran satisfacción el discurso de Vitolo”, Diario *La Hora*, 25 de junio de 1958.

Hora y Propósitos, continuaron al poco tiempo marcando una fuerte crítica a las medidas pro extranjeras del presidente, el aumento de precios y tarifas, la entrega del país al imperialismo y a la oligarquía y la influencia de Estados Unidos en la resolución de las medidas económicas de la Argentina.

La prensa comunista comparaba el discurso de Frondizi con un discurso del “ex dictador Perón”, del 18 de febrero de 1952, aludiendo que era la “misma música con distinta letra”.³⁵¹ Estas caracterizaciones, como se pueden apreciar, fueron en el marco del primer año de gestión, donde la prensa comunista durante los primeros meses expresó manifestaciones positivas, pero que al poco tiempo tuvieron un giro drástico, dadas las políticas de ajuste implementadas por el gobierno, que repercutieron en los aspectos sociales y económicos del país, como así también la permanente persecución ideológica que se puso a la orden del día.

La ambigüedad de la política de Frondizi puede entenderse ante la constante presión militar, la implementación de un cambio en el modelo económico que transformara el subdesarrollo en una economía moderna y algunos gestos políticos que preocuparon a los militares y a los sectores antiperonistas y anticomunistas. La relación con el presidente brasilero Jânio Quadros, cuyo gobierno había proclamado la neutralidad en el enfrentamiento soviético-norteamericano y la simpatía hacia los cambios acaecidos en la isla comunista; el encuentro con Ernesto “Che” Guevara en 1961, Ministro de Industria en Cuba en ese momento; la abstención argentina en la Conferencia de Cancilleres en Punta del Este, auspiciada por la OEA, que expulsó a Cuba del sistema interamericano, fueron presagios de un desenlace que terminaría con el gobierno frondicista, entendido en un contexto democrático condicionado por la intervención militar y el poder vigente de este sector en la esfera política.

Tal como enuncia Potash, toda actitud que no era explícitamente de oposición a Cuba, bastaba para considerar que se estaba propagando el comunismo en la Argentina y en América Latina. Este proceso de desgaste que tuvo el gobierno resultó paradójico en tanto, fue considerado por algunos militares y los servicios de información que el presidente como algunos de sus colaboradores eran sospechosamente comunistas. La acusación directa

³⁵¹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4, Comunismo, “La misma música con distinta letra”, Diario *La Hora*, 31 de diciembre de 1958.

era hacia el Secretario de Relaciones Socioeconómicas del Estado, Rogelio Frigerio, quien en sus inicios había militado en el Partido Comunista, pero luego se habría alejado, habiendo sido miembro fundador de la Unión Cívica Radical Intransigente y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Desde la oposición y los sectores militares se lo acusaba de ser comunista, a tal punto que desde la Marina y el Ejército se le pidió al presidente Frondizi que se lo removiera, para mejorar la imagen del gobierno ante las Fuerzas Armadas. Según un informe del Servicio de Información Naval (SIN), Frigerio estaba acusado de ser el principal promotor de la infiltración comunista en el gobierno. Ante estas presiones y extravagancias en relación al funcionario, Frondizi lo destituyó de su cargo político, pero lo ubicó como asesor personal en la Residencia de Olivos, actitud que debilitó aún más las relaciones del presidente con los militares.³⁵²

El 18 de marzo se realizaron elecciones provinciales sin el peronismo proscripto, resultando éste victorioso en la mayoría de las provincias, como lo fue el triunfo del candidato peronista Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires. Esta situación llevó a varios intentos de Frondizi por contener el cuadro político que se avecinaba. Se ordenó la intervención en las provincias donde había resultado ganador el peronismo; cambió su gabinete y le pidió al General Aramburu que abriera una mediación con los partidos políticos, que finalmente no dieron su apoyo. De esta manera, el camino se fue allanando para la destitución, cuyo reemplazo inmediato fue ocupado por el presidente del Senado, José María Guido, quizás aventajando el salto de las Fuerzas Armadas al poder. Apenas asumido al poder, Guido junto con los Comandantes en Jefe de las FFAA, anularon, entre otras cosas, los comicios realizados el 18 de marzo.³⁵³

El gobierno de Frondizi continuó hasta el 28 de marzo de 1962. “El señor presidente de la Nación ha sido depuesto por las Fuerzas Armadas. Esta situación es inamovible”, decía el comunicado oficial que había dado a conocer la Secretaría de Guerra, firmado por

³⁵² Potash, Robert, *El ejército y la política en la Argentina (II). 1945-1962, de Perón a Frondizi*, Buenos Aires: Hyspamerica, 1985, pág. 393.

³⁵³ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.5/03.51, Derrocamiento/Destitución en marzo de 1962, Acta Secreta Presidencia de la Nación, 29 de marzo de 1962, folio N°10.

el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Raúl Alejandro Poggi.³⁵⁴ La mañana siguiente fue trasladado a Aeroparque y llevado preso en un avión de la Fuerza Aérea a la Isla Martín García.

IV.5. Conclusiones

“...y no debemos equivocarnos el comunismo no es un partido político, pero sí, y eso debe destacarse, es la permanente fuerza de perturbación agresiva y moral en sus planteos... Siempre en acecho contra los pueblos... y el nuestro, también está en el punto de mira de su fusil gatillado...”. (Frondizi, 26 de noviembre de 1960)

Durante el gobierno de Frondizi las disposiciones en materia de seguridad también fueron parte de las permanentes presiones de las Fuerzas Armadas. No obstante ello, pudo verse cómo las decisiones presidenciales en cuanto a la militarización de la seguridad interna no fueron compatibles en su totalidad con la oficialidad castrense. Tal como analiza Pontoriero,³⁵⁵ la figura de un presidente débil y presionado por las autoridades militares pierde cierta veracidad al leer los documentos reunidos en el archivo presidencial, donde quedaba en claro la decisión de la aplicación del Conintes por sobre las recomendaciones de las Fuerzas Armadas, que planteaban la aplicación de medidas más “efectivas” y rápidas para aniquilar la insurgencia corporalizada en los comunistas y los atentados de la llamada Resistencia Peronista.

El gobierno de Frondizi comenzó con un prometedor programa que atrajo tanto a sectores del comunismo como del peronismo, prontamente desilusionados al respecto. Esta conversión se infiere en principio a la tensa y compleja relación que se mantuvo con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como se adujo, sus intenciones por un mayor control civil sobre las Fuerzas dieron como resultado la toma de medidas un poco más leves que las exigidas por los sectores militares, aunque finalmente el rol de las FFAA fue determinante en la dirigencia del país.

³⁵⁴ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.5/03.51, Derrocamiento/Destitución en marzo de 1962. Diario *La Razón* 29 de marzo de 1962.

³⁵⁵ Pontoriero, Damián Esteban, “Estado de excepción y contrainsurgencia: El Plan Conintes y la militarización de la seguridad interna en la Argentina (1958-1962)”, en *Contenciosa*, N°4, primer semestre 2015.

Como parte de los treinta y dos “planteos” militares que recibió el gobierno durante su gestión, se ejerció presión para que el gobierno argentino se alineara a la ofensiva norteamericana contra la reciente Cuba comunista, todo lo cual impactaba directamente en el territorio bonaerense.³⁵⁶ La Revolución Cubana (1959) y la independencia de Argelia (1962), fueron dos triunfos que alertaron la mirada de Estados Unidos, bajo la administración Kennedy sobre estas regiones, dado que en distintos países de América Latina surgían movimientos de izquierda armados, con sus respectivas particularidades regionales. La “Alianza para el Progreso”, fue parte de la política norteamericana que respondería con campañas contrainsurgentes por toda Latinoamérica para imponerse como el bloque hegemónico a nivel mundial. De esta manera, “el carácter de la defensa continental cambia durante la administración Kennedy, eliminando la posibilidad de un ataque directo de fuerzas extra continentales, la nueva Doctrina de Seguridad Hemisférica reservó la función de la defensa contra el enemigo mundial para los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN”,³⁵⁷ mientras que los ejércitos latinoamericanos, financiados por la potencia del norte, eran quienes se encargaría del combate contra el comunismo.

Estas experiencias que se encadenaban como parte de los resultados de la Revolución Cubana junto con la oleada de descolonización en África, tampoco fueron detonantes mayores, como sugiere Hobsbawn, de un cambio radical hacia el bando comunista. No obstante ello, a través de la llamada “guerra antisubversiva”, “guerra revolucionaria” inspirada tanto por la doctrina francesa, como por la formación militar de la Escuela de las Américas, se emprendió una atroz confrontación que constituyó la aniquilación de cualquier intento alternativo desde lo político al modelo norteamericano.

De modo que, los diversos mecanismos de control implicaron la intervención directa de tropas norteamericanas, el apoyo y la promoción a regímenes políticos dictatoriales, totalitarios y/o burocrático-autoritarios, la presión económica y la

³⁵⁶ Sobre los conflictos y el impacto de la política nacional en el devenir histórico de la provincia de Buenos Aires, puede consultarse la colección sobre la historia de la Provincia de Buenos Aires, donde algunos de sus aspectos replantean esta tensión que obtuvo como resultado una identidad bonaerense difusa, atravesada por los dilemas de la Nación. Véase, Palacio, Juan Manuel, “La provincia de Buenos Aires en la historia y en la historiografía”, en *Historia de La Provincia de Buenos Aires*, Tomo I, “Población, Ambiente y Territorio”, director, Otero, Hernán, Buenos Aires: Unipe, edhasa, 2014.

³⁵⁷ Barbero, Héctor, Godoy, Guadalupe, “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino. Décadas de 1950-1960”, en *Cuadernos de Trabajo* N° 55, Departamento de Derechos Humanos, Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junio 2003, pág. 36.

desestabilización de aquellos países que se conformaban a partir de las nuevas oleadas revolucionarias. Como telón de fondo, la existencia de una simplificación ideológica, en términos de Halliday, que posicionaba a la URSS como la responsable del quiebre de la distensión; el fantasma de un mundo en guerra y el desequilibrio a nivel mundial, se enmarcaba en la utilización de la propaganda del comunismo como una amenaza para toda la humanidad.

Este discurso se imprimió en la mentalidad de la jerarquía militar que intervino la Central de inteligencia policial en 1956 y continuó siendo su argumento principal para mejorar la estructura informativa y de control político en nuestro país. Tanto a nivel nacional y provincial se puede comprender una intensificación persecutoria en lo relacionado al “elemento comunista”, siendo el material de doctrina principal para el período, el análisis en perspectiva histórica sobre esta tendencia ideológica política y las clasificaciones sobre la misma con la terminología que los agentes debían utilizar al momento de la detección de la organización y/o persona comunista. El material de doctrina daba cuenta de la construcción de ese otro comunista genérico, que implicaba un amplio abanico de posibilidades en la definición del sujeto a perseguir, en última instancia respondía a la categoría de “terrorista”. El terrorista aparecía como un dispositivo amplificador, siendo el sujeto comunista con el que se podía suplir la compleja y problemática tipificación en una formulación amorfa y ambigua.

En la definición confusa y amplia de este otro “enemigo” era a la vez, criminalizado y negado, razón que habilitaba su persecución. De manera que la ingeniería de la inteligencia policial se conformó en una herramienta para la construcción de la excepcionalidad, donde permanentemente se creaban los recursos legales que incorporaban la ilegalidad y la presunción convertía a la sospecha que lo culpabilizaba.³⁵⁸

Hacia 1961, el servicio de inteligencia provincial analizaba que durante “la Libertadora” se había llevado a cabo “una acción liberal extrema”, caracterización que derivó hacia comienzos de la década de 1960 en una ferviente acción anticomunista, a partir de la concepción del “nacionalismo marxista” o “izquierda nacional”. En esta línea de análisis la propia dependencia de inteligencia provincial interpretaba que en un futuro, la palabra comunismo iría degradándose en función del desarrollo de los acontecimientos

³⁵⁸ Calveiro, Pilar, Op. Cit., pág. 64.

políticos a nivel internacional. De este modo, se aludía que aparecerían otros términos como “Fidelismo; Frente de Liberación; Movimientos Populares; Fuerzas Antiimperialistas; Democracias Populares, etc.”.³⁵⁹ Este análisis evidenciaba algunas definiciones en el terreno político de la izquierda argentina, también como producto de la “resistencia peronista”, enmarcada en un contexto latinoamericano de cambios en la organización de movimientos guerrilleros, cuya máxima expresión se enfocaba en Cuba.

Como parte de estas apreciaciones, el 30 de agosto de 1960, luego de una Conferencia de Cancilleres realizada en Chile, el Secretario de Informaciones del Estado, Juan Alberto Lagalaye, le envió al presidente Frondizi un Memorándum Secreto, donde entre otras cosas se destacaba que había “una intensificación del gobierno cubano para la difusión del comunismo en América Latina, realización de la Guerra Revolucionaria y cualquier forma de subversión y terrorismo”.³⁶⁰ A su vez, resaltaba que estas medidas en la Argentina contaban con el apoyo de la acción peronista, y en función de esta alerta, la recomendación al entonces presidente argentino, se centraba en pensar un mecanismo que erradicara al comunismo del hemisferio. Para ello, el militar aconsejaba, “realizar una acción de coordinación de todos los sistemas de seguridad e informativos de los países afectados, con miras a una prevista acción cubana. Estimo que el eje del sistema sería la Central Intelligence Agency (CIA) y la Federal Investigation Board (FBI) de Estados Unidos, quienes poseen la información más completa”.³⁶¹ También se sugería crear una red de intercambios informativos vinculados a coordinar medidas represivas.

El fantasma del comunismo se convirtió en un objetivo de guerra que concentró los recursos de los países para su aniquilación. La implementación del terrorismo de Estado fue otra de las estrategias propiciadas por los Estados Unidos para su combate en todo el mundo, convirtiendo,

“...a los Estados latinoamericanos en Estados de excepción, inaugurando un derecho de facto, más allá de los bordes del derecho institucional pero más protegido por éste, bajo las figuras del Estado de sitio, estado de emergencia, guerra

³⁵⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Varios, “Comunismo en la República Argentina”, Carpeta 6, legajo 121, fecha tentativa 1961 folio 39.

³⁶⁰ Ubertalli, Jorge Luis, *El enemigo rojo. La Represión al Comunismo en la Argentina*, Avellaneda: Ediciones Acercándonos, 2010, pág.197. La carta y el memorándum secreto se encuentra en el Archivo Frondizi, del Archivo General de la Nación, Caja 1625-1626.

³⁶¹ Ubertealli, Jorge Luis, *El enemigo rojo...*, Op. Cit., pág. 197.

antisubversiva y otras similares. En este contexto se aplicó la política de desaparición de personas en todo el continente, que afectó a toda forma de disidencia, conceptualizada como subversión”.³⁶²

Pero, retomando una de las preguntas iniciales con respecto a si la gestión frondicista vino a profundizar las políticas represivas inauguradas por “la Libertadora”, el período analizado, también puede entenderse en un contexto de excepcionalidad. Por ejemplo, en cuanto a las continuidades y profundización en las medidas de inteligencia y represión al comunismo y las disidencias políticas, se pueden mencionar: la continuidad de acuerdos con la Agencia Central de Informaciones (CIA) y los cursos en Estados Unidos; la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, creada con fines anticomunistas el 13 de abril de 1956, que continuó como el organismo de la Secretaría de Informaciones de Estado, reestructurándose, bajo la misma organización. Se clausuró una escuela considerada de adoctrinamiento comunista y formación de cuadros, “Aurora”; donde fueron detenidas 23 personas, el 27 de septiembre de 1958. El estado de sitio, prorrogado de manera indefinida por el Congreso, hasta que Frondizi fue derrocado en 1962; la clausura de locales comunistas como los de la Federación Juvenil Comunista (FEDE) y de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA); el cierre de las redacciones de diarios comunistas como *La Hora*, el semanario *Nuestra Palabra*, el periódico *Resistencia*; además de la prohibición por decreto, en todo el territorio nacional de actividades comunistas.

En el marco de todo este despliegue represivo, se destaca como su máxima expresión la puesta en práctica del Plan Conintes y la militarización del país, cuyo argumento de aplicación fue enmarcarse en la lucha occidental contra el comunismo, pero su principal resultado fue la persecución y represión al movimiento obrero. El Conintes operó como una maquinaria jurídico militar encargada de encarcelar militantes, desarmar organizaciones y dejar cesantes a trabajadores y trabajadoras por su afinidad ideológica. Como se expuso, el Conintes anulaba el estado de derecho, dejando en manos de las FFAA la represión interior.

³⁶² Calveiro, Pilar 2007. “La centralidad de la guerra y lo concentracionario en la reorganización global del poder”, en Jerónimo Pinedo *et al.* *Políticas de terror; Las formas del terrorismo de Estado en la globalización*, Buenos Aires, Ad hoc- CIAJ, pág. 54.

En esta línea, los cambios ocurridos en materia de inteligencia policial, también demuestran un avance de manera escalonada en la persecución al enemigo comunista, o al disidente político. La redefinición de la Central de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires en 1961, se concentró no sólo en el cambio de nombre, “Servicio de Informaciones Policiales de la Provincia de Buenos Aires” (S.I.P.B.A), sino en la priorización del asesoramiento policial en particular sobre lo referente a “comunismo”. Asimismo, según esta nueva medida, todo personal de policía se convertía en agente de información. Esta disposición, que podía quedar sólo en la definición formal, evidenciaba un cambio de actitud de las estrategias de la policía en la provincia, donde la importancia de la información política cobraba una dimensión amplia, comprendiendo a toda la fuerza.

En la gestión de Frondizi, a pesar de haber surgido como gobierno democrático, con la particularidad del peronismo proscripto, existió un juego político donde las prácticas arbitrarias de ejercicio del poder fueron formas que, “legítimas o no- eran parte del horizonte de posibilidades para el mantenimiento del orden interno y la resolución de conflictos”.³⁶³

La presión de las Fuerzas Armadas fue claramente determinante en este juego de poder para implementar muchas de las medidas que delinearon la ampliación de atribuciones estatales, dotándolas de una fuerza extralegal, más allá de la ley, pero reconocida y amparada por ésta.³⁶⁴ Esta serie de medidas también fueron aplicadas como parte de un adoctrinamiento de las fuerzas de seguridad en materia de “comunismo y otros extremismos”, que implicó el afianzamiento de una red de comunicaciones a nivel militar y policial, siendo la inteligencia y la información política de carácter prioritario.

El discurso desarrollista también implicó una planificación en las políticas de seguridad que tenía a las Fuerzas Armadas como la institución ejecutora de las mismas. Llevar adelante estas medidas fue agudizando un disciplinamiento y control social, a la par de la represión feroz a todo signo de resistencia, situación que convirtió al territorio bonaerense en una zona de alta conflictividad. Como explica Claudio Panella, “Ningún gobierno nacional pudo gobernar a espaldas de la provincia y desconocer lo que sucedía en

³⁶³ Franco, Marina, “*Rompecabezas para armar: la seguridad interior...* Op. Cit. 2, pág. 23

³⁶⁴ Véase: Agamben, Giorgio, Estado de excepción Homo sacer, II, I, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004.

ella, aunque ningún gobernador pudo hacer valer plenamente el peso de su distrito en sus relaciones con el presidente de turno”.³⁶⁵ Si bien, el gobernador Oscar Alende asumió reconociendo la fragilidad democrática existente y se presentaron tensiones en el manejo y el control militar del terreno bonaerense, poco pudo incidir en el devenir de las decisiones presidenciales enmarcadas en un entramado complejo de relaciones de poder, entre la presión militar, la civil y el contexto internacional.

A lo largo del capítulo pudimos encontrar que la fabricación del orden social, como refiere Neocleous, se concibió en tanto parte del poder del Estado, siendo la policía -en su sentido amplio- constitutiva de ese orden, dejando por fuera del análisis la concepción liberal que la concibe como una entidad independiente, limitada a aplicar la ley para proteger a los y las ciudadanas por igual. La aplicación de ese “sistema de policía” por el Estado hacia la sociedad civil, tuvo sus resistencias como su aprobación en tanto algunos sectores arraigaron aquel espíritu anticomunista.

En el siguiente capítulo se verán específicamente la aplicación de las medidas mencionadas, la persecución y la inteligencia como parte del Plan Conintes, para analizar el impacto de las medidas represivas tomadas a nivel Nacional en la Provincia de Buenos Aires. El relato desde testimonios y fuentes bibliográficas será utilizado para intentar escenificar los aspectos concretos de la normativa de excepción descripta a lo largo del presente capítulo.

³⁶⁵ Panella, Claudio, Capítulo 2, “Política bonaerense y gestiones gubernativas, 1943-2001”, en *Historia de la Provincia de Buenos Aires*, Tomo 5, “Del primer peronismo a la crisis de 2001”, Director del Tomo, Barreneche Osvaldo, Buenos Aires: Unipe, edhasa, 2014, pág. 115.

Capítulo V. Bajo la lupa del Conintes

En el presente capítulo nos encontraremos con el impacto de las medidas tomadas a nivel nacional como parte del Plan de Conmoción Interior del Estado y su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde la criminalización política -siendo consecuencia directa de las medidas implementadas-, demostró la continuidad en la construcción de una amenaza comunista-terrorista que obtenía un espacio de legitimidad cada vez más arraigado socialmente. Este último aspecto contribuiría a concebir la necesidad intervencionista desde lo militar en el orden interno del país, algo que continuaría su curso unas cuantas décadas más.

Durante los años de la aplicación del Plan Conintes el conflicto social se fue incrementando, diferentes huelgas obreras se sumergían en el escenario político como parte de un descontento social generalizado. Esta situación, se enmarcaba en las medidas que el gobierno de Arturo Frondizi había implementado en relación a la economía nacional, la represión, avalada por el estado de sitio, los decretos que declararon ilegales a las huelgas, entre otras medidas excepcionales que definieron al Estado de aquel entonces.

La aplicación del Conintes, como se desarrolló en el capítulo anterior, delimitó zonas de injerencia militar y habilitó a las Fuerzas Armadas para detener personas. Este plan de seguridad y militarización tuvo un fuerte impacto en la vida política del país, militarizando sindicatos, reprimiendo huelgas, allanando domicilios, haciendo del espacio público, la calle, un lugar agresivo que excedía cualquier norma legal posible. Estas intervenciones tuvieron varios efectos, como explica Marina Franco, por un lado, “conculcaron garantías constitucionales y fueron usados como instrumentos represivos legalmente respaldados, y, por el otro, habilitaron un creciente espacio de autonomía militar en el control del orden interno”.³⁶⁶

A partir de las distintas fuentes bibliográficas, orales y escritas, se escenificará un período donde el sujeto comunista junto con los/las militantes peronistas se conformaron como un sujeto en plural, apareciendo en la escena pública de manera recurrente. Estos

³⁶⁶ Franco, Marina, “Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)”. En, *Revista Contemporánea: Historia y problemas del Siglo Veinte*, Montevideo, vol. 3. Pp. 77-96, 2012.

encuentros entre diversas ramas políticas impensadas hasta 1955, fueron parte del relato histórico en los conflictos obreros, las detenciones y los informes de inteligencia.

Se trata entonces de una etapa política signada por rupturas y reagrupamientos en el campo de la izquierda. Este proceso, que se inició luego del Golpe Militar de 1955,³⁶⁷ el Partido Comunista lo transitaría desde una perspectiva política que apuntaba hacia la unidad con aquellos sectores del peronismo que se veían desplazados por las medidas antiperonistas impulsadas por los militares. La unidad con los sindicatos peronistas y el llamado a votar en 1962 por el peronismo en las elecciones de ese año, fueron algunos ejemplos. El corolario de estas definiciones se puede resumir en el informe elaborado por Victorio Codovilla en 1962 titulado, “El significado del giro a la izquierda del peronismo”.³⁶⁸

Pero, lejos de la conversión hacia el marxismo-leninismo que apuntaba Codovilla sobre las masas peronistas y su involucramiento con el Partido Comunista, en este capítulo veremos algunos breves testimonios sobre la experiencia carcelaria, donde el cruce entre los y las detenidas de diversas corrientes políticas, muchas veces generó una “identidad carcelaria” y una vida política interna que desvanecía quizás aquellos sentidos que construyeron un “nosotros” y un “otro”, por fuera de las categorizaciones policiales.

De este modo, encontraremos aquí los testimonios de algunos detenidos y detenidas bajo la aplicación del Conintes de la provincia de Buenos Aires que fueron trasladados a diversas cárceles del país. Los mecanismos implementados por la policía bajo el control militar, los archivos de inteligencia y los diferentes recursos legales que los/las detenidos presentaron en la justicia, serán puestos bajo la lupa para comprender desde otra dimensión las complejidades que este tema amerita. También serán considerados los principales focos

³⁶⁷ La resistencia peronista tomaría cauces diferentes. Por un lado, el movimiento originado por el General Inñiguez con el Centro de Operaciones de la Resistencia (COR), como representante de la tendencia de derecha. Inñiguez, el 30 de noviembre de 1960, intentó un fallido Golpe de Estado contra el gobierno de Frondizi. Este suceso se desató en el marco de la crisis entre el Presidente y el comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Severo Toranzo Montero, que había estallado en octubre del 1960 y que condujo a la renuncia del secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher. Véase, Gorza Anabella, “Peronistas y militares. Una vieja relación en un nuevo contexto”, en: *Estudios Sociales*, Revista Universitaria semestral, año XXV, n° 49, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre, 2015, pp. 31-62.

Por el otro, lo que se llamó “la izquierda peronista”, desde el Frente Revolucionario Peronista (FRP), cuyo referente fue

John William Cooke. En relación a esta temática, puede consultarse: Mazzeo, Miguel, *El hereje. Apuntes sobre John William Cooke*, Buenos Aires: El Colectivo, 2016.

³⁶⁸ Codovilla, Victorio, “El significado del giro a la izquierda del peronismo”. Informe rendido en la reunión del Comité Central del Partido Comunista. Buenos Aires: Ateneo, 1962.

de conflictos obreros para la época, como las huelgas de los ferroviarios, petroleros y la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, para enmarcar el contexto histórico y político que nos compete.

V.1. Resistencias, huelgas y la intervención militar

La represión estatal y sus mecanismos de disciplinamiento se pusieron en práctica de inmediato ante las resistencias que amanecían en los principales centros industriales del país. Trabajadores de diversas ramas de la industria y servicios fueron afectados por los decretos de movilización del personal que declaraban como zonas militares a las ciudades que fueron epicentros de conflictos entre los años 1956 y 1962: ferroviarios, petroleros, bancarios, gráficos, municipales, etc. Las huelgas se ramificaban como forma de protesta en gran parte del país mientras que la solidaridad de clase también se expandía desde los distintos sectores en lucha.

Durante los primeros meses de la presidencia de Frondizi se sancionaron los Decretos N° 312 y 314, que dejaron sin efecto las intervenciones militares efectuadas por el gobierno de Aramburu a los gremios de la carne, metalúrgicos, sanidad, textiles, bancarios y transportes y se restablecieron las direcciones elegidas por los agremiados.³⁶⁹ A pesar de este cambio en el gobierno frondicista, pronto se implementarían las medidas de intervención militar ante los nuevos focos de huelgas y manifestaciones obreras.

En noviembre del año 1958 comenzó la movilización del personal ferroviario y los Jefes del Ejército quedaron a cargo de las seis líneas de ferrocarril estatal. Esto se debía a la huelga convocada por la Unión Ferroviaria el día 28 de noviembre. No era la primera vez en el año que se convocaba a una medida de fuerza desde este gremio. El 9 de octubre hubo un llamado a paro general por tiempo indeterminado, donde entre otras cosas, también se exigía el reconocimiento de la auténtica Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, ante la intervención militar del gremio. En este caso la medida afectaba al personal de “Guarda Trenes” únicamente.³⁷⁰

³⁶⁹ Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria, 2014, pág. 71.

³⁷⁰ Archivo DIPPBA, Panfleto de la Unión Ferroviaria, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 4, Legajo 2, 8 de octubre de 1958, folio 68.

La huelga del 28 de noviembre fue una medida que arrastraba a todas las instancias de lucha anteriores que se inscribían en una serie de demandas que competían a la exigencia de mejores condiciones de trabajo y el pago de retroactivos. La respuesta desde el Estado fue la intervención de la Unión Ferroviaria y la militarización de las estaciones y playas con personal de las tres Fuerzas Armadas y la gendarmería.

En La Plata, el Ferrocarril Roca y el Belgrano quedaron casi paralizados, algunos servicios como los que iban a Río Santiago, Ensenada y Brandsen funcionaban de manera intermitente bajo control militar. Aquí, fueron alrededor de cien personas las detenidas involucradas con el paro ferroviario, alojadas en el Batallón 2 de Comunicaciones de City Bell, localidad aledaña a la ciudad de La Plata.



Estación de trenes de la ciudad bonaerense de La Plata, bajo intervención militar, 1958.³⁷¹

³⁷¹ Belinche, Marcelo y Panella Claudio Comps. *Postales de la Memoria. Un relato fotográfico sobre la identidad de la región*. La Plata, octubre de 2010.

A partir del testimonio de un trabajador y dirigente ferroviario de Buenos Aires, Lorenzo Pepe, detenido entre 1958 y 1959 en Campo de Mayo, integrante del Movimiento Nacional de la Juventud Peronista Ferroviaria, se puede comprender cómo fue la aplicación del Conintes para el gremio y la intervención militar.

“Me acuerdo, primero, de la enorme humillación que el Ejército le impuso al gremio. Ya lo habían hecho con los bancarios y con los muchachos del Lisandro de la Torre. Cuando estábamos en cana, los milicos querían que hiciéramos cosas humillantes. (...) Me acuerdo que nos hacían desnudar a los 220 ferroviarios que estábamos detenidos”.³⁷²

La represión también era ejercida dentro de los talleres ferroviarios. El abuso de poder, “la humillación”, como describe el testimonio, fueron parte de un circuito de impunidad que iba en aumento. No existían los expedientes legales luego de las detenciones, ni el derecho de defensa bajo las normas de un tribunal militar, “la ausencia de justicia era total”, con esa frase del dirigente ferroviario Lorenzo Pepe, se describía un período político en nuestro país donde lo democrático volvía a resignificarse en aquel inestable siglo XX, con una fuerte restricción a las garantías constitucionales.

La realidad que vivían los obreros ferroviarios fue denunciada desde las distintas Comisiones Coordinadoras de las seccionales del gremio Unión Ferroviaria. El Servicio de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires, llamado así en ese momento, obtuvo copias -enviadas por la delegación Central de Inteligencia de Junín-, de los volantes que desde dicho gremio hacían circular entre los trabajadores:

“Entramos en el sexto mes de movilización militar, trabajando con las bayonetas en la espalda, bajo la prepotencia y la brutalidad militar, como prisioneros de guerra y no como obreros que contribuyen a construir la grandeza de la Nación, de cuyo trabajo viven parasitariamente quienes se han convertido en nuestros carceleros.
(...) Amparados en esta movilización los Comandos cometen toda clase de atropellos, compañeros estaqueados en Olavarría,

³⁷² *Plan Conintes y Resistencia Peronista 1955-1963*, Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, Buenos Aires: 2010, pág.183.

golpes y torturas a obreros en Campo de Mayo, un señalero muerto en Pehuajó, el jefe de estación Derqui herido de bala, en Bahía Blanca se prohibió a los compañeros socorrer a un accidentado, los cuerpos a tierra hasta la extenuación, fajinas, plantones, etc. El trato brutal y sanguinario que se emplea en los talleres y galpón de máquinas de Alianza.³⁷³

Aquí se describía concretamente cuál era la situación cotidiana de los obreros que debían trabajar bajo un régimen militar. Se pretendía hacer de la norma lo arbitrario. El gobierno quedaba fuera de la ley transformando a los obreros en soldados permanentes bajo códigos y leyes militares que hacían de la autoridad castrense un abuso constante. En tiempos de paz se aplicaban las medidas de tiempos de guerra.³⁷⁴

El conflicto con el sector ferroviario tuvo su punto máximo en el año 1961, cuando con el anunciado Plan Larkin, se pretendía una modernización de los ferrocarriles, pero que también acarreaba despidos y la clausura de ramales en la provincia de Buenos Aires. Este anuncio generó una larga huelga convocada desde los gremios La Fraternidad y Unión Ferroviaria, la paralización de los trenes indujo a la intervención militar nuevamente para su funcionamiento, como la aplicación de detenciones a los trabajadores bajo la figura del Plan Conintes. Finalmente el Plan Larkin no pudo ser aplicado en su totalidad, pero los ramales cerrados nunca fueron rehabilitados.³⁷⁵

La provincia de Buenos Aires, por su extensión y gran concentración obrera, fue indudablemente un centro de resistencia y expresiones de protesta por parte de las y los trabajadores. Sin embargo, es importante también relatar aquí la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre como uno de los primeros y principales focos de resistencia

³⁷³ Archivo DIPPBA. Transcripción de panfleto de la Unión Ferroviaria. Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 65, legajo 20. 13 de junio de 1959, folio 26.

³⁷⁴ Este caso, como la situación que se verá más adelante concerniente al Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, fue llevado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La respuesta del gobierno ante el informe que envía la OIT, fue declarada parcial por la misma entidad internacional. Entre otros aspectos, se advertía desde la OIT que los trabajadores movilizados habían sido objeto de persecución y se les había infligido penas al amparo de una legislación asimilable a un régimen legal de excepción. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2898350

³⁷⁵ El plan llevó el nombre del General estadounidense Thomas Larkin, quien estaría a cargo de la modernización del ferrocarril. Para ampliar sobre esta temática y la historia de los ferrocarriles en nuestro país, véase: Cena, Juan Carlos, “Ferroviarios. Sinfonía de acero y lucha”, Nave de los Locos, Buenos Aires: 2009.

obrera. Este episodio repercutió de inmediato en las otras ramas industriales que sumaron su adhesión e incidió en las medidas de lucha que se tomarían en otros significativos centros productivos, como el cinturón industrial correspondiente a las localidades bonaerenses de Berisso, Ensenada y La Plata.

Bajo el calor de un sol de enero de 1959, los trabajadores del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, ubicado en el barrio porteño de Mataderos, tomaron su lugar de trabajo ante la intención del gobierno de privatizarlo. La acción de lucha era una respuesta a Ley para la Industria de la Carne que preveía la privatización del frigorífico, presentada por el Ejecutivo en el Congreso Nacional, para vendérselo a la Corporación Argentina de Productores (CAP). Dicha ley, finalmente, fue sancionada el 14 de enero del mismo año. Esta medida se daba en el marco del Plan de Estabilización implementado por el gobierno, tal como se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. La ocupación del frigorífico, efectuada entre los días 15, 16 y 17 de enero, sería el inicio de un año de intensas huelgas desde el movimiento obrero.³⁷⁶

La toma, convocada por las “62 Organizaciones”, nucleamiento de sindicatos que se constituyeron como una herramienta política de los gremios peronistas, fue apoyada por la mayoría de las bases de los gremios, comunistas y peronistas, quienes adhirieron con una huelga de 48hs. El frigorífico fue privatizado el 17 de enero. Ante esta situación, la intervención de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Los obreros fueron reprimidos por la policía en conjunto con la Gendarmería y el Ejército. Se intervinieron los sindicatos de la carne, textiles y metalúrgicos y noventa y cinco trabajadores del frigorífico fueron detenidos.

El amplio y general apoyo que tuvo la medida de lucha, tanto desde las bases obreras, como desde los distintos dirigentes gremiales fue reconocido por el gobierno, pero en los informes de la SIDE a presidencia se ponía énfasis en la responsabilidad del conflicto a la infiltración comunista: “la entrega del mencionado frigorífico a la CAP, provoca la reacción de los obreros del mismo, que hábilmente manejados por elementos comunistas toman posición del local para impedir su entrega”.³⁷⁷

³⁷⁶ Para profundizar sobre la huelga del Frigorífico, véase: Salas, Ernesto, *La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de La Torre*, Buenos Aires: Altamira/Retórica Ediciones, 2006.

³⁷⁷ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 03.3.9, Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), enero 1959, s/pág.

Desde el gobierno, a cargo del presidente del Senado José María Guido,³⁷⁸ dado que Frondizi estaba en Estados Unidos, también se ordenó allanar los locales del Partido Comunista, gremios peronistas y la detención de los dirigentes gremiales. A su vez, se declararon como zona militar a varias áreas de fuerte concentración obrera que quedaron bajo la custodia del Ejército, como la ciudad de la Plata, Berisso y Ensenada donde se encontraban dos importantes frigoríficos, el Swift y el Armour, y la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Las autoridades gubernamentales recuperaron el frigorífico con una fuerte intervención y represión policial y militar.

El 20 de enero de 1959, bajo el Decreto Nacional N° 862 del Poder Ejecutivo, se dispuso la movilización del personal de YPF y empresas privadas dedicadas a la extracción, industrialización, transporte, comercialización y expendio de petróleo y sus derivados. La movilización del personal implicaba la prestación del servicio civil a la defensa nacional cuando resultara necesario. La medida de movilización se extendió hacia los trabajadores ferroviarios y el personal de transporte. Las razones que se adujeron desde el Ejecutivo competían al desorden público de las medidas tomadas por los trabajadores, que implicaba la paralización de actividades vitales para el país. Esta decisión respondía a lo dispuesto por la Ley Nacional 13.234, “Normas para la organización de la Nación para tiempo de guerra que serán adoptadas desde tiempo de paz”; antecedente del Plan Conintes que dejaba al personal movilizado sujeto a las disposiciones del Código de Justicia Militar. Las infracciones consideradas eran sometidas ante los Consejos de Guerra Permanentes para el Personal Subalterno, donde también se autorizaba el funcionamiento de los Tribunales Especiales para tiempos de guerra, integrados por el Comandante en Jefe del Ejército, Comandante de Operaciones Navales o Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, según corresponda.³⁷⁹

³⁷⁸ Alejandro Gómez, fue el vicepresidente de la Nación en 1958 cuando asumió la presidencia Arturo Frondizi. Sin embargo, éste renunció a su cargo seis meses después. Para una referencia sobre su pensamiento en primera persona, véase: Gómez, Alejandro, *Política de Entrega*, Buenos Aires: A Peña Lillio, 1963.

³⁷⁹ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 862, “Movilización del personal de empresas oficiales y privadas dedicadas a la extracción, industrialización, transporte, comercialización y expendio de petróleo y sus derivados”, en: *Anales de la Legislación Argentina*, 20 de enero de 1959 Tomo XIX-A, Buenos Aires: La Ley, pág. 5.

Los trabajadores que desobedecían cualquier orden impartida por sus jefes, eran retirados de su lugar de trabajo y llevados a los lugares del país que determinara la autoridad competente. De este modo, ante cualquier intento de manifestación obrera el Poder Ejecutivo autorizaba la intervención militar para reprimirlo y proceder según las normas del Código de Justicia Militar para el juzgamiento. El decreto de movilización implicaba para los trabajadores que no sólo debían asistir a su trabajo las horas que le correspondían, sino trabajar según las condiciones que los respectivos Jefes de mando disponían, habiendo quedado suspendidas todas las actividades gremiales y derechos laborales de los trabajadores.

Fue así que bajo el Decreto Nacional N° 863 del 20 de enero de 1959, se declaró como zona militar a los partidos de Berisso, Ensenada y la ciudad de La Plata. A partir de esa fecha toda esta zona dependía de la autoridad del Comandante del Área Naval Río Santiago.³⁸⁰ Mientras que la policía de la provincia de Buenos Aires y de la Prefectura Nacional Marítima, que tenían jurisdicción en estos lugares, quedaban subordinadas al mando militar.³⁸¹

³⁸⁰ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°863, “Declaración de zona militar a los partidos de Berisso y Ensenada y a la ciudad de La Plata, a los efectos de la movilización dispuesta por decreto 862/59”, en: *Anales de la Legislación Argentina*, Tomo XIX-A, 20 de enero de 1959, Buenos Aires: La Ley, pág. 6.

³⁸¹ Sobre las huelgas petroleras y el gobierno desarrollista, véase: “El sindicalismo petrolero frente a las ideas desarrollistas: resistencia y cooptación”, Cerra, Angel, Yazbek Susana, XXIV Jornadas de Historia Económica, Rosario, octubre de 2014.



*Obreros movilizados por las Fuerzas Armadas, alojados bajo estado militar en la destilería de La Plata, 1959.*³⁸²

El Capitán Carlos López era quien estaba a cargo de la movilización del personal de YPF. Ante las intervenciones en los sindicatos, se efectuaron comunicados de prensa desde las comisiones directivas de los gremios hacia sus afiliados, dando cuenta de lo irregular de la situación. En el caso de los petroleros, desde Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado (SUPE) de Ensenada, se comunicaba el día 28 de enero que todos los afiliados debían vigilar atentamente las designaciones que pudieran efectuarse en la Filial Flota de dicha localidad, ya que se encontraba intervenida militarmente bajo el mando del Capitán de Fragata Hugo Hasenbalg. Allí también se organizó un Comité de Huelga, desde donde se convocaron asambleas que fueron observadas por informantes de la Central de Inteligencia de La Plata.³⁸³ Con el correr de los meses la situación presentaba un estado de profunda militarización con frecuentes detenciones a trabajadores. Por este motivo, desde la propia Comisión Directiva de SUPE filial Flota se informaba a los familiares de los detenidos que

³⁸² Archivo Nacional de La Memoria, en Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria, 2014

³⁸³ Archivo DIPPBA, Mesa "B", Carpeta 39, Legajo 12, SUPE, Tomo II, Ensenada, 28 de enero de 1959.

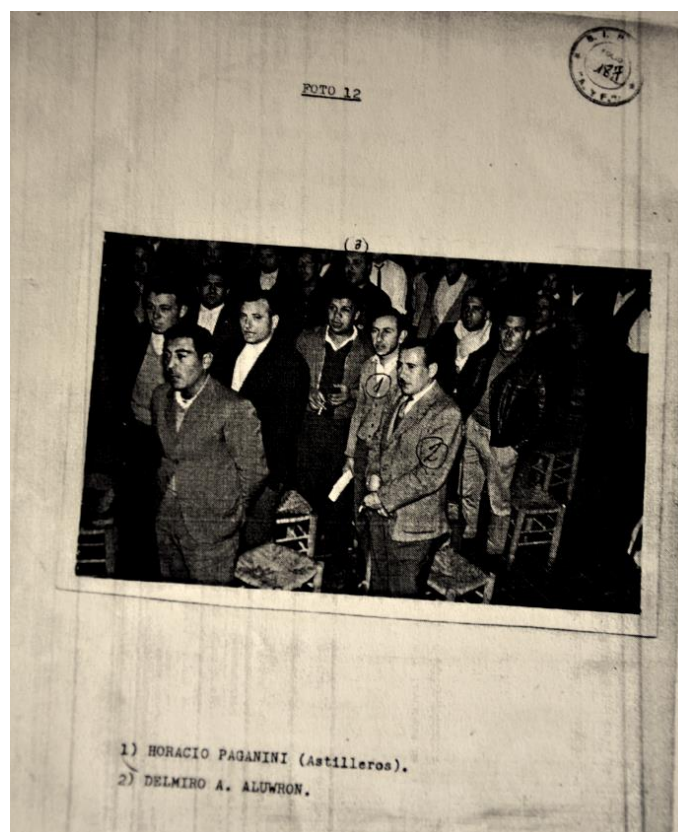
hasta que la situación no se normalizara debían recurrir personalmente a la Confederación General del Trabajo, Delegación La Plata.³⁸⁴ Sin embargo, el escenario político no ameritaba un buen porvenir para los derechos de los trabajadores. La misma Base Naval Astillero Río Santiago de Ensenada funcionaba como un centro de detención, dependiente de la Armada Argentina. Allí fueron trasladados referentes gremiales de la región, como fue el caso de Raymundo Acuña quien representaba a la C.G.T La Plata en 1959.



*Fuente: Registro de la DIPPBA sobre referentes gremiales de Astilleros Río Santiago.*³⁸⁵

³⁸⁴ Archivo DIPPBA, Op. Cit, 3 de febrero de 1959.

³⁸⁵ Archivo DIPPBA, Mesa B, Carpeta 39, Legajo 29, Asociación de Trabajadores del Estado, Ensenada, Tomo I, folio 180, año 1962.



*Fuente: Registro de la DIPPBA sobre referentes gremiales de Astilleros Río Santiago.*³⁸⁶

De este modo, las medidas de “movilización del personal”, la intervención a los sindicatos, la militarización de los grandes focos de resistencia obrera fueron disposiciones aplicadas como una estrategia por parte del gobierno para el control social y para implementar la política económica de ajuste y privatización. Asimismo, estas medidas también apuntaban a generar una depuración de personal, es decir, detener a aquellos obreros referentes en las huelgas y los paros.

V.2. La justicia en el Conintes

Durante la ejecución del Plan Conintes, las distintas autoridades Conintes tenían la orden de elevar a presidencia “comunicados”, que consistían en informes de la situación tanto nacional, como de las distintas provincias. Un informe podía contener temas referidos

³⁸⁶ Archivo DIPPBA, Mesa B, Op. Cit, folio 187

a los interrogatorios; un estado de situación; procesos de ejecución; documentación; investigaciones de los atentados, etc.

Por ejemplo, en una parte del Comunicado Conintes N°3 se hacía una caracterización de la subversión en la provincia de Buenos Aires. Se consideraba al peronismo bajo esta categoría y se lo separaba en tres ramas que conformaban al Consejo Coordinador Peronista y la Central de Cooperaciones de la Resistencia: Gremial (Central CGT) Juventud Peronista y Militar: integrada por suboficiales retirados de las fuerzas Armadas.

“Según lo comprobado la organización ha utilizado locales de la CGT La Plata y de ATE como base de operaciones en la planificación subversiva y para depósitos de munición y material explosivo e incendiario”. La investigación volcada en los comunicados correspondía a la práctica de la inteligencia, en este caso, militar, cuyo enfoque estaba orientado con las mismas expresiones utilizadas durante “la Libertadora”, es decir las acciones “subversivas y terroristas”, se efectuaban para obtener el regreso al poder de la “tiranía peronista”.

De modo que, el Servicio de Informaciones del Ejército y el Servicio de Seguridad del Ejército de La Plata daban cuenta de los hechos considerados “terroristas”, como la colocación de bombas o secuestros de armas de los detenidos. Más allá de estas características, que luego en los informes de la DIPPBA pueden verse caratulados como “Material Bélico”, y hacían referencia a lo que posteriormente se denominaría “Resistencia Peronista”, es interesante ver el cruce con el comunismo a partir de los mismos comunicados Conintes.

“El hecho también comprobado, que una gran parte de los componentes subversivos peronistas, no participan conscientemente de la ideología y propósitos generales del comunismo internacional, autoseñalándose como personeros de aspiraciones exclusivamente nacionales, no invalida la explotación que de ese sector realiza el gran movimiento comunista mundial, ya que, en el orden local, buscando alianzas de tipo gremial, e introduciendo hábiles elementos en sus filas directivas y también ejecutivas, logra multiplicar su eficacia subversiva, y crear compromisos para después del supuesto triunfo local, copando resortes importantes de mando y gobierno,

y creando bases para el transvasamiento integral de una entidad a la otra, de la estructura directiva del Estado”.³⁸⁷

Este análisis, que provenía del acérrimo anticomunista devenido en Jefe del Ejército, Teniente Gral. Toranzo Montero, continuaba su informe aseverando la existencia de otros grupos peronistas que, “conscientemente” se identificaban con el comunismo, cuyas aspiraciones totalitarias llevarían a la conquista de un Estado por parte de los “enemigos de nuestra civilización”. Es decir, el enemigo comunista genérico regresaba con la incorporación del peronismo en sus filas, desde donde sea y cómo sea, el informe dejaba en claro que el Ejército no iba a permitir la apropiación del poder político por parte del enemigo, ubicado en las estructuras criminales de la Nación. Las palabras de Toranzo Montero dejaban ver una continuidad y profundización en la represión, con el gobierno de facto de “la Libertadora”, avalado ahora por la legalidad que el Plan Conintes les otorgaba.

Esta continuidad ideológica se expresaba dentro de las Fuerzas Armadas, apoyado por el propio presidente de la Nación, Arturo Frondizi. Durante el cierre del VII curso de Defensa Nacional en la Escuela Nacional de Guerra del año 1960, se reivindicaba el Golpe de 1955, aludiendo que la Revolución Libertadora fue un acontecimiento de proyección histórica y que había tenido como propósito rector la recuperación espiritual de la Nación y su encausamiento definitivo por el camino de la democracia. Las palabras del General Alvarado, Director de la Escuela, hacían hincapié en la violencia ideológica que estaba atravesando el país, ubicando las acciones llevadas adelante por el gobierno como parte del propio camino de la democracia y la defensa de las instituciones republicanas. El convencimiento de avalar la represión y los tribunales militares se sustentaba hasta el punto de mostrarse como ejemplo en la defensa de los derechos de los pueblos frente a la prepotencia comunista. Esta argumentación fue sostenida durante la Conferencia realizada en Costa Rica y las Naciones Unidas, donde se afirmó que “la Argentina debe ser un

³⁸⁷ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.4 Comunismo, Comunicado N°3 de las autoridades Conintes, s/f, s/p.

baluarte anticomunista que defienda en este sector del mundo los derechos del ser humano y los superiores valores del espíritu”.³⁸⁸

Este tipo de posicionamientos que implicaba una profundización en el control militar del país, generó tensiones y divergencias entre las autoridades militares y políticas en la provincia de Buenos Aires. El propio gobernador Alende en una entrevista hizo público su reclamo al presidente de la Nación para que el Comandante de la Segunda División del Ejército, General Carlos Túrolo, limitara su actuación al mando de las fuerzas policiales de la provincia, a sus funciones específicas. También pidió el levantamiento del Plan Conintes, a lo que el presidente Frondizi respondió que no se levantaría, al menos por 60 días más, y en cuanto a lo segundo, se plantearía en el lugar correspondiente.³⁸⁹

Este panorama político que incrementaba los operativos militares, allanamientos y detenciones, incidía en la reorganización de los cuadros policiales afectados, con tensiones en la propia conducción de la fuerza policial provincial. Un ejemplo claro de esta situación es como durante el tiempo de vigencia del Conintes existieron dos conducciones policiales, la provincial y la que respondía a las autoridades del Plan Conintes. En este sentido, como explica Barreneche, “si bien desde el Ministerio de Gobierno bonaerense se procuraba mediar entre ambas, lo cierto es que los conflictos derivaron, hacia fines de 1960, en la renuncia del policía Juan José Parotti, quien se había desempeñado como jefe de la fuerza desde la asunción de Oscar Alende como gobernador en mayo de 1958”.³⁹⁰

Así, a medida que pasaba el tiempo, la aplicación del Plan Conintes y su paquete de medidas represivas, llevaba a un repudio generalizado y a la petición urgente de ciertos sectores más politizados de la sociedad, para darle fin. Desde el ámbito legislativo, senadores nacionales representantes de la provincia de Buenos Aires, como Arturo Mor Roig, Grau y Capiel, provenientes de la Unión Cívica Radical del Pueblo, habían solicitado el 3 de junio 1959, la derogación del estado de sitio para dicha provincia. Los argumentos

³⁸⁸ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario El Mundo, 20 de diciembre de 1960.

³⁸⁹ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Prensa, 6 de agosto de 1960.

³⁹⁰ Barreneche, Osvaldo, Formas de violencia policial en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la década de 1960, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina (12)*, 251-272, Memoria Académica, FaHCE, UNLP, pp.17-18, 2012

partían del abuso en la utilización de este recurso, así como también se consideraba entre las medidas “extra constitucionales” al llamado “estado de guerra interno”, que en aquel entonces se valía de la aún vigente Ley de organización de la Nación en tiempos de paz, para tiempos de guerra.

“Sr. Grau- Sr. Presidente: el art. 23 de la Constitución establece que el estado de sitio se declara en el territorio donde exista perturbación del orden. Quiere decir que no es una medida de carácter general, sino que puede ser parcial con relación a determinada zona o territorio del país. Por ello entiendo que la provincia Buenos de Aires puede eximirse de una medida que deja en suspenso las garantías individuales, o sea en su totalidad las garantías constitucionales”.³⁹¹

La lectura política del bloque radical, perteneciente a la línea de Balbín, (UCRP), insistía en la violación hacia los derechos constitucionales, y por ende, a la democracia por los que estaba atravesando el país. Sin embargo, la moción para presentar un proyecto que contemplara la derogación del estado de sitio en territorio bonaerense, fue rechazada y la situación no cambió por un tiempo prolongado.

De este modo, podía verse en declaraciones a la prensa ya hacia el año 1961, que el mismo Jefe del Ejército, Teniente General Montero, admitía que la vigencia del Plan Conintes y el estado de sitio debían ser mantenidos en tanto lo exigían las circunstancias,³⁹² lo que implicaba un tiempo indefinido y la indignación ante declaraciones como estas, de ciertos sectores como los familiares de los presos políticos.

“La Comisión de Familiares de Detenidos Políticos y Gremiales (COFADE) se dirige una vez a la opinión pública en su constante bregar por una amplia amnistía que involucre a los condenados y procesados por aplicación del Plan Conintes...”.³⁹³ De esta manera comenzaba la nota del diario La Vanguardia el día 22 de febrero de 1961. Las demandas por la libertad de las y los presos políticos eran recurrentes, como la prohibición

³⁹¹ *Anales de la Legislatura Argentina*, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1960, pág. 43.

³⁹² CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario El Mundo, 24 de febrero de 1961.

³⁹³ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Vanguardia, 22 de febrero de 1961.

de los actos que petitionaban por dicha libertad. Desde la COFADE se denunciaba la existencia de 500 presos políticos y gremiales alojados en condiciones inhumanas, como la escases de alimentos, el aislamiento, la falta de abrigos o los traslados permanentes y se hacía una campaña fuerte contra la consolidación de los tribunales militares y la intervención de las Fuerzas Armadas en la sociedad. La acción de la COFADE fue fundamental para instalar en la agenda pública el pedido de libertad de los y las presas políticas detenidos/as por la aplicación del Plan Conintes. Este período, que inauguraba una nueva categoría de presos/as políticos/as identificados/as por la normativa del Conintes, tenía su correlación con el trabajo llevado adelante por la COFADE, donde la amplitud de los vínculos desarrollados, “dejaba entrever que no era la identificación partidaria o la adhesión ideológica el núcleo central de la nueva entidad sino la acción conjunta en pos de la definición de una causa común: la libertad de los presos CONINTES”.³⁹⁴

Lejos de tener en cuenta estos reclamos, desde el gobierno nacional se apuntaba a conciliar la legalidad con la represión y las demandas a nivel bonaerense no tenían lugar. Las prisiones y detenciones arbitrarias, las causas sin investigación, fueron parte de la aplicación del Decreto N° 2639/1960, que ordenaba que las personas detenidas en el marco del Conintes fueran juzgadas sumariamente consejos de guerra militares, constituidos por los comandantes de las zonas delimitadas a nivel nacional.

La figura de los tribunales militares tiene su antecedente hacia finales del siglo XIX, cuando en el contexto de consolidación del Estado Nación argentino, se constituyeron como fueros destinados a disciplinar a las Fuerzas militares que tenía décadas de confrontaciones facciosas e importantes desórdenes.³⁹⁵ Pero, como ya se expuso en el capítulo anterior, desde comienzos de la década del sesenta, estos tribunales comenzaron a ser utilizados convirtiéndose en una herramienta más de la ilegalidad de un Estado de control permanente. El país, al calor de fuertes movilizaciones populares, profundizaba una situación donde se sustituía el poder civil por la autoridad militar y se clausuraba sin término la Constitución.

³⁹⁴ Chama, Mauricio, “Activismo social y político, represión estatal y defensa de “presos Conintes”: la experiencia de Cofade (1960-1963)”, en *V Jornadas de Historia Política, “Las Provincias en Perspectiva Comparada”*, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2010, pág. 8.

³⁹⁵ D’ Antonio, Débora Eidelman, Ariel, “El Fuero antisubversivo y los Consejos de Guerra contra civiles en la Argentina de los años 70”, *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Tel Aviv, 2016, Vol. 27, N°2, pág.88.

Ante esta situación, la presentación de recursos de Habeas Corpus por el estado de sitio y la aplicación del Plan Conintes, fue una de las estrategias de las y los detenidos que tenían representación legal. Así, hubo casos como en Córdoba, donde el Juez de Instrucción, Dr. Jorge Vivas, ordenó en 1960 la inmediata libertad de ciudadanos sometidos a la justicia militar. Si bien fueron contadas excepciones, incluso Córdoba fue una de las principales provincias acusadas de terrorismo y conspiración contra el gobierno nacional, este tipo de fallos generaron antecedentes en otras provincias, donde fueron parte de los argumentos de los habeas corpus presentados, como en el caso de La Plata, para la situación de detenidos gremiales en la prisión militar de la localidad de Magdalena. “Los condenados fueron sometidos a apremios ilegales en Dependencias del Comando de la II División del Ejército con asiento en La Plata”.³⁹⁶ Según lo publicado en el Diario La Razón, del 27 de abril de 1960, los detenidos fueron golpeados, torturados con picana eléctrica en distintas partes del cuerpo y luego interrogados bajo la represión física y psíquica. Además, explicaba la defensa, el tribunal militar que los juzgó por delitos penales estaba integrado por oficiales del Ejército, cuya especificidad profesional devenía en “veterinario” y “combatiente”. Es decir, más allá de la propia ilegalidad que se desprendía de la situación vivida de los detenidos, los militares no estaban en condiciones válidas de cumplir con la idoneidad que la especialización del derecho penal habilitaba a un letrado.

En este contexto de excepción, el planteo sobre la inconstitucionalidad del Plan Conintes y la presentación de recursos de habeas corpus, fueron elementos utilizados por los abogados defensores de las y los detenidos. Sin embargo, ante la exigencia legal para evitar arrestos arbitrarios y el pedido de libertad de los y las detenidas, el habeas corpus no resultó en la mayoría de los casos satisfactorio.

Iscaro Ruben Libertario era militante del Partido Comunista, había nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, y dada su condición de comunista, fue detenido en el año 1960, como parte de la persecución política que habilitaba el decreto Conintes. Su esposa, presentó un recurso de habeas corpus que fue desestimado en 1ra. y 2da. instancia, por lo cual, ella, en carácter de peticionante interpuso un recurso extraordinario que fue concedido. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia desestimaron la

³⁹⁶ CEN, Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina, Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Razón, 27 de abril de 1960.

apelación, y se declaró improcedente el recurso concedido. De los cinco jueces, Luis M. Boffi Boggero falló en disidencia.

“El hábeas corpus, no obstante la tramitación procesal sumaria, permite el análisis de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo, o por el detenido, para decidir si corresponde, o no, el progreso de la acción. Una interpretación distinta llevaría a dejar en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de detener, en extensión inadmisible de facultades, a personas ajenas a los hechos que se alegan como fundamento de esa detención, todo ello contra la recordada doctrina de la razonabilidad y en evidente transgresión de la inviolabilidad en la defensa en juicio (Voto en disidencia del doctor Boffi Boggero)”.³⁹⁷

El juez platense, Luis Boffi Boggero, se presentó en disidencia en la mayoría de los casos vistos vinculados a los recursos de habeas corpus que fueron interpuestos ante las detenciones a militantes en el contexto de la aplicación del Plan Conintes. En su recorrido judicial, Boffi rechazó la existencia de cuestiones políticas no judiciales haciendo énfasis en que la justicia no debía tener limitaciones en el control judicial; sostuvo la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad de la norma impugnada a través de las acciones de amparo y habeas corpus, como también rechazó la extensión de la jurisdicción militar a los civiles.³⁹⁸

Así, nos encontramos con otro de los fallos con fecha del 23 de septiembre de 1960, sobre el caso de “Luis Tomaselli”,³⁹⁹ donde en similares circunstancias a las de Ruben Iscaro, el Tribunal falló de la misma manera, con la disidencia de Boffi. O el caso de “Rodríguez, Juan Carlos y otros”,⁴⁰⁰ donde si bien en uno de los casos se habilitó el juzgamiento en los tribunales ordinarios, al resto se les mantuvo la pena dictaminada por el Consejo de Guerra Especial. Boffi, una vez más, remarcaba la inconstitucionalidad del decreto 2628/1960, que habilitaba la subordinación de las fuerzas policías de las provincias

³⁹⁷ Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Buenos Aires, La Ley, Tomo 103, pág. 518, 1960.

³⁹⁸ Para una mayor información acerca de la trayectoria del Juez Luis Boffi Boggero, véase: Tanzi, José Héctor, “Historia ideológica de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1955-1966)”, en *IUSHISTORIA*, Revista Electrónica, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Filosofía, Historia y Letras, N°3, Buenos Aires, septiembre 2006.

³⁹⁹ Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Buenos Aires, La Ley, Tomo 106, pp. 629-630, 1962.

⁴⁰⁰ Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Buenos Aires, La Ley, Tomo 106, pág.321, 1962.

a las autoridades militares y del decreto 2636/1960, que establecía la jurisdicción para los tribunales militares.

Pero, a pesar de sus argumentos en disidencia, las sentencias apeladas por los familiares solían ser confirmadas por la mayoría del Tribunal de la Corte, que aludía su beneplácito a la militarización como refuerzo del imperio de la ley, indicando el estado de subversión y violencia que existía, razón que justificaba a los Consejos de Guerra, la persecución política, los allanamientos y la puesta en práctica de los procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar. La constitucionalidad de los decretos eran reafirmados por el Procurador de la Nación que reconocía el “estado de insurrección” que se vivía en el país, y aplicaba el artículo 67 de la Constitución de la Nación que posibilitaba convocar a las Fuerzas Armadas por parte del presidente desplazando a la policía. De modo contradictorio, la legalidad partía de la misma negación de la constitución, condición inherente al Estado de Excepción, la necesaria anulación de la ley dentro de la ley misma, que restringía los derechos de los/as ciudadanos/as y los configuraba como enemigos potenciales, por debajo de la seguridad estatal y la protección del orden social instituido.

En efecto, se reconocía que el gobierno poseía la atribución de poner en vigencia un “derecho excepcional”, aprobado para posibilitar la autodefensa de la comunidad en situaciones de máximo peligro. Es decir, enfrentar las condiciones de violencia y amenaza que se considerasen como parte de acciones “subversivas” o “insurreccionales” que interfirieran en la “paz pública”.

Los jueces de la Corte Suprema de la Nación explicaban que este “derecho excepcional” debía comprenderse como un recurso extremo que utilizarían de manera “razonable” quienes ejercieran el poder político para restablecer la “normalidad” social. El “Derecho” y sus representantes, tal como advierte Benjamin,⁴⁰¹ aparecía aquí con su contenido propio de violencia, que se encargaba de conservar y fundar el orden de dominación establecido.

La inoperancia para “restablecer el orden”, era otro de los argumentos que la justicia utilizaba para validar la aplicación del Plan Conintes. Una vez más, la lógica de la excepcionalidad, se cimentaba en un proceso de legitimidad del Estado, que en primer lugar comenzaba anulando al sujeto de derecho, para luego anular sucesivamente todas las otras

⁴⁰¹ Véase, Benjamin, Walter, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid: Taurus, 2001.

dimensiones de la persona.⁴⁰² Bajo las normas de la disciplina militar se direccionaban las formas del vivir, normas que iban dirigidas a toda la sociedad -no sólo a la persona sancionada/criminalizada como enemiga- construyendo así una cultura social del orden, que si bien era sostenida desde las distintas instituciones del Estado, el principal objetivo era lograr la aceptación de una sociedad que se formateaba a partir de dicha disciplina. A fin de cuentas, este enemigo ilegal era juzgado desde la creación de un artilugio dotado de una falsa legalidad, que sustentaba la base irreal de un supuesto Estado de derecho.

V.3. El archivo y sus categorías

Dentro del archivo policial nos encontramos con las personas que fueron vigiladas por la policía de la provincia de Buenos Aires que quedaban fuera de las relaciones armónicas establecidas por un orden determinado del vivir; las potenciales o efectivas perturbadoras de dicho orden, que en este caso, hacían que la sociedad civil se tornase insegura y que por tanto el Estado debía controlar, volviéndola segura.

Los relatos que conformaron los diversos informes de inteligencia policial, fueron producto de la necesidad por parte del Estado de complementar el control sobre los sujetos y organizaciones perseguidas, desde la construcción de la información que los mismos “observados” generaban. En tal sentido, se considera a la inteligencia como una función de la policía que puede trazar sus orígenes en aquella definición que alude a esta práctica como “la prevención de la prevención”, estando la policía de inteligencia encargada de conocer “la mente pública”, con la intención de “auscultar la opinión al fin de instruir el poder sobre el estado de ánimo y las reacciones de la población, detectando las actividades subversivas”.⁴⁰³ De este modo, la función de la policía de inteligencia, en tanto su carácter anticipatorio, surgió al servicio del Estado y de su política como protector de sí mismo. La inteligencia conformada en un instrumento del aparato policial, intrínseco al saber estatal, funcionó desde la recolección de la información pública hasta la formación específica de un sujeto policial para la espía.

⁴⁰² Calveiro Pilar, “Violencias de Estado. La guerra antiterrorista contra el crimen como medios de control global”, Buenos Aires: Siglo XXI, 2012, pág. 99.

⁴⁰³ L’Heuillet, Hélène, *Baja política, Alta policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 29.

A partir de estas consideraciones, al iniciar la búsqueda sobre aquellas personas que fueron espiadas bajo el decreto Conintes, no se encontró una categoría específica que haya sido utilizada para catalogar o nombrar alguna carpeta que serviría al propio orden del archivo de la DIPPBA. Los antecedentes de los/las detenidos/as según los Consejos de Guerra del Conintes, fueron clasificados en la Mesa Referencia, que contiene información que no fue catalogada en ningún “Factor” del archivo, ya sea lo estudiantil, político, económico, comunal, gremial, prensa y laboral; o para aquello que les interesaba a todas, y “DS”, (Delincuente Subversivo) y subclasificados según la “Carpeta Bélico” y/o “Daños”.

Bajo la categoría “Delincuente Subversivo”, se registraba un abanico amplio de temáticas, aquí el concepto de enemigo al mismo tiempo que se ampliaba, se hacía más difuso. Se pueden encontrar antecedentes de personas, pedidos de captura, recortes de prensa, lista de detenidos y detenidas, allanamientos, etc.

En el contexto de la aplicación del Plan Conintes la aparición de atentados como parte de acciones clandestinas que se vinculaban tanto a la proscripción del peronismo, como al activismo de otras organizaciones y partidos, se hicieron frecuentes. De este modo, las sub categorías “Bélico, Daños y Varios”, fueron sintomáticas a ese orden ideológico que regía al archivo policial.

Si bien las clasificaciones no siempre eran tan exactas, ya que se podía encontrar información similar en las distintas sub categorías, para este período -fines y principios de 1960-, en la carpeta “Daños” se registraba información sobre diferentes tipos de atentados. Mientras que en la carpeta “Bélicos”, los legajos brindaban datos de allanamientos a casas con explosivos y armas:

“La policía secuestró en una finca de la calle Alvear 5911 de La Tablada, material bélico, deteniendo a XXX y otros. (...)”

Se secuestraron: un paquete de carbón vegetal, seis paquetes de un kilo de clorato o potasio; un paquete de azufre; una lata conteniendo algodón de pólvora; un cajón con 52 carcasas de granadas cargadas; once granadas cargadas y preparadas con mecha, tres bolsas de plástico conteniendo gelinita en barra; un rollo y dos fracciones de mecha color negra; once cilindros cargados con explosivos y listos para ser utilizados; dos cajas conteniendo gran cantidad de tubos de vidrio; una caja de metal conteniendo detonadores; una cartera plástica conteniendo 21 balas calibre 45; dos recipientes de vidrio conteniendo pólvora

negra y otro ídem conteniendo una substancia explosiva que no se pudo determinar”.⁴⁰⁴

Esta información, que provenía del Jefe de la Unidad Regional de Morón, daba cuenta luego del despliegue policial-militar realizado para tal allanamiento. En la casa se hicieron presentes un Oficial Inspector con cuatro agentes de policía de la Comisaría 3ra. de La Matanza, el Director de Coordinación Federal, Capitán de Fragata Raúl Angelini, con el comisario Vicente Zarategui de la misma Dirección, que según constaba iba con personal a sus órdenes junto a integrantes de la S.I.D.E.

En este caso, fueron detenidas dos personas y se ordenó la detención de una tercera “por suponersele implicado en este hecho”,⁴⁰⁵ a quien se le dispuso la vigilancia permanente en su domicilio. Al respecto, el informe mencionaba que dicha persona había sido agente de la Policía Federal en la Seccional 50, desde el año 1949 hasta 1956, fecha ésta en que fue detenido “implicado en actividades subversivas”.⁴⁰⁶ La lista de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad aparecía en varios de los legajos, incluso luego del Golpe de Estado de la “Libertadora”. En este aspecto se ve una continuidad hacia adentro del archivo policial sobre el interés político de buscar antecedentes de personas que hayan sido efectivos policiales o militares durante el peronismo. El activismo clandestino conllevaba a recrudecer estas búsquedas de personas, poniendo la lupa especialmente en estos ex agentes de las fuerzas de seguridad o militares.

El operativo continuaba haciendo lugar al Jefe del Consejo de Guerra correspondiente a la zona establecido por la aplicación del decreto que habilitaba al Conintes. Según se informaba, el 7 de mayo del mismo año se había recibido un llamado anónimo que derivó en la realización del informe perteneciente a Coordinación Federal, que fue entregado al Jefe del Consejo de Guerra Especial N°1 Teniente Coronel D. Juan Alberto Gomila, donde se indicaba que en la localidad de Ciudadela, en la calle Besares, se encontraba instalado un taller de fundición en el cual se habrían fabricado las granadas secuestradas oportunamente en la localidad de La Tablada.⁴⁰⁷

La información registrada en los archivos de la DIPPBA solía estar acompañada

⁴⁰⁴ Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Material Bélico, Legajo N°53, 25 de mayo de 1960.

⁴⁰⁵ Archivo DIPPBA, Mesa DS, *Op...* Cit.

⁴⁰⁶ Archivo DIPPBA, Mesa DS, *Op...* Cit.

⁴⁰⁷ Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Material Bélico, legajo N°71, 18 de mayo de 1960.

por diversos artículos periodísticos. Los titulares enfatizaban el carácter de terroristas de los detenidos que iba en sintonía con los propios informes policiales. “Entre salames, quesos y mortadelas, un impresionante arsenal de producción terrorista”; “Terroristas tenían su arsenal en una fiambrería de Villa Lugano”.⁴⁰⁸ Fue recurrente este estilo de titulares de la prensa donde se enfatizaba la asociación de “los terroristas” con los lugares de la propia cotidianeidad social, en este caso era la fiambrería convertida en un polvorín la que ponía en alerta a la población. La incidencia de este tipo de noticias en la década de 1960, iba construyendo un escenario propicio para la represión en la opinión pública. La prensa alertaba sobre aquel enemigo clandestino que se inmiscuía en los lugares más comunes de la ciudad, cimentando así el camino hacia una “guerra contra el terrorismo”, como un hecho inevitable. Como alude Lila Caimari, muchas veces el periodismo construía y construye una especie de sentido común criminológico popular en el que Lombroso tiene mucho más éxito que con los criminólogos.⁴⁰⁹

En este aspecto, es necesario considerar cómo ciertas nociones se construían y retroalimentaban desde este tipo de soportes, -la prensa- por fuera de las instituciones. Dichas nociones se podían instalar en la sociedad, antes que la propia institución le otorgara legitimidad para construir el sentido de verdad. Así, las investigaciones realizadas por la DIPPBA muchas veces comenzaban a partir de la información que los medios de comunicación publicaban. Por ejemplo,

Solicito del Señor Jefe quiera tener a bien ordenar a quien corresponda, se informe a este Servicio de Seguridad los antecedentes de la detención, por parte de la Brigada de Investigaciones de Lanús de XXX y XXX, hecho que fuera publicado por el diario El Día, de fecha 23 del corriente.

A tal efecto interesa conocer la participación de éstos en actos de terrorismo en la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal (...)

Asimismo, pongo en conocimiento del Señor Jefe que lo solicitado se hace en base a un pedido del Consejo de Guerra

⁴⁰⁸ Archivo DIPPBA, Op. Cit, legajo N°58, Diario Crítica, 14 de noviembre de 1960.

⁴⁰⁹ Caimari, Lila, “Usos de Foucault en la investigación histórica”, Documento de Trabajo N° 18, Serie “Documentos de Trabajo”, Escuela de Educación Universidad de San Andrés, octubre de 2005.

Especial N°1 de la Capital Federal, que ha juzgado y condenado en oportunidad del “Plan Conintes” a las personas ya mencionadas. (...).⁴¹⁰

Este pedido, que provenía de la Secretaría de Guerra, al Jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tenía como finalidad constatar fechas para poder determinar si las detenciones se encontraban comprendidas dentro de la fecha de vigencia del Decreto 2639/60. Aquí se entiende que si bien la centralización de la información existía, principalmente bajo la S.I.D.E a nivel nacional, y la DIPPBA, a nivel provincial, muchas veces los diversos organismos de inteligencia de la policía y Fuerzas Armadas recolectaban la información desde la prensa, o era a partir de allí que comenzaban el camino de la investigación y no a través de sus informantes.

Para este período puede comprenderse un interés más focalizado en los militantes peronistas y todo lo que estaba vinculado a este movimiento. Sin embargo, y como se pudo ver en los informes de doctrina de la DIPPBA, el ensamble de ambos - peronismo/comunismo- también era parte de las caracterizaciones, tanto desde la prensa como desde los legajos policiales. Así pudo encontrarse en un informe elaborado para el Jefe de Servicio de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), unos meses posteriores de la caída de Frondizi, apreciaciones como “células-comunistas-peronistas”. En este caso se detallaba que “en el sindicato del Canillita actúa un tal Ángel Cortez, activo elemento comunista y pro-castrista y que según el informante pertenecería a la célula comunista-peronista, descubierta en la calle Gascón 257 de Capital Federal, con cuyos integrantes mantendría estrechos contactos”.⁴¹¹

Esta información fue parte de una investigación ligada a lo sucedido en el llamado caso de la calle Gascón de Capital Federal, donde había una fábrica de baterías para autos y durante un procedimiento realizado por la Brigada de Investigaciones de San Martín hallaron explosivos, material comunista y armas. En este procedimiento murieron dos policías de la provincia de Buenos Aires, por lo que la repercusión y la investigación de este hecho fue de gran trascendencia, los detenidos tenían antecedentes Conintes. De esta manera se informaba al Jefe de la SIPBA, “...en consecuencia de un tiroteo ocurrido en el

⁴¹⁰ Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Bélico, Legajo N°71, 31 de octubre de 1960.

⁴¹¹ Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Daños, Legajo N°100, Ministerio de Gobierno Policía, Memorandum N°9, 15 de julio de 1962.

interior de la fábrica de baterías (...) resultaron muertos el Sargento Ayudante XXX y el Sargento XXX, ambos de la dotación de la Unidad Regional de San Martín”.⁴¹²

Aunque el informe tenía fecha unos meses posteriores a la caída de Frondizi, esta conexión venía gestándose con anterioridad. Los atentados que fueron registrados enmarcados en el período Conintes, también eran asociados a supuestas bandas “Castro-comunistas”. “Células Peronistas, Comunistas y Castristas han introducido y lo harían con frecuencia, contrabando de armas y explosivos en la Argentina. El refuerzo principal lo realizaría el Departamento de Paysandú, Entre Ríos, haciendo llegar las mismas a la Provincia de Buenos Aires, donde se distribuiría hacia la Capital”.⁴¹³

Los mecanismos de control desplegados hacia el interior de las fuentes policiales, nos inducen a pensar cómo en muchos de estos casos la categorización responde a una necesidad propia del orden interno del archivo. A su vez, estas nuevas asociaciones fueron creando nuevas identidades criminológicas dentro de la inteligencia de Estado, que respondían a interpretaciones ideologizadas como parte de una noción de mundo determinada. Aunque no siempre el “mote” con que se nombraba a los vigilados/investigados correspondía con su verdadera actividad política-ideológica, el propio contexto internacional, como se ve en este caso la influencia de la Revolución Cubana, brindaba el qué decir en los informes.

V. 4. En primera persona

*“Como acotación al margen infórmele que en un almacén del barrio dejó debiendo la suma de 150 pesos”.*⁴¹⁴

“Nací en una familia entre obreros y empleados, más o menos, de la pequeña burguesía”, comienza Gladys Mabel -Baby- Farías, oriunda de Berisso, provincia de Buenos Aires. Si bien en su casa se hablaba poco de política, su padre había sido un conservador militante por un tiempo. Cuando piensa en el comunismo, su militancia en el partido y sus convicciones, lo primero que recuerda es la escuela de monjas, “nos regalaban el librito, chiquitito de lo que era el comunismo”. Ese pequeño libro de color blanco con

⁴¹² Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Daños, Legajo N°100, Op. Cit...7 de julio de 1962.

⁴¹³ Archivo DIPPBA, Mesa DS, Carpeta Daños, Legajo N°100, Op. Cit...agosto de 1962.

⁴¹⁴ Archivo DIPPBA, Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta N°37, Legajo N°18, 31 de enero de 1961.

rayas negras fue determinante: en la portada tenía un dibujo de un hombre con un látigo y una criatura agachada. “Algo de lo que recuerdo de ese libro es que las nenas comunistas a los doce años eran madres. Una degeneración total del comunismo”, explica Baby y comprende en ese repaso selectivo por su historia de vida el peso simbólico e ideológico de su camino escolar. “Abandoné el secundario en segundo año. Ahí me desperté de lo que había padecido en la escuela de tantas mentiras y me hice atea”.

Los caminos de las ideas y prácticas que llevan a involucrarse políticamente con un proyecto son siempre parte de un contexto, de una matriz social y cultural que también legitima, estructura y convierte a esa historia individual en un relato que se entrelaza con muchas otras historias que hacen de un acontecimiento una construcción histórica que traslada esa narrativa individual a lo colectivo. Como se ha visto, no existió una categoría “Conintes” dentro del archivo policial bonaerense, y en el caso de Baby su expediente DIPPBA perteneció a la Mesa “C” Referencia Especial y la Mesa “A” Partidos Políticos. Cada legajo corresponde a sus dos detenciones respectivamente, una en 1960 y la otra en 1961.

“¿Qué, los comunistas hacen pic-nic?, preguntó Baby ante la invitación de una amiga de la familia. Y así fue. En un pic-nic búlgaro, en Punta Lara se afilió al Partido Comunista, y conoció a quien sería su esposo, un cordobés de Justiniano Posse, criado en Villa María, quien aparece en gran parte de su expediente policial. “...y bueno me afilié ese día. Un aniversario de la Revolución Rusa. Que acá se festeja un mes después, en noviembre de 1959”.⁴¹⁵

Su primera detención fue una noche de invierno, un 9 de agosto de 1960. Al regresar a su casa vio en la puerta de adelante un hombre de traje apoyado en el alambrado del vecino:

- Buenas noches, dijo Baby y entró, atravesando el pasillo descubierto.

Desde allí vio que la luz del living estaba prendida. “Debe ser algún camarada”, pensó. Cuando fue hacia el patio se dio cuenta que la puerta estaba abierta y ahí, “veo un montón de monos de trajes mirando todos para el pasillo y otro que venía atrás”.

⁴¹⁵ La diferencia entre los meses se debe a que el 25 de octubre de 1917 corresponde al calendario juliano que estaba vigente en el Imperio Ruso. El resto de los países bajo el calendario gregoriano la fecha corresponde al mes de noviembre.

- ¿Señorita Gladys Farías? Tenemos orden de detención y allanamiento.

Nueve policías de civil que se presentaron como comando Conintes, la llevaron hacia la Comisaría 8 va. de Berisso. “Sacaron revistas “Juventud”, nada más que eso. El tema era llevarme. Yo tenía miedo, porque hacía pocos días atrás a una compañera del Comité Central del Partido, María Mastroberti, la habían mandado al Sur”. Los traslados de los presos políticos bajo la normativa del Conintes eran frecuentes, solían pasar por diferentes cárceles del país hasta que llegaba el juzgamiento por el Tribunal Militar que correspondía según la jurisdicción.⁴¹⁶

Según el legajo de la DIPPBA, Gladys fue llevada a la Comisaría por las disposiciones del Decreto N° 4965/59, que prohibía las actividades comunistas. Las revistas, folletos, libros y bonos contribución, que según consta fueron secuestrados en el allanamiento a su domicilio, bastaron para llevarla detenida. “El que estaba afuera, era el jefe, Cisneros. Del único que se el nombre. El resto no se identificaba”.

Baby cuenta que fueron civiles que se presentaron como “comando Conintes”, quienes efectuaron el allanamiento en su domicilio y se la llevaron. Sin embargo, no fue específicamente por “terrorismo” o “subversión”, pero si se utilizó la propia estructura, como los efectivos policiales -bonaerenses y federales- montada a partir de la declaración del “Estado de Conmoción Interior” en el país.

“A rais (error del original) del estudio practicado en la documentación secuestrada con motivo del procedimiento realizado en el domicilio de Gladys Farias (...) se ha podido comprobar que actualmente se estaría trabajando por una mayor acción en el orden gremial, tendiente al máximo de captación, y les preocuparía la falta de elementos capaces entre los hasta ahora infiltrados, quienes no estarían dotados- debido al apresuramiento en sus designaciones- de la habilidad suficiente que les permita cumplir con las finalidades ideológicas...”⁴¹⁷

⁴¹⁶ Jorge Rulli, militante de la Resistencia Peronista, cuenta en una entrevista que durante los tres años que estuvo detenido, pasó de Las Heras, a la cárcel Militar de Magdalena, luego a Viedma, más tarde regresó a Magdalena, y los últimos lugares fueron Coronda y Caseros. Comisión Provincial por la Memoria. Archivo Oral N°1. Mayo de 2009.

⁴¹⁷ Archivo DIPPBA, Mesa “C” Referencia Especial, legajo N° 6343, 12 de agosto de 1960.

Su primera detención fue corta. Tres días. La hacían dormir en la oficina de la Comisaría y por las noches un policía le ponía una tarima, colocaba el colchón, corría el escritorio y le hacía la cama. Gladys recuerda que también había otro compañero detenido junto a ella. Pero, la segunda vez fue diferente. Estaba embarazada de su hija mayor y si bien ella salió enseguida, el resto de sus compañeros detenidos estuvieron unos cuantos meses. Fue una mañana de 1961 cuando aparecieron tres hombres de civil en su puerta, y otra vez lo mismo:

- ¿La señorita Gladys Farías?, perdón, señora.

-Sí, qué quieren. (Yo, como si no fueran a entrar)

-Somos de la Federal. Tenemos orden de detención y allanamiento.

Esta vez fue llevada a La Plata. Desde el Partido, recuerda, tenían en esta época órdenes de negar su afiliación comunista. Durante su detención atravesó la rutina policial que consistía en el interrogatorio, “Pedían nombres y si conocía a algunas personas. Siempre negué todo”. En el momento de la identificación, luego de las huellas digitales, se paró para que le pongan un número en la cabeza y vio al fotógrafo. “Me quería morir. -Turco! Y lo insulté, - estabas en la policía!. Nadie sabía nada en Berisso. Con él militábamos juntos en Acción Católica”. Y le sacó la foto.

En la orden de búsqueda que figura en el segundo legajo policial, se informaba que hacía cinco meses que no vivía en su casa de Berisso. El expediente corresponde a enero de 1961, pero Gladys dice que tuvieron que dejar su casa al año siguiente. En este caso en las averiguaciones que hizo el informante se aclaraba que en esa casa vivía el padrastro “del nombrado”, sería del esposo de ella, Rolando Grilli, y tres hermanos varones y una mujer. Recaía siempre un especial interés en saber sobre su esposo dado que ocupaba una referencia importante dentro del comunismo local. El resto de las averiguaciones fueron en el barrio. Este tipo de prácticas policiales, lo que se confeccionaba también como “informes ambientales”, favorecían en la construcción simbólica sobre la criminalidad del buscado en el mismo barrio: “En cuanto al nombrado (Rolando Grilli) nunca lo vieron en nada malo dentro del barrio ni en las inmediaciones, pero lo han visto con diarios del PARTIDO

COMUNISTA y revistas también. Como acotación al margen infórmele que en un almacén del barrio dejó debiendo la suma de 150 pesos”.⁴¹⁸

Lo irrisorio de la última oración del informante que pertenecía a la “Brigada Represiva 20”, lleva a comprender que más allá de la propia construcción de criminalidad, en tanto comunista, no era registrada como tal en el barrio e incluso que este tipo de comentarios al margen, quizás no respondían tanto al pre concepto que el informante podía tener del espiado, sino en la obligatoriedad de escribir al respecto como parte de su trabajo policial.

Al año siguiente, 1962, Gladys se enteró que fueron a buscarlos nuevamente a su casa de Berisso. Era un 1° de mayo. Esta vez fueron hasta allí con un vecino que vivía enfrente para que corroborare que era su casa. “El vecino era el zapatero del barrio, que me vio nacer”. Llorando después le contó que él no quería, pero lo obligaron. “No sé cómo le escapamos a la muerte, desde Frondizi en adelante, todos los gobiernos, hasta el de Cámpora, visitaron nuestra casa. Tuvimos que dejar Berisso”.

Los informes de inteligencia realizados por los policías nos hablan, como vimos anteriormente, de una noción de verdad construida desde su propia mirada de mundo. Cada legajo fue parte de aquel orden también que devenía de una construcción subjetiva de la realidad. ¿Cuál es la verdad construida una vez rescatada esa historia del archivo? ¿Qué pasado se lee en este presente?

Cuando Baby se encontró con su expediente policial hubo un dato que resaltó sobre todos y pensó en lo “tragicómico” de la situación. Saberse al borde de la muerte, perseguida y escondida durante muchos años, comprender el significado de una represión sistemática sobre sus vidas fueron sensaciones que la llevaban a sentir la gravedad de la situación política. Sin embargo, encontrar en el segundo legajo información sobre ella donde se aseguraba, con el peso de un servicio de informaciones, que era militante desde 1964 del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PRT), en la Universidad Nacional de La Plata, la hizo por un instante pensar en las propias limitaciones de los servicios de inteligencia. Baby había dejado el secundario en segundo año y continuó militando en el Partido Comunista hasta el año 2010. Leerse en el informe de ese modo generó dos

⁴¹⁸ Archivo DIPPBA, Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta N°37, Legajo N°18, 31 de enero de 1961.

sensaciones: por un lado, sentir que también se podía engañar de algún modo a los policías, entendiendo esas acciones como pequeñas resistencias; por el otro, la impresión de que se debían dar indicios a los superiores que legitimaran la búsqueda y comprobaran la dimensión de la “criminalidad” del espionado.

En algunos de los relatos tomados del Archivo Oral de la Comisión Provincial por la Memoria, también aparecieron ciertas irregularidades. En el caso de Francisco Mon, militante de la Federación Juvenil Comunista (FEDE), oriundo de la localidad bonaerense de Pehuajó, cuando leyó su expediente policial fue igualmente sorprendido al encontrarse en reuniones de las que no había participado nunca.⁴¹⁹ O el caso Hilda del Valle, quien de joven militaba en una Célula Agraria de la Juventud Comunista, también de Pehuajó, vio que en su legajo se decía que captaban niños cuando realizaban los pic-nic,⁴²⁰ una manera de demonizar a aquel otro comunista, de la misma forma que a Baby se lo inculcaban en la escuela de monjas.

Por eso, lejos de enfrentarnos con verdades sólidas sobre el pasado, los informes se nos presentan como un conjunto de supuestos compartidos en ese mundo policial, en ese orden social que fabricaban. Se encuentra así, que en muchos casos las respuestas que aparecen en los archivos de inteligencia como parte de las órdenes impartidas por un superior, resguardan una intencionalidad implícita orientada a encontrar uno o varios culpables, acorde a lo que a la institución policial le interesaba.

V. 6. Los encuentros con el “otro”

Bajo aquel contexto de encarcelamiento, muchas veces los y las presas políticas-comunistas y peronistas- convergían en un mismo espacio íntimo que de otra manera, quizás, no hubiese sido posible. El lugar de clausura para aquellas ideas y cuerpos movilizados por una sensibilidad política, también se convertía en un encuentro de aciertos e intercambios que potenciaban aquellas ideas.

En un pasaje del libro autobiográfico de la histórica militante comunista Fanny Edelman, recuerda cómo estando en la cárcel detenida por la aplicación del Plan Conintes,

⁴¹⁹ Comisión Provincia por la Memoria, Archivo Oral N°13, julio 2010.

⁴²⁰ Comisión Provincial por la Memoria. Archivo Oral N°10. Marzo 2010.

se encontró con un grupo de mujeres peronistas, luego de pasar por el Departamento de Policía y Coordinación Federal, dependencias que habían sustituido a la Sección Especial contra el comunismo de la ciudad de Buenos Aires. En este pasaje, relataba:

“En la mañana siguiente un grupo grandes de mujeres me rodeó. Todas peronistas, víctimas también del Plan Conintes. Allí comenzó el reconocimiento mutuo, el debate, las coincidencias, las divergencias, la amistad. (...) Verificamos entonces, cuánto desconocían la posición de los comunistas, tan perseguidos durante el gobierno del General Perón, a quien consideraban totalmente ajeno a toda medida represiva y por nuestra parte que habíamos tenido una visión estrecha sobre los sentimientos, las ilusiones y las esperanzas de una gran masa humana que abrigaba real voluntad de cambio”.⁴²¹

Francisco Mon, oriundo de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, militó en la Federación Juvenil Comunista (FEDE), y también relata sobre esos encuentros cuando estuvo detenido en la cárcel de Caseros,

“En la cárcel había dos pabellones, nosotros los comunistas teníamos un pabellón y los peronistas otro. Pero mucha gente del peronismo se vino con nosotros. Porque nosotros hacíamos todo una disciplina, no dejábamos entrar a la guardia adentro que nos limpie. Éramos ciento y pico en ese pabellón, hacíamos turnos, por ejemplo, de diez personas para hacer limpieza y servir ese día”.⁴²²

En este apartado es interesante observar cómo, si bien para la mirada del Estado peronistas y comunistas comenzaban a sincronizarse, la división de aquel otro dentro de la construcción del enemigo cobraba una faz material hacia el interior de lo simbólico del mismo aparato represivo. La cárcel construía la división trasladando el afuera hacia el adentro. Sin embargo, el cruce entre “los pabellones ideológicos” terminaba por romper los propios muros contruidos desde el afuera y el adentro. Estudiaban, jugaban ajedrez, hacían dos horas de deportes. “El jefe de la cárcel de Caseros era como el novio de Guidice (intelectual y militante comunista), le daba los horarios que él dirigiera”, recordó Mon.

⁴²¹ Edelman, Fanny, *Banderas, Pasiones y Camaradas*, Buenos Aires: Dirple, 1999, pág.123.

⁴²² Comisión Provincia por la Memoria, Archivo Oral N°13, julio 2010.

Estas escenas breves de la vida carcelaria fueron transformándose a lo largo de las décadas, incrementando su nivel represivo, alterado totalmente luego del Golpe de Estado de 1976, cuando no sólo se anuló cualquier tipo de actividad política hacia el interior de la prisión, sino que, se reforzó una política de deshumanización, con un quiebre físico y emocional al extremo en cada detenido y detenida.

Enrique Oliva, perteneció a Uturuncos,⁴²³ organización guerrillera peronista conformada en 1955, pasó por varias cárceles hasta ser juzgado por un Tribunal Militar en Tucumán. En su relato cuenta que pertenecía al grupo de “los condenados máximos del Conintes de Uturuncos”⁴²⁴ y que en ese trayecto de su vida carcelaria, pasó por Viedma donde más allá de la propia sectorización carcelaria, vivió el encierro con gente de la Juventud Peronista, situación que era muy común, siendo inevitable compartir pasajes de vida con otros presos políticos.

Simón Garmanik, oriundo de Lanús, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue detenido bajo el decreto de Aramburu N°4161 en 1956, que prohibía toda vinculación o símbolo de origen peronista, en la cárcel de Río Gallegos. En su experiencia el encuentro fue con diversos delegados fabriles, dirigentes comunistas y peronistas, y asegura que “en general había un buen clima entre nosotros, no había enfrentamientos”.⁴²⁵ Pero, lo interesante de este caso es la diferenciación que vale hacer entre los contextos de Frondizi y Aramburu. La persecución continuó, los decretos también. Pero, en el primer período el proceso de desperonización, claramente, fue radical. Al punto que, presos como Simón Garmanik estuvieron detenidos por ser considerados de origen peronista, a pesar de su militancia comunista, situación que luego confirmó por los diarios, “...y cuando salí libre el copete del artículo decía, *Fueron puestos en libertad los dirigentes peronistas que se encontraban detenidos en el sur*, una cosa así (...), y yo figuraba ahí”.⁴²⁶

Ya bajo la vigencia del decreto Conintes, Héctor Julio Spina, de militancia peronista, recuerda que cuando estaban detenidos en Las Heras los llevaron para ser juzgado por el Primer Cuerpo del Ejército, en Palermo, Capital Federal, donde estaba

⁴²³ Véase: Salas, Ernesto, *Uturuncos el origen de la guerrilla peronista*, Buenos Aires: Biblos, 2006, 2da. edición.

⁴²⁴ Comisión Provincia por la Memoria. Archivo Oral N°4. Noviembre de 2008.

⁴²⁵ Comisión Provincial por la Memoria. Archivo Oral N°9. Abril de 2010.

⁴²⁶ *Comisión Provincial por la Memoria...Op. Cit.*

constituido el Tribunal de Guerra N°1. Ahí “nos amenazaron con ejecutarnos, a mí me gatillaban una pistola, me martillaban en la cabeza pero que no tenía balas. Los tribunales de guerra no juzgaban por pruebas, porque pruebas no tenían ninguna, juzgaban por convicción”.⁴²⁷ La prueba se acomodaba a la necesidad del contexto político. La situación de sabotajes y antenados que se sucedían con regularidad hacia fines de 1950, bastaban para efectivizar las detenciones bajo la carátula de “terrorista”. En el caso de Garmanik, la necesidad política ubicaba en primer lugar a un borramiento a capa y espada de todo lo vinculado con el peronismo, pero que a los fines prácticos, ya para inicios de 1960 ambas políticas confluyeron en una sincronización comunismo-peronismo= terrorismo, como un hecho ineludible.

Al igual que la mayoría de los detenidos, Spina comentó que en la cárcel practicaban deportes y se leía mucho. Es interesante leer a través de su relato como la situación política también se trasladaba a las discusiones dentro de la cárcel.

“Esa es la época que Perón habla del famoso giro a la izquierda, habla que si el comunismo es la izquierda nosotros estamos 100km más a la izquierda que el comunismo. Entonces muchos se lo tomaron a pecho. (...) Comienza a vivirse en Magdalena, no digo un enfrentamiento, porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento, pero sí de palabra, eran los izquierdistas y los peronistas, gente bastante mayor que nosotros y que tenían otra formación. Muchos de ellos eran unos derechosos terribles, otros eran muy buenos peronistas y tenían tantos méritos o más que nosotros. Pero, ideológicamente eran parte de otra generación”.⁴²⁸

Para ese entonces desde el comunismo se analizaba el “giro a la izquierda” de las masas peronistas y se proponía trabajar en ese aspecto con los y las militantes y/o simpatizantes peronistas, apostando a una profundización y radicalización en los sectores obreros e intelectuales. “...el desarrollo dialéctico de la situación llevará inevitablemente a los sectores obreros y populares del peronismo a posiciones coincidentes con la de los comunistas y a la asimilación paulatina de la doctrina marxista-leninista”.⁴²⁹

⁴²⁷ Comisión Provincial por la Memoria. Archivo Oral N°8. Febrero 2009.

⁴²⁸ Comisión Provincial por la Memoria. Archivo Oral N°8. Febrero 2009.

⁴²⁹ Codovilla, Victorio, “El significado del giro a la izquierda del peronismo”. Informe rendido en la reunión del Comité Central del Partido Comunista. Buenos Aires: Ateneo, 1962, pág. 20.

Estas interpretaciones provenían de un período complejo de nacientes agrupamientos políticos, como lo fue en principio la “Resistencia Peronista”, que, como explica Lenci, no fue una organización centralizada,⁴³⁰ y sus derivaciones dentro del campo de la izquierda fueron con rupturas y reagrupamientos, donde algunos sectores comenzaban a tomar rumbos diversos como el camino de la lucha armada. Sin embargo, aquellas nociones del Partido Comunista que confiaban en el proceso de desperonización de la clase obrera luego de 1955, y el acercamiento hacia un partido de vanguardia, fueron parte de una mirada sesgada del PC que le costó divisiones internas entrados ya los años ’60.⁴³¹

Pero, hacia adentro de los muros carcelarios la fraternidad que muchas veces se generaba, construyó una identidad, un pertenecer -en el pasajero tiempo de la detención- a un mismo lugar por un mismo “delito” que los y las categorizaba como “presos Conintes”, más allá de las divisiones por los pabellones ideologizados. Quizás, lejos de estar totalmente unificados bajo la misma conciencia política de clase, lejos de una victoria que enarbolase los principios del marxismo-leninismo, como se pensaba desde la dirigencia del Partido Comunista, las confluencias a partir de la experiencia carcelaria, sin duda, generaron huellas emocionales en sus trayectorias de vida, que en lugar de disgregar, potenció las ansias y convicciones por continuar militando.

V. 7. Conclusiones

A través de la utilización de documentos que pertenecieron a las fuerzas policiales, se abre una ventana que permite visualizar en su interior nociones y verdades construidas por los propios agentes del orden. Pero, el marco que rodea a los archivos en su conjunto, nos lleva a relevar aquellos discursos represivos y normalizadores que fueron parte de la

⁴³⁰ Lenci, Laura, en Osvaldo Barreneche (dir.), *Historia de la provincia de Buenos Aires*, Vol. V, Capítulo 6, “Violencia política y terrorismo de Estado, 1955-1983”, Buenos Aires: Edhasa/Unipe, 2014.

⁴³¹ Al respecto, véase: Tortti, María Cristina, “Izquierda y Nueva Izquierda en la Argentina. El caso del Partido Comunista”, *Revista Sociohistórica*, N°6, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1999. González Canosa, Mora. *Las Fuerzas Armadas y Revolucionarias. Orígenes y desarrollos de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973)*, tesis doctoral en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata, 22 de noviembre de 2012.

voluntad del control normativo que recaía sobre las y los vigilados, como evocación de la pertenencia a un orden de Estado.

En 1957, con la incorporación del Archivo de la DIPPBA, esta información comenzó a tomar un orden dentro del orden, es decir, un orden que respondía a lo espacial y a una necesidad de ganar en tiempo y eficacia para el control. En este sentido, el surgimiento del fichero indicaba no sólo la necesidad del control de la vida de las personas, sino la de garantizar el contenido de estos registros en un “Archivo y Fichero”, que paradójicamente generara un orden de “criminalidades”, “peligrosidades”, o posibles amenazas a la “paz social”. No es posible pensar la realización de este tipo de armados burocráticos de la policía, sin visualizar sus antecedentes en el examen, que incorpora el registro individual al campo documental. En términos de Foucault, se puede comprender en esta técnica como cada dato del examen individual logra repercutir en los cálculos del conjunto,

“...el examen abre dos posibilidades correlativas: la constitución del individuo como objeto descriptible, analizable (...) y por otra parte, la constitución de un sistema comparativo que permite la medición de fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos colectivos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de otros, y su distribución en una ‘población’ ”.⁴³²

De este modo, el informe policial incorporaba en la organización de un archivo un lugar de poder que respondía al registro devenido en escritura, en texto de control, como parte de una pieza más que se institucionalizaba a medida que se consolidaba la policía de inteligencia. En tal sentido, como alude Foucault, el ojo se conforma como la metáfora de la policía. La práctica de la inteligencia materializada aquí en los “archivos de la represión”, despliega hoy una dimensión simbólica de la disciplina de los cuerpos en un sentido figurado: un extenso fichero que clasifica, ordena y jerarquiza el nivel de “peligrosidad” de aquellos “cuerpos” políticamente incorrectos, transformados en expedientes que conformaron la identidad de la institución de control.

⁴³² Foucault, Michel, *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009, pág. 221.

Sin embargo, por fuera de esta maquinaria institucional, las resistencias continuaban y se expresaban desde diversos soportes: huelgas, organizaciones de familiares, las solicitadas en la prensa, o los encuentros de militantes en el encierro. Estas aristas, resquebrajaban en cierta medida a las eficiencias del aparato estatal para el control del enemigo, que no lograba anularlo por completo, sino, por el contrario, muchas veces se constituía en nuevas identidades.

Si bien este capítulo está enfocado al período vigente de la aplicación del Plan Conintes, las identidades políticas construidas tanto dentro y fuera de la cárcel, como en las categorizaciones propias de los informes de inteligencia, son parte de una confluencia de años transitados que comenzó con el Golpe de Estado en 1955. Como se pudo ver los encuentros entre peronistas y comunistas desde los gremios y las distintas medidas de lucha, también tuvieron su correlación en las detenciones como fruto de un incremento en la escalada represiva junto con la sanción de medidas excepcionales, que reunían a las y los presos políticos en diferentes cárceles del país. La situación de encierro llevó al encuentro entre militantes, habilitándose así la cárcel como un nuevo espacio de socialización que fue construyendo una matriz identitaria más allá de las tendencias ideológicas propias que cada detenido y detenida traía.

La mirada sobre el enemigo seguía siendo genérica, a pesar de ser una época de grandes conflictos que llevó a la conformación de la “Resistencia Peronista”, los informes continuaban asociando a ambas líneas políticas -peronistas, comunistas- como parte de un mismo enemigo. Pero, cabe destacar una diferenciación en la búsqueda del enemigo interno, el ensamblaje, como se dijo, peronismo-comunismo= terrorismo, fue variando en algunos informes, donde en primer lugar se hallaba al peronismo como aglutinador y en otros discursos y documentos era el comunismo la cabecilla de todos los males.

Asimismo, la elaboración de aquellos informes de inteligencia muchas veces respondía a la obligatoriedad de encontrar al “culpable”, obteniendo como resultado información en clave o categorizada según la doctrina policial que no siempre era fehaciente. Con este tipo de narrativas propias de la institución que produce también a los sujetos que la escriben, nos encontraremos en el capítulo siguiente donde veremos la persecución a las mujeres comunistas y el control de los actos del Partido Comunista. Las

nociones de mundo y la construcción más amplia de una categoría de verdad que subordinaba a toda una política de Estado, será puesta en práctica sin condicionamientos.

Más allá de las variantes dentro de los expedientes policiales, en los informes que pertenecieron a la SIDE y las declaraciones de la prensa, no hay que dejar de mencionar las posibles coincidencias que hubieron en este período entre el Partido Comunista y el peronismo, cuyos puntos claves fueron la integración de los sindicatos y el apoyo a la candidatura de Andrés Framini como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1962. Recordemos que en su momento, tanto el peronismo como el Partido Comunista dieron su aprobación a la candidatura presidencial de Arturo Frondizi en 1958 como representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Aunque en pocas semanas las políticas económicas y de persecución antiperonistas terminaron de disolver el pacto Perón-Frondizi y confirmaron el pasaje definitivo de los gremios peronistas a la oposición sindical y a la resistencia armada contra la “traición” frondizista.⁴³³ En todos estos casos, la dirección comunista tomó, “una posición similar a la que emanaba de las directivas del ex presidente exiliado”.⁴³⁴

Como se vio, la creciente conflictividad social tuvo su correlato con el incremento represivo. En la provincia de Buenos Aires, la militarización de las zonas con mayor concentración obrera comenzaba a ser un triste paisaje que permanecería durante décadas. Los decretos de movilización de personal afectaron a vastos sectores como los ferroviarios y petroleros. Este fue uno de los recursos más utilizados por el Estado, junto con el estado de sitio y las detenciones bajo la vigencia del decreto Conintes, que resultó ser un combo de excepcionalidad creado para contener y desestabilizar a las manifestaciones sociales, como así también prever las futuras reacciones dentro del movimiento obrero ante la avanzada del programa económico de ajuste del gobierno.

La región bonaerense de La Plata, Berisso y Ensenada, comprendía un importante cordón industrial, y por ende de focos de luchas y resistencias de la clase obrera. Esto tuvo

⁴³³ Franco, Marina, “Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)”. En, *Revista Contemporánea: Historia y problemas del Siglo Veinte*, Montevideo, vol. 3. Pp. 77-96, 2012.

⁴³⁴ Campione, Daniel, “Hacia la convergencia cívico-militar. El Partido Comunista 1955-1976”, En, *Herramienta, Revista de debate y crítico marxista*, N°29, Junio 2005.

una relación directa con el esquema de la división territorial en zonas, sub zonas y áreas bajo autoridad militar y la militarización de las fuerzas policiales.

La continuidad de este esquema de orden territorial tiene su punto de maximización represiva en 1975, cuando la Armada emitió la directiva antisubversiva 1/75, en la que fijó su jurisdicción para la lucha antisubversiva, comprendiendo el mar, los ríos navegables, sus riberas, zonas portuarias y la zona territorial circundante a las bases y unidades de tierra, manteniendo el control operacional de la Policía territorial de Tierra del Fuego.

El 21 de noviembre de 1975, dicha Fuerza dictó como contribuyente de la directiva, el Plan de Capacidades de la Armada de la República Argentina-PLACINTARA 75- que mantuvo el esquema de 11 fuerzas de tareas, preexistente en la Armada. A partir de aquí se establecía que la Armada debía operar contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella con el apoyo de otras Fuerzas Armadas.⁴³⁵

Antonio Vañek, ex comandante de Operaciones, fue uno de los imputados durante el juicio en La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos por el Grupo de Tareas N° 5 de la Armada y Prefectura. En el año 1996 declaró, en el marco de la querella presentada por Abuelas de Plaza de Mayo, que el Plan Conintes era una organización permanente de la Armada y que era el origen de Plan de Capacidades de 1975.⁴³⁶

Los tribunales militares habilitados por la implementación del Plan Conintes, redefinieron una legalidad específica como parte también de un orden jurídico autoritario. Estos elementos propios del Estado de excepción en el Estado Moderno, aseguraron el control interno a través de las autoridades militares que poco a poco fueron conquistando terreno en la arena política. Este tipo de situaciones, la injerencia en temas de seguridad

⁴³⁵ Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria, Documentos del Estado Terrorista: Directiva del Comandante General del Ejército N°404/75 (Lucha contra la Subversión). Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional). Compilado por Rosa Elsa Portugheis, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2012.

⁴³⁶ El 19 de octubre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, dio a conocer el veredicto, del juicio donde fueron juzgados ocho represores, por cuarenta casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios, en la zona industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. El tribunal condenó al ex Comandante de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde; al ex Jefe del Batallón de Infantería de Marina N° 3 (BIM 3) José Fernandez Carró y al ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3, Roberto Guitian a prisión perpetua. A 25 años de prisión al ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek y a su par de la FT5 y director del Liceo Juan Carlos Herzberg y al ex jefe de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al ex oficial Eduardo Antonio Meza y al ex jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.

interna por parte de las Fuerzas Armadas, fueron cuestionadas por el propio gobernador bonaerense, Oscar Alende, y también por algunos legisladores. Sin embargo, puede comprenderse que los cuestionamientos desde el poder civil fueron perdiendo progresivamente lugar en las definiciones políticas.

Con el transcurso del tiempo, bajo los argumentos de la defensa nacional articulada con el orden interno, convertirían a las estructuras democráticas en escenarios militarizados, donde la amenaza “terrorista” continuaría siendo el sustento del ejercicio de un poder de facto.

En el capítulo siguiente se analizarán diversos informes de inteligencia y se intentará dar cuenta de los procedimientos y las categorías empleadas por los agentes policiales en el momento de la detección e infiltración en los ámbitos a los que participaba aquel “otro” comunista.

Capítulo VI. De la orden a la ejecución: los informes de inteligencia en la persecución al sujeto comunista

*La mirada recorre los adoquines de una ciudad, aparentemente, quieta. Abre la puerta, observa, se detiene. La retina se estampa entre la multitud que perturba aquella realidad, aparentemente, calma. La percepción incita al peligro. La mirada se vuelve mandato, vigilancia, policiaca: “Lo expuesto es todo cuanto por el momento puedo informar al Señor Jefe sobre el particular.... (Archivo DIPPBA, Mesa C)”.*⁴³⁷

Este capítulo se propone indagar en las nociones de los agentes de inteligencia de la policía bonaerense sobre los y las comunistas, en función del análisis de distintos legajos del archivo de la DIPPBA que abarcan los partidos de La Plata, Morón y La Matanza. Se hizo foco en el control de los actos del Partido Comunista y las actividades de la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA). Como parte del registro policial hacia esta última agrupación, también se incluyó un expediente particular de álbumes fotográficos, técnica que comenzaba en esa época a ser sistemática en la práctica policial.

El capítulo tiene por objetivo continuar desandando las distintas miradas sobre aquella clasificación de “enemigo interno de la Nación”, a la luz de las propias prácticas del Partido Comunista Argentino y sus llamadas organizaciones “colaterales”. La propuesta no radica en corroborar la veracidad de los informes policiales, sino en expresar los relatos y las construcciones sobre el “delincuente político comunista”, atravesados por los antecedentes históricos ya trabajados que pusieron de manifiesto la persecución y estigmatización sobre dicho sujeto. Interesa indagar en los supuestos sobre los que la mirada policial se basó a la hora de detectar al comunista, donde tal como refiere Lucía Eilbaum, “la categoría de la *sospecha*, más que fundar o dar origen a la intervención policial, la legitima *a posteriori*”.⁴³⁸

El relato sobre los y las vigilados/as, también pone aquí al descubierto las conexiones con el material de doctrina elaborado por las fuerzas de seguridad en relación a este enemigo de carácter mundial. Se procura analizar cómo se construyó la información y

⁴³⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 75, 20 de enero de 1957, folio 46, La Plata Sección 3.

⁴³⁸ Eilbaum, Lucía, “La sospecha como fundamento de los procedimientos policiales”, en *Cuadernos de Antropología Social* N° 20, pp. 79-91, 2004.

cómo se pusieron en juego aquellas tensiones del orden de lo político con los *saberes* policiales. Además, se pretende dilucidar qué era lo que realmente estaba habilitado para la policía en la rutina del espionaje, en función de las situaciones particulares y en qué devenía aquel informe o tarea encargada por un superior.

La información producida provenía de órdenes de la propia jerarquía de las dependencias policiales, pero también, en algunos casos, era remitida por otras agencias estatales dedicadas a las tareas de inteligencia. Lo mismo sucedía con las demandas de información que podían provenir de la Jefatura de la DIPPBA o de otras instituciones del Estado.⁴³⁹

A su vez, las diversas delegaciones constituidas por las comisarías de la provincia de Buenos Aires eran fuentes directas para la elaboración de informes sobre el seguimiento de personas, u organizaciones sociales y políticas. Las detenciones ilegales, el secuestro de material y folletos de partidos políticos, como los listados de los padrones de sindicatos, eran luego reunidos y enviados a la Central de Inteligencia policial en la ciudad de La Plata. Desde allí se procesaban y clasificaban los registros obtenidos, según las diversas “Mesas” y “Factores”, para la confección de legajos y fichas que luego se incorporarían en el “Archivo y Fichero” de la DIPPBA.

Los abordajes realizados en el anterior capítulo y en éste, sólo constituyen una muestra del funcionamiento de la inteligencia de la policía provincial, por lo tanto, no se pretende que el análisis devenga en conclusiones definitivas, sino en poder acceder a una aproximación en este tipo de tareas policiales, resguardadas -mayoritariamente- en la dimensión de lo confidencial. El siguiente análisis contempla diversos tipos de documentos como informes de inteligencia, memorandums, cartas y material secuestrado. La documentación seleccionada para la elaboración del capítulo perteneció a la “Mesa C Comunismo”, y “Mesa A Referencia” del archivo de la DIPPBA y abarca distintos momentos de los primeros dos gobiernos peronistas; el Golpe de Estado de 1956 y legajos que fueron parte del período del gobierno de Frondizi y de Alende en la provincia de Buenos Aires. El recorte temporal incluye algunos años que competen al período previo al Golpe de Estado del año 1955, ya que también interesó dar cuenta sobre el registro de la

⁴³⁹ Kahan, Emmanuel, *Unos pocos peligros sensatos. La Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires ante las instituciones judías de la ciudad de La Plata*, La Plata: EDULP, 2008, pág. 79.

policía bonaerense desde los inicios de las dependencias de inteligencia de la provincia. A su vez, cabe destacar que la UMA como agrupación surgió en el año 1947, y desde allí hasta el año 1956, se produjo la mayor concentración de información sobre ésta. Durante el gobierno de Oscar Alende en la gobernación los registros mermaron. Como se verá a continuación, el alcance del Decreto N°4965 del año 1959, bajo el cual quedaron prohibidas las actividades comunistas y el Partido, también incidió en las actividades de la UMA por ser considerada afín a esta ideología.

Entonces, el análisis devendrá en una mirada selectiva sobre lo que significó la totalidad del acervo registrado y acumulado en la “Mesa C”, como del resto del Archivo de la DIPPBA.

Por lo pronto, la intención de tomar diversos momentos políticos del país compete a la misma lógica secuencial que pretendió expresar este trabajo. La construcción histórica del “delincuente político” y sus diferentes categorizaciones desde finales del siglo XIX, se presentó como una característica de continuidad que enlazó a los gobiernos, con cambios progresivos en las tareas de acopio de información, propios de las coyunturas políticas del país. No obstante, la importancia de verificar empíricamente estas interpretaciones en el afán de reconocer tanto la necesidad histórica de la existencia de una “amenaza” al orden político imperante, como el de visualizar qué tipo de relación existió entre la práctica de inteligencia y los materiales de doctrina elaborados por la jerarquía de las distintas dependencias de seguridad, tanto nacional como provincial.

VI. 1. “Comunicar acto controlado”: los registros policiales en los actos del Partido Comunista

“Para combatir eficientemente al comunismo, es indispensable conocerlo; y para ello se lo debe estudiar en los hechos” (Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina).⁴⁴⁰

El registro de personas y organizaciones vinculadas al comunismo aparece en los archivos, como se indicó, desde la década del '40 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, tal como se señaló en el capítulo II, la División de Orden Público surge luego de que se

⁴⁴⁰ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, “Tema Comunismo”, Archivo y Fichero, Legajo N°167, 1956, s/f.

suprimiera a la Sección Orden Social, y de que se creara la Oficina de Movimiento Político, entre los años 1945 y 1946. A partir de junio del '46, la recopilación de información referente a las organizaciones sociales y políticas de la provincia de Buenos de Buenos Aires, quedó en manos de la recién creada División de Orden Público, dependiente de la Jefatura de Policía provincial.

Según los distintos legajos, se pone de manifiesto que el traspaso de la información se manejaba desde las distintas delegaciones de la provincia que funcionaban en comisarías, haciéndose más fluido este intercambio con el transcurso de las décadas. En la búsqueda del control individual sobre las posibles personas “comunistas”, se encuentran formularios catalogados como, “Anexo confidencial” y de carácter “estrictamente confidencial”, cuya finalidad era establecer datos biográficos y políticos sobre determinados sujetos sospechados por su filiación ideológica. En una ficha del 7 de agosto del año 1949, por ejemplo, puede leerse este tipo de registros. En el análisis de los datos del Secretario General del Partido Comunista, se visualizaba información sobre su comportamiento vinculado a su activismo político en relación al gobierno, como así también su lugar de trabajador “...apoyando las obras de Gobierno, siempre que las considere justas, goza de buen concepto y moralidad”.⁴⁴¹ Lo mismo se traslucía para el caso del Secretario de Organización del PCA, al manifestar consideraciones del tipo, “... goza de buen concepto y moralidad. Estas personas reciben órdenes directas de la Central sita en calle 12 n° 1073 de la ciudad de La Plata”.

Los registros de la policía durante el gobierno peronista se orientaron particularmente hacia la detección de grupos y/o personas comunistas y se focalizaban en averiguar sobre su comportamiento político. En el caso del Secretario General del Partido, por ejemplo, se ve cierta dualidad en la interpretación, pues el informe resalta como característica del sospechado, su apoyo a las obras del gobierno. En este afán por la detección comunista se encuentran varios registros de tipo estadístico, o cuya orden superior suponía establecer la existencia o no de Comités, o locales del PCA.

La práctica de los “censos estadísticos” que corroboraban si hubiera entidades comunistas o “colaterales” al mismo, en las distintas dependencias de la policía de la Unidad Regional La Plata, fue recurrente. Las órdenes impartidas desde la jefatura de la

⁴⁴¹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 76, La Plata Sección 4, Ensenada, 7 de agosto de 1949.

División Orden Público de la policía de la provincia de Buenos Aires se constituían bajo el carácter de “reservado”. El levantamiento de la prohibición al PCA durante el gobierno peronista no significó que se anulara el control permanente. Interesaba saber, en particular, los nombres de quienes conformaban las comisiones directivas y tenían cargos importantes en lo que significaba la estructura propia del Partido. Por ejemplo, en un informe que data del 16 de abril de 1951, se interpreta el “hermetismo que caracteriza a los miembros del PCA”,⁴⁴² al encontrarse el propio Comisario titular de la Sección 3ra. de la Plata, ante la negativa de quienes conformaban el Partido Comunista, para dar información sobre quiénes integraban la Comisión Directiva. Sin embargo, se obtuvieron los nombres y la dirección postal de los integrantes de dicha Comisión por medio de “otras fuentes”, que no aparecen explicitadas en el informe. En una primera instancia, el medio por el cual se pretendió obtener información, aparentemente, correspondía a un procedimiento no clandestino, que descartaba el secuestro de material o la vigilancia encubierta. Sin embargo, los mecanismos utilizados para el recaudo de la información incluyeron la búsqueda de “informantes” de la zona, quienes no aparecen literalmente en el escrito. A pesar de cumplir con el objetivo, el Comisario puso en duda la veracidad de la información, al no poder ser constatados los datos con los propios integrantes del Partido Comunista local.

Durante los años del peronismo, el PCA era reconocido y permitido por la legislación vigente como el resto de los partidos políticos. El factor ideológico funcionaba como un elemento de diferenciación con el resto, lo cual implicaba la constante vigilancia policial hacia el mismo. Estos métodos de control se contradecían con la propia ley que habilitaba su funcionamiento. En este sentido, el pedido de autorización a las autoridades competentes -policía- para la realización de actos y eventos, donde se debía detallar el lugar, la fecha y la hora de los mismos, dejaba a merced de las definiciones policiales la última palabra en la posibilidad de hacer alguna actividad o acto público. Muchas veces, estas iniciativas del comunismo local eran abortadas desde las autoridades policiales que consideraban a priori, su “natural negativa por razones de orden público”. Esta situación, denunciada por el propio Partido, era analizada desde la policía como una forma aplicada por los comunistas para autolegitimarse, es decir, se argüía que el propio Partido buscaba la

⁴⁴² Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 16 de abril de 1951.

censura para luego utilizar esos argumentos contra las políticas del gobierno. De este modo, la propia policía reconocía que existía un amparo legal que los protegía, comprendiendo que por razones ideológicas el Partido Comunista no debía resguardarse bajo las mismas garantías legales que el resto de los partidos políticos.

Resulta interesante la interpretación relevada en este legajo que hace referencia a la situación política y a las acciones del Partido Comunista, cuando “lo legal” y “lo ilegal”, estaban enmarcados por las políticas que el gobierno provincial y nacional dictaminaba; siendo la propia policía el actor que determinaba el falso matiz de legalidad con el que se encubría el comunismo: “...esta aparente faz legal, que es sin embargo un simple escudo tras del cual oculta sus verdaderos móviles y que le permite subsistir como organización; tiene su reverso de carácter internacional que persigue su expansión en el campo ideológico, como objetivo real”.⁴⁴³

Esta mirada inducía a fortalecer los argumentos que legitimaban al control permanente de cada acto que el Partido realizaba en la ciudad de La Plata; como la autorización o no para que éstos se llevaran a cabo. Es decir, los términos de la legalidad-ilegalidad, respondían a construcciones propias del mundo de los agentes de seguridad conducidos por las órdenes jerárquicas que acataban, excediendo la letra propiamente de la ley:

“En la fecha, siendo las 21 horas en el Comité del local del Partido Comunista, sito en la calle 12 entre 54 y 55, se constató una reunión ilícita, de la que participaban alrededor de doscientas personas pertenecientes a dicha agrupación, parte de las cuales, se retiraron antes de llegar la Policía, lográndose la detención del apoderado del Partido XXXXX, y setenta y ocho personas más, quienes se habían guarecido en el interior del local, negándose en primer momento al acceso del personal policial”.⁴⁴⁴

Este “Memorandum” con fecha del 22 de abril de 1953, daba cuenta de la continuidad en este tipo de control y de la práctica contravencional como medio de prohibición y detención de personas, “detenidos los nombrados fueron sometidos a proceso contravencional, siendo alojados en la Seccional 3ª. Habiendo intervenido en el procedimiento del personal de

⁴⁴³ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 1951, folio 28.

⁴⁴⁴ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 22 de abril de 1953.

Seguridad y de esta División, a las órdenes del Jefe Regional y del suscripto respectivamente”.⁴⁴⁵ Una vez más, este tipo de procedimientos constitutivos de la vigilancia policial sobre los grupos políticos disidentes, puede interpretarse en el sentido que Brodeur define, “como la obligación operativa permanente de la policía: la producción de sospechosos identificados por su nombre”.⁴⁴⁶

Sabido es que el comunismo no estuvo prohibido durante el peronismo, pero de todas maneras, la policía estuvo provista de otros insumos legales que amparaban este tipo de prácticas de control, como el decreto del Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual las actividades y reuniones públicas debían ser autorizadas y supervisadas por la policía. En este caso, era el apoderado del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, quien efectuaba la nota a la policía dando explicaciones de la realización de determinado acto, la temática y sus oradores. Esto indicaba que el propio PCA accedía a las normas impuestas por el gobierno para la realización de sus actos, a sabiendas del carácter restringido y controlado de los mismos, e incluso esto era evidenciado a tal punto que el mismo apoderado se encargaba de indicar, mediante una nueva nota, si hubiera cambios de fecha u oradores en el evento. Un ejemplo de ello aparece en el legajo N° 75, con fecha del 28 de julio de 1955:

“(…) Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Apoderado General del Partido Comunista de esta Provincia a fin de comunicarle los siguiente:

a) Con relación al acto del día sábado próximo: A raíz de otros actos similares a realizarse en otros lugares, se sustituirán dos de los oradores registrados en la comunicación anterior: los ciudadanos XXXX y XXXX se reemplazan por los compañeros XXXX y XXXX, confirmándose los restantes ya conocidos por Ud.

b) Con relación a la Dirección local de esta agrupación: informo a Ud. a sus efectos y satisfaciendo el pedido efectuado por esta seccional que la Dirección local del Partido la constituyen los siguientes compañeros: -XXXX-XXXX e XXXX”.⁴⁴⁷

⁴⁴⁵ Archivo DIPPBA, Mesa C, Op. Cit., 22 de abril de 1953.

⁴⁴⁶ Brodeur, Jean-Paul, *Las caras de la policía: prácticas y percepciones*, Buenos Aires: Prometeo, 2011, pág. 238.

⁴⁴⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, Eva Perón, Sección 3, 28 de julio de 1955. La ciudad de La Plata, fue llamada durante el año 1952 hasta 1955, como ciudad “Eva Perón”.

En esta carta enviada por el apoderado del Partido al Comisario de la Sección Tercera, se deja constancia también de los procedimientos del PCA para llevar a cabo sus actividades públicas. A pesar de sus denuncias contra el aparato represivo del gobierno, no rechazaba enviar información a la misma policía que efectuaba las detenciones a sus militantes en determinadas actividades. La misma carta tiene un destacado en el punto “b” que efectúa la policía. Esta intervención de la policía en el documento, brindando datos de los integrantes de la Comisión Directiva del Partido, fue una práctica recurrente que obedecía a las órdenes que se efectuaban hacia los agentes policiales en las distintas secciones.

El interés de la policía radicaba en el conocimiento de los principales referentes comunistas en La Plata. Este registro lo efectuaban mediante la obligación al Partido de aclarar en cada acto quiénes hablarían y quiénes conformaban la Comisión Directiva del Partido local. A su vez, esta información era ampliada con el mismo informe de inteligencia relevado desde la observación y escucha de determinado acto. Esta obligación estaba amparada por la Ley Nacional 14.400, “Actos o reuniones públicas” de 1954, desde donde se podía impedir o reprimir, aquellos actos o propaganda política, que tendiera a la alteración del orden y la tranquilidad pública.⁴⁴⁸ La continuidad de la Ley de Residencia del año 1902; el Decreto Nacional de Delitos contra la Seguridad del Estado del año 1945, aplicados para ilegalizar huelgas obreras y la puesta en vigencia de los edictos policiales, siguieron siendo los recursos habilitantes para efectivizar la vigilancia policial. A pesar de la existencia de este dispositivo normativo, los agentes muchas veces entraban a los actos como infiltrados, a los fines de lograr, quizás, el detalle más minucioso de lo acontecido, intentando pasar desapercibidos entre la multitud.

Este dispositivo legal tuvo su continuidad en los sucesivos gobiernos durante la primera mitad del siglo XX, fortaleciendo el poder policial y las decisiones arbitrarias habilitadas desde la orden superior a los policías que efectuaban en la interpretación de los actos que debían controlar. El resultado de todo ello, se materializaba en la confección de legajos que pronto se ordenarían con más rigor en los estantes del Archivo y Fichero de la Central de Inteligencia.

⁴⁴⁸ Ley Nacional 14.400, “Actos o reuniones públicas”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XIV-A, La Ley: Bs. As, 1954, pp. 267-269.

Luego del intento de Golpe de Estado del 16 de junio de 1955, donde el pronóstico para el gobierno comenzaba su derrotero, el Partido Comunista realizó un acto en que enfatizó con preocupación el conflictivo y violento contexto político que se avecinaba. Se denunciaba el asesinato del dirigente azucarero de Tucumán, Carlos Aguirre en 1949 y la desaparición del médico Juan Ingalinella, de la ciudad de Santa Fé, en 1955, ambos militantes comunistas. Desde la jefatura de Vigilancia General, de la División de Orden Público, se pidió el control del acto y la posterior confección de un informe de lo sucedido al Oficial Sub Inspector, Luis Luna, de la Comisaría 3ra. de La Plata.

En la redacción del informe, puede verse cómo el uso de la primera persona se combinaba con las aclaraciones del propio redactor, que respondía literalmente a la misma jerga del orador, es decir, del controlado:

“Se refirió al Comisario LOMBRILLA que no es ajeno la torturas y que cómo otros jefes en lugar de recibir el castigo merecido, han sido ascendidos (...)

Que se ponga fin a esta negra historia de torturación policial y se supriman las secciones de Orden Social y Orden Público, como así también la Sección Especial, que se restablezca el recurso de hábeas corpus.- que se suprima la llamada justicia policial, que se entreguen los restos de INGALINELLA. (...)

... hemos asistido a un hecho sangriento y así hemos visto como los aviones arrojaban bombas contra el pueblo indefenso, sin aviso de las sirenas de alarma y donde vimos que todo un pueblo salió a luchar contra los aviones asesinos. (...)

Aludiendo a los rumores que circulan manifestó que no son sólo rumores, sino que el pueblo debe estar alerta para aplastar otro Golpe de Estado, para defender la entrega de la riqueza del país al imperialismo yanqui.- No queremos que el Gobierno converse a espaldas del pueblo, queremos como en 1810 que el pueblo sepa de lo que se trate (se refiere a los tratados comerciales y a la entrega del petróleo a los yanquis)...”.⁴⁴⁹

En el mismo informe se denunciaba a la propia policía por “torturadora”, denominando el momento como “la era de la picana eléctrica”, concadenando los crímenes de los militantes comunistas con el intento de Golpe de Estado, que dejó cientos de civiles muertos en la Plaza de Mayo. A su vez, durante el acto se expresó el repudio a la clausura de locales, “la

⁴⁴⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 30 de julio de 1955.

libertad a los presos políticos y el procesamiento y exoneración de todos los funcionarios policiales que han actuado y actúan como torturadores”.⁴⁵⁰

El motivo que movilizó la orden del informe de inteligencia se involucraba también con el interés por parte del gobierno peronista ante el llamado a la “conciliación nacional” y la posición que tomara el comunismo al respecto. No obstante, la relación de dicho Partido con la policía, resulta por momentos paradójica -quizás estratégica- cuando por un lado se ponía en conocimiento de todo acto y quiénes lo integraban a la policía, mientras que por el otro se la denunciaba y reconocía como artífice directa de las torturas y persecuciones políticas a militantes: “Debo informar al señor Jefe que antes de iniciarse el acto se voceaba por los altoparlantes pidiendo la suspensión de Orden Social y Sección Especial de Rosario y de esta ciudad y el castigo a los torturadores: OHIVALLE, BLANCO, LUNA, y REYMUNDO”.⁴⁵¹

En este marco, cada informe estaba signado por la identificación de los principales referentes comunistas, o de quienes hacían declaraciones consideradas por el informante como trascendentes para el control: “Conste que entre la concurrencia se pudo individualizar a los dirigentes XXXX, XXXX, con sus hijos, XXXX, XXXX y los hermanos XXXX (...) A continuación debo informar la numeración de chapas de autos: 317-190 y 100-778 y 415-371.-Lo expuesto es cuanto puedo informar a usted”.⁴⁵²

Luego del golpe de Estado de septiembre de 1955 por la autodenominada “Revolución Libertadora”, el contenido de los informes de inteligencia vinculados al comunismo empezó a comprender variables impregnadas de una subjetividad “antiperonista” propia del gobierno provisional. El foco de atención de los redactores se centraba en los análisis políticos-económicos de los actos del PCA, su influencia y detección o no de “elementos” ideológicos que pudieran ser considerados como parte del ideario del gobierno derrocado. A su vez, las denuncias sobre torturas y la exigencia por la disolución de las dependencias policiales encargadas de la vigilancia política, continuaron siendo la base de los discursos y actos del Partido Comunista.

Con motivo de informar quién organizaba un acto en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, para entrevistarse con el Interventor de la provincia de Buenos Aires,

⁴⁵⁰ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, Op. Cit.

⁴⁵¹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Op. Cit., 30 de julio de 1955.

⁴⁵² Archivo DIPPBA, Mesa C, Op. Cit., 30 de julio de 1955.

Coronel Ossorio Arana, el Jefe de la Sección Vigilancia, Oficial Principal Juan Carlos Sánchez, elevó un informe donde se detallaban los autores del acto a realizarse frente a la Casa de Gobierno provincial:

“...titulándose ciudadanos torturados, sería organizado por el Partido Comunista, quien se presentaría en la Casa de Gobierno portando cartelones con inscripciones con los nombres del personal de esta Dirección.

También se ha tenido conocimiento, que algunos procuran obtener nombres del personal de esta Dirección, sin distinción de jerarquía a los efectos de acusarlos como torturadores y así influir a la disolución de esta dependencia, lo que sería el motivo principal que los guía. También ha trascendido, que los mismos se propondrían efectuar una manifestación, por distintos lugares de la ciudad, lo que traería aparejado una posible alteración del orden público, cosa que podría ser aprovechada por partidarios del régimen depuesto”.⁴⁵³

En este caso, el nuevo escenario político comenzaba a habilitar a la policía la incidencia en reflexiones de índole político, previendo circunstancias que pudieran alertar nuevos controles policiales. Si bien el “blanco comunista” siguió siendo vigilado, se destacaba un interés especial por detectar posibles conexiones de origen peronista, en el hipotético escenario donde un caudal importante de la militancia peronista pudiera ser proclive a acercarse al tipo de ámbitos opositores que generaba el PCA. Para esta época los análisis doctrinarios, plasmados en estos informes de inteligencia policial, confluían en la asociación peronismo-comunismo-marxismo. El correlato de este vínculo en la realidad pudo haber sido de muy dudosa veracidad, aunque desde la militancia comunista se reconocía en el obrero peronista un potencial activista que pudiera encausarse en el terreno de la lucha reivindicativa y política si abrazaba la causa del comunismo. Desde este espacio se pensaba más en términos de “conversión” que de alianza entre obreros peronistas y comunistas.

Desde el análisis doctrinario, este tipo de “sospecha policial” que vinculaba una posible articulación peronista-comunista, se desarmaba muchas veces en los hechos. Tal fue el caso, cuando el mismo apoderado del Partido Comunista reclamó al gobierno

⁴⁵³ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, año 1955, s/mes y día.

provisional ante las limitaciones dispuestas por las autoridades policiales a las reuniones públicas preparadas por el PCA a lo largo del territorio bonaerense, durante el gobierno depuesto. Nuevamente, el PCA, a contra mano de los estereotipos efectuados por los “analistas” de la fuerzas de seguridad, insistía por la vía formal para comunicarse con la autoridades del gobierno provisional. En este caso, se descalificaba al gobierno anterior por las restricciones que había aplicado a la realización de actividades políticas. En esta oportunidad se adjuntaron dos “memorándum” sobre el control de actos públicos y la información de la clausura de un local del Partido Comunista en Avellaneda desde el año 1953. Allí, se expresaba el descontento hacia el gobierno peronista, pues “existía un orden legal que autorizaba la existencia y actividad de los partidos políticos, pero en la práctica esta autorización se traducía a la administración por gotas de los derechos básicos de la constitución”.⁴⁵⁴

A su vez, el apoderado del PCA elevó una carta que acompañaba a este legajo, donde manifestó el reclamo por las restricciones impuestas para celebrar el Día del Trabajo. En la carta dirigida al Jefe de la policía provincial del gobierno dictatorial, retomaba la argumentación anterior, señalando síntomas positivos en el orden de las garantías políticas. Esta valoración tuvo como correlato el discurso de la propaganda oficial de “la Libertadora”, que condenaba las prácticas del peronismo depuesto en relación a las prohibiciones para realizar reuniones públicas de determinados partidos. Buscando marcar una diferencia en este sentido, el gobierno golpista se mostraba disponiendo lo contrario:

“A lo largo de la Provincia se ha comunicado por intermedio de las seccionales policiales a las autoridades locales que los actos públicos preparados para el primero de mayo estaban autorizados en ‘local cerrado y sin parlantes al exterior’. Mientras que todas las agrupaciones políticas y sindicales tienen la vía pública, sin restricción de lugar ni de parlantes para efectuar sus reuniones. Discriminación que no aceptamos en absoluto por infundada e ilegal”.⁴⁵⁵

Sin embargo, a partir de disposiciones como estas, desde el PCA se repudiaban las contradicciones entre las palabras y los hechos. En este caso, por ejemplo, el apoderado del

⁴⁵⁴ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 27 de abril de 1956.

⁴⁵⁵ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 28 de abril de 1956.

Partido informaba los lugares donde se habían restringido los actos y reuniones a los fines de rectificar dicha decisión. Una muestra más de los métodos que se utilizaban desde el comunismo partidario para acceder a las garantías políticas, como cualquier otro Partido, alejándose estas actitudes de las interpretaciones policiales y militares sobre el comunismo. En el plano local, el partido en la ciudad de La Plata otorgó, en este período, las propias fuentes que burocratizaron su control.

De este modo, durante el año 1956 desde el gobierno de “la Libertadora”, se continuó con las órdenes por reconocer en el territorio de la ciudad de La Plata la existencia o no de Comités del Partido Comunista o entidades consideradas “colaterales”, como así también, se ejerció el control sobre quiénes lo integraban y la realización de algún acto que los identificara. La vigilancia tuvo claramente una continuidad, por la cual -como se expresó en el capítulo II- no se prohibió ni se proscribió de manera absoluta al PCA, para poder garantizar un registro minucioso de sus integrantes y sus organizaciones afines.

Las órdenes impartidas comprendían un registro sobre la existencia de partidos en todas las Seccionales que eran parte de la ciudad de La Plata, extendido a las localidades aledañas, como Ensenada y Berisso, cuyo interés radicaba en su fuerte concentración obrera por las fábricas allí instaladas. Estos pedidos, eran parte de la actualización de datos y “cruce de información en el tiempo”. Un ejemplo de ello se puede apreciar en la solicitud de informe sobre el Partido Comunista en Ensenada con fecha del 30 de abril de 1956, donde se expresaba que el Partido se hallaba desorganizado, identificando a la persona más destacada dentro de las filas comunistas locales. Un obrero cervecero de dicha localidad era el dirigente al que se le adjudicaba ser la persona con más “ascendencia” dentro de los afiliados, consideración que se sustentaba con un anexo documental del año 1949, es decir de la anterior dependencia de inteligencia perteneciente al gobierno depuesto. En el informe se detallaba que el local de Ensenada, “se encuentra aparentemente desorganizado no habiendo en la actualidad comisión directiva; dependiendo en consecuencia sus afiliados del Partido Comunista de La Plata”.⁴⁵⁶

La custodia para la obtención de información requería de un tiempo extra en la búsqueda de un dato para el agente encargado de la inteligencia. Una tarde de enero de 1957 la calle 12, entre 54 y 55, de la ciudad de La Plata, se vio rodeada por personal

⁴⁵⁶ Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 76, La Plata Sección 4, 30 de abril de 1956.

policial de civil. Desde una terraza la vigilancia se hacía permanente hacia el interior de una casa donde funcionaba el Comité Central del Partido Comunista de dicha ciudad.

Según el registro policial, más de setenta personas pasaron por allí, sin quedarse en el lugar. Las formas que adquirió el control, también derivaron en interpretaciones del informante nutridas por el contexto socio espacial de la zona. Suposiciones y miradas impregnadas por el concepto de que este tipo de reuniones desobedecían al “sentir nacional”, convertían al relato en un juego de espionaje, donde se dejaba la sensación de que el “otro” vigilado y perspicaz daba cuenta de su control, por lo que evadía la mirada invisible de varios civiles de la fuerza, apostados en la casa lindera. El control de los movimientos impregnó el relato policial de sobreentendidos, donde como en una película muda, la grafía y las señas confluían en una nueva reunión de los custodiados, con menos personas y en otro lugar, burlando el panóptico itinerante que montaba la policía para producir información sobre cada acto que programaba el Partido Comunista.

Los informantes ajenos a las fuerzas de seguridad eran fuentes imprescindibles para la construcción del relato,

“... después de averiguaciones practicadas entre el vecindario, se ha podido establecer lo siguiente: que la reunión de figuración no se realizó dentro del local social de dicho partido, pues dicha finca fue atentamente observada desde una casa lindera, domicilio de un Señor Oficial de esta repartición. Que en esta última finca se hicieron presentes empleados de la seccional 1ra., quienes también vigilaron el cumplimiento de la prohibición impuesta a la realización del acto por la Superioridad.”⁴⁵⁷

Durante toda la jornada vespertina, el agente pudo detectar cómo los y las militantes lograron franquear los obstáculos impuestos por el gobierno para la realización de reuniones políticas. Las averiguaciones lograron revelar que la reunión efectuada en un restaurante de la zona estaba solicitada para el personal del frigorífico Swift de la localidad de Berisso, aldeaña a La Plata. Sin embargo, no pudo acceder a la obtención del contenido de las conversaciones, mientras que el principal informante, reconocido en el vendedor de

⁴⁵⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 20 de enero de 1957.

cigarrillos de enfrente, no se encontraba. El objetivo truncado, era poder establecer la existencia o no de un vínculo entre las personas que se retiraron del local del Partido Comunista, al tener conocimiento de la suspensión del acto, y las alrededor de 40 personas que se dirigieron luego al restaurante mencionado.

Este ejemplo indica cómo en verdad existían limitaciones en el trabajo policial y pone de manifiesto las estrategias dadas por los mismos vigilados quienes, al parecer avisados, evadieron el control entorpeciendo el resultado esperado por las fuerzas de seguridad. Se podría presumir, al menos, que los mismos militantes tenían su “contrainteligencia”, o sus “informantes”, y para evitar que sus acciones y palabras llegasen al conocimiento policial, generaban falsas reuniones, o montaban falsos escenarios políticos. En sintonía con esta escena descrita desde la mirilla policial, se encuentra esta historia relatada por Hilda del Valle, militante de la Juventud Comunista de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires. En dicha localidad se organizó el Congreso de Juventudes Americanas, el Comisario local les había advertido que mientras él estuviese nada de eso se iba a organizar. Sin embargo, notificaron a la policía que el evento se iba a realizar y dieron un lugar falso.

“Y a las seis de la mañana estaban colectivos de Carlos Casares, 9 de Julio, Trenque Lauquen, éramos como quinientos en un campo y fuimos unos tirados en unas camionetas, acostados para que no nos vean. Cuando ellos se dieron cuenta estábamos todos ahí. Y no pudieron hacer nada. Por eso que después la bronca, nos siguieron tanto y... las juventudes anticomunistas que trabajaban andaban bastante detrás nuestro que era el que daría la información”.⁴⁵⁸

Estos casos, fueron parte también de las resistencias de los y las vigiladas y relativizan -de alguna manera-, aquella custodia policial que muchas veces no se correlacionaba con la maquinaria de inteligencia montada en los documentos de doctrina, donde desde extensos organigramas y conferencias, el enemigo demonizado parecía estar minuciosamente estudiado y siempre bajo un perpetuo estado de control y vigilancia.

⁴⁵⁸ Entrevista a Hilda del Valle. Marzo 2010. Archivo Oral N°10. La entrevistada no recuerda con precisión la fecha del Congreso, estima que fue entre los años 1960 y 1961.

Hasta 1959, año en que se dictó el decreto-ley que prohibió las actividades del Partido Comunista, las órdenes en relación a dicho Partido consistieron preferentemente en el control de cada acto detectado por la policía y en el relevamiento de la existencia de locales y comités del Partido Comunista a lo largo de las distintas jurisdicciones de las comisarías de la ciudad de La Plata y sus delegaciones. Muchos de los “memorándums”, en los que se requirió este tipo de información fueron elaborados bajo el carácter de “estrictamente confidencial y secreto”. Hacia finales de la década del ’50, se podría decir que existía un registro actualizado sobre los distintos locales comunistas, sus integrantes, antecedentes y caracterizaciones del sujeto político. Por ejemplo, se subrayaba que en Tolosa, localidad que depende de la ciudad de La Plata, la Comisión Directiva del Partido Comunista estaba integrada mayoritariamente por el “elemento ferroviario”.⁴⁵⁹ Como así también, a partir de este conocimiento, una alerta de control permanente se establecía sobre estos locales, de los cuales también se brindaba información sobre su funcionamiento y características edilicias:

“A la sede del Partido Comunista, arriban unos a pie y otros descienden de transportes públicos (taxis, micros o troylebuses), y luego de permanecer por espacio de algunas horas se retiran de la misma sin los paquetes, cuando los ingresan, o bien con ellos, si no han introducido al local bulto alguno.

Se presume que el contenido de tales paquetes o bultos, pueden contener propaganda ideológica roja con la que se persigue envenenar las mentes de nuestros jóvenes incautos. También podrían contener armas o material para construir artefactos explosivos de intimidación pública con fines terroristas”. (...)

En general, los concurrentes, son jóvenes de ambos sexos aunque en su mayoría son varones, y al parecer estudiantes universitarios, que por ahora no han sido individualizados por tratarse de activistas nuevos en el ámbito local.”⁴⁶⁰

Es interesante cómo el “se presume”, constituía la base de la sospecha que a priori los condenaba de “terroristas”, siendo parte de la construcción del agente que elaboraba el informe, como síntoma de una subjetividad policial que los formaba en estas tareas. En esta lógica, tanto los explosivos, como la propaganda roja, se colocaban en un mismo nivel de

⁴⁵⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 78, La Plata Sección 6, Tolosa, 7 de mayo de 1958.

⁴⁶⁰ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 81, La Plata Sección 9, s/f.

peligrosidad; una por su impacto de destrucción material; la otra por su destrucción emocional e intelectual. En este caso, el agente no sólo se remitió a describir los sucesos según su “observación”, sino que arriesgó interpretaciones que claramente, se condescendían con el espíritu anticomunista de los materiales de doctrina.

El registro de la vigilancia policial era solicitado no sólo por la Central de Inteligencia provincial sino también por otras agencias, como la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, de carácter nacional. En este sentido, para el período pos “Libertadora”, sin dejar de perder el objetivo por *desperonizar* el país, se traslucía una creciente preocupación ante “el problema comunista”, desde las esferas de seguridad nacionales.

Adentrados en el gobierno de Frondizi, bajo la sanción del Decreto N°4965/59, por medio del cual se creó una comisión dependiente de la presidencia de la Nación encargada de planificar, dirigir y supervisar las acciones del Estado en materia de comunismo y otros “extremismos”, las atribuciones policiales para la clausura y persecución a comunistas, se amplió notablemente. Es decir, si antes el trabajo se podía denominar, en términos policiales, como “preventivo”, ahora bajo el nombre de la “ley”, el control pasó a convertirse en la detención y clausura directamente de los locales del PCA.

Con motivo de la aplicación del mencionado decreto, el siguiente informe detalla cómo fue el procedimiento formal realizado para la clausura de la sede central del Partido Comunista en la ciudad de La Plata, calle 12 N° 1073:

“... penetramos al interior del local ocupado por el referido Partido Político, procediendo a la clausura de los ambientes que se detallan a continuación: habitación nro. 1: Depósito de materiales de propaganda de la Agrupación; habitación nro.2 Secretaría de la Juventud del Partido; habitación nro.3: Tesorería; habitación nro.4: Biblioteca de la Juventud Partidaria; habitación nro.5: Secretaría del Partido; habitación nro.6: Salón de reuniones; como asimismo las puertas intermedias que se mencionan: una en la Secretaría de la Juventud; una puerta en la Secretaría del Partido y tres puertas en el Salón de Reuniones, colocándose en ellas las respectivas fajas con la inscripción “Clausurado-Decreto 4965/59” firmadas y selladas”. No habiendo otra diligencia que cumplimentar nos trasladamos al asiento de esta Comisaría, donde es labrada la presente, dejándose constancia que no se clausura la puerta de acceso al

local, en virtud de habitar al mismo el casero de la finca, quién no posee otra entrada...”.⁴⁶¹

Estos ejemplos muestran cómo incidieron las órdenes en la vida política del PCA. Si bien las clausuras comenzaron a registrarse a partir de 1959, donde ya directamente fue prohibida su existencia como Partido, todo un registro minucioso le antecedía sobre la vida íntima de sus militantes, el contenido de los discursos en los actos, generando la detección anticipada de quienes podrían ser los principales cuadros políticos del Partido. Este material se *activó*, en función de las determinaciones de los distintos gobiernos de turno, por lo que hacia fines de los ‘50, con un dispositivo jurídico en su contra, existía un estudio que fortalecía la detección de quienes, en gran parte, se convertirían en “delincuentes subversivos”, para el archivo y fichero de la DIPPBA.

VI. 2. La Unión de Mujeres Argentinas en la mira policial

Como se explicó, el nivel de peligrosidad del “enemigo comunista” también variaba en función de su ubicación dentro o fuera de la estructura partidaria. Para esto, la policía a partir de 1955, bajo la intervención militar, elaboró un organigrama donde se consideraba que los más peligrosos eran quienes estaban bajo la clasificación de “criptocomunistas”, es decir, aquellos que estaban en la clandestinidad, o no se referenciaban directamente en la estructura del Partido Comunista.

En los informes de inteligencia, dichos grupos aparecen mencionados como “colaterales” al PCA. Bajo esta órbita, los informes policiales involucraron a distintas agrupaciones, como la “Federación Mundial de la Juventud Democrática”, las “Fuerzas Pacíficas y de la Soberanía Nacional de la Provincia de Buenos Aires”, el “Centro de Amistad Argentino- Soviético”, y la “Unión de Mujeres de la Argentina” (UMA).

Interesa iniciar aquí una primera aproximación sobre este último grupo, la UMA, y poder visualizar las estrategias que la propia policía establecía para el control de esta agrupación; los mecanismos para pasar desapercibidos entre sus integrantes y acceder a sus

⁴⁶¹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 9 de mayo de 1959.

actos; el contenido de los informes, y si existiere una doble estigmatización que pudiera implicar el ser mujer y comunista.

La historia de la UMA podría anclarse a partir de 1947 cuando se creó el Estatuto de la Unión de Mujeres de la Argentina en el marco de la Reunión Nacional de Mujeres, realizada en la ciudad de Buenos Aires durante los días 11, 12 y 13 de julio. Este encuentro fundante reflejó, entre otras cosas, la esencia de dicha agrupación, a partir de sus principales postulados en los que se incluían el reconocimiento de los derechos de la mujer obrera, expresados en la consigna “igual salario por igual trabajo”. Como las anarquistas, las integrantes de la UMA comenzaron a cuestionar la doble explotación -patriarcado y capitalismo- que repercutía sobre las mujeres:

“Ha llegado la hora de que las mujeres argentinas conquistemos nuestros derechos, y estamos seguras de que somos capaces de conseguirlos porque así lo determina la importancia que asume nuestra participación en la vida nacional. Pero para ello es necesario que reunamos todas nuestras energías, en un movimiento unificado. Es imprescindible que volquemos en un único cause todas las acciones que se proponen conquistar la liberación económica, política y social de las mujeres, cualquiera que sea las ideas o creencias que sustentan”.⁴⁶²

Si bien la intencionalidad de las integrantes de la UMA siempre fue apuntar a todas las mujeres sin distinción política partidaria, con el tiempo sobresalieron los intereses del Partido Comunista, “primero por el alejamiento de las mujeres ajenas al partido; segundo, por un endurecimiento de las posturas comunistas en relación a su oposición cada vez más fuerte al régimen peronista”.⁴⁶³

Desde las esferas de la División de Orden Público se relevó un informe en el que se requerían los antecedentes de sus principales referentes y del origen de dicha agrupación. El análisis policial adjudicaba la creación de la UMA a una estrategia más del Partido Comunista y sus prácticas de enmascaramiento para garantizar la cooptación de distintos sectores de la sociedad. Al respecto, se explicaba:

⁴⁶² Archivo DIPPBA, Estatutos de la Unión de Mujeres de la Argentina, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, año 1948.

⁴⁶³ Bordagaray, María Eugenia, “Ciudadanía y género en el mundo rural: el caso de la Unión de Mujeres de la Argentina y las ‘campesinas’ durante el peronismo (1943-1955)”, en, *Trabajos y Comunicaciones*, N° 34, 2da. Época, 2008. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3731/pr.3731.pdf.

“Debido a la bien preparada campaña de difusión, que los organismos colaterales, dependientes o controlados por el Partido Comunista, pusieron en juego para que el naciente movimiento contara desde un principio con una fuerza nuclear considerable, de todas partes del país llegaron adhesiones, colaboración y ayuda.

Esta campaña dio sus frutos, en razón de que simulando la verdadera finalidad del movimiento, se había obtenido rotundo éxito en los actos preliminares, pues las organizaciones femeninas independientes del grupo rojo, como así las católicas, obreras y apolíticas, enviaron sendas notas de incondicional apoyo a la obra que proyectaban las dirigentes comunistas”.⁴⁶⁴

De este modo, se ponía atención a una nueva rama para la policía en la persecución al comunismo, es decir, comenzaban a darse la tarea de infiltración en el “elemento femenino comunista”. La observación policial destacaba una intensificación política del propio partido, desde el cual se apostaba a una organización de carácter internacional que se centraba en las reivindicaciones de género, quedando disuelta la llamada “Junta de la Victoria”, organización feminista antifascista, desde donde se enfatizaban este tipo de denuncias y prácticas solidarias, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, para pasar a ser parte de una organización superadora. Fue entonces, cuando apareció la UMA que retomó la experiencia de la Junta de la Victoria⁴⁶⁵ la cual, en el marco de un contexto político de *peronización* creciente en el país que comenzaba a incidir en la construcción política entre las mujeres, el Partido Comunista también orientaba sus estrategias, tal como sugiere Patricia Flier, hacia la conformación de experiencias alternativas “amplias”, que garantizaran la participación de mujeres fuera de la estructura tradicional del partido.⁴⁶⁶ A pesar de esta construcción amplia en lo político, la UMA fue caracterizada por la policía como una agrupación de “extrema-izquierda”; reconocida como el ente que otorgaba las

⁴⁶⁴ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, 9 de agosto de 1948, folio 24.

⁴⁶⁵ Véase, Valobra, Adriana, “Partidos, tradiciones y estrategias de movilización social: de la Junta de la Victoria a la Unión de Mujeres de la Argentina” en *Revista Prohistoria*, Año IX, número 9, 2005. Valobra, Adriana, “La UMA en marcha. El Partido Comunista Argentino y las tradiciones y estrategias de movilización social en el primer gobierno peronista: el caso de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA)” en *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes*, Vol. 30, Número 60, 2005.

⁴⁶⁶ Flier, Patricia, “El archivo de la DIPBA: un hallazgo clave para una historia de los imaginarios represivos en Argentina”, en *Imago Americae, Revista de Estudios del Imaginario*, Buenos Aires: Prometeo, 2006, pp.225-238.

instrucciones políticas y que mantenía viva la línea doctrinaria marxista-leninista-stalinista, ante su participación en la Federación Democrática Internacional de Mujeres.

En este informe del año 1948, de carácter reservado, el Jefe de la División de Orden Social provincial solicitó los antecedentes que existiesen de la UMA en la Delegación La Plata de la Policía Federal, en el que ya se había utilizado el mismo mecanismo interpretativo de la policía, como los hallados en los archivos de doctrina del año 1956. Es decir, el doble juego de palabras que involucraba una “finalidad aparente” y una “finalidad real” bajo el lente con el que se leían este tipo de organizaciones “colaterales” o “criptocomunistas”, se había establecido décadas anteriores, bajo la dirección de la División de Orden Social,

“Mediante el engaño y ocultamiento de sus verdaderos propósitos la U.M.A ha conseguido un profundo arraigo en todo el país; índice demostrativo de ello, es el considerable número (400) de Delegadas que se aprestan para concurrir a su próximo Congreso, provenientes de las más apartadas regiones de la República Argentina”.⁴⁶⁷

Cabe destacar, que el espíritu de la época que connotaba este tipo de narrativas, también se hallaba en las palabras de las diversas revistas de la policía, tanto de la provincia de Buenos Aires, como de la Capital. La construcción de aquel *otro* ingenuo e incauto, entre los que se encontraban los sectores jóvenes de la sociedad y las mujeres, eran vistos como el principal señuelo del Partido Comunista a través del “elemento femenino”:

“La popularidad adquirida por la U.M.A, se debe a las intensas campañas propagandistas que enarbolan siempre como señuelo, la finalidad de proteger a la madre y al niño, la creación de jardines de infantes, mejoras de condiciones de vida para las obreras, un amplio plan de educación de la mujer, haciéndole conocer los deberes fundamentales que adquieren en el ejercicio de la ciudadanía y prometiendo el apoyo y defensa por intermedio de sectores jurídicos creados al efecto”.⁴⁶⁸

⁴⁶⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Antecedentes”, 9 de agosto de 1948, folio 25.

⁴⁶⁸ Archivo DIPBA, Mesa C, Op. Cit., folio 25.

En este sentido, se subestimaban todas las políticas tendientes a problematizar la propia realidad de las mujeres como un ser humano de derechos en igualdad a la realidad del varón en todos los ámbitos de la sociedad. De este modo, en el primer Congreso Nacional de la UMA, se destacaba la desigualdad de las obreras argentinas,

“... inicualemente explotadas, que junto a las fábricas, talleres, frigoríficos, curtiembres, elaboran la grandeza de la patria y que sin embargo la patronal, les roba dos, tres o cuatro pesos porque les paga menos que al hombre. Para ella queremos conquistar: igual salario por igual trabajo, gran conquista por la que bregamos a efectos de que sea incluida en los Derechos del Trabajador”.⁴⁶⁹

Bajo la lupa policial, las denuncias quedaban en un segundo plano al considerar cada acto, festival, actividad solidaria, o comunicado de la UMA, como una estrategia engañosa, maniobra por la propia dirigencia del PCA. La homologación al Partido era una asociación de primera instancia en el informe policial, “...tiene la misma estructura del Partido Comunsita, es un órgano colateral del mismo y desarrolla sus tareas de acuerdo con el sistema ‘celular’ e imprime además su propia propaganda...”.⁴⁷⁰

Fanny Jacovskis de Edelman, era identificada como una de las principales dirigentes comunistas de esta agrupación. Junto con Alcira de la Peña, aparecieron en los legajos de la División de Orden Social, siendo reconocidas como las responsables del “sector femenino del Partido”, desde donde se diagramaban las “pretendidas finalidades altruistas”. Si bien a lo largo de los años el registro que los agentes tomaban de los actos de la UMA repetía aquello que era considerado como las “finalidades aparentes”, se podría encontrar en este legajo uno de los primeros escritos específicos a dicha agrupación, por la temprana fecha de su elaboración, en cercanía inmediata al propio surgimiento de la UMA. Desde estas páginas registradas en el año 1948, quedaron impresas las interpretaciones que continuaron aludiendo a este tipo de organizaciones como medios por los cuales embaucar a “personas apolíticas” e “ignorantes”, ante los propósitos “netamente comunistas” que perseguía la

⁴⁶⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Antecedentes”, 9 de agosto de 1948, 13 de agosto de 1948, folio 44- 45.

⁴⁷⁰ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Antecedentes”, 9 de agosto de 1948, 9 de agosto de 1948, folio 26.

organización, para instalar “una ideología extraña a nuestra idiosincracia y principios constitucionales”.⁴⁷¹

Independientemente de los bruscos cambios institucionales a lo largo de las décadas del '50 y el '60, en lo que refirió al Partido Comunista, los antecedentes hallados se reflejan en sintonía ante la continuidad en su uso por las distintas gestiones relacionadas a la inteligencia policial. Existió un patrón común en la observa y una impronta ideológica que continuó denominando al PCA, como un mal foráneo para los cimientos de la Nación, que puede hallarse en los legajos revisados hasta ya adentrada la década del '60.

Durante el primer Congreso Nacional de la UMA, realizado en agosto de 1948 en la localidad de Avellaneda, la policía tuvo acceso al mismo, tomando una “síntesis taquigráfica” a lo largo de los tres días en que duró este masivo acto. Este registro forma parte de los primeros antecedentes de la organización, donde el agente de inteligencia policial adquirió visibilidad y se expuso a la autorización de las mujeres. Esta condición inevitable de hacerse presente en el lugar como varón en un Congreso sólo de mujeres, fue la primera limitante para el registro. En el afán por demostrar la veracidad de las fuentes que el informante brindó, se agregó una “nota” al extenso informe, donde se aclaraba que las integrantes le negaron la entrega de los textos originales que allí habían sido leídos. Existió, a su vez, un acercamiento a quienes conformaban la Comisión Directiva para pedir la corroboración de los nombres y apellidos de las oradoras, obteniendo como respuesta una absoluta reserva al respecto.

El registro de este Congreso, junto con el Estatuto de la conformación de la Unión de Mujeres de la Argentina, son los documentos principales que conformaron la recopilación de antecedentes en el legajo que los reúne bajo la carátula de “colaterales”. El acopio de antecedentes se complementaba con una vasta cantidad de recortes del diario comunista “La Hora”, desde donde se obtenían nombres, fechas, horarios y lugares de reuniones, actos, festivales o congresos, como así también de otros diarios de mayor circulación y de carácter conservador como “El Día”, de la localidad de La Plata y el “El Argentino”. El recorte periodístico de este último diario, que se adjuntó al legajo, titulado

⁴⁷¹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Antecedentes”, 9 de agosto de 1948, 9 de agosto de 1948, folio 27.

“La Unión de Mujeres Argentinas actúa a favor de una ideología perturbadora”,⁴⁷² se expresaba de manera similar que las palabras del informe policial, entendiendo a la UMA como “una entidad perturbadora por excelencia”⁴⁷³ que incidía en el descontento de la “masa trabajadora femenina” afectando todas las ramas de la producción. Esta intencionalidad argumentativa, también se encontraba en el diario “La Época”, donde uno de los artículos archivados por la División de Orden Público se tituló, “La Unión de Mujeres Argentinas, es una Pandilla de Comunistas”.⁴⁷⁴ Se caracterizaba este tipo de emprendimientos como mecanismos engañosos, para “adueñarse” de la voluntad de los “débiles”, ubicando en esta categoría a mujeres, niños/as y jóvenes.

El registro se caracterizó por la recopilación de información relacionada con las diversas actividades públicas que la UMA convocaba, a tal punto de emitir una circular de carácter “reservada y confidencial” a todas las Unidades Regionales de la provincia, para corroborar si en las diversas ciudades se efectuaría la venta de rifas de joyas para las mujeres presas en España por el régimen franquista. En la mayoría de las localidades no se detectó a dicha agrupación, pero se estableció una “vigilancia discreta”, a modo preventivo. Por lo pronto, ante la imposibilidad de una infiltración para la producción de información de lo considerado el “elemento femenino rojo o comunista”, el proceso del registro cotidiano durante el gobierno peronista, se basó en un acopio de documentación sobre las distintas acciones que éstas emprendían, siendo en muchos casos, la misma Comisión organizativa de la UMA, por ejemplo en el caso de La Plata, la que daba cuenta a la policía de la realización de un acto.

VI.2.1. Las fotografías como método de control

Desde la Unión de Mujeres de la Argentina, se llevaron a cabo numerosas actividades para ayudar a las y los presos políticos del país y del mundo, involucrándose, en distintas campañas solidarias para recolectar alimentos, abrigo y medicamentos, como lo

⁴⁷² Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión de Mujeres Argentina. Varios”, recorte del Diario “El Argentino”, 16 de junio de 1949, folio 309.

⁴⁷³ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Varios”, 9 de agosto de 1948, folio 25.

⁴⁷⁴ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión de Mujeres Argentina. Varios”, recorte del Diario “La Época”, 23 de junio de 1950, folios, 358-359.

fue para el caso de las mujeres presas durante el franquismo en España. Esto llevó a la formación de cuadros políticos de la propia UMA, donde mujeres argentinas realizaron intercambios y asistieron a reuniones y Congresos comunistas. En 1953, se realizó un Congreso Mundial de Mujeres en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, donde participaron 1900 delegadas de 70 países, entre las cuales estuvo una delegación de quince mujeres argentinas. Al finalizar el Congreso, el Comité Antifascista de Mujeres Soviéticas, invitó a las delegadas de América Latina a visitar algunos lugares de la Unión Soviética.⁴⁷⁵

“Series fotográficas”, es el título del legajo al que corresponde la recopilación de un registro de imágenes que ilustran la participación de la delegación argentina en su visita por diferentes lugares de Rusia, como parte de una ampliación del informe pedido por el Jefe de la Policía de la Dirección de Orden Público, en el año 1954. Sin embargo, la elaboración de los dos legajos que contienen imágenes, se produjo a partir de allanamientos y detenciones a dos militantes de la UMA. A lo largo de la serie, fueron marcadas dos delegadas, XXXX de la ciudad de Rosario y XXXX de la localidad de General Arenales, ambas aparecen señaladas con una (I) y una (X), respectivamente.

Ante la detención policial de la delegada oriunda de Rosario, por el personal de la Seccional 34 de la Dirección de Orden Social y Político de dicha localidad santafesina, el 5 de noviembre de 1953, fue allanado su domicilio donde se secuestró material de propaganda y una copia similar a las fotos obtenidas por la policía de la provincia de Buenos Aires, que integraron al legajo. Éstas se obtuvieron durante la intervención de un “pic-nic” realizado en un campo del partido de Rojas,

“El 21 de febrero (...) en el establecimiento agrario (...) denominado Santa Elena, (...) fueron sorprendidas en circunstancias en que se disponían a almorzar, en un acto con carácter de “pic-nic”, para el que carecían de la debida autorización, las siguientes personas entre las que se encontraban la causante, XXXX...”.⁴⁷⁶

⁴⁷⁵ Ponce, Margarita, Edelman Fanny, *Vimos en la Unión Soviética niños y mujeres felices. El Congreso Mundial de Mujeres*, Buenos Aires: UMA, 1953.

⁴⁷⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°39, “Series fotográficas”, 4 de marzo de 1954, folio 1. (Subrayado del original).

Según las descripciones realizadas por la propia policía, no se dio a entender cómo llegaron al campo, en qué circunstancias y quién fue el informante, si lo hubo, que llevara a la policía a dirigirse a este sitio, donde concurrían personas afiliadas o proclives al comunismo. A partir del relato policial, los argumentos que *legitimaban* a la detención de las personas allí presentes, carecían de sentido al demostrar que estaban reunidos en un almuerzo, sin haber hecho del mismo propaganda pública para convocarla, dando por entendido que era una reunión de carácter privado. La caracterización de dicho encuentro como un típico “pic-nic” comunista, parece ser propia de la policía, que promovida por esas explicaciones desplegó una serie de prácticas como, el allanamiento, el secuestro de material y la detención de personas, al manifestar que no tenían autorización para estar allí reunidos. Amparados, según se indica en el documento que luego aparecería como un expediente más de la propia Central de Inteligencia, por la infracción al artículo 104 del Reglamento de Faltas, perteneciente a la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

En el marco de este tipo de procedimientos, fueron secuestradas como un botín de guerra, las fotografías que finalmente conformarían los legajos. La delegada de General Arenales, era caracterizada en el informe que prologa las fotografías, como un “extremo” por su actividad militante comunista:

“La XXXX es una ‘célula’ activísima de Partido Comunista que al parecer orienta su prédica hacia los agricultores, infiltrándose en ese sector de la economía nacional, con especialidad entre las familias de aquellos, con el conocido objetivo de crear el descontento y el desaliento en el agro argentino, mediante el recurso del sabotaje psicológico resultante de la comparación de los medios con que actualmente cuenta el campo argentino y los modernos y eficaces del gobierno ruso, según tratara de probar sin réplica u abundantemente con fotografías ‘ad-hoc’, de que al efecto estas células, van convenientemente provistas”.⁴⁷⁷

Estas caracterizaciones policiales fueron acompañadas por los datos personales de ambas delegadas, que aparecieron en cada imagen del legajo, repitiendo a manera de epígrafe en cada página, su procedencia edad y antecedentes:

⁴⁷⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°39, “Series fotográficas”, 4 de marzo de 1954, folio 2.

“(X) XXXX: es argentina, soletera, se ocupa de los quehaceres del hogar, de 21 años de edad, nacida el 28 de mayo de 1932, en Gral. Arenales (Provincia de Buenos Aires); Libreta Cívica nro. 0534.918, profesa el protestantismo. Registra legajo de “Referencia Especial”, N° 3042 de Orden Público de esta Policía, por su ideología política COMUNISTA. Delegada por Gral. Arenales.

(I) XXXX, argentina 21 años, no registra antecedentes en esta Policía. Delegada por Rosario”.⁴⁷⁸

En cada fotografía, también se indicaba el lugar donde se encontraban, como fábricas, centros culturales, escuelas, monumentos y sitios de esparcimientos. Fotografías que ilustran un carrusel donde la infancia se vuelve presente. En una tarde “soviética” del año 1953, las delegadas de la UMA recorrieron las calles del Parque Central “Gorki” de cultura y descanso de Moscú. Sonrisas de camaradería se entremezclaban entre objetivos políticos y turísticos. Imágenes robadas y convertidas luego en un expediente policial, cuyo contenido se disuelve en el marco de un largo legajo de antecedentes políticos y personales que sentenció a las militantes a la condición del “delincuente político”.

Pueden comprenderse estas prácticas de inteligencia como un mecanismo que con el tiempo resultó recurrente, siendo la propia policía quien capturaba las imágenes. A lo largo del legajo se vislumbra la necesidad policíaca de marcar los rostros, el detalle, los cuerpos, poniendo en cuestionamiento, incluso, la cotidianeidad de las personas al registrar escenas que competían al ámbito del esparcimiento y lo privado. En esta serie de fotografías pueden encontrarse señaladas y marcadas a las dos delegadas como las principales víctimas, entre las otras mujeres, de las que no figuran sus nombres.

El legajo en sí mismo se constituye como la prueba del arrebato y la discrecionalidad histórica que existió en este tipo de procedimientos que construían su propia legitimidad bajo argumentos inconsistentes, en el propio orden de lo legalmente establecido. La búsqueda de la *presa política*, aparece en este documento como el hallazgo de la prueba sobre las prácticas del “elemento extremo”, que en una especie de álbum ilustrativo, refleja sentidos adversos a los que las condenaron:

⁴⁷⁸ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°39, “Series fotográficas”, 4 de marzo de 1954, s/n folio.



Imagen 1: "Tbilisi, junio de 1953. La delegación asistió a un baile de máscaras celebrado en motivo de las vacaciones escolares. En la foto la delegada (I), XXXX".⁴⁷⁹



Imagen 2: "Las delegadas visitaron el Metropolitano de Moscú. En la foto las delegadas en la estación Kaluzhskaya".⁴⁸⁰

⁴⁷⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, legajo N°39, "Series fotográficas", 4 de marzo de 1954.

Estos ejemplos ilustrativos desde la fotografía, se constituyeron como una herramienta de gran importancia que otorgaba a la policía la posibilidad de individualizar a las personas. En este caso, durante todo el legajo, sólo se marcó a las dos militantes indicadas al principio. El recurso fotográfico fue históricamente un instrumento de detección “criminal” utilizado por la policía desde su conformación hasta la actualidad. Como se explicó en el capítulo II, estos métodos además de introducir la técnica en la “persecución del delito”, estuvieron atravesados por una impronta ideológica y criminológica que inducía a priori a determinar quiénes eran “peligroso/as” para la sociedad y en la dimensión política del delito, quiénes perturbaban la identidad nacional.⁴⁸¹

En otros casos, eran señalados la totalidad de quienes aparecían en la fotografía con sus datos, como puede verse en la siguiente imagen del año 1956, donde cada persona está indicada con un número de referencia, como mecanismo de individualización en la identificación:

⁴⁸⁰ Archivo DIPPPBA, Op. Cit., 4 de marzo de 1954.

⁴⁸¹ Sobre la historia del registro fotográfico policial, véase, García Ferrari, Mercedes, *Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación Policial en Buenos Aires, 1880-1905*, Buenos Aires: Prometeo, 2010.



*Imagen 3: “Asamblea de las Fuerzas Pacíficas”, 26 de agosto de 1956.*⁴⁸²

Así, la incorporación de la fotografía como dispositivo tecnológico del control, fue un elemento más que se agregó al registro documental, también como evidencia del propio poder policial. La serie de fotografías que se contemplan aquí fue consecuencia de un allanamiento. La incorporación de estas imágenes en el archivo vulnera los sentidos que las mismas manifiestan en la secuencia, que a modo de una fotogalería se dispusieron dentro de un orden superior que las enmarcó en aquella “burocracia del mal”, como define Patricia Funes, conformada por el expediente policial.

VI.2.2. Otras formas del control: los registros del afuera

El interés del gobierno de “la Libertadora”, como pudo verse, se estableció en focalizar todos los Comités o sedes del Partido Comunista en la Provincia de Buenos Aires y las principales organizaciones “colaterales” al mismo. Para esta época, la Unión de Mujeres de la Argentina se había convertido en una agrupación de referencia entre la población femenina del país. Sus prácticas y discursos repercutían directamente con una

⁴⁸² Fotografía perteneciente a: Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 2, legajo N° 76, La Plata, Sección 4°, 26 de agosto de 1956.

crítica hacia la situación de la vida diaria que remitían, en una primera instancia, a la esfera del hogar o lo “doméstico”, para anclar luego en el modelo político-económico vigente, como responsable de las condiciones de existencia de los sectores más pobres de la población y en particular de las mujeres.

La necesidad del control de las actividades públicas e internas de estas mujeres, se remonta a hechos cotidianos, como el homenaje al “Día de la Madre” realizado en octubre de 1955. El informe de inteligencia elaborado al respecto, refleja la mirada desde afuera de la Biblioteca “Euforión”, de la ciudad de La Plata, intentando dar cuenta de la cantidad de personas que entraban allí, con precisión de horarios y movimientos externos, ya que había sido vedada la entrada policial, según se especifica, por su condición de varón:

“...no me fue permitido pasar al interior, (...) y como el suscripto tenía orden de no hacerse reconocer como empleado de policía, no insistí en mi requerimiento quedándome a pesar de ello en las cercanías, pudiendo establecer que a las 19 y 30 horas abandonaron el local todas las personas indicadas, quienes luego de ascender a distintos vehículos se retiraron con el mayor orden, no habiendo podido por lo expuesto obtener nombres, apellidos de los oradores y temas tratados, pero en cambio fue factible saber la concurrencia, hora de iniciación y de finalización”.⁴⁸³

Estas situaciones recurrentes en los controles efectuados a la UMA, conllevaban a que el registro policial se basara en un informe que detallaba movimientos del afuera. Con frecuencia eran identificados los maridos, compañeros o acompañantes varones, haciendo también un registro de las patentes sus autos, que por los lugares de encuentro de la UMA pasaban. Ante la imposibilidad de una infiltración directa, la observación atenta al entorno aquí se convertía esencialmente en la materia prima del informe, que se transformaría en la construcción de lo verosímil y por ende, la categoría de verdad recaía unidireccionalmente en lo que el agente de inteligencia veía.

A su vez, en este período los jefes de la inteligencia policial instruían a sus subordinados para no identificarse como miembros de la policía. De esta manera, el control adquiría la forma de la espía, al efectuarse bajo la condición del agente encubierto. A pesar de ello, aparecían los obstáculos e imposibilidades del personal policial para lograr

⁴⁸³ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, Legajo N°67, La Plata – Sec.9, 29 de octubre de 1955.

aparentar y acceder a los diversos eventos y actos de las mujeres, donde tal como expresa Kahan para el caso judío, se relativiza aquí la capacidad de infiltración, que también ha cimentado el imaginario acerca de las dinámicas de control de los aparatos de inteligencia estatales.⁴⁸⁴

Como se expuso, el desarrollo de la UMA incidió en el particular seguimiento de las actividades de estas mujeres desde la policía. Junto con la Federación Juvenil Comunista, eran, entre otras, las organizaciones clasificadas como “colaterales” en los informes, que contaban con numerosos legajos y espionaje efectuado, desde el propio surgimiento de ambas. Para entonces, la policía del ’56, ya contaba con vastos expedientes de estas mujeres que fueron recopilados durante los años del peronismo, bajo las diversas Secciones de Orden Público y Movimiento Social, que controlaban sus actos y tenían sistematizados los nombres de las principales delegadas. Con la finalidad de actualizar estos datos, en septiembre de 1956, desde la Central de Inteligencia se emitió un “memorándum reservado”, mediante el cual se ordenó a las dependencias policiales de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Quilmes, Zárate, Carlos Casares, Junín, Lomas de Zamora, Matanza, Avellaneda y Médanos, corroborar la existencia o no de filiales de la UMA.⁴⁸⁵ Aunque en la mayoría de los casos la respuesta al memorándum fue negativa, este tipo de órdenes evidenciaba el interés particular por la detección de la organización de mujeres vinculadas al comunismo. Otro ejemplo de ello, se detecta en un memorándum que se distribuyó al jefe y sub-jefe de policía provincial, al Director de Investigaciones, al jefe de la Central de Inteligencia y al Archivo de la Dirección de Seguridad, cuyo contenido se relacionaba con el pedido de un local para eventos diversos por parte de un grupo de mujeres.

La particularidad del caso, se sitúa en que podría ser considerado una especie de denuncia que hizo el propietario de la confitería y salón de fiestas, “El Alba”, de la localidad de La Plata a la Comisaría novena de dicha ciudad. El propietario trasladó su preocupación al manifestar que hacía un tiempo habían ido a su local “unas damas”, con la intención de alquilarle el salón para realizar almuerzos y actos artísticos a lo largo de tres días, quienes se presentaron como integrantes de la “Unión de Mujeres de la Argentinas”, y

⁴⁸⁴ Kahan, Emmanuel, *Unos pocos peligros sensatos. La Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires ante las instituciones judías de la ciudad de La Plata*, La Plata: EDULP, 2008.

⁴⁸⁵ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, Legajo N° 58, La Plata, 1956.

dejaron una seña de dinero, pero hasta la fecha no habían regresado a su negocio, desconociendo sus nombres y domicilios.

En este caso, el propietario funcionó en calidad de “informante” para la policía, que de inmediato se remitió a varias dependencias de seguridad provincial, a los fines de “establecer la identidad de las causantes, como así las verdaderas que desarrollan y de la entidad que dicen representar”.⁴⁸⁶ Este ejemplo puede ser válido para alcanzar una dimensión sobre la percepción social de lo político en cuanto peligrosidad, vinculado directamente con los sentidos de la clase gobernante y las prácticas policiales al respecto. Sin embargo, el caso abre la incertidumbre de estas percepciones, si se habilitara la posibilidad de que las mujeres de la UMA hubiesen efectivamente realizado sus actividades allí, el “informante”, quizás, nunca hubiese llegado con su testimonio a la mesa de entradas de la Seccional novena de La Plata. También, se podría pensar en la mirada de un ciudadano incrédulo que llegó a la policía para que averigüe los nombres de las “damas” y pudiese devolverles su dinero sin percibir las implicancias que les generaría; o la posibilidad de que los almuerzos se efectuaran días posteriores, donde una policía avisada llegara con órdenes de detención por la falta de autorización, como se pudo ver en repetidos casos. De este modo, lo que pudo haber sido para el propietario del local, una actitud común o anecdótica, para el jefe de la Seccional fue una información valorizada, en el sentido político, situación que lo indujo a elaborar de inmediato un memorándum con este testimonio, a los efectos de informar al resto de las dependencias policiales. Al margen de las consideraciones del “informante”, desde la mirilla policial aquel relato descripto por el propietario de la confitería estaba cargado de significados, que al parecer, fueron una señal de alerta dentro de la lectura de la realidad social construida desde el mundo policial.

El control hacia las mujeres de la UMA no prescindía de los recurrentes allanamientos que la policía efectuaba a los comités del Partido Comunista. En el año 1956 se registró, según lo encontrado en los archivos de la DIPPBA, un legajo que correspondía particularmente a allanamientos efectuados a la Unión de Mujeres de la Argentina de la provincia de Buenos Aires. En el mismo legajo se halla un índice que detalla donde focalizaba la policía de aquel entonces, para el control de las actividades de la UMA. Interesaba saber sus vínculos con el comunismo internacional y local, las campañas de

⁴⁸⁶ Archivo DIPPBA, Mesa C, Carpeta 3, Legajo N° 67, La Plata, 17 de noviembre de 1956.

difusión, el material de propaganda, los antecedentes de personas e instituciones afines a la dicha agrupación. Estas variables que la policía tenía en cuenta para el control de las mujeres de la UMA eran las mismas que consideraban para el Partido Comunista. En un legajo del 12 de septiembre de 1956,⁴⁸⁷ la policía bonaerense allanó un local de la UMA en la localidad de Ramos Mejía donde fue secuestrado material de la agrupación para constatar sus vínculos con el comunismo. En el informe de inteligencia no se encuentra más que una enumeración del material secuestrado, el modus operandi para estos casos, bonos contribución, revistas, planillas, actas, etc. que utilizaron como fuentes para comprobar y responder los ejes “guías”, descriptos al principio, como la vinculación con el comunismo internacional y local.

“Como se sabe, a dicha agrupación la guía el propósito de agrupar a todas las organizaciones femeninas que no pertenezcan al comunismo, captándolas por medio de la infiltración, para que con ese fin, poder copar sus direcciones predisponiendo la conciencia femenina hacia la teoría marxista. Su misión se circunscribe especialmente a ejercer aparente obra benefactora en las barriadas más humildes, creando dispensarios y salas de primeros auxilios (...)”.⁴⁸⁸

La construcción que se hacía de la UMA en el relato policial, la involucraba como el brazo de infiltración del Partido Comunista, razón que continuó cimentando la caracterización de amenaza y la orden de vigilancia. Las argumentaciones convertían a estas mujeres en instrumentos de manipulación para intervenir en diversas áreas, sobre todo aquellas vinculadas a los derechos de los niños, niñas, y mujeres en general, al considerar que sus ejes de lucha eran fácilmente apropiados por la población, cuando en su esencia, según los relatos oficiales, eran métodos de adoctrinamiento para las filas del PCA.

En abril de 1957 dicho local fue clausurado por una semana, pero el 22 de enero de 1959, por órdenes del Poder Ejecutivo Nacional, la policía dependiente de Coordinación Federal procedió a clausurarlo nuevamente.⁴⁸⁹ A partir de 1959, bajo el gobierno frondicista, las actividades de la UMA fueron prohibidas, por considerar a la agrupación

⁴⁸⁷ Archivo DIPPBA, Mesa C, Colaterales, Carpeta 3, Legajo N°59, Ramos Mejía, 12 de septiembre de 1956, folio 1.

⁴⁸⁸ Archivo DIPPBA, Mesa C, Colaterales, Carpeta 3, Legajo N°59, 1956, s/folio.

⁴⁸⁹ Archivo DIPPBA, Mesa C, Colaterales, UMA Antecedentes Varios, Carpeta 3, Legajo N°58, 22 de enero de 1959, s/folio.

como “colateral” al Partido Comunista, y por ende, “netamente comunista”; también regía para ésta los alcances del Decreto N° 4965, a partir del cual quedaron prohibidas las actividades comunistas y el Partido.

Según los registros encontrados en el archivo policial de la DIPPBA, el control desde entonces fue menos frecuente que durante el período peronista. Principalmente se encuentran demandas de dicha agrupación en relación a la situación del país, como puede verse en la siguiente transcripción donde un grupo de mujeres de la localidad de Haedo, fue a la intendencia para pedir por la baja de los impuestos municipales, boleto escolar, puestos en las calles con venta de carne a precios económicos, rebajas en los artículos de primera necesidad, etc. Si bien los pedidos efectuados, junto con un grupo de madres de la zona, fueron demandas concretas que daban cuenta de una situación económica en particular, el informante elevó la nota a la Central de Inteligencia de La Plata, al considerar a este grupo de mujeres como parte de la “avanzada comunista”. Independientemente de lo válido de las demandas o no, la alerta estaba puesta en la representación de la UMA en la reunión.⁴⁹⁰

La vinculación de las mujeres de la UMA con la Federación de Mujeres Cubanas comenzó a ser frecuente para este contexto, pos triunfo de la revolución en Cuba. Aunque la amenaza de la Cuba comunista para nuestro país fue una preocupación explícita del gobierno y una alerta permanente para los servicios de inteligencia, en los registros policiales de la provincia sólo se halló un documento al respecto. Perteneciente al año 1961, un año después en que se fundara la Federación de Mujeres Cubanas, se acopiaron boletines vinculados a la Federación y otros materiales políticos críticos al gobierno, como un escrito titulado “Hambre”,⁴⁹¹ que apuntaba principalmente a la desnutrición infantil, en el marco de un análisis que daba cuenta dónde se concentraba la riqueza.

“De fuente bien informada, se ha obtenido la siguiente información: el día 14 de agosto próximo, (esta fecha puede alterarse) se presentará una Delegación de mujeres del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, dirigidas (error del original) por directivos de la U.M.A, a la Embajada de CUBA, llevando

⁴⁹⁰ Archivo DIPPBA, Mesa C, Colaterales, UMA Antecedentes Varios, Carpeta 3 legajo 58, 7 de marzo de 1960. s/folio.

⁴⁹¹ Archivo DIPPBA, Mesa Referencia, Unión de Mujeres de la Argentina, Legajo N°181, enero de 1961, s/folio.

ajuares infantiles, ropas de abrigo, dinero en efectivo, destinado a las madres cubanas.

VALOR DE LA INFORMACIÓN: CIERTA”⁴⁹²

Como se expuso, si bien el acopio de información sobre las mujeres de la UMA para este período no fue abundante, si se destacaron aquellas acciones que tenían a Cuba como protagonista. Este material vino a reforzar la vinculación -ya constatada- con el comunismo internacional, situación que criminalizaba aún más las acciones de la UMA, ubicando su peligrosidad para el país en medio de los cambios políticos que surgían en América Latina.

VI.3. Conclusiones

“Las formas mismas de la organización policial se construyen alrededor de esa necesidad de saberlo y oírlo todo, y la clasificación de los archivos del lugarteniente general traduce esta preocupación demente por el detalle y el gusto por cazar sin vergüenza las palabras pronunciadas en el azar de las pronunciaciones públicas (Arlette Farge)”.⁴⁹³

Este capítulo se centró en desarrollar una muestra del relato y la narrativa que la inteligencia policial construyó sobre quiénes eran vigilados y vigiladas. Estos ejemplos son apenas una aproximación a la construcción del organismo de control. Así, se procuró contextualizar estos informes en el marco de un proceso de conformación de la inteligencia en la provincia, sustentado en el presente con la acumulación de registros del pasado, para garantizar la persecución en el futuro a personas, organizaciones y/o partidos políticos.

El accionar y la cultura burocrática de órdenes cumplidas, que comprendió a los regímenes dictatoriales se convirtió en una práctica adquirida con el tiempo, más allá de quién debía ser espiado. La práctica en sí misma consistió en el deber y la razón de ser del agente de inteligencia que se entrenaba en el mismo accionar, como integrante de esa rama de la policía, cuya importancia institucional se acrecentó hasta alcanzar el rango mayor dentro del organigrama jerárquico policial. Aquella frase que cerraba el informe: “es todo cuanto por el momento puedo informar”, se constituía en el sello personal del agente que lo establecía por lo que era, en cuanto relataba lo que hacía.

⁴⁹² Archivo DIPPBA, Mesa C, Colaterales. Carpeta 3, Legajo N°59, 1956, 28 de julio de 1961, s/folio.

⁴⁹³ Farge, Arlette, *La Atracción del Archivo*, Institutió Vanelciana D’Estudis I Investigació, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim, 1991, pág.81.

En la relación de los integrantes del Partido Comunista con la policía, puede comprenderse el esfuerzo partidario por su *legalización*, en términos de *legitimidad estatal*. Es decir, independientemente de la ley que los prohibiera a ejercer su derecho como partido político, su relación con las autoridades gubernamentales y policiales peronistas, respondieron a vínculos institucionales para el reconocimiento y aprobación de sus actos. Señalando, luego, en las misivas hacia las autoridades militares, síntomas de autoritarismo en el gobierno depuesto, en un intento por fortalecer su posición y la importancia de que exista un momento transicional hacia el respeto de las garantías constitucionales. De esta manera, mediante su apoderado legal, los integrantes del Partido Comunista en La Plata apostaban a la vía formal para hacer cumplir sus derechos políticos. No obstante, desde una mirada macro, el “comunismo” siempre fue representado como un enemigo vertebral para la Nación, cuya identificación diferencial fue utilizada por los diversos gobiernos para estructurar un modelo político hegemónico. La existencia de un discurso binario para caracterizar al *otro* “enemigo comunista”, y construir identidad desde la oposición y la diferenciación, fue utilizado históricamente homologando la representación de este enemigo en el pueblo, para garantizar consenso en la aplicación de la represión en pos de mantener el orden, los valores patrios y la moral cristiana.

La necesidad del control y la vigilancia, a merced de la letra de la ley, se manifestó de manera continua, expresándose bajo la intervención militar una intensidad en estos controles, en el afán por detectar también al “*enemigo peronista*”. En las caracterizaciones sobre los actos y sus contenidos, se destacó siempre un registro condicionado por la perspectiva ideológica comunista, por parte de los agentes policiales. La importancia de los “informantes” también apareció como algo clave en un intento por comprender al sujeto en su entorno “ambiental”. Estas prácticas cobrarían sistematicidad con “los informes ambientales”,⁴⁹⁴ maximizando las formas del control y construyendo un imaginario de culpabilidad en el/la perseguido/a dentro de su propio vecindario y entorno social.

⁴⁹⁴ Los informes ambientales correspondieron a las “Mesas G y S” del archivo de la DIPPBA. Estas mesas “se encargaban de realizar informes generales y “ambientales”, respectivamente, sobre la base de distintos requerimientos de organismos del Estado. Dichos informes eran luego incorporados a los legajos confeccionados por el resto de las mesas. La Mesa S cumplía la misma función que la Mesa G pero, a diferencia de ésta, era la receptora de los requerimientos que incluían informe de ambientales, ya sea de personas, entidades o sociedades”, <http://www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/>.

El proceso de individualización de personas fue otro aspecto típico del registro de actos, incorporado fundamentalmente con las fotografías. En este sentido, hacia 1955 ese registro policial cobró la dimensión de lo secreto y confidencial en muchos casos. Esto determinaba una identidad figurada en el agente, que debía pasar de ser un observador visible e identificable a un espía, cuya práctica exigía no sólo la atención de aquello que se veía, sino comprenderse a sí mismo como una persona clandestina. En estos casos, podemos pensar en la categoría de “la policía de las apariencias”, mientras que el ojo de la policía, en cuanto ojo de la censura, decide lo que debe o no debe ser, instituye una policía de las apariencias”,⁴⁹⁵ donde incluso aquella mirada intrusiva, no sólo abusiva, podía ser fácilmente engañada y burlada.

Es interesante, para comprender este aspecto, las limitaciones encontradas en el control de los actos de las mujeres de la UMA. Como se expresó, este tipo de obstáculos también pudieron hallarse en el caso judío estudiado por Emmanuel Kahan, con la barrera del idioma para comprender el sentido de las reuniones. En el caso de la UMA, la conformación en su totalidad de policías varones, imposibilitaron la entrada a muchos de los actos efectuados, o su presencia cerca de algún evento que evidenciaba de inmediato las intenciones de la persona que pudiera merodear alguna actividad organizada en el espacio público.⁴⁹⁶ No obstante, a pesar de la conciencia de esta imposibilidad, nunca se dejó de ordenar el control a las actividades de las mujeres de la UMA, siendo, entonces, la vigilancia externa, la rutina policíaca.

Es en la presencia de este observador externo, como mandato del orden oficial, en que se constituye la razón de la sospecha, que no se disuelve al ser inaccesible el contacto de la mirada con aquella alteridad peligrosa, sino que, fundamenta en su extensa permanencia en el sitio, una mirada profunda que incorporaba una suma de detalles que luego se convertían en la materia prima de la construcción del informe. Es decir, en el plano de las imposibilidades conscientes por parte de la policía para controlar a las mujeres sin

⁴⁹⁵ L’Heuillet, Hélène, *Baja política, Alta policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág.203.

⁴⁹⁶ En el año 1947 se creó la Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, primer cuerpo de mujeres policías del país y de América de Sur. Esta sección fue disuelta en 1956 en el marco de la “Revolución Libertadora”, que calificó de inoperante a la Brigada, hasta que en 1977 se reabrieron los cursos para mujeres. Al respecto, véase, Calandrón, Sabrina, Galeano, Diego, “La Brigada Femenina. Incorporación de mujeres a la policía de la Provincia de Buenos Aires (1947-1955)”, en Barreneche, Osvaldo y Salvatore, Ricardo (comps.) *El delito y el orden en perspectiva histórica: nuevos aportes a la historia de la justicia penal y las instituciones de seguridad en Argentina*, Rosario: Prohistoria (en prensa).

pasar desapercibida, se habilitaba otro plano que abría un campo variado de posibilidades como resultado del informe, dependiendo, también, de la propia subjetividad del agente de control. “La sospecha es a la visión lo que la reflexión al pensamiento: obliga a romper con lo inmediato”;⁴⁹⁷ la inmediatez se desvanecía ante un componente racional válido e indiscutible: el ser varón, por lo que la sospecha era el genuino y superior precepto policial que conducía y legitimaba su rutinaria permanencia, en el afán por desactivar lo invisible y oculto, aquello a lo que el agente no tenía acceso, y otorgarle visibilidad en el resultado diario de su trabajo.

No obstante, en la construcción de los distintos legajos de la Unión de Mujeres de la Argentina desde su origen en 1947, pueden encontrarse recortes de diarios que informan sobre actividades y discursos de la agrupación; secuestro de material en allanamientos a casas de militantes del Partido Comunista o de informes de inteligencia.

A partir de estos documentos puede entenderse que la mirada sobre la mujer comunista cobró ciertamente un doble sentido estigmatizador, como se exponía, “el ser mujer y comunista”, en las razones que la policía se sustentaba para atribuirles una capacidad efectiva de infiltración en la población, por ser mujer. Se refuerza esta mirada donde se cruza el purismo que compete al mandato de ser mujer, en tanto madre, por lo que fue aquel mandato “natural”, el que les otorgaba a estas mujeres la legitimidad necesaria para sumar personas a su organización, que luego capitalizaría el Partido Comunista, como se dejó interpretar. El relato policial las condenaba, en tanto la UMA luchaba por los derechos de los y las niñas, o contra el aumento de los alimentos, como consignas engañosas y ubicaba al resto de las demandas, como los derechos de la mujer obrera, las presas políticas, o la solidaridad internacional, como el verdadero sentido que involucraba a la esencia del PCA. Aquí, puede comprenderse también, según se pudo ver en uno de los primeros informes que analizan la conformación de la UMA, una subestimación de las mujeres al comprenderlas como un instrumento del Partido para ganar adeptos, Partido cuyas bases y dirigencia estaban conformadas mayoritariamente por varones.

Otro aspecto que habilitó la vigilancia constante a las mujeres de la UMA desde su conformación, fue el crecimiento de la organización y su internacionalismo que las involucraba directamente con la Unión Soviética y posteriormente con las mujeres cubanas.

⁴⁹⁷ L’Heuillet, Hélène, *Baja política, Alta policía* ...Op. Cit., pág. 209.

Es decir, la sospecha policial que radicada en la persecución a la UMA, se reforzaba aún más con este vínculo inexorable con las mujeres soviéticas desde la Federación Democrática Internacional de Mujeres y el Partido Comunista, considerado como un elemento de adoctrinamiento e infiltración en la población.

En la construcción de los informes, cabe preguntarse acerca del proceder de los informantes, “los observadores”. Si bien existieron cursos de capacitación como el “Curso de informaciones”, de la Escuela Superior de Policía, del año 1957, la Escuela de Inteligencia “José Héctor Ramos” fue creada recién en el año 1977, donde posiblemente se hayan tomado algunos materiales de anticomunismo de otros cursos, que incluso datan del primer peronismo, como aquellos que referían a las actividades “anti-argentinas”.

Como se enunció, este capítulo intentó presentar una muestra sobre algunos de aquellos informes que nos remiten a la persecución del comunismo en nuestro país y la provincia de Buenos Aires. Aquellas “narrativas del control” que se desplegaron en los informes incorporando las técnicas del registro minucioso, nos inducen a una serie de interrogantes tales como: ¿fue posible que aquella subjetividad del agente de inteligencia haya respondido con el tiempo a la consolidación de una racionalidad particular dentro de la policía?; ¿cómo repercutieron realmente estas prácticas en la vida de las y los “vigilados”?

A su vez, la intervención militar en la policía devino a que en 1956, en el momento de la creación de la Central de Inteligencia, las órdenes estuviesen a cargo de las jefaturas militares. Estos datos nos incitan a pensar también en supuestos conflictos, tensiones y resistencias hacia el interior de la propia institución, en un período histórico complejo, donde la intención de “desperonizar” el país, por parte de los comandantes de “la Libertadora”, posiblemente haya tenido sus repercusiones en el interior de las mismas

prácticas de control político en la policía.⁴⁹⁸ Sin embargo, estos interrogantes nos llevan a continuar pensando este archivo como un gran disparador sobre la historia de la construcción cotidiana que compete a los mecanismos disciplinarios de las instituciones del Estado. Estas y otras preguntas que consideren también las fallas, límites y grietas del registro, serán parte de la continuidad de trabajos que brindarán nuevos análisis e interpretaciones sobre lo que supo ser este gran “armazón documental”, que registró durante más de medio siglo la vida de las personas.

⁴⁹⁸ Con respecto a las tensiones internas generadas dentro de la propia institución policial, el trabajo de Barreneche sobre la huelga de policías bonaerenses en el año 1973, es un ejemplo para comenzar a indagar este tema. A partir del estudio sobre dicha huelga, el autor releva una serie de antecedentes que competen a los reclamos salariales y las formas de protesta de los policías de la provincia de Buenos Aires, desde la caída de Perón en 1955, hasta comienzos de la década de 1970. Véase, Barreneche, Osvaldo, “Paro de y represión a... policías. Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973)”, en *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol. 51, N° 202-203, Buenos Aires: julio-diciembre 2011, (pp. 221-239).

VII. Consideraciones finales

A lo largo de esta tesis se ha reconstruido y analizado el proceso y la consolidación de la inteligencia policial en la Provincia de Buenos Aires. Remontarnos hacia sus orígenes, fue fundamental para relevar los antecedentes y lograr abordar los cambios y las continuidades que se inscribieron en materia de seguridad en nuestro país y en el territorio bonaerense. Para esto, las concepciones sobre el actor político “comunista” que se fueron delineando desde la mirada del aparato represivo estatal fue una de las claves para comprender la existencia de los organismos de inteligencia. La validación de estos organismos se sustentó en la construcción de una legitimidad social en base a la existencia permanente de un enemigo político, como fundamento principal de las lógicas de razonamiento que habilitaron las órdenes para llevar adelante la práctica de la inteligencia policial.

De modo que, analizar la construcción histórica del sujeto “comunista”, para los servicios de inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires, devino en un trabajo que encontró en su fuente principal un disparador para que aquella narrativa policial se convierta en una página de la historia, dialogando inevitablemente con un contexto que contempló saberes, discursos y leyes represivas desde fines del siglo XIX. La noción de peligrosidad que envolvió al comunismo fue constitutiva y definitoria para la labor de inteligencia bonaerense, desde sus inicios en los años treinta, hasta su definitiva institucionalización y jerarquización como labor policial hacia fines de los años cincuenta. En este sentido, cabe destacar cómo la construcción política del “enemigo” se convirtió en una categoría necesaria para legitimar su persecución.

El trabajo de inteligencia tuvo su base en dicho imaginario concebido por la clase gobernante, la iglesia y los sectores nacionalistas, siendo las fuerzas de seguridad un factor más, cuya genealogía identitaria, en tanto protectora de lo político y proveniente de la existencia de un saber del Estado,⁴⁹⁹ buscó la conformación de sujetos ciudadanos adecuados a los valores patrios que eran el sentir de la Nación. Para ello, fue preciso el carácter represivo del Estado, expresado a través de las fuerzas de seguridad y de la

⁴⁹⁹ Hélène L' Heuillet, *Baja Política, alta Policía, un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pág. 19.

conformación de una policía militarizada, vertical y disciplinada, constituida como un elemento institucional de control, coerción y ordenamiento de la sociedad.

Como se refirió en el primer capítulo, la materialización de las prácticas policiales en archivos se registró para la provincia de Buenos Aires desde la década del '30, y luego se complementaría en un sistema más organizado y acentuado en su sentido político. Después del Golpe de Estado de 1930, recrudeció la represión y la persecución hacia militantes sociales y políticos, iniciando un derrotero histórico institucional que apuntó al control de manera cada vez más específica. En esta búsqueda de especificidad institucional, la creación de distintas “secciones” tanto a nivel nacional, como provincial, comenzaron a producir informes orientados a desentrañar y averiguar los itinerarios políticos de las diversas expresiones sociales y en particular de la vida de sus militantes. De esta manera, se daba inicio a una práctica que con el tiempo sería sistemática, donde la producción de documentos se definiría por su carácter “reservado, secreto y confidencial”.

Como pudo comprenderse, los antecedentes durante el período peronista en materia policial profundizaron la identificación del enemigo con el sujeto comunista y apuntaron a un mejoramiento en materia de “informaciones”, como parte de las políticas de seguridad del Estado. De esta manera, se llega al Golpe de 1955 con una práctica y doctrina anticomunista puesta en marcha. La intervención de las Fuerzas Armadas en el plano de seguridad comenzó a construir una red de comunicaciones entre las distintas dependencias tanto policiales como militares, donde la Central provincial tuvo un papel destacado en la detección comunista. El objetivo de “la Libertadora”, centró su política en la militarización de los organismos de seguridad y de información del Estado nacional, en sintonía con la influencia de la Doctrina Francesa que antecedió al gobierno provisional, pero que luego se profundizaría con la formación y preparación militar y policial de la Argentina en la Escuela de las Américas.

Desde las esferas militares en la intervención de la policía provincial en 1955, se equiparó, incluso, al peronismo como la base política que había habilitado la influencia e infiltración del comunismo en el país, al no sancionar leyes represivas al respecto. No obstante, las detenciones por disposición del Poder Ejecutivo, los edictos policiales, la Ley de Residencia, el control de las reuniones públicas, fueron mecanismos que restringieron y mantuvieron controladas las actividades del Partido Comunista durante el peronismo. El

carácter “foráneo” del comunismo fue constantemente marcado por la policía, como un “elemento” perturbador que debía ser aniquilado. En este sentido, los más de cincuenta años de la existencia de la Ley de Residencia significaron también la vigencia de un imaginario expulsivo arraigado en los sectores más conservadores de la sociedad, donde el ser comunista asociado a la noción de “peligrosidad” adquirió un lugar central, fundamentalmente luego del golpe de Estado en 1955.

La definición política sobre la creación en 1956 de la Central de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y su posterior Departamento de Archivo y Fichero -conformado en 1957- como método de clasificación de personas y organizaciones, fue una pieza fundamental para implementar una maquinaria de inteligencia y control social.

La Central de Inteligencia apostó hacia una innovación técnico-organizativa y una reorientación del objetivo de la acción policial en clave ideológica. Esta apuesta se articuló con el funcionamiento en red con organismos nacionales, como la SIDE; el entrenamiento de militares argentinos en el exterior; la difusión doctrinaria en cursos y conferencias sobre comunismo y la aparición de estrategias de cooperación internacional. Indicios de la necesidad de estudiar y redefinir al “enemigo”, en el marco de la Guerra Fría como parámetro mundial que conducía al posicionamiento político militar en el país.

Hacia 1956 una serie de dependencias de seguridad se crearon con la finalidad de perfeccionarse en la práctica de control y garantizar una red de comunicaciones que detectara información de manera más rápida y precisa. Así surgieron la Dirección de Informaciones Antidemocráticas (DIA), el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), el Servicio de Informaciones Naval (SIN) y el Servicio de Informaciones Aeronáuticas (SIA) de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, junto con la Central de Inteligencia provincial. Esta coordinación con otras instituciones de carácter represivo, fue, tal como enuncian Patricia Funes e Ingrid Jaschek, el antecedente de la llamada “Comunidad Informativa”, que funcionó en la década del ’70 como un elemento de represión durante la última dictadura militar en la Argentina.⁵⁰⁰

El andamiaje jurídico represivo que creó diversas instituciones antecesoras a la DIPPBA, fue la base desde donde el gobierno militar montó una estructura de inteligencia

⁵⁰⁰ Funes, Patricia, Jaschek, Ingrid, “De lo Secreto a lo Público: La creación de la DIPBA”, en *Revista Puentes, Dossier Documentos*, número 16, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, 2005.

mediante la cual generó doctrina para estudiar, caracterizar y perseguir al “enemigo”, desde las fuerzas de seguridad. En este sentido, la legislación, en tanto comenzaba a constituir un “orden jurídico autoritario”,⁵⁰¹ también incidió en la construcción de legitimidad social, como un medio normativo para la naturalización de la represión hacia las disidencias políticas. El discurso fuertemente anticomunista, continuó siendo el argumento principal para mejorar la estructura informativa y de control en la región.

Un ejemplo del elemento doctrinario, se ilustra en el análisis del legajo N° 167 perteneciente a la Mesa Doctrina, del Archivo y Fichero de la DIPPBA del año 1956, que intentó instalar una terminología doctrinaria para aplicar hacia el comunismo de manera fundante. Este informe, de la Secretaría de Información del Estado y de la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, como sus anexos de organigramas, sería uno de los principales documentos de doctrina que tuviera la Central de Inteligencia provincial, sobre una exhaustiva caracterización del Partido Comunista argentino, sus organizaciones, planes políticos y métodos de infiltración.

Las categorías doctrinarias que definieron aquí al comunismo según sus niveles de peligrosidad: “comunista”/ “filocomunista”/ “criptocomunista”, no pudieron encontrarse en otros informes de inteligencia estudiados. Sin embargo, la forma más recurrente aplicada por los agentes fue la de “colateral” o “colaterales”, que se usó para hacer referencia de todas aquellas organizaciones o personas sospechadas por ser simpatizantes comunistas, definición que correspondía -según el informe de doctrina- a la categoría de “filocomunista”. Esto significó que el material de doctrina no fue tan lineal en el momento de la ejecución de la orden al agente policial de inteligencia.

Puede interpretarse aquí la existencia de un conocimiento empírico para pensar cómo se constituyeron estos *saberes policiales*, que en función de lo analizado, no fueron exactamente correlativos al *saber doctrinario*. El dilema entre *arte o técnica*, para indagar en la naturaleza del saber policial, que introduce Dominique Monjardet en un estudio sociológico sobre la fuerza pública,⁵⁰² nos induce a pensar en un posible *saber-hacer* de la

⁵⁰¹ D’ Antonio, Débora Eidelman, Ariel, “El Fuero antsubversivo y los Consejos de Guerra contra civiles en la Argentina de los años 70”, *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Tel Aviv, 2016, Vol. 27, N°2, pp.77-98.

⁵⁰² Monjardet, Dominique, *Lo que hace la policía: sociología de la fuerza pública*, Buenos Aires: Prometeo, 2010, pp.136-146.

policía de inteligencia en el contexto de la reciente creada Central, que luego iría adquiriendo un valor sustancial, en tanto naturalización de proceder, habilitando una posible racionalidad particular dentro de la fuerza policial.

La existencia de un *saber empírico* se vinculaba también con las cualidades del agente en función, es decir, el aspecto subjetivo de su competencia, no pudiendo constatarse tanto una “técnica”, en términos estrictos, sino más bien un *saber procedimental* relacionado con la propia burocracia policial en la confección de los expedientes. La observa y la escucha, fueron entonces instancias constitutivas e innatas al comportamiento procedimental, como respuesta a una orden jerárquica. Sin embargo, la dimensión de un saber empírico policial se complementaba con un saber técnico/doctrinario no específico, en tanto el agente reconocía una noción amplia del “enemigo comunista”, al incorporar al “colateral”, por ejemplo, en el momento de transformar la espía en un informe de inteligencia, integrando así un saber procedimental -subjetivo y empírico- junto a un accionar burocrático.

En muchas oportunidades el sujeto de vigilancia fue quien brindaba los datos a la policía para garantizar la realización de un acto, incorporando información sobre oradores, dirigentes, entre otros. De esta manera, el trabajo policíaco diluía el imaginario de espionaje, cuando el propio actor político perseguido era quien utilizaba mecanismos formales para la aprobación de reuniones o eventos del Partido Comunista. Esto tampoco significaba que las prácticas de comunicación ejercidas por el PCA, mediante su apoderado legal, diesen resultado. Por lo contrario, en el marco del gobierno militar de “la Libertadora”, estos intentos eran muestras de denuncia hacia el régimen peronista depuesto, aunque las restricciones, a fin de cuentas, se expresaron a lo largo del período estudiado. De todos modos, el mecanismo formal empleado, también fue una evidencia del permanente control que la policía ejercía sobre los comunistas, debiendo éstos tener que argumentar e informar sobre cualquier suceso. La aplicación de restricciones hacia el Partido en el marco de otras figuras legales, fue un síntoma de continuidad entre el gobierno peronista y el de “la Libertadora”, que se constituyó en una estrategia que habilitaba este tipo de resultados, donde el propio Partido al estar *legalizado*, les facilitaba el control, desde su propia visibilidad pública, y hasta desde sus mismos integrantes que muchas veces avisaban sobre sus movimientos. Esta decisión condecía con lo resuelto en 1956, en una conferencia

dictada por el director de la DIA, Coronel Héctor Cabanillas y el Teniente Coronel Fernández Suárez, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ante la presencia del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, donde luego de analizar al comunismo en todas sus dimensiones, se concluyó que aún no era el momento para prohibir al Partido en la Argentina.

Una de las claves analíticas que se pusieron en foco en esta tesis, compete a la noción de territorio que comenzó a aparecer como parte esencial de las definiciones que se tomarían en cuestiones de seguridad. Tal como se detalló en la introducción, a partir de la segunda etapa (1958-1962) que compete a la periodización analizada, encontramos una profundización en la puesta en práctica de un aparato de inteligencia que comenzaría su derrotero hacia su consolidación a lo largo de las décadas siguientes. Así, durante el período indicado que abarca al gobierno de Arturo Frondizi y Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires, se destacó una fuerte militarización de los conflictos sociales y su consecuente política de militarización de los territorios, con la ejecución del Plan Conintes.

El territorio bonaerense constituyó un escenario en conflicto por excelencia. Como se expuso, la organización obrera, los distintos focos de resistencia a los planes de ajuste implementados por el gobierno y la consecuente organización en zonas fabriles como Ensenada, Berisso y La Plata, fueron factores sintomáticos de las medidas represivas implementadas en la región. La permanente construcción del “enemigo comunista”, respondió no solo a una cruzada ideológica, sino a intereses macro y geopolíticos que se definieron a lo largo de todo el continente. La Doctrina de Seguridad Nacional que se promulgó en América Latina significaba para Estados Unidos la posibilidad de expansión, en tanto garantizaba el control territorial. Contener la avanzada comunista en América Latina representó, principalmente, una amenaza para la hegemonía de la potencia occidental en tanto que perdía el control de los recursos estratégicos de los diversos países latinoamericanos.

En Argentina, la militarización de la seguridad estuvo atravesada por una concepción geopolítica y biopolítica del espacio que iba más allá de las fronteras. El control directo sobre el presidente Frondizi por parte de los militares, en un contexto de crisis en las relaciones presidenciales, también incluía la demanda militar para que se reconozca un estado de guerra y así poder obtener plenos derechos para intervenir. Esta situación condujo

a una concepción militar de vigilancia extrema, que dio como resultado la división del territorio nacional en una cuadrícula, donde se crearon los consejos de guerra para combatir al “enemigo interno”.

Así es como el Conintes funcionó desde una doble faceta: jurídica y militar. Desde allí se legalizó y legitimó la violencia de Estado, sustentada desde la consolidación de una fuerte identidad nacional, resaltada en los dos períodos, degradando -incluso en el período de Frondizi y Oscar Alende-, los principios democráticos bajo argumentos de seguridad y estabilidad social. Los tribunales militares habilitados por la implementación del Plan Conintes, redefinieron de este modo una legalidad específica como parte también de un orden jurídico autoritario. Puede entenderse como la gestión frondicista vino a profundizar las políticas represivas inauguradas por “la Libertadora”, generando una normalización de la excepción, haciendo de ésta la principal característica del Estado.

Las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de garantizar el orden interno. El control del espacio bonaerense fue directamente proporcional a las zonas de mayor concentración obrera donde los intereses del capital se veían perjudicados. Así la construcción del enemigo comunista por parte de los servicios de inteligencia fue un aspecto esencial para garantizar el mantenimiento del orden social hegemónico, donde se ponía también en juego la inseguridad sobre la propiedad vista desde la clase gobernante, ante la presencia de ese proyecto comunista que constituía una amenaza bajo su paradigma de socializar los medios de producción.

Aquí se puede ver como los vínculos entre la vida y el territorio, la biopolítica y la geopolítica, se expresaron en una política de Estado que necesitaba hasta el control de la propia vida para mantener la reproducción del orden social. Es decir se requería de una política de la vida para controlarla, estando ésta supeditada a la importancia del espacio en que se materializaba.⁵⁰³ Cabe mencionar la siguiente referencia que ejemplifica con claridad, veinte años después de la creación del Archivo y Fichero de la DIPPEBA, la concepción del espacio en términos políticos y de estrategia policial y militar: “La geopolítica es una disciplina auxiliar de la política nacional o internacional, (...) que para la realización de los fines del Estado pone acento en los factores físicos y biológicos de la

⁵⁰³ González, Hernández, Bryan, “La construcción bio/geopolítica de las Doctrinas de Seguridad Nacional”, en *Cuadernos DO CIM*, Universidad Federal de Pelotas, Brasil, Año 1, Vol. 1, n°1, enero 2017.

Comunidad Organizada, en sus aspectos internos y con referencia a su proyección externa”.⁵⁰⁴ Esta referencia nos lleva a 1976 donde la inteligencia provincial ya requería de cursos y capacitaciones específicas para la formación del agente. Existió entonces, un curso especial sobre geopolítica dictado por la Policía Federal, desde donde se concebía a la “ideología” como un “arma” adicional con la que contaba la Unión Soviética en materia geopolítica. El partido político comunista era considerado como un instrumento de intervención eficaz en este juego de poder planetario.

Entonces, hacia fines de la década del '50 y principios del '60, la categoría de enemigo homologada al genérico comunista, comenzó a incorporarse dentro de la concepción de “terrorismo”. En la propia Central de Inteligencia se encuentra entre los legajos un documento donde aparece el “bosquejo sobre lo que es el terrorismo”, enrolando bajo esta consigna al enemigo político de carácter histórico y sus mutaciones hasta el presente. Desde el gobierno de Arturo Frondizi en el país y la gobernación de Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires, se continuaron habilitando políticas de excepción. A lo largo de los capítulos pudo hallarse una continuidad en la construcción de aquella amenaza comunista-terrorista, que buscó generar un Estado fundado desde el miedo para legitimarse, y a partir de allí justificar la militarización de la sociedad civil. Este Estado de seguridad, en términos de Agamben, se constituyó en función de generar una sensación de incertidumbre en la población sobre aquello que la amenazaba, asegurando desde las esferas del Estado, su supuesta protección.

Es así como aquellos sentidos hallados en los legajos de inteligencia que ubicaban la existencia de un “nosotros” y un “otro”, tuvieron como estrategia permear en la sociedad y construir una matriz de pensamiento homogénea sobre la realidad social y política. Las fuentes policiales, también permitieron observar una cultura policial en la construcción de categorías para definir a ese “otro” genérico, que en tanto su potencial de peligrosidad definía también el valor de lo hallado. La construcción del relato policial fue, por un lado, parte de un discurso repetitivo y homogéneo que enmarcaba a la cruzada contra el comunismo a nivel mundial, pero, por el otro, claramente tuvo su especificidad en relación

⁵⁰⁴ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, División Instrucción, Policía Federal Argentina, “Apuntes de Geopolítica”, Legajo 2, año 1976, pág. 1.

al contexto particular de nuestro país y la provincia. Dicha especificidad estuvo signada principalmente por la aparición en escena de otro actor político: el peronismo.

En efecto, el “elemento comunista”, devenía en el enemigo a erradicar de la faz de la tierra, apreciaciones que potenciaron su peligrosidad, dejando en la escena nacional al peronismo como un enemigo coyuntural *desterrable*, en tanto el proyecto de “la Libertadora” era “desperonizar” al país. El “enemigo comunista” se ubicaba por encima del “enemigo peronista”, tanto por su carácter mundializado, situación que seducía a los militares de la época con alianzas y relaciones políticas con los Estados Unidos en la lucha conjunta contra el comunismo, como por su posible *simbiosis* política.

Sin embargo, estas categorizaciones se desdibujaron en el encuentro carcelario que se generó entre militantes peronistas y comunistas. La particularidad de las detenciones bajo el Plan Conintes fue que se construyó una categoría por fuera de las nociones policiales. Los y las “presos Conintes” contenía a peronistas y comunistas, aunque para la mirada de las fuerzas de seguridad éstos comenzaban a sincronizarse, la cárcel construía la división trasladando el afuera hacia el adentro con la designación de pabellones específicos para cada corriente política. Estos “pabellones ideológicos”, como denominaron algunos militantes, se proyectaban como la materialización de aquella necesidad del Estado por catalogar y encasillar, situación que fue fácilmente vulnerada ante el cruce inevitable de los y las militantes en sus lugares de detención. Este tipo de situaciones, ponían en filo a las eficiencias de este gran aparato de control planificado desde las esferas más altas de las fuerzas de seguridad.

Hacia comienzos de la década del '60, el cómo nombrar al enemigo comenzaba a dar indicios conscientes de cambios, en consonancia con las variaciones políticas a nivel regional. En esta línea, la redefinición de la Central de Inteligencia en 1961, se concentró no sólo en el cambio de nombre, “Servicio de Informaciones Policiales de la Provincia de Buenos Aires” (SIPBA), sino en la priorización del asesoramiento policial en particular sobre lo referente a “comunismo”, pero incorporando la concepción de la existencia de un “nacionalismo marxista” o “izquierda nacional”.

La vigilancia como rutina indica también que la noción de peligrosidad atravesó el siglo XX como categoría vertebral de las prácticas policiales, en donde los y las comunistas fueron objeto del control, que sin lugar a dudas, se mantuvo durante décadas en sus miras.

El funcionamiento de la información recolectada por los agentes de la DIPPBA, nos abre la posibilidad de poder visualizar nociones y verdades construidas por éstos. Las prácticas de vigilancia y el registro de la información, consistieron principalmente en conformar un gran archivo centralizador, que no implicó el uso al instante de la información acopiada. El principal objetivo consistía en una apuesta política que garantizara los medios para que la información circule, se acopie y centralice en la ciudad de La Plata, haciendo de este gran acervo una fuente de consulta permanente.

En la maquinaria del trabajo policial, la Central de Inteligencia provincial ocupaba un lugar preponderante, ya que al reunir la información de toda la provincia, mantenía los vínculos con otras dependencias locales, como las comisarías de todo el territorio bonaerense. En este sentido, el nivel de información adquirido aquí era abundante, más allá, del valor o el uso que luego se haya hecho, cada dato se transformó en un cuerpo del delito; en un texto de control bajo la escritura policiaca. El mismo acto de ser registrado por un agente de la DIPPBA, ya los convertía en culpables, bajo un tipo de narrativa categorizada propia de la institución que a la vez producía a los sujetos que la escribían. Aquella frase que cerraba el informe: “es todo cuanto por el momento puedo informar”, se constituía en el sello personal del agente que lo establecía por lo que era, en cuanto relataba lo que hacía.

Así, los informes de la policía nos dejan entrever, fundamentalmente, una reconstrucción sobre la realidad social y política basada en supuestos compartidos, además de los lineamientos doctrinarios desde lo que podría denominarse la “alta policía”, que en este caso fueron presentados desde las jerarquías militares. Las interpretaciones alojadas en los expedientes nos llevan a comprender una mirada policial sobre el comunismo que ubicaba de una manera especial a los sectores más jóvenes y a las mujeres. “Incrédulos de buena fe”, “material humano utilizable”, estas adjetivaciones aparecieron en conferencias y revistas de la policía que derivaron en una distinción etaria y de género, que conducía a una subestimación y victimización de los grupos mencionados en manos del “poder rojo”. La negación se ubicaba aquí, en tanto que anulaba la condición de la mujer y los jóvenes como sujetos políticos y de derechos.

La mirada sobre las mujeres de la UMA, comprendió también un análisis desde valores patrocinados por el arraigo a una cultura patriarcal, donde calificativos como “convenientemente instruida”, eran puestos en escena para corroborar que la organización

era un instrumento del Partido. La negación del sujeto como tal, fue parte de la construcción de ese “otro” comunista. Como explica Calveiro, esta definición -ambigua y amplia-, hacía que el “enemigo” fuera criminalizado y negado a la vez, razón que facultaba su persecución.⁵⁰⁵

Otro aspecto que se distingue en la redacción de los expedientes, es la relación desigual entre el vigilante y las/los vigilados, cuya meta consistió en mantener las relaciones de dominación⁵⁰⁶ y garantizar la reproducción y fabricación del orden social dominante.⁵⁰⁷ Es decir, aquellos registros que obedecían también a un *modus operandi* de la policía, no fueron simplemente el reflejo de la observa. Cada detalle omitido, falsificado, o simplemente registrado como tal, fue el producto de aquella cultura policial llena de implícitos que con el tiempo, y en el marco de una planificación institucional, devino en rutina y los agentes policiales intervinieron ágilmente en el mundo del control social como activos observadores.

El acercamiento a estas rutinas, analizadas en los informes de inteligencia que abarcan los partidos de La Plata, Morón y La Matanza sobre los actos del PCA y las mujeres de la UMA, permitió pensar el vínculo de la doctrina con la práctica de inteligencia -convertida en documento-, y finalmente con la realidad de los vigilados/as. En este aspecto, la eficacia de estos archivos se demuestra más como la materialización en perspectiva histórica de lo que significó el terrorismo de Estado, que en términos de exactitud entre la “orden” y la “ejecución”. La subjetividad que atravesó la construcción de los expedientes, también lleva a pensar la noción de verdad donde la lógica de la sospecha que conducía al agente, era un comportamiento inducido y cotidiano que hacía de la sospecha un aspecto intrínseco al acto del permanecer en el puesto de control.

De este modo, el aparato de inteligencia intentó constituirse, en primer lugar, como una ingeniería aplicada al control social articulada con otras instituciones de seguridad estatal, pero que en “la calle”, en su práctica, estaba constituido por estos elementos que muchas veces se alejaban de un sistema de control exacto y eficaz.

⁵⁰⁵ Calveiro, Pilar, “La centralidad de la guerra y lo concentracionario en la reorganización global del poder”, en Pinedo...et.al, *Políticas del terror: las formas del terrorismo de Estado en la globalización*, Buenos Aires: Ad-Hoc, CIAJ, 2007.

⁵⁰⁶ Brodeur, Jean Paul, *Las caras de la policía: prácticas y percepciones*, Buenos Aires: Prometeo, 2011.

⁵⁰⁷ Neocleous, Mark, *La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía*, Buenos Aires: Prometeo, 2010

La caracterización de cada persona, quién es, dónde debe estar, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él una vigilancia permanente, para luego incorporarlo a una categoría que lo agrupe, en el caso de la DIPPBA, a una “Mesa” particular del archivo que se conforma con un “Factor” determinado, fue parte de un planteo del control social y político, que puede enmarcarse en ese doble funcionamiento de la división binaria y la marcación: (comunista-anticomunista, peligroso-inofensivo) con su correlato de la asignación coercitiva diferencial, que implica la universalidad de los controles disciplinarios que habilitaban, por ejemplo, a distinguir quién era comunista del que no lo era.

Como se analizó, esta “policía de las apariencias”, se constituía como tal desde una posición de privilegio y desigual. Su mirada, abusiva e intrusiva, también fue fácilmente burlada o imposibilitada, como en el caso de la UMA, donde su condición de género desdibujaba su rol de agente encubierto. Este aspecto condujo a otros mecanismos de recolección de datos para la elaboración de los informes. La información se nutría del movimiento externo a las actividades que comprometían a las mujeres, mientras la orden de la vigilancia fue permanente. El crecimiento de esta agrupación y su internacionalismo - vínculo directo con las mujeres soviéticas y cubanas- fueron elementos de alerta y preocupación en los informes de la DIPPBA, por lo que su seguimiento fue una tarea que atravesó a toda la provincia de Buenos Aires.

Esta policía de la absorción, tal como la plantea Brodeur, al referirse a la “policía política”, se definía en tanto buscaba el control por la acumulación de información, pero que extendía las formas de este control a otros niveles de la vigilancia que buscaban la precisión, más allá de la acumulación de datos. Aquí, vimos como lo externo en el caso de las mujeres funcionaba como un punto de mira para la vigilancia policial. La materia prima del archivo de la DIPPBA, también estuvo conformada por otros elementos como palabras expresadas en voz alta o hasta un posible “cuchicheo” en la vereda a la que el agente podía tener alcance o la lectura de la correspondencia. Este paradigma de la policía de inteligencia nos remite a la reforma de la policía francesa de 1749. En la memoria que registró sobre ésta un oficial de gendarmería francés, “expuso no sólo las grandes líneas del primer sistema automatizado de legajos policiales, sino que también propuso proyectos detallados sobre la numeración de las casas, los departamentos y las escaleras, la identificación de todos los vehículos y el inventario de los empleos, de los desplazamientos,

de la tasa de ocupación de los hoteles y así seguido”.⁵⁰⁸ Dos siglos después, se compartiría este mismo modelo, sumado al entrenamiento militar de la Doctrina Francesa del siglo XX para la obtención de información, y en 1976 en la provincia de Buenos Aires aquel registro minucioso descrito por el gendarme francés, se convertiría en los “informes ambientales”, siendo investigado el entorno del vigilado/a, que reforzaría también la construcción de la criminalidad en su espacio cercano.

El armado de los informes de inteligencia recopilaban así diferentes aspectos supeditados también a la subjetividad de los propios “observadores”. Según los analizados, no hubo una capacitación específica para el período estudiado, más allá de la documentación de doctrina y el curso de informaciones del año 1957, dictado por la Escuela Superior de Policía. A partir de los registros, la Escuela de Inteligencia “José Héctor Ramos” fue creada recién en el año 1977, donde posiblemente se hayan tomado algunos materiales de anticomunismo de otros cursos, que incluso datan del primer peronismo, como aquellos que referían a las actividades “anti-argentinas”. Los materiales de geopolítica, anteriormente descriptos, junto con una carpeta titulada “Objeto de la Inteligencia Policial”, pertenecen al período de la última dictadura cívico-militar. En este legajo se halla una especialización del saber policial que apunta a la formación directa del agente de inteligencia. Algunos elementos que dan cuenta de esto refieren a un desglosamiento sobre el pensamiento “creativo” en la producción de inteligencia policial; leyes, estrategias y principios de la inteligencia policial, información táctica y estratégica; procedimientos de contrainteligencia; métodos para la obtención y difusión de información; informes policiales; métodos y herramientas para la investigación en inteligencia, etc.⁵⁰⁹ Toda una serie de consideraciones que nos remiten incluso a la formación periodística aplicada a la inteligencia policial, sumado a otro informe donde ya se indicaban las pautas para la caracterización del agente de inteligencia, que implicaba como vestirse para determinadas ocasiones.⁵¹⁰ El “saber experto” cobraba valor para este período, que se compartiría con toda una cargada documentación ya elaborada décadas previas, sustentadas desde la misma práctica y rutina policiaca.

⁵⁰⁸ Brodeur, Jean Paul, *Las caras de la policía: prácticas y percepciones*, Buenos Aires: Prometeo, 2011, pág. 241.

⁵⁰⁹ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, “Objeto de la Inteligencia Policial”, Legajo 46, s/f.

⁵¹⁰ Archivo DIPPBA, Mesa Doctrina, “Caracterización”, Legajo N°289, s/f.

Finalmente, en los capítulos desarrollados a lo largo de la tesis vimos como el “comunismo” siempre fue representado como un enemigo vertebral para la Nación, cuya identificación diferencial fue utilizada por los diversos gobiernos para estructurar un modelo político hegemónico. A su vez, tuvo como resultado eficiencias diferenciales desde del aparato estatal, pero donde la categoría de enemigo y su consecuente negación dentro del sistema, siempre legitimó y legalizó la acción criminal del Estado en el marco de la excepcionalidad. Bajo ese imperativo, el control policial-militar se sistematizó y materializó con la creación de dependencias especiales para su persecución. El accionar y la cultura burocrática de órdenes cumplidas comprendió tanto a los regímenes dictatoriales como a los gobiernos civiles y se convirtió en una práctica adquirida con el tiempo, más allá de quién debía ser espiado.

Como se expuso, en la presente tesis se ha puesto especial énfasis en la reconstrucción del aparato de inteligencia que dio como resultado una estructura montada durante décadas para la detección del enemigo político. Sin embargo, poco sabemos sobre los sentidos que pudieran desprenderse de las “fallas” o “disfuncionalidades” de este aparato policial del siglo XX. Incertezas poco exploradas que darán pie a la necesidad de nuevas investigaciones al respecto.

Queda claro que las complejidades de estos procesos alientan a nuevas pesquisas. La mirada que recorre esta tesis constituye un punto de apoyo considerable para ulteriores recorridos, al poner de relieve la perspectiva institucional, ideológica y operativa, que numerosas fuentes halladas en archivos hasta hace poco secretos, han permitido develar. De ellas, en general, se desprende por añadidura una abrumadora eficiencia en el control policial, tan presuntuosa como falsa. Y a lo largo de esta misma tesis se han indicado numerosos espacios donde toda esa “maquinaria” policial no logró su cometido. Comenzando por los actores políticos y sociales que eran los destinatarios primarios de todo el esquema de inteligencia policial que hemos intentado explicar en su devenir histórico. Podemos identificar muchas “zonas grises” donde la interacción entre vigilantes y vigilados/as no siempre permite definir con claridad quien logra sobreponerse o imponerse a quien. Queda pues el desafío de la continuidad de la investigación como parte del proceso que nos lleve a comprender mejor todo el entramado que aquí hubo de presentarse, de describirse y de verse en acción.

Finalmente, cabe señalar que la intervención a lo largo de todo el siglo XX en seis Golpes de Estado, formó un determinado imaginario de aceptación social, donde la politización de las Fuerzas Armadas, constituyó parte del escenario político de lo posible en nuestro país. Esta prolongada historia golpista, cuyas consecuencias también son parte de la profundización de un modelo capitalista-liberal, ha ganado en el presente una condena social extendida por amplios sectores de nuestra sociedad.

En este trabajo, se ha tratado de identificar cómo la naturalización de la excepción en norma de Estado, fue una característica durante buena parte del siglo XX en Argentina. La creciente acción violenta del Estado fue una estrategia de control que nos condujo a uno de los “abusos temidos” en términos de Brodeur: la absorción del Estado por la policía. Así durante los períodos constitucionales se estuvo frente a un Estado Policial permanente, que fue camino a una militarización de la sociedad y el territorio, ante las seguidas intervenciones militares acaecidas en nuestro país.

Tantos años en silencio y tantos años de espionaje avalado por gobiernos democráticos, también lleva a preguntarnos por la concepción y la esencia del Estado actual, con toda esa historia abultada en su “legítima” estructura. Cómo la práctica de inteligencia fue configurando una arquitectura urbana tendiente al control, cuyos alcances actuales han calado hondo en una sociedad que incorpora en su cotidiano nuevos dispositivos de control bajo la sombra de un imaginario social que siempre busca culpables. Reflexiones, que futuras investigaciones abrirán camino a nuevas preguntas en torno a las violencias de Estado.

VIII. Fuentes clasificadas por repositorio documental

División Central de Documentación, Registro y Archivo de la DIPPBA:

- Mesa Doctrina, Carpeta Decreto Leyes y Disposiciones, Legajo N° 42, “S.I.P.B.A, Su creación”, s/f.
- Mesa C, colaterales, Legajos N° 28, N° 20 y folletos, s/f.
- División Orden Público, Oficina de Coordinación de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires, Carpeta 2, Legajo N° 110, “Bases necesarias para orientar las actividades informáticas”, 1951.
- Mesa C, Carpeta 2, Legajo N° 75, “Partido Comunista”, s/f.
- Mesa C, (Varios), Carpeta 6, legajo 121, “Comunismo en la Argentina”, s/f.
- Mesa “C”, Referencia Especial, Legajo N°5184, año 1954.
- Mesa Doctrina, “Tema Comunismo”, Legajo N°167, Archivo y Fichero, 1956.
- Material Doctrina, Reglamentaciones, Legajo N°11, “Central de Inteligencia Reglamentación, 1957”.
- Departamento “C”, Central de Inteligencia, “Informaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento”, Carpeta Varios 25, 1957.
- Carpeta Decreto, Leyes y Disposiciones, “Normas sobre clasificación de organismos y personas”; Secretaría de Informaciones y Difusión, Provincia de Buenos Aires, Gobernación, Boletín de Informaciones, Carpeta 2, legajo N° 95, La Plata, 1956.
- Departamento “C”, “Central de Inteligencia. Organización”. “Curso de Informaciones. Programa, en Informaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento, Varios 25, 1957.
- Carpeta Decretos, leyes y disposiciones, legajo N° 95, “Procedimiento práctico para el funcionamiento informativo en esta organización policial”, 1961.
- Carpeta, decretos, leyes y disposiciones, legajo n° 95, “Bosquejo sobre lo que es el terrorismo”, 1959.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 1957.
- Mesa Doctrina, “Tema Comunismo”, Archivo y Fichero, Legajo N°167, 1956.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 76, La Plata Sección 4, Ensenada, 7 de agosto de 1949.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 75, La Plata Sección 3, 1951.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 75, Eva Perón, Sección 3, 1955.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 76, La Plata Sección 4, 1956.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 78, La Plata Sección 6, Tolosa, 1958.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, Legajo N° 81, La Plata Sección 9, s/f.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 3, legajo N°58, Estatutos de la Unión de Mujeres de la Argentina
- Mesa C, comunismo, Carpeta 3, legajo N°58, “Colateral. Unión Mujeres Argentina. Antecedentes”.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 3, legajo N°39, “Series fotográficas”.

- Mesa C, comunismo, Carpeta 2, legajo N° 76, La Plata, Sección 4°.
- Mesa C, comunismo, Carpeta 3, Legajo N°67, La Plata – Sec.9.
- Mesa B, Factor Gremial, carpeta 4, Legajo 2.
- Mesa B, Factor Gremial, carpeta 65, legajo 20
- Mesa B, Carpeta 39, Legajo 12, SUPE, Tomo II, Ensenada
- Mesa B, Carpeta 39, Legajo 29, Asociación de Trabajadores del Estado, Ensenada, Tomo I.
- Mesa DS, Carpeta Material Bélico, Legajo N°53, 25 de mayo de 1960.
- Mesa DS: carpeta Material Bélico, legajo N°71, 18 de mayo de 1960
- Mesa DS, Carpeta Material Bélico, legajo N°58, Diario Crítica, 14 de noviembre de 1960
- Mesa DS, Carpeta Daños, Legajo N°100, Ministerio de Gobierno Policía, Memorandum N°9, 15 de julio de 1962.
- Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta N°37, Legajo N°18, 31 de enero de 1961.
- Mesa Referencia, Unión de Mujeres de la Argentina, Legajo N°181, enero de 1961
- Mesa C, Carpeta Referencia Especial, legajo N° 6343, 12 de agosto de 1960
- Mesa C, Colaterales, Carpeta 3, Legajo N°59, Ramos Mejía, 12 de septiembre de 1956.
- Mesa Doctrina, División Instrucción, Policía Federal Argentina, “Apuntes de Geopolítica”, Legajo 2, año 1976.
- Mesa Doctrina, “Objeto de la Inteligencia Policial”, Legajo 46, s/f.
- Mesa Doctrina, “Caracterización”, Legajo N°289, s/f.

Archivo Oral. Comisión Provincial por la Memoria:

- Archivo Oral N°1. Mayo de 2009. Jorge Rulli.
- Archivo Oral N°4. Noviembre de 2008. Enrique Oliva.
- Archivo Oral N°8. Febrero 2009. Héctor Julio Spina.
- Archivo Oral N°9. Abril de 2010. Simón Garmanik.
- Archivo Oral N°10. Marzo 2010. Hilda del Valle.
- Archivo Oral N°1. Julio 2010. Francisco Mon.

Archivo Nacional de la Memoria:

- Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria, Documentos del Estado Terrorista: Directiva del Comandante General del Ejército N°404/75 (Lucha contra la Subversión). Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional). Compilado por Rosa Elsa Portugheis, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, 2012.

Fondo del Centro de Estudios Nacionales. Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina:

- Caja 03.1. Mensajes y discursos presidenciales, 26 de noviembre de 1960.
- Caja 03.4.8.2.1, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional, 1958-1962.
- Caja 0.3.4.8.4, Comunismo 1958- 1962.
- Caja 03.5/03.5, Derrocamiento/Destitución en marzo de 1962, Acta Secreta Presidencia de la Nación, 29 de marzo de 1962.
- Caja 03.3.9, Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), 1958-1962.
- Caja 03.4.8.2.2 Secretaría de Guerra, 1958-1962
- Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario El Mundo, 20 de diciembre de 1960-1961
- Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Prensa, 6 de agosto de 1960.
- Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Vanguardia, 22 de febrero de 1961.
- Caja 0.3.4.8.2.5 Fuerzas Armadas, Recortes Periodísticos, Diario La Razón, 27 de abril de 1960.

Archivo General de la Nación:

- Archivo Intermedio. Ministerio del Interior, Documentos secretos, confidenciales y reservados, fechas extremas (1932-1983).

Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene

- *Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires: Oscar Eduardo Alende, 1958 – 1962.* Colección dirigida por Claudio Panella, La Plata: Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2007 (Serie: Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires).

Archivo Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas:

- Bandera Roja N° 78, 24 de junio de 1932. Catálogo de microfilms de publicaciones, pertenecientes al Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda en Argentina (CeDInCI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Mundo Obrero, boletín s/f. Catálogo de microfilms de publicaciones del Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda en Argentina (CeDInCI), ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Biblioteca del Senado de la Provincia de Buenos Aires:

- Ley de Residencia, N° 4144, Tomo XVIII-A, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1918.
- Ley de Defensa Social, N° 7.029, *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores*, Buenos Aires, Publicación del cuerpo de taquígrafos del Senado de la Nación, 1910.
- “Anexo, Memorial Comunismo-1932, Comisión Popular argentina contra el comunismo”, 28 de diciembre de 1932, Tomo II, Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, 1932.
- Decreto N° 536/45, Poder Ejecutivo de la Nación, “Delitos contra la seguridad interna del Estado”, Tomo V, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1945.
- Decreto N° 137, “Prohibición absoluta de propaganda comunista”, 20 de mayo de 1936, *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores*, Tomo I, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1940.
- Sánchez Sorondo, Matías, Proyecto de Ley “Represión a las actividades Comunistas”, *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores*, Tomo II, Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores de la Nación, 1933.
- Sánchez Sorondo, Matías, “Represión del Comunismo y sindicación gremial y patronal”, *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores*, Tomo II, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación del Congreso Nacional, 1936.
- Sánchez Sorondo, Matías, “Proyecto de ley, informe y antecedentes”, *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores*, Tomo III, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación del Congreso Nacional, 1936.

- Ley N° 13.985, “Reprime los delitos contra la seguridad de la Nación”, *Anales de la Legislación Argentina*, Tomo X-A, Bs. As, ediciones La Ley, 1950.
- Ley Nacional N° 14.400, “Actos o reuniones públicas”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XIV-A, Bs. As, ediciones La Ley, 1954.
- Ley Nacional N° 15.293, “Represión de las actividades terroristas”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XX-A, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1960.
- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 3855, “Disolución de los partidos peronistas, masculino y femenino”, *Anales de la Legislatura Argentina*, 24 de noviembre de 1955, Tomo XV-A, Buenos Aires: La Ley, 1955.
- Decreto Ley Nacional N° 2447, “Coordinación de servicios policiales”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, Bs. As, ediciones La Ley, 1956.
- Decreto Ley Nacional N° 2444, “Supresión del Consejo federal de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Seguridad”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, Bs. As, ediciones La Ley, 1956.
- Decreto Ley Nacional N° 18787, “Junta en Defensa de la democracia”, en *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XVI- A, Bs. As, ediciones La Ley, 1956.
- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 4965, “Prohibición de actividades comunistas y del Partido Comunista”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XIX-A, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1957.
- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 12681, “Comisión para la investigación y estudio de la actividad comunista en el país”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XX-A, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1960.
- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, N° 2985/61, “Planificación, dirección y supervisión de la acción del Estado en material de comunismo y otros extremismos por la Secretaría de Informaciones de Estado”, *Anales de la Legislatura Argentina*, Tomo XXI-A, Buenos Aires, ediciones La Ley, 1961.
- Decreto Nacional N° 2628, Subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas; ejecución Plan Conintes. (B.O 16-III/60), La Ley: Buenos Aires 1961.
- Decreto Nacional N° 2639, Declaración de Situación de emergencia grave; jurisdicción militar sobre delitos de intimidación pública y terrorismo (B.O 16-

III/60), *Anales de la Legislatura Argentina* La Ley: Buenos Aires 1961, pp. 367-368.

- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 862, “Movilización del personal de empresas oficiales y privadas dedicadas a la extracción, industrialización, transporte, comercialización y expendio de petróleo y sus derivados”, en: *Anales de la Legislación Argentina*, 20 de enero de 1959 Tomo XIX-A.
- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°863, “Declaración de zona militar a los partidos de Berisso y Ensenada y a la ciudad de La Plata, a los efectos de la movilización dispuesta por decreto 862/59”, en: *Anales de la Legislación Argentina*, Tomo XIX-A, 20 de enero de 1959, Buenos Aires.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Buenos Aires, La Ley, Tomo 103, pág. 518, 1960.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Buenos Aires, La Ley, Tomo 106, 1962.

Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”

- Orden del Día N° 19.546, 18 enero de 1957, “Central de Inteligencia, apruébese la estructuración sobre su funcionamiento. Impresión de folletos secretos”, Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- Orden del Día N° 19.657, 3 de julio de 1957, “Investigación de una comisión para estudio de un curso en dicha materia”, Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- Pérez, Sebastián, “Una Policía Revolucionaria”, *Revista de Policía de la Secretaría Técnico Social*, Buenos Aires, 1951. Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- Rascio, Antonio, “El Comunismo en la Provincia. Su desarrollo, sistema de trabajo. El porvenir de esta ideología. Soluciones”, *Anexo de la revista de Policía, Provincia de Buenos Aires*, La Plata, diciembre de 1956. Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.

Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires:

- Ferrer César, “Preponderancia de la selección inmigratoria en la ciudadanía argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires, Policía de la Capital Federal, República Argentina*, n°3, noviembre. Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1935. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
- Ferrer César, “Expulsión de Extranjeros”, *Revista de Policía y Criminalística, de Buenos Aires, Policía de la Capital Federal, República Argentina*, n°1, julio, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1935. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
- “Memoria de la Jefatura de Policía”, correspondiente al año 1935. Realizadas por el Jefe de Policía Interino Francisco Danieri al Ministro del Interior, en *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires, Policía de la Capital Federal, República Argentina*. Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
- Singorelli, Vicente, “Iniciación al comunismo en Argentina”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires, Policía de la Capital Federal, República Argentina*, n°4-5, enero, marzo, Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
- Berchesi, Juan F, “Motivos por los cuales el partido comunista es un peligro que debe eliminarse de toda nación civilizada”, *Revista de la Policía de la provincia de Buenos Aires*, año 1, n° 9, enero de 1942. Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- Berchesi, Juan F, “Referencia del decreto 137 del Poder Ejecutivo y procedimiento a seguir en caso de infracción”, *Revista de la Policía de la provincia de Buenos Aires*, año 1, n°10, Buenos Aires, marzo de 1942. Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- “Los Frentes Populares de Europa obedecen a maniobras del Partido Comunista”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires, Policía de la Capital Federal, República Argentina*, n°6, abril-mayo-junio. Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

- “Creose la Central de Inteligencia”, en *Revista de Policía, Provincia de Buenos Aires*, La Plata, septiembre de 1956. Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
- Singorelli, Vicente, “Croquis de la organización comunista del año 1932”, *Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires*, Policía de la Capital Federal, República Argentina, n° 4-5, enero, marzo. Buenos Aires: Biblioteca Policial, 1936. Hemeroteca de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Artículos periodísticos:

- Tomás Eloy Martínez, entrevistas al Coronel Héctor Cabanillas en el año 1989, publicado en el *Diario La Nación*, 6/08/2002.

Entrevistas:

- Entrevista realizada a Laura Lenci y Magdalena Lanteri integrantes, (al momento de la entrevista), del Centro de Documentación y Archivo, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata, mayo de 2011.
- Entrevista realizada a Gladys, Mabel Farías. Marzo de 2014.

Páginas web:

- Comisión Provincial por la Memoria: www.comisionporlamemoria.org/
www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/
- Colectivo Justicia Ya!: www.justiciaya.org.
- Colectivo de Investigación y Acción Jurídica: www.ciaj.com.ar
- <http://www.eldial.com.ar/nuevo/boletin/2013/BO130305.pdf>. Decreto (S) 9880/58, 5 de marzo de 2013, Boletín Oficial de la República Argentina.
- InfoLeg: www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31918/norma.htm. Decreto N° 15385, 13-jun-1944, art. 1.

IX. Bibliografía consultada

- Acha, Omar (2008), "La huelga bancaria de 1959 y los problemas de un movimiento obrero dividido", *Revista del Centro de Cultura y Cooperación*, n° 2. www.centrocultural.coop/revista/articulo/31/.
- Agamben, Giorgio (2004), *Estado de excepción. Homo sacer I y II*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Altamirano, Carlos (2001), *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires: Ariel.
- Amaral, Samuel (1993), "Perón en el exilio: la legitimidad perdida", en Amaral, S. y Plotkin M. (comp.), *Perón, del exilio al poder*, Buenos Aires: Cántaros Editores.
- Armus, Diego (Comp.) (2005), *Avatares de la medicalización en América Latina, 1870- 1970*, Buenos Aires: Colección Salud Colectiva.
- Balesta, Luis (compilador), (1938) *Conversando con el pueblo (Discursos del Dr. Manuel A. Fresco)*, Buenos Aires, Damiano.
- Barba Fernando, Demaría Massey, María Elena (1987), *La provincia de Buenos Aires 1910-1987*, La Plata: Gobierno de Buenos Aires, Archivo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Levene.
- Barbero, Héctor, Godoy, Guadalupe (2003), "La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino. Décadas de 1950 – 1960", *Cuadernos de Trabajo* N° 55, Departamento de Derechos Humanos, Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
- Barreneche, Osvaldo (2007), "La reforma policial del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951", *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol.47, Buenos Aires: IDES.
- _____ (2008), "La reorganización de las policías de Córdoba y Buenos Aires, 1935-1940", en Beatriz Moreyra y Silvia Mallo (coord.), *Pensar y construir los grupos sociales. Actores, prácticas y representaciones: Córdoba y Buenos Aires, siglos XVI-XX*. Córdoba: Publicación del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos Segreti" y Universidad Nacional de Córdoba.
- _____ (2009), "Por mano propia. La justicia policial de la provincia de Buenos Aires en el primer peronismo", *Sociohistórica, Cuadernos del*

Centro de Investigaciones Socio Históricas, N° 25, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata: EDULP.

- _____ (2010), “La historia de las instituciones de seguridad a través de las fuentes documentales y los archivos institucionales. El caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en Sirimarco Mariana (comp.) *Estudiar la policía. La mirada de las ciencias sociales sobre la institución policial*, Buenos Aires: Teseo.
- _____ (2011), “Paro de y represión a... policías. Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973)”, *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, vol. 51, N° 202-203, Buenos Aires: julio-diciembre.
- Barreneche, Osvaldo y Galeano, Diego (2008), “Notas sobre las reformas policiales en la Argentina, siglos XIX y XX”, *Cuadernos de Seguridad*, Buenos Aires, Consejo de Seguridad Interior.
- Barreneche, Osvaldo, Formas de violencia policial en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la década de 1960, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina* (12), 251-272, Memoria Académica, FaHCE, UNLP, pp.17-18, 2012.
- Barry Viviana (2009), *Orden en Buenos Aires. Policías y modernización policial, 1890-1910*, Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios.
- Basualdo, Guadalupe y Barbuto, Valeria (2007), “El archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales: una etnografía de los procesos de documentación de las tramas de la violencia estatal”. Ponencia presentada en *Jornadas Memorias y elaboración del pasado reciente en Argentina: localizaciones, actores y perspectivas*, IDES, Buenos Aires.
- Béjar, Dolores (2005), *El Régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1934*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Benjamin, Walter, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid: Taurus, 2001.
- Beraza, Luis Fernando (2005), *Nacionalistas. La trayectoria de un grupo polémico (1927-1983)*. Buenos Aires: Puerto de Palos.
- Bertoni, Lila (2001), *Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Bisso, Andrés (2009), *Sociabilidad, política y movilización: cuatro recorridos bonaerenses 1932-1943*, Buenos Aires: Buenos Aires Libros.
- Bisso, Andrés, “El uso del concepto ‘totalitarismo’ en la ensayística antiperonista. El caso de *Frente al totalitarismo peronista*, de Reynaldo Pastor”, *Revista Quinto Sol*, Vol. 21, N°1, enero-abril, 2017, pp. 1-21.
- Bordagaray, María Eugenia (2008), “Ciudadanía y género en el mundo rural: el caso de la Unión de Mujeres de la Argentina y las ‘campesinas’ durante el peronismo (1943-1955)”, *Trabajos y Comunicaciones*, N° 34, 2da. Época. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3731/pr.3731.pdf.
- Bossa, Juan Alberto (2009), “Trabajo silencioso. Agencias anticomunistas en el sindicalismo latinoamericano durante la Guerra Fría”, *Revista Conflicto Social*, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA, Año 2, N°2.
- Brodeur, Jean-Paul (2011), *Las caras de la policía: prácticas y percepciones*, Buenos Aires: Prometeo.
- Caimari, Lila (2002), “Castigar civilizadamente”, en Gayol Sandra y Kessler Gabriel (comp.), *Violencias, justicias y delitos en la Argentina*, Buenos Aires: Manantial.
- _____ (2004), *Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en Argentina, 1880-1955*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- _____ (2012), *Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en buenos aires, 1920-1945*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Caimari, Lila (comp.) (2007), *La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Caimari, Lila (2005), “Usos de Foucault en la investigación histórica”, Documento de Trabajo N° 18, Serie “Documentos de Trabajo”, Escuela de Educación Universidad de San Andrés.
- _____ (2017), *La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Calandrón, Sabrina, Galeano, Diego (2013), “La Brigada Femenina. Incorporación de mujeres a la policía de la Provincia de Buenos Aires (1947-1955)”, en Barreneche, Osvaldo y Salvatore, Ricardo (comps.), *El delito y el orden en*

perspectiva histórica: nuevos aportes a la historia de la justicia penal y las instituciones de seguridad en Argentina, Rosario: Prohistoria.

- Callinicos Alex (2004), *Making History. Agency, Structure, and change in Social Theory*, Brill, Leiden-Boston.
- Calveiro, Pilar (2007), “La centralidad de la guerra y lo concentracionario en la reorganización global del poder”, en Pinedo...et. al, *Políticas del terror: las formas del terrorismo de Estado en la globalización*, Buenos Aires: Ad-Hoc, CIAJ.
- _____ (2012), “Violencias de Estado. La guerra antiterrorista contra el crimen como medios de control global”, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Camarero, Hernán (2007), *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935*, Buenos Aires: Siglo XXI
- Campione, Daniel, “Hacia la convergencia cívico-militar. El Partido Comunista 1955-1976”, En, *Herramienta, Revista de debate y crítico marxista*, N°29, Junio 2005.
- Castro-Gómez, Santiago (2010), *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo en Michel Foucault*, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Santo Tomás de Aquino.
- Cerra, Angel, Yazbek Susana (2014), “El sindicalismo petrolero frente a las ideas desarrollistas: resistencia y cooptación”, XXIV Jornadas de Historia Económica, Rosario.
- Chiarini, Sebastián, Portugheis, Rosa (coords) (2014), *Plan Conintes. Represión política y sindical*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos. Archivo Nacional de la Memoria.
- Codovilla, Victorio (1962), “El significado del giro a la izquierda del peronismo”, Informe rendido en la reunión del CC del PC realizada los días 21 y 22 de julio de 1962. Ateneo, Buenos Aires.
- Costazo Gabriela (2010), “Lo inadmisible hecho historia. La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910”, *Revista Alambre. Comunicación, cultura e información*, N° 4. <http://www.revistaalambre.com/>

- Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria, Documentos del Estado Terrorista (2012): Directiva del Comandante General del Ejército N°404/75 (Lucha contra la Subversión). Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional). Compilado por Rosa Elsa Portugheis, Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos.
- D' Antonio, Débora Eidelman, Ariel (2016), "El Fuero antsubversivo y los Consejos de Guerra contra civiles en la Argentina de los años 70", *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Tel Aviv*, Vol. 27, N°2, pp.77-98.
- da Silva Catela, Ludmila (2007), "Etnografía de los archivos de la represión en Argentina", en Franco, Marina y Levín, Florencia (comps). *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- _____ (2008), *Memorias en conflicto. De memorias denegadas, subterráneas y dominantes*", Buenos Aires: Mimeo.
- da Silva Catela, Ludmila y Jelin Elizabeth (comps.), (2002) *Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad*, Buenos Aires Siglo XXI.
- Dimenstein, Marcelo (2011), "En busca de un pogrom perdido: memoria en torno de la Semana Trágica de 1919 (1919-1999)", en Kahan, Emmanuel Nicolás... (et.al), *Marginados y Consagrados: nuevos estudios sobre la vida judía en la Argentina*, Buenos Aires: Lumiere.
- Domínguez, Pablo (2006), *Codovilla, Victorio, La ortodoxia comunista*, Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Edelman, Fanny (1996), *Banderas, Pasiones, Camaradas*, Buenos Aires: Ediciones Diple.
- Eilbaum, Lucía (2004), "La sospecha como fundamento de los procedimientos policiales", *Cuadernos de Antropología Social* N° 20.
- Farge, Arlette (1991), *La Atracción del Archivo*, Institució Valenciana D'Estudis I Investigació, Valencia: Edicions Alfons El Magnànim.
- Figueroa, Carlos (1991), "El peso de los siglos", en *El Recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala*, Cap. III, San José, C.R: EDUCA.
- Flier, Patricia (2006), "El archivo de la DIPBA: un hallazgo clave para una historia de los imaginarios represivos en Argentina", *IMAGO AMERICAEE, Revista de estudios del imaginario*, Año I, N° 1, Centro Extremeño de Estudios y cooperación

con Iberoamérica, Universidad de Guadalajara, Universidad de Florencia y Universidad Nacional de La Plata.

- Foucault, Michel (2006), *Seguridad, territorio, población: Curso en el College de France 1977-1978*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2007), *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el College de France: 1978-1979*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2009), *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Franco, Marina (2012), *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2012), “Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)”. En, *Revista Contemporánea: Historia y problemas del Siglo Veinte*, Montevideo, vol. 3. Pp. 77-96.
- Funes, Patricia (2004), “El archivo de inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires: medio siglo de represión”, *Revista Puentes*, Buenos Aires, año 4, número 11, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata.
- _____ (2006), “De lo secreto a lo público. El epicentro de la violencia”, *Revista Puentes, Dossier Documentos*, La Plata, número 19, Comisión Provincial por la Memoria.
- _____ (2008), “Desarchivar lo archivado. Hermenéutica y censura sobre las ciencias sociales latinoamericanas”; *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, N° 30, Flacso-Ecuador.
- Funes, Patricia, Jaschek, Ingrid (2005), “De lo Secreto a lo Público: La creación de la DIPBA”, *Revista Puentes, Dossier Documentos*, número 16, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata.
- Galeano, Diego (2009), “Las conferencias sudamericanas de policías y la problemática de los ‘delincuentes viajeros’, 1905-1920”, en Bohoslavsky, Ernesto, Caimari, Lila y Schettini, Cristiana (org.), *La policía en perspectiva histórica. Argentina y Brasil (del siglo XIX a la actualidad)*, CD-Rom, Buenos Aires.
- García Ferrari, Mercedes (2010), *Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación Policial en Buenos Aires, 1880-1905*, Buenos Aires: Prometeo.

- Gayol Sandra y Kessler Gabriel (2002), *Violencias, justicias y delitos en la Argentina*. Buenos Aires, ediciones Manantial y Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Giraud, Claude (2006), *Acerca del Secreto. Contribución a una sociología de la autoridad y del compromiso*, Buenos Aires: Biblos.
- Gómez, Alejandro, (1963) *Política de Entrega*, Buenos Aires: A Peña Lillio.
- González Canosa, Mora, (2012). Las Fuerzas Armadas y Revolucionarias. Orígenes y desarrollos de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973)”, tesis doctoral en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata, 22 de noviembre.
- González Quintana, Antonio (2008), “Políticas archivísticas para la protección de los Derechos Humanos. Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos (1995) sobre gestión de los archivos de los Servicios de Seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos”, París, Consejo Internacional de Archivos.
- González, Hernández, Bryan, (2017), “La construcción bio/geopolítica de las Doctrinas de Seguridad Nacional”, en *Cuadernos DO CIM*, Universidad Federal de Pelotas, Brasil, Año 1, Vol. 1, n°1, enero.
- Gori, Gastón (1999), *La Forestal, la tragedia del quebracho colorado*, Rosario: Ameghino Editora.
- Gorza Anabella, (2015) “Peronistas y militares. Una vieja relación en un nuevo contexto”, en en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria semestral, año XXV, n° 49, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral.
- Guy, Donna (1994), *El sexo peligroso: la prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Halchbaws, Maurice, “La memoria colectiva y el tiempo”. Traducción e introducción de Vicente Huici Hormeneta (<http://www.uned.es/ca-bergara/ppropias/vhuici/mc.htm>).
- Halliday, Fred (1989), *Génesis de la Segunda Guerra Fría*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Hobsbawm, Eric (2011), *Historia del Siglo XX*, Buenos Aires: Crítica.

- Horacio García Bossio, (2014), *¿Qué nos hace más Nación? Desafíos del desarrollismo frondicista-frigerista*, Buenos Aires: EdUNLa cooperativa.
- Jannello, Karina (2010). El Congreso por la Libertad de la Cultura en la Argentina: entre el Grupo Sur y el Partido Socialista. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.
- Kahan, Emmanuel (2007), “¿Qué represión, qué memoria? El “archivo de la represión” de la DIPBA: problemas y perspectivas”, *Revista Question*, N°16, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.
- Kahan, Emmanuel (2008), *Unos pocos peligrosos sensatos. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías de la ciudad de La Plata*. La Plata: EDULP.
- Kalmanowiecki, Laura (2000), “Originis and Applicationes of Political Policing in Argentina”, en *Latin American Perspectives*, Issue 111, Volume 27, Number 2.
- Karababikián, Graciela (2004), “Archivos y derechos humanos en la Argentina,” *Boletín del Archivo General de la Nación*, año LXIX, Vol. XXXIII, Núm.119.
- L’ Heuillet, Helen (2010), *Baja política, Alta policía*, Buenos Aires: Prometeo.
- *La Democracia contra el fascismo. Discursos pronunciados en el Senado con motivo de la ley de represión al comunismo*, (1937), Buenos Aires, Federación Gráfica Bonaerense.
- Lenci, Laura, en Osvaldo Barreneche (dir.) (2014), Historia de la provincia de Buenos Aires, Vol. V, Capítulo 6, “Violencia política y terrorismo de Estado, 1955-1983”, Buenos Aires: Edhasa/Unipe.
- López, Horacio (2008), *Los presos de Neuquén, 1943-1945*, Buenos Aires, Cuadernos Marxistas.
- Lorenz, Federico y Guembe, María Laura (2007), *Cruces. Idas y vueltas de Malvinas*, Buenos Aires: edhasa.
- Marcilese, José (2007- 2008), “El poder judicial bonaerense en el primer peronismo: de la autonomía a la dependencia”, *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin Escuela de Historia. Instituto de Historia y Cultura de América Latina, volumen 18. <http://www1.tau.ac.il/eial/>.

- Mazzei, Daniel (2000), “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, *Revista de Ciencias Sociales*, N°13, Universidad Nacional de Quilmes.
- Mazzeo, Miguel (2016), *El hereje. Apuntes sobre John William Cooke*, Buenos Aires: El Colectivo.
- Monjardet, Dominique (2010), *Lo que hace la policía: sociología de la fuerza pública*, Buenos Aires: Prometeo.
- Muzzopappa, M. Eva (2010), “Detrás del orden. Archivos y lógicas institucionales”, Congreso, *La travesía de la libertad ante el bicentenario. Simposio 4. Los archivos antropológicos de la nación: escrituras, cuerpos, artefactos y museos*, Mendoza, Argentina.
- Nazar, Mariana (2007), “Los indeseables. Un acercamiento al perfil ideológico de los trabajadores detenidos bajo el Poder Ejecutivo Nacional durante el primer peronismo”, *XI° Jornadas Interescuelas/Departamentos de historia, Tucumán*.
- Nazar, Mariana (2003), “La accesibilidad documental y sus limitaciones legales: los documentos secretos en la Argentina”, ponencia presentada en el *IV Congreso de Archivología del Mercosur*, Huerta Grande, Córdoba.
- Nazar, Mariana (2009), “Estado de derecho y excepcionalidad. Algunas prácticas de control social sobre trabajadores durante el primer peronismo”, *VIII Reunión de Antropología del Mercosur*, Buenos Aires.
- Nora, Pierre (1997), “Presentación”, *Les Lieux de Mémoire, I, II, III*. París: Gallimard.
- Otero, Hernán (2012), “Población, Ambiente y Territorio”, en: *Historia de La Provincia de Buenos Aires*, Buenos Aires: Unipe, edhasa, Tomo I.
- Partenio, Florencia (2009), “Rosario en cuarentena: normalización y disciplinamiento de la población durante las epidemias, 1860-1904”, *URIVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana* FLACSO Ecuador, N°7.
- Plan Conintes y Resistencia Peronista 1955-1963, (2010) Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, Buenos Aires.
- Policía de la Provincia de Buenos Aires (1910), *La Policía de la Provincia de Buenos Aires, su historia, su organización, y sus servicios*, La Plata: Taller de impresiones oficiales.

- Policía de la Provincia de Buenos Aires (1981), *Síntesis histórica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1580-1980*, La Plata.
- Ponce, Margarita, Edelman Fanny (1953), *Vimos en la Unión Soviética niños y mujeres felices. El Congreso Mundial de Mujeres*, Buenos Aires: UMA.
- Pontoriero, Damián Esteban (2015), “Estado de excepción y contrainsurgencia: El Plan Conintes y la militarización de la seguridad interna en la Argentina (1958-1962)”, en *Contenciosa*, N°4.
- Portelli, Alessandro (1991), “Lo que hace diferente a la historia oral”, en Schwarzstein Dora (comp.), *La historia oral*, Buenos Aires: Ceal.
- Potash, Robert (1985), *El ejército y la política en la Argentina (II). 1945-1962, de Perón a Frondizi*, Buenos Aires: Hyspamerica.
- Pujol, Sergio (2005), *Rock y Dictadura*, Buenos Aires: Emecé.
- Rafart, Gabriel (2008), *Tiempos de Violencia en la Patagonia. Bandidos, policías y jueces, 1890-1940*, Buenos Aires: Prometeo
- Ranalletti, Mario y Esteban Pontoriero (2010), “La normalización en materia de defensa y seguridad y la criminalización de las disidencias (1955-1976)”, ponencia presentada en *V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*, Buenos Aires, UNGS.
- Robin Marie-Monique (2005), *Escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Rodríguez, Adolfo (1981), *Cuatrocientos años de la policía en Buenos Aires*, Buenos Aires: Editorial Policial.
- Rodríguez, Adolfo y Zappietro, Eugenio (1999), *Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio. Génesis y desarrollo desde 1580 hasta la actualidad*, Buenos Aires: Editorial Policial.
- Romay, Francisco (1964), *Historia de la Policía Federal Argentina*, Buenos Aires: Biblioteca Policial.
- Romero, Luis Alberto (2001), *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Rouquié, Alain (1984), *El Estado militar en América Latina*, Buenos Aires: Emecé.

- Ruggiero, Kristin (2004), *Modernity in the Flesh. Medicine, Law, and Society in Turn-of-the-Century Argentina*, Stanford: Stanford University Press.
- Sain, Marcelo (2008), *El leviatán azul. Policía y política en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sain, Marcelo Fabián (1997), “Condiciones institucionales del control parlamentario de las actividades y organismos de inteligencia del Estado”, *Seminario sobre Control Democrático de los organismos de Seguridad Interior en la República Argentina, Documentos de Trabajo*, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Sain, Marcelo Fabian (2010), *Los votos y las botas. Estudios sobre la defensa nacional y las relaciones civil-militares en la democracia argentina*, Buenos Aires: Prometeo.
- Salas, Ernesto (2006), *La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de La Torre*, Buenos Aires: Altamira/Retórica Ediciones.
- Salas, Ernesto (2006), *Uturuncos el origen de la guerrilla peronista*, Buenos Aires: Biblos.
- Salessi, Jorge (2000), *Médicos, maleantes y maricas*, Buenos Aires: Beatriz Viterbo.
- Salvatore, Ricardo (2001), “Sobre el surgimiento del estado médico legal en la Argentina (1890-1940)”, en, *Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral*, Año XI, N° 20, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.
- Scocci, Marianela (2016), “Los consejos de guerra militares como práctica de represión política (1956-1983)” (pp. 207-237), en Águila Gabriela, Garaño Santiago, Scatizza Pablo (coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del Golpe*, Universidad Nacional de La Plata.
- Seri, Guillermina (2009), “Metáforas policiales, elisiones y calidad de la democracia en Argentina y Uruguay”, *Revista SAAP*, N°3, agosto.
- Sirimarco, Mariana (2007), “Indicios. Semiología policial del cuerpo de los 'otros' ”, en: *Ultima Ratio*, Kumen Juris editora, Sao Paulo, año1. vol.1.
- Sirimarco, Mariana (comp.) (2010), *Estudiar la policía. La mirada de las Ciencias Sociales sobre la institución policial*, Buenos Aires: Teseo.

- Sozzo, Máximo (2002), “Usos de la violencia y construcción de la actividad policial en la Argentina”, en: Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (comps.) *Violencias, delitos y justicias en la Argentina*. Buenos Aires: Manantial.
- Spinelli, María Estela (2005), *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la ‘revolución libertadora’*, Buenos Aires: Biblos.
- Stagnaro, Andrés (2011), “La justicia peronista sin Perón. Peronización y desperonización del Poder Judicial bonaerense. Jornadas de Investigación, “Leyes, Justicia, e Instituciones de Seguridad en la Argentina”, 6 y 7 de diciembre, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. (Ponencia no publicada).
- Suriano, Juan (2001), *Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910*, Buenos Aires: Manantial.
- Tanzi, José Héctor (2006), “Historia ideológica de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1955-1966)”, en *IUSHISTORIA*, Revista Electrónica, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Filosofía, Historia y Letras, N°3, Buenos Aires, septiembre.
- Tiscornia, Sofía (2004), “Entre el honor y los parientes. Los edictos policiales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. El caso de «las Damas de la calle Florida» 1948-1958”, en Tiscornia, Sofía (comp.); *Burocracias y Violencias-estudios de Antropología Jurídica*, Buenos Aires: Antropofagia.
- Tortti, María Cristina (1999), “Izquierda y Nueva Izquierda en la Argentina. El caso del Partido Comunista”, *Revista Sociohistórica*, N°6, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
- Traverso, Enzo (2007), “Historia y Memoria: Notas sobre un debate”, en Marina Franco y Florencia Levín (comps.). *Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós.
- Traverso, Enzo (2011), “Historiografía y memoria: interpretar el siglo XX. Entre la historia y la memoria: historiadores exiliados del Siglo XX”, Seminario de postgrado. Dictado por el profesor Enzo Traverso. Ciclo Lectivo 2010. Maestría en Historia y Memoria, Universidad Nacional de La Plata, *Revista Aletheia*, vol. 1, número 2.
- Ubertalli, Jorge Luis (2010), *El enemigo rojo. La Represión al Comunismo en la Argentina*, Avellaneda: Ediciones Acercándonos.

- Valobra, Adriana (2005), “La UMA en marcha. El Partido Comunista Argentino y las tradiciones y estrategias de movilización social en el primer gobierno peronista: el caso de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA)”, *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies Revuecanadienne des études latino-américaines et caraïbes*, vol. 30, Número 60.
- Valobra, Adriana (2005), “Partidos, tradiciones y estrategias de movilización social: de la Junta de la Victoria a la Unión de Mujeres de la Argentina”, *Revista Prohistoria*, Año IX, número 9.
- Walsh, Rodolfo (1972), *Operación Masacre*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Winer, Sonia, Carroli Mariana, López Lucía, Martínez Florencia (2006), “Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina”, *Cuadernos de Trabajo*, N°66, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
- Zuleta, Álvarez, Enrique (1975), *El Nacionalismo Argentino*, Buenos Aires: La Bastilla, tomo I y tomo II.